

Leviatán

REVISTA DE HECHOS E IDEAS



Z. 466

PRIMAVERA/VERANO 1986

II EPOCA

N.º 23/24

LA MAYOR LIBERTAD POSIBLE

Peter Glotz, André Gorz, Tilman Fichter

LAS ELECCIONES
GENERALES

José M.^a Mohedano

POLITICA ECONOMICA
DEL GOBIERNO

M.A. Fernández Ordóñez

ANDALUCIA

José R. de la Borbolla

EUROPA

Altiero Spinelli

REFORMISMO, SOCIALISMO
IGUALDAD

Norberto Bobbio

EL REFORMISMO
Y LA IZQUIERDA

Massimo L. Salvadori

SOBRE LA
GUERRA CIVIL

Juan Marichal

ALEC
NOVE

Entrevista



Leviatán

Revista de hechos e ideas

Z. 468





INDICE

ACTUALIDAD

La izquierda y las elecciones generales. José M.ª Mohedano ...	5
El PSOE y la crisis de la derecha. Enrique Gomáriz	11
Euskadi: unos resultados sin precedente. Jesús Eguiguren	25
La política económica del Gobierno socialista. Miguel Angel Fernández Ordóñez	41
Un discurso sindical europeo. José M.ª Zufiaur, Manuel Ven- tura y Carlos Trevilla	53
Andalucía: aportación a un debate. José R. de la Borbolla	63
América Latina: la democracia difícil. Giancarlo Pasquini	77
Evolución socio-política en el Cono Sur. Sergio Spoerer	89
Spinelli: 60 años de lucha por Europa. Carlos Brú y Francisco Aldecoa	101
La crisis de la CEE y sus alternativas. Altiero Spinelli	105
La defensa de Europa occidental. Angel Viñas	113
Continuidad y cambio en la política griega. Nicos Mouzelis ...	125

ANÁLISIS Y DEBATE

La mayor libertad posible. Peter Glotz, André Gorz y Tilman Fichter	135
Reformismo, socialismo e igualdad. Norberto Bobbio	157
El reformismo como gramática de la izquierda. Massimo L. Salvadori	171
La democratización en una cultura posmoderna. Norbert Lechner	179
Enrique Tierno: una luz en el túnel. Antonio G. Santasmases.	189
Reflexión sobre la guerra civil. Juan Marichal	201

ENTREVISTA

Alec Nove: ¿Quién teme al socialismo?	211
---	-----

LIBROS

Gabriel Jackson, Manuel Ortuño, Miguel Porta, Santiago S. Torrado, Francisco J. Satué	221
--	-----

Leviatán

Revista de hechos e ideas

Fundada en 1934 por Luis Araquistain

Director:

Salvador Clotas

Comité de Dirección:

Antonio G. Santesmases	Julio R. Aramberri
Ludolfo Paramio	Santiago Roldán
M. Reyes Mate	Miguel Satrústegui
Ramón Vargas-Machuca	

Comité Asesor:

Pedro Altares	F. Fernández Santos
Joaquín Arango	Salvador Giner
Carlos Barral	Enrique Gomáriz
Carlota Bustelo	J. A. González Casanova
J. María Castellet	E. Haro Tecglen
Fernando Claudín	Francisco Laporta
Elías Díaz	Marta Mata
M. A. Fernández Ordóñez	J. Martínez Reverte
X. Rubert de Ventós	

Coordinador:

Manuel Ortuño Armas

Secretaria de Redacción:

Mary Carbone

Editada por la Fundación Pablo Iglesias.

Las ideas vertidas en cada artículo son responsabilidad de sus autores. LEVIATAN no se identifica necesariamente con sus contenidos. LEVIATAN no se compromete a devolver los artículos que no hayan sido solicitados, ni a mantener correspondencia sobre los mismos.

Redacción y Administración: Monte Esquinza, 30.

28010-Madrid. Tel.: 410 46 96.

D. Legal: SE. 466-1978. I.S.S.N.: 0210-6337.

Distribuye: Siglo XXI de España, S. A. - C/. Plaza, 5 - 28043-Madrid.

Imprime: Mariar, S. A. - Tomás Bretón, 51 - 28045-Madrid.

Esta Revista es miembro de ASEI.

LA IZQUIERDA Y LAS ELECCIONES GENERALES

José María Mohedano



Lo fundamental de las elecciones del 22 de junio ha sido la revalidación del triunfo de la izquierda en octubre de 1982, izquierda claramente hegemonizada por el PSOE. Los resultados de las últimas legislativas pone definitivamente de manifiesto, también, que muchos de los análisis electorales efectuados hasta ahora desde derecha e izquierda sobre el componente cuantivo y cualitativo del voto PSOE eran, más que nada, juicios esquemáticos. Me refiero a las teorías del *voto de aluvión* (en 1977), *voto de tránsito* hacia otras zonas políticas (en 1979) y *voto útil* (en 1982).

Cualesquiera que sean los sentimientos diversos que genera la nueva mayoría socialista, hay que convenir desde posiciones políticas razonables o, al menos, no antisocialistas, que al PSOE, y por tanto a

la izquierda, le ha correspondido *dirigir el proceso de configuración de España como Estado y nación modernos* y realizar las tareas que en esta coyuntura le demanda la sociedad española sin perder de vista

el medio plazo y los horizontes históricos. A ello hay que añadir lo que parece comúnmente aceptado incluso por quienes están situados lejos de la propuesta socia-

El PSOE es la única formación política que cuenta con un grupo dirigente capaz de interpretar y de agrupar el interés general.

lista: me refiero a que el PSOE es la única formación política que cuenta con *un grupo dirigente* capaz de interpretar y de agrupar el interés general consiguiendo el consenso en torno a cuestiones básicas como los valores sociales, culturales, la posición de España en el mundo, etc.

Los ciudadanos españoles, y especialmente los votantes del PSOE, han aceptado perfectamente que en el período 1982-1986 no se ha realizado una política específicamente socialista como consecuencia, esencialmente, de la fragilidad política de las instituciones estatales y de la debilidad económica de nuestro sistema productivo, que no nos ha permitido históricamente caminar al unísono con el resto de Europa ni realizar cambios paralelos a los de las sociedades vecinas. Pero, al mismo tiempo, la mayoría de la población ha captado también que el socialismo democrático, a diferencia de la derecha, se caracteriza por no contentarse con la conquista del poder político y económico. Su vocación originaria es la de transformar la sociedad y, aunque algunas formas y contenidos del gobierno socialista no siempre hayan coincidido con esa vocación, lo cierto es que precisamente en el período de gobierno socialista la sociedad española está empezando a superar los desgarramientos sociales que la caracterizaron en el pasado y superando definitivamente la inestabilidad política y el atraso económico que marcaron otras experiencias políticas de carácter democrático y progresista. Y en el terreno de los datos más inmediatos, es indudable que el electorado ha percibido la capacidad del PSOE para dirigir ese proceso de renovación y de reformas en la *desaparición de fenómenos crónicos* que eran un síntoma de nuestras malformaciones políticas: la paralización de la acción de gobierno, el pudrimiento de los

muchos problemas que nunca se afrontaban y el fantasma del vacío de poder anidado, sobre todo en la mente de quienes se creían salvadores eternos de España.

Perspectiva antiderechista

Frente al proyecto reformador del PSOE, la opción reformista de Roca ha hecho el más llamativo ridículo que debe inscribirse en los casos de estudio para las facultades de ciencia política. La democracia española ha proporcionado tres casos antológicos: el fracaso de los siete magníficos en 1977, el hundimiento de UCD en 1982 y el patinazo de Roca en 1986. Nunca en la historia política se consiguió tan poco con tantos recursos de todo tipo. Banqueros y periodistas auspiciadores de la operación reformista tendrán que pensarse un cambio de oficio en cuanto a promotores de empresas políticas de envergadura. Los miles de millones que ha costado la operación pueden darse por bien empleados sólo si curan para el futuro a algunos ilusos que equivoquen su vocación.

De todas maneras, tanto la «debacle» de la operación reformista como la chusca decepción del centro-derecha —seguida de su fragmentación poselectoral— hay que situarlos en el marco de una valoración optimista de debilitamiento —desigual pero perceptible— de la ofensiva conservadora y neoliberal en el mundo occidental y que es debido a varios factores, entre ellos, a que la política de derechas no ha conseguido resolver los problemas del desarrollo y de la ocupación en Europa occidental, además de haber agravado extremadamente el desequilibrio entre el Norte y el Sur del mundo. A lo que hay que añadir que la derecha española no asumió en su debido momento su papel histórico de asentar un Estado moderno, a diferencia de lo ocurrido en los países del mundo occidental. Eso explica que el proceso de industrialización fuera pro-

tagonizado fundamentalmente por el Estado y por una burguesía financiera, sin que la burguesía industrial tuviera, como clase, la importancia que ha tenido en otros países. Por eso, la fragilidad de la burguesía más democrática significó que durante la transición tuviera que recurrir a vertebrarse en torno al Estado y a aliarse con sectores procedentes del régimen anterior, impidiendo que se dieran los pasos necesarios en la vía de las reformas democráticas.

El hecho de fondo, pues, de estas elecciones estriba en que en una situación política nada fácil, tras el machaconeo ideológico y desinformador de una parte sustancial de los medios de comunicación insistiendo en las tentaciones totalitarias y en la «mexicanización» del PSOE si éste conseguía la mayoría absoluta, casi un 45 % de la opinión se ha colocado en una *perspectiva antiderechista*, no revolucionaria, pero sí de transformaciones efectivas del sistema y de preservación de lo que han sido conquistas del movimiento sindical: la protección social, los límites institucionales al libre curso de lo que Hegel llamó «das wilde Tier», la bestia salvaje, es decir, la sociedad del capital. Por eso, los trabajadores, con su instinto de clase, con su experiencia, con su espíritu concreto, han comprendido perfectamente de qué se trataba. Se dan cuenta de toda la gravedad de un ataque que no sólo golpea el poder adquisitivo de su paga, sino que se endereza contra sus conquistas y contra sus derechos sindicales y democráticos.

Los errores de Izquierda Unida y el PCE

El error fundamental de la izquierda no socialista ha sido considerar al partido socialista como una simple ala de un amplio movimiento conservador o como el *mosquito del neoliberalismo*. Esto le ha impedido al PCE conectar con la situación real en España, y ha sido una rémora que ha

dificultado la inserción de las propuestas comunistas en el cuerpo de las aspiraciones sociales.

En general, el PCE no ha querido diferenciar entre una mera gestión liberal del sistema capitalista y una cierta estrategia de reformas en un largo y complejo proceso de cambios estructurales. Es cierto que el *balance global* del gobierno socialista en el *campo económico y social* no puede considerarse satisfactoriamente positivo: basta con contemplar el problema del desempleo. También habría que reflexionar sobre si el poder contractual del movimiento sindical se ha debilitado, o al menos no se ha fortalecido, durante el gobierno de izquierda.

Pero *no se puede afirmar*, como han hecho permanentemente los dirigentes po-

**La derecha española
no asumió en su debido momento
su papel histórico
de asentar un Estado
moderno.**

líticos y sindicales comunistas, que la política económica del gobierno socialista puede ser clasificada pura y llanamente como una política de derechas.

El análisis y el juicio de esa política tiene que ser más preciso y, sobre todo, más articulado para no esquivar lo positivo de la política educativa y de algunas reformas sociales, los resultados contra la inflación y el ajuste de la balanza económica. No se puede asimilar la política económica seguida desde 1982 a las seguidas por sectores conservadores que gobernaban en esos momentos en otros países de Europa.

La ofensiva conservadora neoliberal, el formidable proceso de reestructuración e innovación del aparato productivo y la crisis del Estado social golpean con particular fuerza a ciertos grupos de la población trabajadora, marginan a otros, crean zonas de nueva desesperada pobreza. Un partido de izquierda, en la medida en que tiene un peso político, se ve sometido a presiones por parte de esos segmentos sociales que piden ser defendidos y, aunque

no cabe duda de que como partido de izquierdas hay un deber de defenderlos, sin embargo, *no se puede agotar una política de izquierdas en esa defensa. No podemos pensar* —como ha pensado el PCE— *que todo puede reducirse a la defensa de lo que existe, de los puestos de trabajo actuales* o, en otro sentido, de las garantías sociales y democráticas. Debemos *tener la capacidad de mirar más allá*, porque un partido de izquierda que *prefiera encerrarse*, política y socialmente, *en ciertos estratos*, o que niegue o subvalore los problemas de la sociedad compleja y fragmentada, o que no viese los vínculos internos y externos del desarrollo, *sería sólo una fuerza de propaganda destinada a permanecer minoritaria y a serlo cada vez más.*

Hay que ser consciente de que en la época que estamos viviendo, no acertaremos ni siquiera a defender eficazmente a los sectores sociales más perjudicados si no *ampliamos el frente social* y si no se interviene en el *plano político* para imponer un *programa democrático de desarrollo, de movilidad de un trabajo a otro y no de defensa de todos los puestos de trabajo que existan.*

No se puede hablar, por tanto, de que la hegemonía del PSOE en la izquierda obedezca a mutaciones en las definiciones ideológicas del electorado, sino más bien a que desde 1977 hasta ahora ha ido cambiando la representación y la imagen ideológica de los partidos de izquierda en un sentido netamente favorable al PSOE.

Este cambio de la imagen ideológica de los partidos de izquierda ha sido plenamente asumido por el PCE, que preparó precipitadamente para las elecciones de 1986 una operación de maquillaje —y también de desfiguración— ideológico que venía a ser el sucedáneo de la política de amplia convergencia social propugnada por sus dirigentes desde la ascensión de

Gerardo Iglesias a la secretaría general del PCE. Sin embargo, *Izquierda Unida no surge de una corriente de aire fresco* sino de la conjunción de viejos políticos apartados del escenario. Prueba de lo que decimos es que esta coalición electoral no ha capitalizado ni un mínimo porcentaje del voto negativo en el referéndum OTAN procedente de lo que se mueve más allá o más acá del PCE.

Izquierda Unida tampoco ha dado una imagen más armónica y de consenso de la izquierda comunista porque ni siquiera durante el período electoral se han solventado las peleas con el grupo de Carrillo y entre los comunistas catalanes. Y, naturalmente, esta permanente aparición de las querellas intracomunistas en *la cartelera de sucesos políticos* ha impedido que la coalición incrementara sensiblemente el escueto porcentaje electoral del PCE en 1982.

La falta de *calado electoral* del PCE se manifiesta en su práctica desaparición en 13 de las 17 comunidades autónomas. Y, a mi modo de ver, éste es un hecho en absoluto positivo. Por el contrario, el debilitamiento y el peligro de marginación del PCE son hechos bastante negativos: con sus luces y sus sombras, representa algo importante para la resistencia democrática española y para ciertos sectores que necesitan una expresión política diferente de la socialista. Y si se encierra en sí mismo y renuncia a «hacer política» (en expresión de Togliatti) sería bastante negativo para el equilibrio democrático y el pluralismo de la izquierda.

Horizonte europeísta

Pero lo que esta confrontación electoral ha puesto en tela de juicio respecto al PCE no ha sido sólo su *voluntarismo abstracto*, éticamente necesario pero *políticamente insuficiente*. Lo que se ha puesto en

La falta de calado electoral del PCE se manifiesta en su práctica desaparición en 13 de las 17 comunidades autónomas.

cuestión ha sido su *concepción de lo político y del modo de hacer política*. El PCE no ha conseguido liberarse del esquema que de las *relaciones partido-sociedad* le legó el leninismo. Por eso se ha diluido la propuesta del eurocomunismo. Y de ahí, también, la *práctica estéril de montar desde el partido plataformas y movimientos sociales sin verdadera autonomía y creatividad*.

Con todo, lo más importante es que el PCE sigue embarcado en el movimiento de construcción de Europa sin conseguir elaborar una estrategia alternativa a las fuerzas bajo cuya égida y hegemonía se ha realizado la construcción de Europa. En contraposición, la decisión de los socialistas de desarrollar los esfuerzos en ese *terreno minado* es la correcta, porque la *internacionalización de las fuerzas productivas* no es un invento diabólico del capital, sino la resultante del crecimiento de esas mismas fuerzas productivas.

Una fuerza de izquierda de cualquier país de Europa occidental debe ser europeísta, *tener para cada reivindicación o propuesta un horizonte europeo*, para poder afrontar los nuevos problemas de las masas trabajadoras y de la sociedad y luchar con eficacia por un nuevo tipo de desarrollo económico y social, que lleve al pleno empleo de los recursos humanos, que salvaguarde el ambiente y que se base sobre la aplicación más progresista de la ciencia y de la tecnología.

De la misma manera, parece inevitable deducir que es necesario que las distintas fuerzas políticas europeas occidentales intenten encontrar una convergencia efectiva en la política europeísta y, en este marco, en la de seguridad y del desarme.

El partido sumergido de la abstención

Un juicio severo y preocupado sobre los resultados electorales de la izquierda

no exime de cribar con atención aspectos singulares de estos resultados y de deducir de ellos indicaciones para una acción política del gobierno y del partido de izquierdas que lo sostiene.

Aunque el PSOE tiene una mayoría difícilmente batible, ha perdido 1.300.000 votos que se concentran en las grandes ciudades. Madrid con 300.000 votos menos, Barcelona con 150.000, Valencia con 130.000, Asturias 50.000, Zaragoza 40.000, País Vasco 40.000, Andalucía 120.000, y dos provincias pequeñas (Valladolid y Salamanca) con 16.000 perdidos en cada una de ellas. La mayor parte de estos votos ha ido a la abstención y en una mínima parte a Izquierda Unida y el Centro Democrático y Social.

Los partidos son los primeros protagonistas de las reformas, pero de ellas los partidos mismos deben salir transformados: en efecto, todos los partidos de mayoría suelen ver el sistema de las relaciones políticas más como instrumento de ocupación que de dirección, más como factor de parcelación que de pluralismo. Este sistema alimenta la *desconfianza* y el *distanciamiento del electorado*, que se manifiestan a través del *partido sumergido*, del *abstencionismo* y la protesta, y a través de la *búsqueda de suplencias y de otras legitimaciones*. Para recuperar acicate y capacidad de proyección el partido de la mayoría debe tener la capacidad de *dar un paso hacia la sociedad* sin retroceder respecto a las instituciones ocupadas.

El partido es por sí mismo un elemento de democracia, de democracia directa, porque llama al ciudadano a expresar una opinión política, a manifestarla, a darle valor a través de la propia acción. La existencia de partidos es el modo con el que la población puede acceder a la dirección del país. Pero los partidos de mayoría no suelen cumplir adecuadamente con esa función por el debilitamiento de su vida interna y por el entrelazamiento perverso con

El partido es por sí mismo un elemento de democracia, de democracia directa, porque llama al ciudadano a expresar una opinión política, a manifestarla, a darle valor a través de la propia acción. La existencia de partidos es el modo con el que la población puede acceder a la dirección del país. Pero los partidos de mayoría no suelen cumplir adecuadamente con esa función por el debilitamiento de su vida interna y por el entrelazamiento perverso con

el poder estatal. Planteo esta cuestión no como un genérico llamamiento a las conciencias o a la voluntad política, ni como un puro instrumento de polémica dentro del PSOE, sino como recordatorio de algunas características que deben presidir las relaciones partido-sociedad y partido-instituciones.

Hay que empeñarse en una búsqueda para dar espacio a movimientos, grupos, asociaciones que, sin reconocerse en partidos, desempeñen actividad y labor política en torno a temas como la paz, el medio ambiente, la calidad de los consumos, el feminismo, la marginación, etc., *abriendo canales nuevos de comunicación* entre instituciones y sociedad. En este sentido creo que es justo decir que ha faltado sustancialmente capacidad de acompañar el esfuerzo de gobierno con el fomento de instituciones de democracia participativa y con una mayor movilización del electorado progresista. Así, hemos asistido a la paradoja de que la iniciativa sindical se reduce a acciones reivindicativas corporativas, mientras despuntaba la movilización de masas conservadoras ante la política educativa del gobierno.

**Los resultados
de las elecciones del 22 de junio
permiten al PSOE
asumir enteramente nuestro
momento histórico.**

En definitiva, debemos trabajar para evitar el abstencionismo de cualquier tipo y para que se exprese la voluntad de toda esa España moderna, que trabaja o que quiere trabajar, estudiar, crear, y que por ello debe ser liberada de trabas viejas y desgastadas, de un modo atrasado de hacer política. Al mismo tiempo, debemos presentarnos y actuar como el partido que sabe interpretar esa España que quiere progresar y renovarse, que reclama eficiencia y honestidad, y que se halla en todos los medios de la sociedad.

Los resultados de las elecciones del 22 de junio permiten al PSOE asumir enteramente nuestro momento histórico. Los ideales de igualdad, solidaridad, de liberación y de construcción de un mundo para el hombre, de una sociedad radicalmente democrática, son hoy más válidos y operativos que nunca. Todo ese bagaje ideal, moral y político tiene que fecundarse en la acción de hoy y para hoy.

Para decirlo con Goethe: *Obra de manera que puedas poseer lo que has heredado. La herencia no es posesión segura, sino desarrollo, innovación, modificación.*

EL PSOE ANTE LA CRISIS DE REPRESENTACION DE LA DERECHA

Enrique Gomáriz



2

Las pasadas elecciones generales del 22 de junio, cuyos resultados no han modificado mucho el cuadro político global, tienen, sin embargo, un valor indicativo fundamental: han mostrado, con mayor claridad que las anteriores, los elementos principales y más profundos de la sociología electoral española y sus consecuencias en la vida política nacional.

En efecto, estas elecciones han señalado la orientación que toma la sedimentación de las actitudes políticas del electorado, en una perspectiva más amplia, al menos hasta que haya un cambio sustancial en la composición generacional de la sociedad española. Dicho en breve, mi hipótesis es que hasta que las generaciones que han

alcanzado la mayoría de edad después de la muerte de Franco no sustituyan a las actuales, que forman la presente clase política (de gestores u opositores del régimen franquista), parece evidente que el comportamiento del electorado español estará marcado por dos elementos fundamentales: la tendencia a *la estabilidad del des-*

arrollo político fuertemente anclado por el centro, y lo que se ha llamado el *tirón del liderazgo*.

De esta forma, la idea que se ha desarrollado durante la transición de que el electorado español, por su impericia, está dispuesto fácilmente a cambiar de voto, cobra así su sentido preciso: cambia prontamente de voto si ello es necesario para garantizar el desarrollo político vigente, es decir, un desarrollo que, en los hechos, tiene todavía como primera prioridad la consolidación de la democracia. Por tanto, un electorado particularmente sensible a los llamamientos de prudencia, pero al mismo tiempo deseoso de alejarse del histórico intervencionismo militar en la vida política. Puede afirmarse que sólo factores socioeconómicos muy graves podrían alterar esa inclinación del voto, o, dicho de otra forma, únicamente una agudización profunda de la crisis económica pondría en cuestión entre sectores amplios del electorado el desarrollo político del actual sistema democrático.

Ciertamente, con esto no quiero decir que la importancia del voto a la estabilidad y del liderazgo vaya a mantenerse constante: lo más probable es que disminuya progresivamente. Lo que se quiere decir es que durará un plazo considerable, a partir de las elecciones de 1986. Porque estas elecciones han consolidado esos dos factores presentes como tendencias en elecciones previas (1979), pero no como simple continuidad de los procesos anteriores a 1982. Para explicar esto, es necesario no olvidar un escenario político crucial: el de mediados de 1981. A pocos meses del intento de golpe se produjo una gran sorpresa en la orientación del voto. Si los cálculos eran que el factor miedo iba a inclinar —con mayor razón que en 1979— el voto hacia una UCD rechazada, sucede que las primeras encuestas que se hacen muestran un brutal voto de castigo hacia esa formación política que favorece claramente al PSOE.

**El electorado español
cambia prontamente de voto
si ello es necesario para
garantizar el desarrollo político
vigente.**

Desde ese momento, hasta las elecciones de 1982, se conforma la nueva preferencia del electorado: por un lado, el PSOE es esa formación política que, con pruden-

cia, va a colocar a los militares en el respetable lugar que les corresponde, pero, por otro lado, parece dispuesto a hacerlo cambiando más cosas: el país y la forma de hacer política (cambio y regeneracionismo).

Por esta razón, la mayoría absoluta obtenida por el PSOE en 1982 no es simplemente una expresión de rechazo a la UCD, sino un auténtico voto entusiasta para romper definitivamente con los fantasmas de la transición, en la perspectiva del cambio social.

La percepción de la gestión socialista durante estos cuatro años ha modificado esa imagen cara a las elecciones de 1986. Es falsa la idea de sectores intelectuales de que la población percibe la gestión socialista como un serio retroceso. Las teorías sobre *el felipismo* como prolongación de un neofranquismo pueden ser preocupantes, pero no son un reflejo de lo que piensa la mayoría de la población adulta (si estamos dispuestos a confiar en alguna medida en los sondeos de opinión). Y digo que pueden ser preocupantes esas teorías en el mismo sentido que lo apunta Ludolfo Paramio en su ensayo sobre la cultura política en la transición (*Leviatán*, n.º 22, Madrid, págs. 95 a 104).

Todos los sondeos realizados sobre la gestión socialista a comienzos de este año (que he comprobado en «El contexto político del debate OTAN», *Tiempo de Paz*, n.º 7, Madrid, págs. 60 a 75), muestran que la mayoría del electorado considera que: 1) la gestión socialista ha avanzado *de forma desigual*, con áreas claras (educación, cultura y política militar), áreas más polémicas (economía, política internacional y de paz), y áreas estancadas (salud y, especialmente, reforma de la Administración); es notable cómo ha descendido

en estos cuatro años el porcentaje de los que opinaban —del 50 al 29— que el PSOE podía combatir la corrupción administrativa, y 2) *la población aprueba la gestión socialista, pero es consciente de que no satisface las expectativas creadas en 1982*. La conclusión que obtenía en mi artículo es que el electorado aprobaba la gestión con un aprobado raso, mientras era casi seguro que, en el actual contexto político, volvería a votar PSOE de forma masiva en las elecciones generales.

En realidad, parece que no sólo la gestión, sino el discurso del gobierno y en especial de su Presidente, han enseñado a la población cómo las expectativas de 1982 se iban perdiendo progresivamente: desde imponderables, como el paro, hasta pérdidas de impulso, como la reforma administrativa, pasando por cuestiones un tanto abstractas (casi morales) para la población, como el referéndum sobre la OTAN. Este último asunto ha sido mencionado

por muchos analistas como el punto cumbre que marcaba el final de la transición. Y puede que, en el plano institucional, eso sea bastante cierto. Pero también es, en el terreno de la opinión pública, el último dato que viene a cambiar el carácter del voto: el sufragio por el cambio será sustituido definitivamente por el voto a la estabilidad.

El propio caso del referéndum ha sido una muestra de ese proceso, más allá del debate sobre paz y seguridad. El hecho es que la población tenía una actitud mayoritariamente contraria a la permanencia en la OTAN, formada fundamentalmente por el PSOE antes de 1982. Años después, Felipe González dejaba explícito que él había cambiado de opinión, pero su discurso en positivo acerca de ese cambio no convencía —según mostraron las encuestas— más que de una forma lenta e insegura. Comenzó la campaña y la pelota continuaba en el tejado (amenazando incluso con caer del lado del NO). Bastó

que, en la última semana, Felipe González relacionara *seriamente* el resultado del referéndum con la estabilidad del desarrollo político (el NO suponía inestabilidad no sólo para la política internacional, sino para el modelo político general) para que se introdujera una brecha de diez puntos a favor de la permanencia. Fue evidente para la mayoría de los analistas que el líder socialista había persuadido a los electores de que no era posible otra política (entre otras razones porque dependía de su voluntad el negarse a gestionar el NO); también ha sido evidente para quienes habían defendido el SI (ver «Alivio y cierta autocrítica», de Ludolfo Paramio, en *El Socialista*, n.º 401, Madrid, pág. 16).

Se había consolidado el voto a la estabilidad, o, al menos, así lo percibía el electorado. Y eso se traduciría en la campaña y en los resultados de las elecciones generales. Naturalmente, cabe preguntarse si era posible otra política durante los cuatro años. Pero incluso en el supuesto de que la respuesta sea no, lo que poca gente duda es que eso queda muy por debajo de las expectativas de cambio de 1982. En todo caso, parece evidente que se ha perdido una ocasión histórica en cuanto al crédito social de una política de cambio y de la coherencia entre esa política y el partido que la representa.

Ciertamente, no puede parecer extraño ese criterio, bastante popular, de que lo que le corresponde al PSOE es una política de cambio, como lo que le correspondía a UCD era una política de estabilidad en el desarrollo democrático institucional. El hecho de que buena parte de los electores hayan votado PSOE en 1986 sabiendo que votaban fundamentalmente estabilidad, nos lleva inevitablemente ante una cuestión complementaria: la crisis de representación de la derecha española.

En realidad, la historia de la transición ha estado marcada por esta crisis de la de-

Los resultados de 1982 son un auténtico voto entusiasta para romper definitivamente con los fantasmas de la transición.

recha, así como su ausencia de solución ha impulsado los intentos involucionistas, o bien, los gobiernos de izquierda. Disyuntiva que resume bastante bien la historia de España en sus últimos dos siglos. Como afirmaban Javier Solana, Joaquín Leguina y Miguel Muñiz a fines de 1978: «La importancia de esta batalla dentro de la representación política de las clases dominantes tiene suficiente importancia como para reflexionar sobre ella» (*Zona Abierta*, n.º 17, Madrid).

Historias teóricas

Puede afirmarse que la consolidación de estos dos elementos, voto a la estabilidad e importancia del liderazgo, han confirmado en las elecciones de 1986 la gravedad de la crisis de representación de la derecha. Una crisis que ha pasado por varias fases.

En el primer período adoptó la forma de una crisis orgánica, o sea, como se conoce en ciencia política, la situación en que la derecha social y los llamados poderes fácticos en que se sustenta no están conformes con los partidos políticos que la representan. Las reflexiones más conocidas en este sentido fueron hechas por Antonio Gramsci respecto al abandono de la derecha social italiana de sus representaciones políticas tradicionales durante la crisis del cambio de década (los veinte a los treinta) para apoyar al partido fascista. A mi juicio, esa idea es útil no sólo para describir el hecho de que los partidos de derecha *ya no* son reconocidos por la derecha social, sino cuando los partidos de derecha constituidos tras un régimen autoritario *no consiguen ser reconocidos* por los grupos sociales de derecha. Y esta es la situación que presentaba la Unión de Centro Democrático ya a mediados de 1978, como describí en mi primer ensayo sobre el tema («El PSOE y la crisis orgánica de la burguesía», en *Zona Abierta*, n.º 16, Ma-

drid). Las razones que estaban en el origen de esa crisis orgánica eran, a mi juicio, de distinto orden: 1) el hecho de que hubiera poco espacio económico, dado que la apertura democrática se hacía tras el inicio de la crisis económica mundial; 2) la existencia de distintas orientaciones políticas y económicas en la derecha social, que dividían incluso las opciones dentro de sus centros de poder más conocidos, por ejemplo, la división dentro de la gran banca, y 3) la excesiva autonomía de UCD por el hecho de haberse construido a partir de la gran autonomía estatal del régimen franquista. No me parecía tan importante, aunque tampoco despreciable, el hecho de que UCD fuera un agregado de familias ideológicas reunidas para el disfrute del gobierno, como se ha dicho tantas veces. Y no me parecía tan importante por dos razones: en general, todas esas familias apostaban por el centro-derecha y no por la derecha conservadora, y porque los partidos de derecha se han constituido más o menos así en toda Europa, después de la segunda guerra mundial, e incluso han seguido reuniéndose sólo para gobernar como en el caso francés.

La cuestión es que sólo dos años después de ponerse en marcha, la UCD era virtualmente zarandeada por la derecha social y sus distintos centros de poder. Y el mundo empresarial no se quedará atrás en esa ofensiva, incluso después de haber conseguido derribar el primer gobierno de UCD, provocando la dimisión del vicepresidente para asuntos económicos, Fuentes Quintana. La CEOE se justificaba así: «Creemos que estamos en nuestro perfecto derecho al exigirle al gobierno una mayor congruencia con lo que representa».

La crisis se hacía tan evidente que pasó a ser para la izquierda un elemento central en la discusión sobre su táctica. Como he citado anteriormente, así lo consideraban Solana, Leguina y Muñiz (*Zona Abierta*, n.º 17), en un trabajo que no por ca-

**La historia de la transición
ha estado marcada
por la crisis de representación
de la derecha
española.**

sualidad se titulaba «La hipótesis del PSOE y los problemas de la izquierda».

En efecto, la crisis de UCD era encarada de forma muy distinta por comunistas y socialistas. Para los primeros era conveniente apoyar a un partido de centro-derecha con problemas, por muchas razones, pero sobre todo porque, desde los Pactos de la Moncloa, el PCE acariciaba la idea de desarrollar una suerte de *compromiso histórico* a la española. Una idea fuertemente impulsada por los comunistas catalanes (accidentalmente, los únicos que habían conseguido unos resultados electorales próximos al socialismo). Pronto esa idea se completó con la de que el PSOE debería acceder al gobierno en coalición con UCD, para salvar esa formación política.

Pero para los socialistas, la crisis de UCD

fortalecía otra cosa: su oferta como alternativa de poder. En realidad, se abría paso en el PSOE la discusión sobre el partido hegemónico, no sólo en la izquierda, sino en el espectro general, como se había dado en el modelo sueco. Pueden describirse dentro del PSOE cuatro posiciones en esos momentos: 1) quienes aceptaban el gobierno de coalición UCD-PSOE, por entender que era la vía más segura de acceder al poder (Boyer, Múgica, apoyados por el diario *El País*); 2) quienes aceptaban la coalición, pero siempre desde la perspectiva de la hegemonía del PSOE en las elecciones (gobierno PSOE-UCD), opción no incompatible con un gobierno únicamente PSOE (preferencia de Felipe González); 3) los que defendían la tesis del partido hegemónico en su sentido puro, es decir, como *realmente* es el modelo sueco, donde el gobierno socialista es sólo la punta de un auténtico iceberg social, claramente comprometido por el cambio (federaciones de Madrid, Andalucía y luego Cataluña), y 4) los que defendían la idea del frente político de izquierdas, en la perspectiva de la Unión Popular fran-

cesa (idea nacida primero en Cataluña y luego adoptada por los «críticos»).

Como es evidente, las posiciones 1 y 4 eran extremas en el PSOE y el verdadero debate se hubiera dado entre las 2 y 3, si no hubiera tenido lugar la crisis del 28 Congreso en los términos que se dio. Pero es importante anotar que ese debate (entre 2 y 3), referido fundamentalmente a las relaciones entre instituciones políticas y sociedad civil, es precisamente el que se ha probado en los pasados años de gestión gubernamental y el que debería renacer cara al inmediato futuro, en la perspectiva que veremos más adelante.

El caso es que, bordeando tramas golpistas (operación Galaxia), el inorgánico Suárez logra refrendar la Constitución y encara las elecciones generales de 1979 buscando una mayor relación con la derecha

**Sólo dos años después
de ponerse en marcha,
la UCD era zarandeada por
la derecha social y sus
centros de poder.**

social. Y mediante la derechización de su programa consigue al menos una tregua que le permite hacer la campaña electoral. Las encuestas muestran su desgaste, pero

hace un llamamiento final al voto del miedo y consigue que el cuadro parlamentario quede prácticamente como estaba.

El hecho de que Suárez pase el listón del electorado crea un cierto espejismo acerca de la resolución de la crisis orgánica. Así, Solana, Leguina y Muñiz, en un análisis de las elecciones inmediatamente posterior, afirman: «Tras las elecciones, UCD se ha convertido en la única representación orgánica de las clases dominantes» (*Zona Abierta*, n.º 19, Madrid). Ludolfo Paramio y Jorge M. Reverte llegan aún más lejos, y en 1980 afirman: «El milagro se ha hecho: Suárez, el oscuro hombre del Movimiento, el funcionario franquista, ha conseguido gobernar con el apoyo de las clases medias y de los sectores del capital más amplios. UCD no sólo es una máquina capaz de ganar elecciones, sino también un instrumento orgánico que garantiza la hegemonía del capital en

el seno del proceso político español» (*Zona Abierta*, n.º 23, Madrid).

El análisis que hacen Paramio y Reverte tiene el interés de que trata de examinar las razones socio-políticas que estaban detrás de la crisis orgánica (que, a su juicio, se resolvía en 1979). De una forma amplia, la pregunta es si la crisis orgánica se produce por razones de crisis interna de la propia derecha social. Y no simplemente por una crisis de orientación política, como yo apuntaba, sino por un choque de grupos sociales dominantes, debido incluso a un cambio profundo en la composición social del país por razones de desarrollo económico.

A mediados de los setenta, esta era la tesis de Nicos Poulantzas en su trabajo *La crisis de las dictaduras: Portugal, Grecia, España* (Siglo XXI, Madrid, 1976). Dicho en breve: los problemas de la derecha española serían producto de una crisis de hegemonía entre dos grupos burgueses: el capital bancario-financiero y el capital industrial. Según la versión *poulantziana*, con el desarrollo económico de los sesenta, el capital industrial de esos países habría puesto en cuestión la hegemonía del capital financiero: lo cual explicaría la tendencia de buena parte de la derecha social por acceder a un régimen democrático, así como la crisis orgánica hasta que no estuviera completamente resuelta la competencia entre esos dos grupos sociales.

Tal análisis socio-político era incorrecto, al menos en España. En primer lugar, porque la industrialización de los sesenta había sido dirigida por el capital financiero, dejando poco espacio al capital industrial no ligado a los grandes bancos. Pero, en segundo lugar, con la crisis industrial de los setenta y el desarrollo del sector servicios, la preeminencia del capital financiero, si varió fue para fortalecerse. Es decir, si había crisis orgánica no

era precisamente porque hubiera un cambio profundo en los grupos más importantes de la derecha socio-económica española.

Paramio y Reverte examinan la crisis orgánica como forma de una crisis de hegemonía, pero no de hegemonía interna (entre grupos sociales de la derecha), sino de hegemonía de la derecha social respecto a toda la sociedad en su conjunto; es decir, la incapacidad para mostrar sus intereses específicos como intereses generales del conjunto. Dicho en sus palabras: «Nuestra hipótesis de partida es que la fracción de la burguesía que podríamos caracterizar como capital financiero establece su hegemonía en España en el período 1959-1969, y que desde 1969 se abre una grave crisis de hegemonía en el bloque dominante que sólo las elecciones de 1979 parecen haber cerrado. Esta crisis de hegemonía puede caracterizarse como una crisis orgánica por el hecho de que el factor dominante en ella es la inexistencia de una representación eficaz en el gobierno del Estado...» (*Zona Abierta*, n.º 23, Madrid, pág. 11).

Esta afirmación parece correcta en su aspecto central: por razones políticas e ideológicas (entre ellas la falta de músculo democrático), a la derecha social y en particular a los grandes bancos les resulta difícil convencer a la sociedad de su modelo de desarrollo social, y tiene que ser una fuerza política inorgánica quien asegure el gobierno a la derecha (cabe preguntarse si algo de esto no está detrás del fracaso claro del Partido Reformista de Garrigues y Roca en las elecciones de 1986, y el relativo éxito del CDS de Adolfo Suárez). Pero la hipótesis de Paramio y Reverte tiene dos aspectos incorrectos. Uno de carácter histórico: el capital financiero

El inorgánico Suárez logró refrendar la Constitución y encarar las elecciones de 1979 buscando una mejor relación con la derecha social.

no impone su hegemonía en la derecha social durante los sesenta, sino —como en otros países europeos— a comienzos de siglo, prácticamente desde el desarrollo

económico que tiene lugar bajo la dictadura de Primo de Rivera (su formación sucede con la constitución de los grandes bancos en el último tercio del siglo pasado). El otro aspecto incorrecto se refiere al supuesto milagro de que el inorgánico Suárez lograra resolver la crisis orgánica: sólo hubo de pasar un año para que los hechos mostraran el equívoco.

Hay que decir que no todos los que sufrieron ese espejismo tardaron mucho en rectificar. A mediados de 1980, Joaquín Leguina escribía: «Cuando el 1 de marzo de 1979 UCD consiguió la minoría más numerosa tanto en votos como en diputados, pareció, visto el hundimiento de la coalición derechista CD (nueve diputados), que la burguesía española había resuelto su crisis de representación política y que UCD se convertía en representante de to-

das las derechas por un largo período. Tan sólo un año después, y tras las elecciones a los parlamentos vasco y catalán, una nueva crisis de representación parece abierta en el seno de la burguesía junto a la misma crisis del Estado» («Crisis de Estado o crisis de representación», en *Zona Abierta*, n.º 25, Madrid).

En este artículo, Leguina apunta al riesgo de ingobernabilidad que puede traer consigo la crisis orgánica y su expresión política, la UCD. Con ello toca un punto particularmente sensible del debate entre comunistas y socialistas en esa etapa: para el PCE, la estrategia del PSOE de hacer oposición a UCD con el fin de ganar las elecciones era peligrosa, no sólo porque fragilizaba una formación política con problemas, sino porque si tenía éxito, un gobierno PSOE exacerbaría las tramas golpistas. La respuesta del PSOE era que la crisis de UCD ya estaba convirtiéndose en una crisis de Estado, y la ingobernabilidad resultante era el mayor peligro para la estabilidad democrática.

Los hechos se encargaron de mostrar,

en 1981, que este peligro era real. Porque sería hacer política-ficción especular con lo que hubiera sucedido si el PSOE hubiera ganado las elecciones de 1979: quizá se hubiera producido una tentativa golpista de mayores consecuencias, aunque la derecha social y sus homólogos exteriores no estaban por un retroceso profundo; pero también es perfectamente posible que las tramas involucionistas hubieran sido neutralizadas antes y no hubiera habido 23-F. En todo caso, lo cierto es que fue el vacío de poder creado por la crisis de UCD, que condujo a la dimisión de Adolfo Suárez, lo que trató de ser ocupado por un nuevo pronunciamiento militar. Como sostuve en la primavera de 1981 («Crisis orgánica, crisis militar», en *Leviatán*, n.º 3, Madrid), el hecho de que la última manifestación de la crisis orgánica de la derecha española y el intento de

Los problemas de la derecha española serían producto de una crisis de hegemonía entre dos grupos burgueses: el capital bancario-financiero y el capital industrial.

golpe de Estado formarían parte de una misma coyuntura política, resulta algo más que una casualidad histórica. Porque al mismo tiempo que, en el plano de los

análisis de coyuntura, no sería exacto afirmar que la entrada, pistola en mano, del teniente coronel Tejero en el Palacio de las Cortes estuvo *directamente* motivada por la dimisión de Suárez (ésta habría jugado más bien el papel de catalizador), sí sería acertado sostener, en el plano de los balances históricos, que la relación entre incapacidad hegemónica y orgánica mostrada por la burguesía española, y la proclividad a la intervención militar en la vida política, es prácticamente un resumen de la historia de este país, desde hace, al menos, siglo y medio.

Frente a la tentativa no hubo una reacción social inmediata, pero se produjo el mencionado cambio en la orientación del voto, con tal profundidad que la imagen de un PSOE regeneracionista barrió literalmente en las elecciones de 1982. La descomposición de UCD dio paso al fortalecimiento de una oferta conservadora, liderada por la Alianza Popular de Ma-

nuel Fraga, mucho mejor recibida por la derecha social. Coalición Popular no pudo frenar la mayoría absoluta del PSOE, pero obtuvo los suficientes diputados (106)

La descomposición de UCD dio paso al fortalecimiento de una oferta conservadora mucho mejor recibida por la derecha social.

ron a las elecciones de 1982. Conforme avanzaba la legislatura, el jefe de la patronal, José María Cuevas, planteó la necesidad de realizar una encuesta monstruo

como para constituirse en una oposición fuerte que pudiera optar a ser alternativa en unas elecciones siguientes. Sin embargo, pronto surgiría en sectores de la derecha social la duda sobre si el resultado de 1982 no sería el techo de la opción conservadora de Fraga, que abriría una nueva etapa de crisis de representación. Las elecciones de 1986 parecen haber confirmado brutalmente ese temor.

La ampliación de la crisis

En efecto, el jefe de la oposición fuerte de 1982 ve cómo en 1986 pierde votos e incluso un diputado. Se ha confirmado así el paso de una crisis orgánica, donde la derecha social no está conforme con una representación política de centro-derecha, a una crisis de representación estrictamente externa, donde la opción de derechas que sí recoge la expresión de la derecha social no consigue el apoyo de los electores para llegar a convertirse en gobierno. En la propia derecha surgen las preguntas ante este paradigma: ¿es que la UCD tenía demasiados problemas para ser un centro-derecha válido? ¿O más bien, dada la importancia del factor liderazgo, hay que sustituir a Fraga al frente de la opción de derechas?

El caso es que sólo un día después de las elecciones, la crisis cobra expresión práctica: la fracción democristiana de Coalición Popular, reunida en el PDP de Oscar Alzaga, inicia el rompimiento de dicha coalición, que será definitivo una semana más tarde. La reacción es tan rápida que apunta a un proceso fraguado mucho antes. De hecho, la idea de que una CD, liderada por Fraga, tiene un techo electoral, ha rodado por las filas de la derecha desde las primeras encuestas que siguie-

ron a las elecciones de 1982. Conforme avanzaba la legislatura, el jefe de la patronal, José María Cuevas, planteó la necesidad de realizar una encuesta monstruo para salir de dudas respecto a CD y su líder. Tal sondeo se realizó efectivamente en enero de 1986, buscando también perfiles alternativos. Los resultados confirmaron los temores de la derecha: Fraga está bien anclado entre la derecha social más conservadora y puede arrastrar entre tres y cuatro millones de votos, pero para el resto del electorado dispuesto eventualmente a no votar izquierda es necesario un líder menos ligado con el pasado, más joven y más dialogante. La derecha socio-económica apuró su búsqueda de una alternativa y fueron estudiando candidatos (Carlos Ferrer Salat, Abel Matutes, José Antonio Segurado, Adrián Piera, etc.), pero ya no había tiempo de reformular la Coalición para sustituir a Fraga, algo a lo que siempre se resistiría la vieja guardia de Alianza Popular.

Así las cosas, la derecha social impulsó dos operaciones paralelas: primero convenció al equipo de CD para que agudizara la imagen de centro-derecha que ya trató de dar Fraga en el 82; pero, al mismo tiempo, apoyó masivamente —especialmente en el terreno financiero— la propuesta alternativa del PRD de Garrigues, con el líder catalán Miguel Roca a la cabeza. Es decir, apoyó la creación de una derecha moderna y dinámica.

Ninguna de las dos actuaciones obtuvo éxito. Es cierto que Fraga se ha quedado ronco de gritar, en una campaña físicamente agotadora, que CD es una oferta moderada y centrista. Incluso él mismo ha hecho esfuerzos titánicos por dar esa imagen. Pero como dijo Juan Ramón Calero, secretario general adjunto de AP, «Alianza Popular es la derecha: nadie se ha creído eso del centro-derecha». Y los otros dos socios de CD, liberales y democristianos, no compensan el peso de Fraga

y su AP. Por otra parte, la alternativa Roca se ha estrellado contra un resultado brutal: ni un solo escaño fuera de Cataluña. Y es cierto —como se ha dicho— que un catalanista no vende bien como líder estatal, pero existen razones más poderosas: en primer lugar, que competía por el espacio centrista con un líder consolidado en el escenario español, Adolfo Suárez; pero también el propio carácter de despacho bancario (incluido ese error publicitario de usar un lenguaje financiero, *operación Roca*) de su oferta ha dejado helado al electorado popular.

Este fracaso del PRD de Garrigues y Roca ha sido tan contundente que tiene consecuencias suplementarias. En primer lugar, la práctica liquidación del PRD como alternativa de futuro, algo grave para la banca. Pero, sobre todo, la disolución de ese proceso acumulativo preparado por los estrategas de la derecha social (muchos de ellos a sueldo de la CEOE):

**Se ha confirmado el paso
de una crisis orgánica de la derecha
a una crisis de representación
estrictamente
externa.**

la suma, a los hipotéticos escaños del PRD, de los que hubieran obtenido liberales y democristianos del PDP, en el contexto de Coalición Popular. Como se dice en estos sectores, «lo que no podíamos imaginar es que la novia se nos iba a morir a la puerta de la iglesia».

En esta perspectiva, la reacción de Oscar Alzaga de separarse de CD es más coherente con la teoría de la operación que la de sus socios liberales. Porque como dice el ex ministro de UCD, Rodolfo Martín Villa: «Desde la derecha no ganaremos nunca». Y si dentro de Coalición Popular no puede compensarse el peso de la imagen de Fraga, es necesario ganar esa imagen fuera. Una operación arriesgada, porque como dicen en AP: «Si el PDP se presenta solo a las elecciones sacará los mismos votos que el PRD», exageración que tiene un punto de verdad. Pero una operación no menos difícil que la que se le pide a Fraga. Como afirma Martín Villa: «A Fraga se le está diciendo

que deje el liderazgo; y a la vez que no deje de presidir AP, porque sin él AP se desguaza en dos horas. Que siga con su partido porque es la fuerza operativa de la coalición, pero que deje a otro partido menos de derecha y menos importante, pero con menos rechazo, como buque insignia. Nadie tiene muy claro cuál debe ser ese partido, ni quién ha de ser el líder. Y pienso que, al final, también se le pide a Fraga que busque a ese líder y le «invista» como sucesor. ¡Ah! ¡Y todo ello, sin hacer inventos de laboratorio de marketing (poco creíbles)! Me parece que le pedimos demasiado» (semanario *Epoca*, 14 al 20 de julio, Madrid).

El problema es que la coherencia de Alzaga le ha llevado a sacar a sus 22 diputados y ocho senadores del grupo parla-

mentario Popular, para llevarlos momentáneamente al grupo mixto, en la esperanza de obtener, mediante una modificación del reglamento de la Cámara, un grupo parlamentario propio. Y eso no ha sido bien visto por algún sector de su grupo, como los vicepresidentes Alvarez, Carriles y Otero Novas, que han dimitido de sus cargos. Como tampoco ha obtenido el aplauso del jefe de la patronal José María Cuevas: «Está claro —dice— que en los partidos de la oposición tiene que haber renovación de estrategias, en los planteamientos, sobre todo para poder transmitir un mensaje de mayor credibilidad para una mayor masa de ciudadanos. Pero yo creo que eso no se logra diciendo: pues si no sé qué, entonces me voy a otro grupo. Creo que eso puede justamente producir el efecto contrario del que se busca». Y Cuevas agrega: «Pienso que sería muy triste en un sistema democrático que un partido que está en el poder se perpetuara, aunque lo hiciera mal, porque no hay nadie capaz de ofrecer una alternativa mejor. Ese sería el camino para el debilitamiento del sistema democrático español» (*Cambio 16*, 28-7-86, Madrid).

La opción de Cuevas y de un sector importante de la propia AP se orienta más bien hacia el recambio de liderazgo. El responsable de estrategia de AP, Alfonso

**Las condiciones históricas
han marcado bastante
la gestión socialista
en estos
cuatro años.**

Osorio, uno de los cerebros de la reforma política, ha presentado un plan a medio plazo: por un lado, olvidarse de la ficción Coalición Popular e ir abiertamente al gran partido conservador, para lo cual hay que pedir a los socios de CD la integración en AP (algo que ha acelerado el paso del PDP al grupo mixto). Con esa operación se lograrían dos cosas: afianzar el voto conservador español y hacer menos traumática, con un plazo más amplio, la sustitución de Fraga al frente de AP. Naturalmente, la idea consiste en afianzar primero la derecha para conquistar luego el centro-derecha. Ello sin perder tiempo en la subordinación de Fraga, para lo cual cuenta con parte de la dirección de AP (Fernando Suárez, Camuñas, Ruiz Soto y el secretario general Jorge Verstryngge).

Ahora bien, en el fondo, la alternativa de Osorio, al poner en primer plano el afianzamiento de la derecha, puede tener un punto de contacto con la teoría de los democristianos rupturistas: la posibilidad de repartirse los espacios centro-derecha y conservador por distintos partidos (naturalmente Osorio busca que AP sea el hegemónico). Pero esto supone romper con la tesis de Fraga, al menos a corto plazo, de la «mayoría natural», es decir, la idea de abarcar todo el voto no socialista con una oferta conservadora. O, dicho en términos comparativos, olvidar el modelo inglés para aproximarse mucho más al francés.

Espacios electorales y cambio social

Ciertamente, lo anterior nos lleva a preguntarnos por la consolidación de los espacios electorales en España. Algo que, desde luego, está resuelto hace tiempo en otros países de mayor rodaje democrático. Y resuelto de múltiples formas.

Descartando para España el modelo de Estados Unidos, caracterizado por la ausencia de un partido de izquierdas o apoyado en el movimiento sindical, quedan en Euro-

pa varios otros. El modelo británico: hasta ahora dominado por dos opciones, la conservadora que abarca también el centro-derecha, y la laborista, que desde el centro-izquierda recogía también la izquierda (una modificación reciente es la tentativa de separar el centro-izquierda neto del resto de la izquierda). La fórmula francesa: donde están bien representadas las cuatro opciones, la derecha, el centro-derecha, el centro-izquierda y la izquierda (aunque desde 1980 el partido socialista parece dispuesto a recoger el centro-izquierda y la izquierda, a partir de la progresiva crisis del comunismo francés). El modelo italiano: el centro-derecha ocupa los espacios conservadores, así como la izquierda es claramente hegemónica frente al centro-izquierda. Y la variante alemana: semejante en la banda derecha al italiano (ambos son partidos democristianos), pero en la banda izquierda más semejante al británico (el centro-izquierda abarca la izquierda, aunque existe la reciente característica alemana de un espacio nuevo para la problemática verde). Otra modificación importante del abanico italiano es la fórmula clara de los *tres tercios* (derecha, centro e izquierda) que se desarrolló en la prolongada vida democrática chilena (por cierto, que nada indica que la apertura chilena se vaya a encontrar con el problema español de la crisis de representación de la derecha, algo especialmente importante en cuanto al espacio del socialismo). Finalmente está el modelo sueco, donde la derecha y el centro-derecha están claramente identificados, pero se enfrentan a un partido socialdemócrata abrumadoramente hegemónico en la sociedad civil que, por consecuencia, ha gobernado ese país la mayor parte de este siglo.

De este análisis comparativo, parece que las actitudes políticas en el electorado

español tenderían a la estructura francesa de los *cuatro cuartos* (como ésta se presentó en los años setenta), si bien con una clara corrección favorable al centro, según se autoidentifican en los sondeos. Es decir, un 30 % se sitúa en el centro-izquierda, otro tanto en el centro-derecha, y un 20 % en la izquierda así como en la derecha).

Ciertamente, estas actitudes en el electorado no siempre pueden expresarse fielmente en la orientación del voto. Y en ello intervienen diversos factores, uno muy importante la organización de las formaciones políticas: puede haber un espacio electoral y no existir de forma presentable el correspondiente partido (PCE), o, por el contrario, carecer de credibilidad (como ha sucedido con Roca).

Otro factor es la estructura social y su desarrollo. En este punto hay en la derecha política un error muy común: considerar que un amplio posicionamiento del electorado en el centro es producto de una

sociedad donde las clases medias forman una desbordante mayoría. Es cierto que entre las clases medias abunda el posicionamiento de centro. Pero no lo es que el centro esté apoyado ni siquiera mayoritariamente sólo por ese sector social. En España tenemos claros ejemplos: en la UCD de Suárez, un apoyo decisivo fue el de los sectores de más baja renta, y en 1982, a pesar de lo que ganó el PSOE de sectores medios, la mayoría de éstos se quedaron con Coalición Popular. Es decir, no hay que confundir sentido del voto con actitud política, pero, sobre todo, ninguna de las dos cosas con situación en la estructura social. Si entre las primeras y la segunda no hubiera toda una serie de mediaciones políticas e ideológicas, sería difícil encontrar peones de derecha o banqueros de izquierda (aunque hay que reconocer que son apreciablemente más fáciles de encontrar los primeros).

Para no perderse en adjudicaciones so-

ciales apresuradas hay que tener una imagen fiel de la estructura social española. Como no es el objeto de este trabajo, sólo haré unas observaciones casi telegráficas al respecto, a partir de una discusión en 1980 con el profesor José Félix Tezanos (*Sistema*, núms. 29, 30 y 34; *Zona Abierta*, núms. 20 y 24). Han transcurrido seis años y ya pueden contrastarse las previsiones con los hechos. Parece evidente que los hechos han dado la razón a Tezanos en su previsión de que la proporción de los ocupados en la industria disminuiría mucho más rápidamente, como en los países punta, en relación con el sector servicios. Mi tesis de que esa velocidad sería en España apreciablemente menor, precisamente por la división internacional del trabajo, no se ha cumplido. La concentración de la crisis industrial en estos años ha espoleado ese cambio. Y argumentar

que la mayoría de los tres millones de parados «son» del sector industrial, o que buena parte del trabajo sumergido se hace en la pequeña y mediana industria, sería

un atenuante poco sólido. Sin embargo, siguen siendo correctas mis apreciaciones sobre este cambio y, sobre todo, la conclusión socio-política. Por un lado, no hay que confundir la extensión del sector servicios con un crecimiento de la misma dimensión de las clases medias. En el sector servicios hay mucha clase media (por renta, status, educación, etc.), pero también hay mucha clase trabajadora (administrativos, secretarías, telefonistas, etc.) y un número nada despreciable —en torno a un tercio— de obreros manuales cualificados y no cualificados (peonaje de manipulación, transporte, etc.).

Es decir, no hay que caer en espejismos si se quiere componer una imagen correcta de la pirámide social española. En 1986 la distribución sigue siendo: una minoría en la cúspide, un 2,5 % (empresarios, gerentes, directores de empresa y altos funcionarios); un bloque de clases intermedias, en torno al 30 %, tanto viejas

**El crecimiento del CDS
ha tenido lugar en los sitios
donde el PSOE
había obtenido más votos
en 1982.**

(pequeño empresario empleador) como nuevas (profesionales y técnicos); y un amplio resto de lo que los sociólogos han denominado como «clases trabajadoras», compuesta por dos sectores, muy entremezclados en sus prácticas sindicales, como son, de un lado, administrativos, dependientes y trabajadores de servicios (en torno a un 30 %) y otro sector compuesto por los obreros manuales del agro, la industria y los servicios (en torno a un 37 %). La tentativa de la derecha de identificar como clase media al bloque de administrativos y dependientes de comercio lleva luego a sorpresas como la de que los bancarios tengan un comportamiento más radical (sindical y políticamente) que los metalúrgicos, por poner un ejemplo.

Cabe preguntarse cuál es la orientación del voto en relación con la posición en esta estructura social. Es un dato que el 35 % superior, de clases intermedias y altas, vota de forma mayoritaria en toda Europa a la derecha y al centro-derecha. Y que los obreros y empleados votan mayoritariamente a la izquierda. Sin embargo, tanto el centro-izquierda e izquierda logran obtener votos de apoyo en las clases intermedias, como la derecha lo hace entre las clases trabajadoras. Pero no hay que confundirse: cuando la derecha gana las elecciones, lo hace partiendo de la gran mayoría de ese 35 % superior, y obteniendo un 20 % más entre las clases trabajadoras (el resto de las clases trabajadoras, un 40 % del total, sigue votando a la izquierda y al centro-izquierda). Pudiendo suceder, como pasó con UCD, que ese sector de clases trabajadoras que vota a la derecha sea el de menos renta «per cápita» del país.

Por eso discutí la conclusión socio-política de Tezanos de que «el PSOE ha tocado techo entre los sectores obreros y tiene ahora que avanzar entre las clases medias» (escuela de verano del PSOE, en 1982). Por el contrario, sostuve que si bien ha-

bía que avanzar entre los sectores intermedios, todavía había mucho que ganar entre las clases trabajadoras. Las elecciones de 1982 mostraron con claridad cómo el grueso de las clases medias se quedaba con CD, a pesar de que el PSOE aumentaba su apoyo también en ese ámbito, y lo que se desplazaba desde UCD era buena parte de su voto trabajador, así como se barría en las bases obreras del PCE y la extrema izquierda. En realidad, los diez millones de votos del PSOE, por los cinco de CD, muestran bastante lo que sería un resultado ideal para la izquierda, en coherencia con la estructura social del país.

Por eso me parece una ocasión histórica perdida que ese bloque social haya votado más a la estabilidad que al cambio en 1986. También por sus consecuencias. En realidad, cuando discutíamos en 1979 sobre el partido hegemónico no veíamos tan claro como ahora el peligro que se apunta: el partido del cambio, ocupado casi exclusivamente en la gestión administrativa, sin haber conseguido la famosa «penetración en el tejido social», pierde progresivamente las expectativas de compromiso por el cambio, y es apoyado por la derecha social para convertirse en una buena opción de centro que busque fundamentalmente la estabilidad. Asistimos así a la creación del *socialismo de centro* que, con su práctica y su discurso, orienta a la población hacia ese voto a la estabilidad.

Para ser justos, hay que decir que las condiciones históricas han marcado bastante la gestión socialista en estos cuatro años. Dicho de otra forma, la crisis orgánica de la derecha ha obligado al PSOE a hacer una política de estabilización. No hay que olvidar el sentido amplio de aquella afirmación de Felipe González tras la

La alternativa Roca se ha estrellado contra un resultado brutal: ni un solo escaño fuera de Cataluña.

tentativa del 23-F: «Estoy dispuesto a sacrificar el partido, si ello es necesario, para consolidar la democracia». No se ha sacrificado el partido, pero su credibilidad

como partido del cambio se ha deteriorado considerablemente.

Así las cosas, puede suceder que el PSOE opte por aceptar esa tendencia y consoli-

darse como socialismo de centro, hasta que los electores encuentren una opción de centro-derecha y lo coloquen en la oposición, donde pueda reconsiderar su papel. Pero también puede suceder que trate de recomponer su credibilidad como partido del cambio, buscando la recomposición del voto en esa dirección, desde el seno de la sociedad civil (es decir, trate de poner en práctica de verdad el modelo sueco).

Naturalmente, esta opción está estrechamente relacionada con la forma de encarar la actual crisis de representación de la derecha. Cuando, al día siguiente de las pasadas elecciones, el PDP de Oscar Alzaga iniciaba su separación de CD, varios líderes socialistas expresaron «su preocupación por el deterioro de la opción conservadora en España». Pero esta preocupación puede referirse a la descomposición general de la derecha política, lo cual sería indudablemente peligroso, o más bien al hecho de que caiga la derecha conservadora —con la cual siempre se ganarían las elecciones— y sea sustituida por un centro-derecha más competitivo. Porque es indudable que eso tendría más peligros para la mayoría socialista, pero cabe preguntarse si no sería mucho mejor para el país. En realidad, se daría una competencia política en términos más progresistas, y el PSOE se vería obligado a recuperar su papel de partido del cam-

Parece que las actitudes políticas del electorado español tenderían a una estructura similar a la francesa.

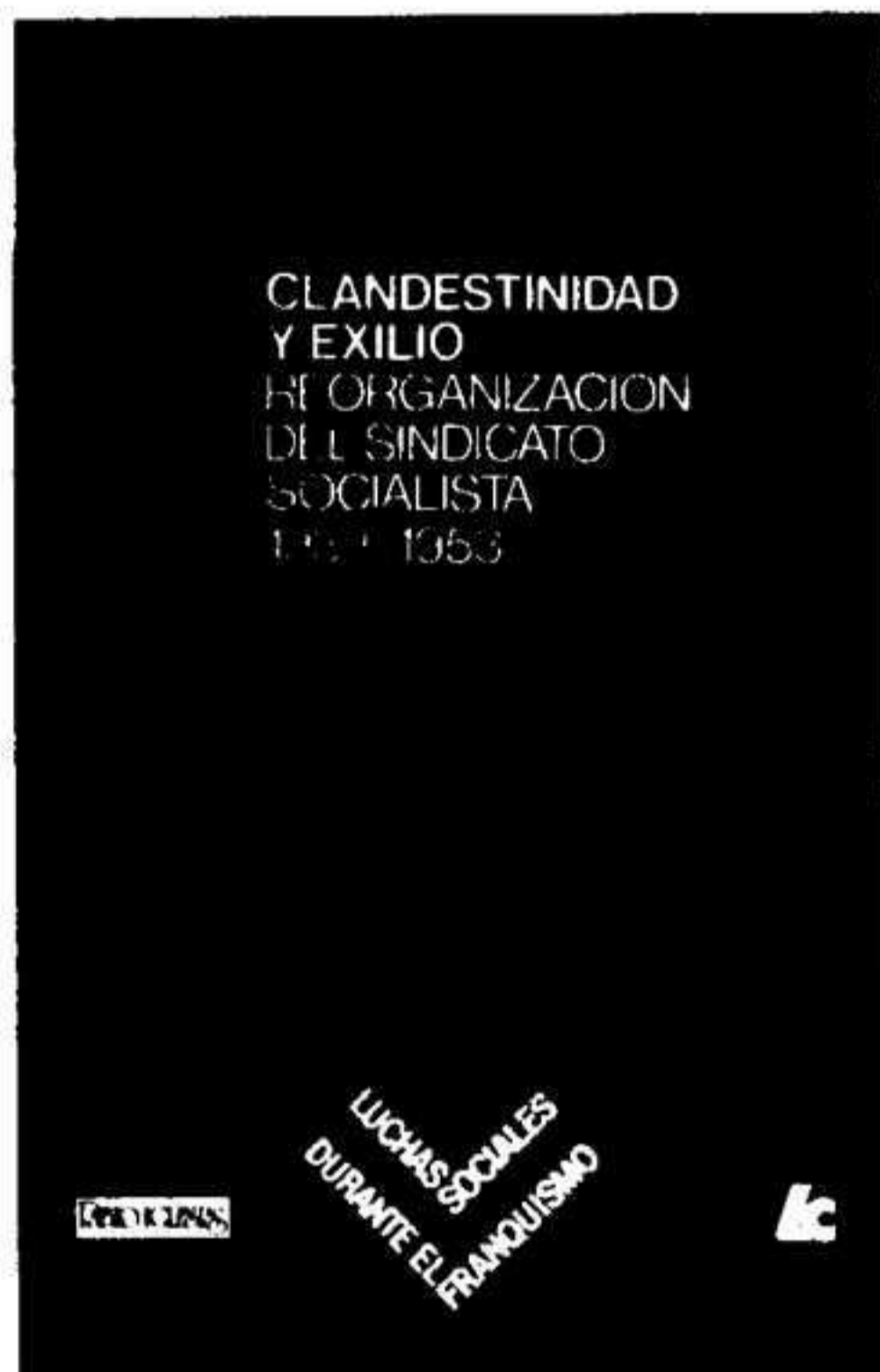
bio. No parece que haya mucho de malo en ello.

En todo caso, no es fácil que la derecha resuelva así su crisis de representación:

mediante la reformulación rápida de un centro-derecha hegemónico en la derecha. Las ofertas que hay para ello en el Parlamento no tienen precisamente un futuro de éxito garantizado. La suerte de los democristianos del PDP ante unas elecciones se parece a la de los primeros galeones que trataban de cruzar el Atlántico. Pero tampoco el CDS de Adolfo Suárez tiene un futuro fácil. A pesar de que ha conseguido un grupo parlamentario propio y ha reforzado su principal capital: el liderazgo de Suárez, sigue teniendo el rechazo de buena parte de la derecha política y social, lo que le supondrá un avance difícil entre los votos actuales de CD; es decir, obtendrá el apoyo de una franja del centro (la que ha ganado en 1986) y la que está todavía en el cauce del PSOE. De hecho, el crecimiento del CDS en las pasadas elecciones ha tenido lugar en los sitios donde el PSOE había obtenido más votos en 1982. En resumen, todo indica que la fórmula francesa es el horizonte más probable: derecha hegemónica con centro-derecha independiente. Incluso para semejarse más, Alianza Popular trata de hacer lo que llama la «operación Chirac», es decir, recomponer su fuerza ganando en las próximas elecciones municipales la alcaldía de la capital. Pero es difícil imaginar aún si se consolidará ese modelo francés y, de forma más general, si la derecha llegará a resolver, en la legislatura que comienza, su profunda crisis de representación política.

E D I T O R I A L

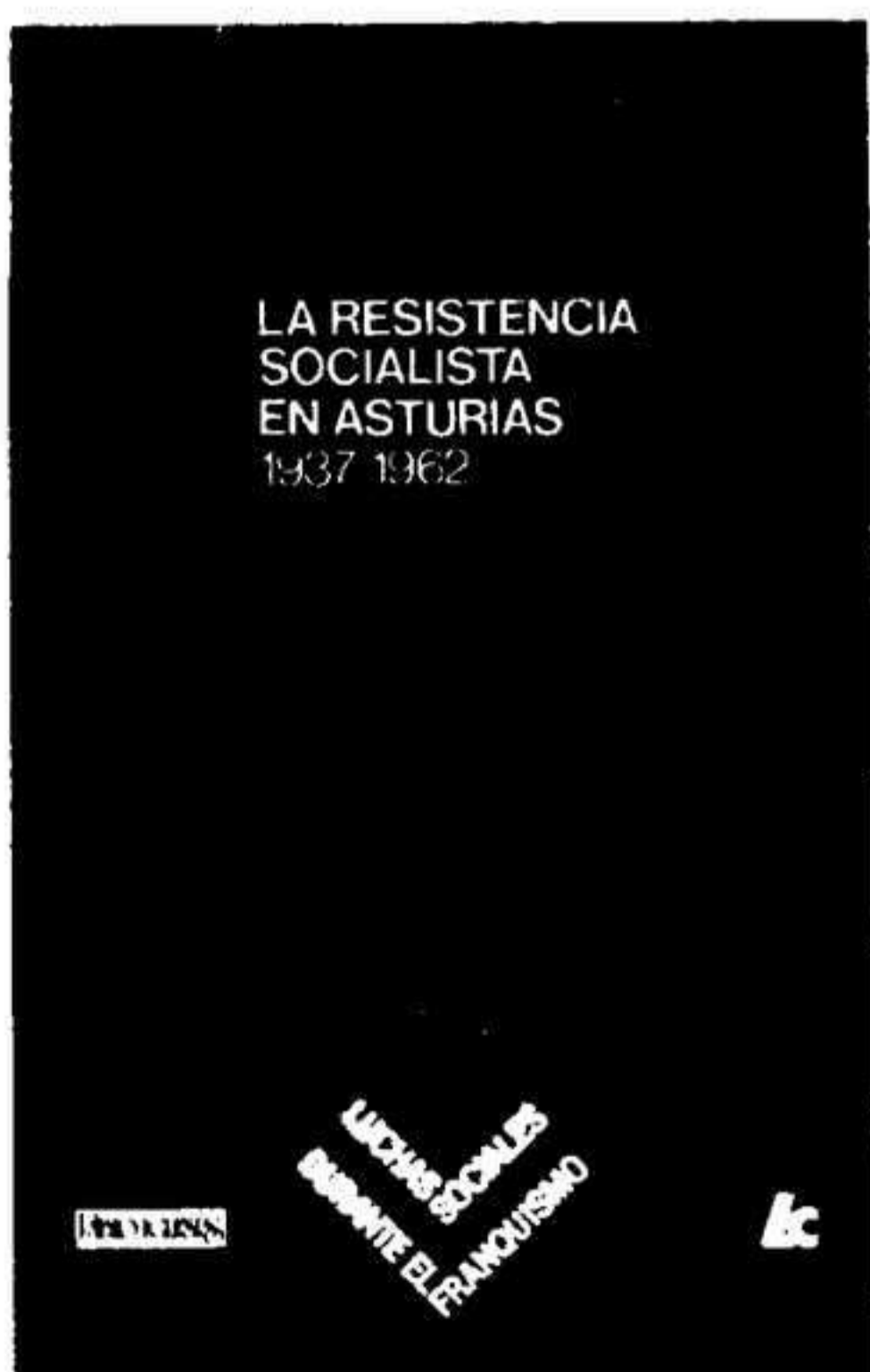
PABLO IGLESIAS



CLANDESTINIDAD Y EXILIO
REORGANIZACION DEL SINDICATO SOCIALISTA
1939-1953
Cesar Tcach y Carmen Reyes
Editorial Pablo Iglesias, Fundación Largo Caballero
256 págs., 1.175 ptas.



EL SOCIALISMO EN ESPAÑA
Anales de Historia
Editorial Pablo Iglesias
466 págs., 1.770 ptas.



LA RESISTENCIA SOCIALISTA EN ASTURIAS
1937-1962
Juan Antonio Sacaluga
Editorial Pablo Iglesias, Fundación Largo Caballero
223 págs., 1.050 ptas.

PEDIDOS:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30 - 28010 Madrid
Tels.: 410 46 96 y 410 47 98

EUSKADI: UNOS RESULTADOS SIN PRECEDENTES

Jesús Eguiguren



Las elecciones del 22 de junio de 1986 tenían un carácter muy especial en el País Vasco. No sólo por la ya habitual peculiaridad del comportamiento electoral de esta Comunidad Autónoma sino también, y fundamentalmente, porque el panorama político vasco no era el mismo en 1986 que en anteriores convocatorias electorales.

Dos hechos políticos nuevos, de gran importancia, venían a acentuar esta singularidad.

En primer lugar, la crisis del PNV. Crisis que sale a la luz pública coincidiendo con las elecciones autonómicas de 1984 y tiene su manifestación más espectacular,

un año más tarde, con el cese de Carlos Garaikoetxea al frente del Gobierno Vasco y su sustitución por José Antonio Ardanza. Desde entonces, los enfrentamientos internos continuarán sin cesar, creciendo en intensidad al aproximarse las fechas electorales. La repercusión electoral de esta guerra interna del nacionalismo

era una de las incógnitas que el 22 de junio tendrían que desvelar las urnas.

Otro hecho novedoso en la política vasca era el Pacto de Legislatura suscrito por el nuevo Lendakari del Gobierno Vasco, José Antonio Ardanza, y los socialistas vascos, vigente desde principios de 1985. El Pacto Ardanza-Benegas modifica sustancialmente el marco habitual en que se desarrollaban las elecciones en el País Vasco, caracterizadas por los enfrentamientos con Madrid y por la radical bipolarización política entre socialistas y nacionalistas. Esta vez, en virtud de Pacto de Legislatura, los enfrentamientos eran más mitigados y, además, los socialistas aparecían como sostenedores del Gobierno Vasco.

Finalmente, en vísperas del 22 de junio existía también la lógica preocupación por los resultados que pudiese obtener Herri Batasuna. Preocupación justificada por

la cobertura política que presta esta organización al terrorismo y porque acababan de producirse acontecimientos que favorecían de forma sensible las posibilidades electorales de HB, como su legalización por los Tribunales, la actitud adoptada por el PNV a raíz de las conversaciones iniciadas en Bergara, la crisis del nacionalismo moderado, etc.

Los resultados vinieron a confirmar con creces las expectativas creadas en el País Vasco en torno a las elecciones generales del 22 de junio. Mientras en el resto de España no se producían cambios importantes, en Euskadi se registraban dos hechos sin precedentes: por primera vez en su historia, el Partido Socialista se convertía en la primera fuerza política de la Comunidad Autónoma; y, paralelamente, por primera vez desde el inicio de la transición, el PNV aparecía como el gran perdedor. Por lo que respecta a Herri Batasuna, no tenía lugar el crecimiento que al-

gunos preveían, pero sí se confirmaba la preocupante estabilidad de su voto.

En definitiva, unos resultados de los que nadie duda que van a tener una gran importancia para el futuro político de la Comunidad Autónoma Vasca. Hasta el extremo de que tal vez, a partir de ahora, al referirse a la dinámica política y electoral del País Vasco sea ya inevitable hablar de un antes y un después del 22-J-86.

El Partido Nacionalista Vasco. Esquemas rotos

«No tengáis miedo, seguiremos subiendo». Con estas palabras tranquilizaba a sus seguidores el presidente del PNV, Xabier Arzallus, a las doce de la noche del 31 de mayo, al dar comienzo la campaña

electoral de su partido. La frase encerraba en sí un doble significado: por una parte, el reconocimiento de la preocupación existente por lo que pudiera ocurrir en las

elecciones; por otra parte, la reafirmación en la seguridad de que, al igual que había ocurrido en todas las ocasiones anteriores, el PNV seguiría «subiendo».

Los sondeos de opinión publicados por la Prensa durante la campaña vinieron a confirmar las previsiones optimistas. Según todos los sondeos, el PNV mantenía su electorado y aparecía como claro ganador.

Los resultados del 22 de junio, sin embargo, echaron por tierra estos cálculos. El PNV obtenía en la Comunidad Autónoma Vasca 304.675 votos y siete escaños (el 27,92 % de los votos válidos emitidos). Es decir, un escaño y 74.618 votos menos que en octubre del 82. Con relación a las elecciones autonómicas del 84, la pérdida de votos era todavía más grave, 146.503 votos menos (cuadro I).

Con estos resultados, aunque el PNV seguía siendo el partido más votado, 16.757

votos más que el PSOE, dejaba de ser el primer partido del País Vasco en cuanto a número de escaños al ser sobrepasado por el PSE-PSOE, que obtenía un escaño más; y veía interrumpido drásticamente el incremento permanente de votos registrado a lo largo de todas las elecciones desde 1977.

Ante esto, no es de extrañar que el mismo que al iniciar la campaña aseguraba «seguiremos subiendo», nada más conocer los resultados, en la noche del 22-J-86 exclamase, «aquí, está claro que se han roto todos los esquemas».

Aconsejaba Maquiavelo que en la guerra y en la política, cuando se tiene por aliado a alguien a quien se teme, es conveniente evitar la derrota total del enemigo común. Esta parece haber sido la táctica, más o menos consciente, que ha seguido el PNV durante la campaña y en los meses previos a la misma: evitar la marginación de HB, utilizándolo como freno de las pretensiones del PSE-PSOE.

De otra forma, difícilmente se entienden, aún conociendo las contradicciones y ambigüedades del PNV, algunos de los comportamientos y declaraciones de los dirigentes nacionalistas. Así, las conversaciones iniciadas en vísperas electorales con HB y la forma en que las abordó el PNV, presentando a HB como un partido responsable y dispuesto a comprometerse por la paz en Euskadi, contribuyeron a legitimar y dar credibilidad a HB.

En cuanto a declaraciones de dirigentes nacionalistas que apuntaban en la misma dirección, sería imposible recogerlas todas aquí. Nos limitaremos a señalar algunos ejemplos: al comenzar la campaña electoral, Xabier Arzallus manifestaba en Pamplona que prefería un diputado de HB en Navarra antes que de cualquier otra fuerza política; durante toda la campaña, hubo continuas referencias por parte de

Aunque el PNV sigue siendo el partido más votado, deja de ser el primer partido del País Vasco en cuanto a número de escaños.

los distintos candidatos sobre la necesidad de negociar con ETA; y, finalmente, un día antes de cerrarse la campaña electoral, el candidato número uno por Guipúzcoa del PNV lo resumía todo diciendo que la subida de HB, «desde un punto de vista nacionalista, no deja de ser beneficioso».

En efecto, desde ciertos planteamientos partidistas, la subida de HB podía ser beneficiosa para el PNV: un nuevo ascenso del voto nacionalista en el País Vasco y el consiguiente debilitamiento en las posiciones del PSE-PSOE daría una renovada capacidad de maniobra y de presión al PNV. Desde cálculos meramente electorales, los beneficios eran más evidentes todavía: partiendo de la creencia de que el PNV mantenía o incluso mejoraba sus resultados, un ascenso de HB era la mejor arma para que el PSE-PSOE, principal competidor del PNV, perdiera escaños.

Los sondeos aparecidos en la Prensa parecían plenamente el acierto de esta estrategia. Todas las encuestas daban como el gran perdedor al PSOE, siendo parte de sus escaños arrabataados por HB. Pero fallaron los sondeos, y falló Maquiavelo. Herri Batasuna, efectivamente, el 22 de junio arrebató escaños: pero no al PSOE, sino al propio PNV.

En el País Vasco nadie ha dudado en señalar al Partido Nacionalista Vasco como el perdedor de las elecciones del 22-J-86. Los propios nacionalistas han sido los primeros en sentir las consecuencias de lo ocurrido: la crisis interna no tardó en estallar con inusitada virulencia, una especie de carlistada hizo temblar las estructuras del PNV, se empezó a hablar de dimisiones, de escisión, de ruptura... Hubo afiliados que en la Prensa pidieron la expulsión de Ardanza y de Arzallus no sólo del partido sino del propio País Vasco.

Sin embargo, analizando los resultados friamente, el traspies electoral del PNV

no era para tanto si no entraran en juego otros factores que luego analizaremos. Después de todo, el PNV sigue siendo el partido más votado y, si bien con relación a octubre del 82 pierde 74.618 votos, su más inmediato rival, el PSE-PSOE, pierde casi otros tantos, 60.702. Estas cifras, teniendo en cuenta que la abstención ha aumentado en un 12 %, no eran, realmente, motivo suficiente para rasgarse las vestiduras.

Es cierto que con relación a las elecciones autonómicas de febrero de 1984 la pérdida de votos es mucho más importante, 146.503 votos menos. Pero también este dato es matizable, aludiendo a la diferencia de comportamiento electoral que se observa entre unas elecciones generales y unas autonómicas, siendo en estas últimas donde más votos moviliza el PNV, en perjuicio de los socialistas que, en cambio, salen mejor parados en las generales. Incluso se podría aventurar la dudosa hipótesis de que la importantísima abstención que se registra en el País Vasco, en las autonómicas perjudica sin lugar a dudas al PSOE pero en las generales, a lo mejor, afecta más al PNV.

En fin, sería posible insistir también en el carácter coyuntural de los resultados debido a la imagen de división del PNV, mal momento político, sectores críticos del partido que quisieron castigar a la actual dirección, etc. Valorando todas estas circunstancias, en un país normal y para un partido normal lo ocurrido el 22-J-86 no hubiera pasado de ser un serio revés electoral del que es necesario analizar las causas y sacar las enseñanzas políticas oportunas. Pero sin más consecuencias.

En cambio, en el caso del PNV no ocurre esto, porque concurren una serie de factores, algunos de ellos meramente simbólicos, que tienen una gran trascendencia en el País Vasco:

1) Como ya hemos señalado, el 22-J-86

el PNV deja de ser la primera fuerza política del País Vasco en número de diputados al Congreso, al ser superado por sus rivales históricos, los socialistas. La importancia de este hecho es únicamente comprensible teniendo en cuenta la opinión fuertemente arraigada en amplios sectores de la sociedad vasca, de que era muy difícil, por no decir prácticamente imposible, ganar al PNV.

2) Esta creencia venía en parte sustentada, además de por prejuicios ideológicos nacionalistas, por el ascenso ininterrumpido registrado por el PNV en todas las contiendas electorales desde 1977, dando la falsa impresión de que el PNV no tenía techo electoral. El 22-J-86 esta dinámica se ha visto interrumpida de una forma drástica. Desde posiciones neutrales y realistas era previsible un bajón electoral del PNV pero muy pocos, por no decir nadie, pensaba que pudiera tener las dimensiones que ha tenido.

3) La convicción existente antes de las elecciones de que un resultado adverso desencadenaría el agravamiento de la crisis interna del PNV, donde los sectores críticos pasarían a la acción acusando a la actual dirección de tener la culpa de lo ocurrido e instrumentalizando en su favor el descontento provocado por los resultados en las bases del partido. Los hechos ocurridos después del 22 de junio han confirmado esta hipótesis, siendo todavía incierto el desenlace de la crisis.

4) Finalmente, más allá de todo lo anteriormente señalado, hay una circunstancia que acentúa el alcance de los resultados negativos conseguidos por el PNV. Nos referimos a las razones profundas que han podido provocar una pérdida de votos de estas características, y que inducen

a pensar que no se trata de unos resultados meramente coyunturales.

Tanto los comentaristas de Prensa como los propios dirigentes nacionalistas se

Más que ante un mero revés electoral nos encontramos, en gran medida, ante el fracaso político del nacionalismo.

han apresurado a enumerar una serie de causas, a veces contradictorias entre sí, que estarían en el origen de los resultados del PNV: la abstención, la sustitución de

Las elecciones del 22-J-86 han demostrado en el País Vasco que es ya perfectamente posible una alternativa de gobierno.

Garaikoetxea, el boicot de los críticos, la política de moderación, la imagen de división, etc. Estas circunstancias podrán desaparecer y el PNV podrá también mejorar sus resultados, pero es muy difícil que vuelva a recuperar una parte importante de los votos perdidos. Es muy difícil porque más que ante un mero revés electoral nos encontramos, en gran medida, ante el fracaso político del nacionalismo.

El Partido Nacionalista ha ido engrosando su electorado durante todos estos años de la transición, entre otras razones, porque una gran mayoría de los ciudadanos vascos creyeron ver en el PNV el único partido que reunía las condiciones para dar solución a los graves problemas de Euskadi. Así, además de mantener su propio electorado ha ido recibiendo votos de los sectores sociales moderados sin adscripción ideológica, llegando incluso a arrebatarse al centro-derecha no nacionalista del País Vasco gran parte de los votos que obtuvo en 1977. La aparente inexistencia de una alternativa ha facilitado sensiblemente este proceso.

Desde hacía algún tiempo, sin embargo, la confianza en la capacidad política del PNV había sufrido un serio quebranto. El PNV, después de detentar en solitario durante estos años el poder de la Comunidad Autónoma, no ha sabido solucionar los problemas vascos ni se ha decidido a adoptar una posición firme y clara ante ellos, enfrascándose al final en querrelas internas y personalismos que a nadie interesaban. Ante esto parte de los electores que en su día apostaron por el PNV ahora le han retirado su voto. Los votantes del centro-derecha han empezado nuevamente a votar a Fraga o Suárez, otros antiguos electores se abstienen o se deciden por el PSOE. Mientras tanto, la

ambigüedad del PNV ante el nacionalismo radical no le servía para atraer votos de ese sector sino todo lo contrario, ya que ha habido una pequeña franja de su electorado que ha votado a HB.

En definitiva, en esta pérdida de confianza en la capacidad de gobierno del PNV, en este desencanto, radicaría la verdadera causa de la derrota electoral del PNV, convirtiéndolo en algo más que un simple acontecimiento coyuntural. Agravado por el hecho de que con estos resultados el PNV pierde capacidad de manobra para rehacer su política, y que la crisis por la que atraviesa le impide dar una imagen de coherencia y cohesión interna. Y, para poner las cosas más difíciles todavía al PNV, las elecciones del 22-J-86 han demostrado en el País Vasco que es ya perfectamente posible una alternativa de gobierno.

El Partido Socialista de Euskadi

Tras las elecciones del 22 de junio el Partido Socialista de Euskadi (PSOE) se convierte en la primera fuerza política vasca con representación en el Congreso de los Diputados, siete escaños los socialistas a seis los nacionalistas. Los 287.918 votos conseguidos por el PSOE (26,39 % de los votos válidos emitidos) suponen, sin embargo, 16.656 votos menos que el PNV (ver cuadro I). Esta contradicción entre votos y escaños tiene su explicación en que el PSOE ha ganado en Alava, provincia con menor número de votantes, consiguiendo dos escaños frente a uno del PNV, mientras que este partido aventaja al PSOE en votos en Guipúzcoa y Vizcaya, aunque en estas provincias haya obtenido el mismo número de escaños que el PSOE.

De esta forma, el Partido Socialista obtiene un resultado que tiene un indudable significado histórico: por primera vez en su historia, el socialismo vasco gana unas

elecciones generales en Euskadi; al mismo tiempo, consigue desplazar a un segundo puesto al PNV al superarle en el conjunto de las tres provincias de la Comunidad Autónoma, un hecho difícil de valorar en toda su dimensión sin tener en cuenta las circunstancias en que se ha desarrollado la política vasca en los años de la transición.

En las elecciones de junio de 1977 dos formaciones políticas moderadas, enfrentadas entre sí históricamente, pero aliadas bajo el franquismo, el PNV y el PSE-PSOE, aparecen como las dos grandes fuerzas mayoritarias del País Vasco, estando prácticamente igualados en votos. Pero los hechos no discurrieron por los cauces de entendimiento y normalidad previstos. El terrorismo, la intolerancia, el crecimiento progresivo de un nacionalismo excluyente serán las notas características de la transición vasca.

Ello fue en gran parte provocado por la existencia de ETA y del nacionalismo radical, pero también por la actitud del PNV que a pesar de la aprobación del Estatuto, de los Concursos Económicos, etcétera, no supo oponerse frontalmente al radicalismo sino que hizo del enfrentamiento con Madrid el eje de su política. Se producía un círculo vicioso donde la presencia del nacionalismo radical empujaba al PNV a acentuar sus posiciones nacionalistas, lo cual, a su vez, creaba las condiciones para legitimar y dar protagonismo a ETA y los radicales. Una dinámica en la que ambos nacionalismos se alimentaban mutuamente, haciendo imposible la normalización política y la estabilidad social del País Vasco.

En estas condiciones los más perjudicados eran indudablemente los sectores políticos y sociales no nacionalistas. Unión de Centro Democrático y Alianza Popular quedaron muy pronto convertidos en fuerzas marginales y minoritarias. El Partido Socialista, que, por su fuerza electoral y su presencia social, era el único

partido que podía hacer frente al nacionalismo además de ser el principal competidor político del PNV, se convirtió en el blanco de todos los ataques nacionalistas y especialmente de los procedentes del Partido Nacionalista. Sería demasiado largo y aburrido exponer los detalles de las adversidades y el acoso político padecidos por el Partido Socialista: el hecho es que mientras los nacionalistas seguían incrementando sus fuerzas sin cesar, el PSE-PSOE, un partido que en 1977 aparecía igualado con el PNV, en las generales del 79 bajará un 19 % de los votos, quedando a gran distancia del PNV; y en las autonómicas de 1980 logrará únicamente el 14 % de los votos, convirtiéndose ya en la tercera fuerza política detrás de HB.

Los lógicos avatares de la competencia política partidista no serían suficientes para explicar esta evolución, pues era en gran parte consecuencia de los efectos del terrorismo de ETA, que tenía atemorizada y paralizada a una gran parte de la población no nacionalista. Todavía hoy no deja de ser un ejemplo significativo de estos temores el hecho de que en el País Vasco no sirvan para nada los sondeos electorales ya que los votantes de Coalición Popular o del PSOE no manifiestan su intención de voto a los encuestadores.

La inestabilidad y la debilidad de los últimos gobiernos de UCD acentuaron esta sensación de abandono y marginación de amplios sectores no nacionalistas que optaban por buscar la protección del nacionalismo o simplemente se marginaban de la política no afiliándose a ningún partido ni sindicato, no exponiendo en la calle o en la fábrica sus opiniones políticas, y muchos de ellos absteniéndose electoralmente. En el cuadro III puede observarse la relación entre aumento de la abstención y pérdida de votos por el PSOE.

Pero además, la intolerancia y el terror, al igual que a AP o UCD, afectó directamente al PSOE: militantes y simpatizan-

**El terrorismo, la intolerancia,
el crecimiento progresivo
de un nacionalismo excluyente
serán las notas características
de la transición vasca.**

tes del PSOE y UGT agredidos por defender sus ideas en las fábricas o ayuntamientos, atentados con bombas en las sedes del partido, Casas del Pueblo asaltadas y destruidas por manifestantes, militantes asesinados. Sería inútil pretender describir las características y el alcance que puede llegar a tener el terrorismo en un colectivo. Pues no es posible reflejar las múltiples y sutiles formas en las que puede afectar a las personas, amenazas directas, amenazas a familiares, marginación social, inseguridad personal, presión psicológica, etcétera. A pesar de todo, el Partido Socialista resistió.

El Partido Socialista resistió física y políticamente. Ni los asaltos a las Casas del Pueblo, ni las agresiones y asesinatos de militantes, consiguieron anular a la organización socialista. Sería difícil encontrar muchos ejemplos de un partido político que en un sistema democrático haya tenido que pasar por un trance semejante.

Políticamente también se resistió. Clarificando la propia política y llevando a cabo un enfrentamiento sin contemplaciones no sólo contra ETA y sus apoyos, sino también contra el PNV, denunciando sus ambigüedades, su apoyo tácito en ocasiones al terrorismo, su política consistente en aprovecharse en la práctica del terrorismo que rechazaba en teoría. Esta política de enfrentamiento total al nacionalismo dio al final sus resultados.

En 1982, coincidiendo con los cambios políticos que afectan a todo el Estado, el Partido Socialista de Euzkadi puso nuevamente en cuestión la hegemonía del PNV en el País Vasco. Los socialistas, en las elecciones de octubre del 82, se situaban a tan sólo treinta mil votos del PNV, quedando igualados en cuanto a número de diputados. Aunque

**Los excelentes resultados
alcanzados por el PSE-PSOE
han sido conseguidos
en el marco
del Pacto de Legislatura.**

res resultados que en el período 79-80, haciendo prácticamente imposible que el PNV pudiese dirigir en solitario la política vasca. Finalmente, el 22 de junio de 1986, ya bajo otras circunstancias políticas, el PSE-PSOE consigue superar en número de diputados al PNV, convirtiéndose en la primera fuerza política de Euskadi.

Los excelentes resultados alcanzados por el PSE-PSOE el 22-J-86 han sido conseguidos en el marco del Pacto de Legislatura. Es decir, en el marco de una política donde, sin renunciar a la firmeza frente al terrorismo y la intolerancia, se ha buscado la colaboración y el entendimiento con el nacionalismo moderado, llegando a sostener desde la oposición a un gobierno del Partido Nacionalista Vasco.

No faltaban dentro del Partido Socialista quienes se preguntaban sobre la eficacia y las consecuencias de esta política. Existía el lógico temor de que con esta actitud se estuviera favoreciendo únicamente al PNV, sin obtener gran cosa a cambio y renunciando a una clara política de oposición. Los resultados han venido a demostrar lo contrario, pues es en este contexto de entendimiento y diálogo con el nacionalismo moderado donde los socialistas vascos han conseguido el mayor éxito político de su historia.

De esta forma, los temores sobre las consecuencias electorales del Pacto han quedado radicalmente disipados. En cuanto a la validez política del Pacto de Legislatura, hace tiempo que había quedado demostrada su eficacia: ha hecho posible la gobernabilidad del País Vasco, ha dado estabilidad a las instituciones, la crispación social ha ido cediendo gradualmente, y ha creado las condiciones para que las fuerzas democráticas del País Vasco vayan tomando conciencia de que es posible ponerse de acuerdo para hacer frente a los gravísimos problemas que siguen sin resolverse.

No cabe duda de que la posición política del PSE-PSOE ha salido fortalecida de los comicios del 22 de junio, lo cual le permite intensificar su protagonismo en la política vasca y afrontar con relativo optimismo las próximas elecciones municipales y autonómicas. Las objeciones en el sentido de que ha perdido, con relación a octubre del 82, 60.702 votos en el conjunto de la Comunidad Autónoma o de que sus posibilidades electorales disminuyen considerablemente en unas elecciones de carácter autonómico, no invalida esta afirmación.

El PSE-PSOE, efectivamente, con relación a las últimas generales pierde votos, pero hubiera sido casi un milagro el no hacerlo teniendo en cuenta que la abstención ha aumentado en un 12 %, y que el PSOE pierde un millón y medio de votos en toda España. Después de cuatro años de gobierno en plena época de crisis, llevando en solitario y en unas difíciles condiciones la lucha contra el terrorismo y la política de reconversión industrial, las pérdidas registradas en el País Vasco son realmente escasas, sobre todo observando cómo su principal rival electoral, el PNV, sin haber asumido esas responsabilidades, ha perdido más votos todavía. La gran inestabilidad electoral que caracterizaba el voto socialista en el País Vasco va transformándose en un electorado fijo y consolidado.

En cuanto a la segunda objeción, que el PSOE pierde posiciones en unas elecciones autonómicas en relación a las generales, después de lo ocurrido en las autonómicas del 80 y 84 es una realidad que no se puede desconocer. Una realidad que no se puede desconocer pero tampoco exagerar, ya que las condiciones actuales son muy distintas comparadas con las primeras y segundas elecciones al Parlamento Vasco. En primer lugar, está la consolidación del voto socialista al que acabamos

La gran inestabilidad electoral que caracterizaba al voto socialista en el País Vasco va transformándose en un electorado fijo y consolidado.

de hacer referencia, que ya fue constatable en las municipales del 83 y las autonómicas del 84, pero que tiene un alcance muy distinto en las generales de junio del 86 donde se produce un hecho cuya trascendencia es todavía difícil de valorar.

Hasta ahora no cabía la menor duda de que la abstención era el enemigo electoral número uno de las posibilidades electorales del PSOE en Euskadi, como puede observarse en el cuadro III. Mientras la abstención no afectaba apenas a los nacionalistas, el descenso en votos del PSOE era directamente proporcional al aumento de la abstención. El 22-J-86 se ha roto por primera vez con esta dinámica: la abstención ha vuelto a aumentar con relación a las autonómicas del 84, llegando hasta el 32,42 % del electorado; pero el voto socialista no sólo no desciende sino que aumenta en 40.132 votos con relación a febrero del 84.

Por primera vez el Partido Socialista consigue mantener sus votos a pesar del aumento de la abstención, dato que adquiere toda su importancia teniendo en cuenta que es difícilmente imaginable que en las próximas elecciones autonómicas pueda incrementarse la abstención, aun en el peor de los casos, mucho más allá del 32,42 % que se ha registrado el 22-J-86. Si unimos a esto que el PNV ha perdido una cuarta parte de su electorado con relación a febrero del 84 y que parte en una situación de crisis y fracaso político, es indiscutible que las próximas elecciones al Parlamento Vasco se presentan en unas condiciones absolutamente distintas a ocasiones anteriores.

Sin olvidar que la conversión, el 22-J-86, del PSE-PSOE en la primera fuerza política de Euskadi y la pérdida de esta condición por el PNV, ha roto la barrera política y psicológica que hacía del País Vasco una democracia bloqueada, sumida en el inmovilismo y fatalismo. A partir de

ahora, la eventualidad de cambios profundos en la política vasca, que antes era vista con escepticismo por parte de la población, se ha convertido en un objetivo alcanzable. Todo ello refuerza, sin lugar a dudas, el papel político que el PSE-PSOE debe y puede desempeñar en Euskadi.

Cuando el momento de las grandes reivindicaciones autonómicas ha pasado, cuando las justas aspiraciones de autogobierno han sido en gran medida satisfechas, lo que la sociedad vasca reclama es que exista un gobierno que asegure el orden y la paz, que acabe con el terrorismo y los abusos de los sectores antidemocráticos, que garantice, en definitiva, un futuro económico y político distintos para el País Vasco. Quienes no han sabido percibir estos cambios en los deseos del electorado vasco, empiezan a sentir las consecuencias en

las urnas. El Partido Socialista de Euskadi ha demostrado que se puede trabajar por esos objetivos desde la oposición, ahora se trata de convencer al país que es necesario hacerlo desde el gobierno.

Herri Batasuna

El carácter de brazo político de ETA de Herri Batasuna es, sin duda, la causa de que las valoraciones sobre los resultados de HB hayan pecado de falta de objetividad. En un primer momento, junto al triunfalismo de los dirigentes de la coalición abertzale, se produce por parte de los medios de comunicación la alarma sobre un supuesto espectacular crecimiento de HB. En un segundo momento, y a medida que se van valorando con mayor serenidad los resultados, se procede a minusvalorar los votos del nacionalismo radical.

Sin embargo, un análisis frío de los resultados no aporta razones para justificar ni una ni otra actitud. Herri Batasuna, que sigue siendo la tercera fuerza política de la Comunidad Autónoma, el 22-J-86

obtiene 193.724 votos (17,75 % de los votos válidos emitidos), 17.867 votos más que en 1982. Habiéndose incorporado cien mil nuevos votantes jóvenes al censo entre 1982 y 1986, y suponiendo que HB es la menos afectada por la abstención debido a la mayor militancia del voto radical, el reducido incremento de votos, 17.867, demuestra que carecían de fundamento las primeras especulaciones sobre un espectacular crecimiento de HB.

Pero dicho esto, sería cerrar los ojos a la realidad no reconocer la dimensión exacta de los resultados de HB. La coalición nacionalista radical obtiene el mejor resultado desde su primera comparecencia en las urnas en 1979, y con relación a las últimas generales, esos diecisiete mil votos de más, unidos a la pérdida de votos del PNV y HB, le permiten duplicar sus es-

HB mantiene con regularidad un núcleo electoral propio e importante, y además ha registrado un alza electoral coyuntural respetable.

caños en la Comunidad Autónoma Vasca —de tener dos diputados en el 82, pasa a tener cuatro diputados y un senador en 1986—. Además, en Navarra, con 3.000 votos más que en el 82, consigue hacerse con un acta de diputado.

Finalmente, con relación a las elecciones autonómicas de 1984, prácticamente con el mismo censo electoral y con una abstención ligeramente superior, HB consigue 36.335 votos más. Estos resultados vienen a confirmar que HB mantiene con regularidad un núcleo electoral propio e importante y que además, en esta ocasión, ha registrado un alza electoral coyuntural respetable.

La estabilidad relativa del voto de HB es constatable a lo largo de todas las elecciones desde su primera comparecencia en 1979, sin que las variaciones en la abstención, en el censo o el carácter de generales o autonómicas de las elecciones influya decisivamente: elecciones generales de 1979, 150.000 votos; municipales del 79, 183.000 votos; autonómicas de 1980, 152.000; legislativas del 82, 175.000; mu-

nicipales del 83, 136.000; autonómicas del 84, 157.000; legislativas del 86, 193.000 votos. Esto quiere decir que hay un voto antisistema en el País Vasco, de unos 150.000 electores, aglutinados en torno al nacionalismo radical, que impugna el actual sistema político vasco. El hecho de que, según algunos estudios, solamente un 25 % de este electorado apoye las acciones terroristas, no impide que esta coalición actúe como la cobertura política de ETA.

La constatación de la estabilidad de este electorado no deja de tener algunas consecuencias políticas importantes. En primer lugar, desmiente la argumentación esgrimida por el nacionalismo moderado de que para terminar con el terrorismo vasco es necesario primero esperar a que se produzca el desmoronamiento político y electoral de HB. La estabilidad del voto radical hace inviable esa estrategia. En todo caso se demuestra lo contrario, que la existencia de una masa electoral de estas características difícilmente es explicable, y difícilmente podría sobrevivir, sin la dinámica que genera la actuación de ETA.

La estabilidad del voto de HB cuestiona también la estrategia seguida por el PNV frente a esta coalición. Para el PNV la consolidación del sistema democrático y el desarrollo de la autonomía vasca acarrearían por sí mismo la descomposición política y electoral de HB, sin necesidad de tener que llegar a un enfrentamiento político total. Sin dejar de criticar sus manifestaciones extremas, se justifica la existencia del nacionalismo radical como un producto de las insuficiencias del sistema político español y de las limitaciones de la autonomía vasca. Esta actitud comprensiva del PNV, junto a la exigencia permanente de mayores cotas de autogobierno, ha evitado en todo momento una ruptura total del PNV con HB. Lo que haya podido haber de seguidismo o de cálculo político en este comportamiento es lo de me-

nos, lo cierto es que no ha servido para debilitar al nacionalismo radical sino todo lo contrario. Es precisamente esta política de comprensión hacia los radicales y de fomento del descontento nacionalista, lo que ha hecho posible que HB mantenga su potencial electoral y no tenga necesidad de cuestionarse su política.

Las contradicciones del PNV ante HB han tenido su manifestación más llamativa el 22-J-86, donde se ha podido comprobar que en determinadas circunstancias puede ser Herri Batasuna quien reste votos al PNV. Comparando los resultados del 22-J-86 con las autonómicas del 84, se observa que HB consigue 36.335 votos más. Sin embargo, el censo electoral era prácticamente el mismo y la abstención ligeramente superior el 22 de junio. ¿De dónde proceden, por tanto, esos treinta y seis mil votos de HB? Una ínfima cantidad puede provenir de Auzolan, coalición nacionalista radical que en 1984 obtuvo diez mil votos; pero para el resto la única explicación posible es que proceden del PNV, único partido que en el 86 pierde votos con relación al 84. Lo cual nos permite afirmar que si bien la gran mayoría de los votos perdidos por el PNV no han ido a HB, los votos ganados por HB sí proceden en su mayoría, por no decir en su totalidad, del PNV.

¿Quiere ello decir que se radicaliza el electorado vasco? En esa dirección apuntaban las primeras valoraciones del presidente del PNV en la noche del 22 de junio, quien sacaba la conclusión de que los resultados de HB «habrán preocupado en Madrid». Pero, sin dejar de inquietar en «Madrid», a quien tenían que haber preocupado más los resultados era fundamentalmente al Partido Nacionalista Vasco.

En efecto, el pequeño incremento de votos registrados por HB el 22-J-86, sabiendo cuál es la procedencia de esos votos, lo que pone en cuestión no es la política del gobierno socialista o la vía esta-

**Los votos ganados por HB
proceden en su mayoría,
por no decir
en su totalidad,
del PNV.**

tutaria en el País Vasco; la explicación era mucho más sencilla y bastaba buscarla en las debilidades y contradicciones del PNV y el hábil aprovechamiento de estas circunstancias por HB en la campaña.

Herri Batasuna, que acababa de ser legalizada por los Tribunales, sin abandonar su peculiar discurso demagógico, basó toda la campaña electoral en presentarse como impulsor y propiciador de una inminente negociación entre ETA y el Estado que traería la normalización a Euskadi; para ello moderó su mensaje y trató de aparecer como un partido respetable y de orden. Esta ficción política sin ninguna coincidencia con la realidad —pues HB seguía siendo el mismo partido que apoyaba los atentados terroristas y la negociación con ETA no dejaba de ser un invento de cara a las elecciones— fue posible explotarla electoralmente gracias a la colaboración del PNV

que, semanas antes de la campaña, había iniciado unas conversaciones con HB (Bergara, Durango) admitiendo que el objetivo era precisa-

mente preparar el terreno para una negociación entre ETA y el Estado.

Durante la campaña el PNV no sólo no atacó a HB sino que, como ya hemos visto anteriormente, prodigó numerosas declaraciones elogiosas hacia HB. Si con esta táctica el PNV pretendía mejorar su imagen nacionalista, lo que consiguió fue dar credibilidad a la campaña de HB, quien además pudo aprovecharse sin dificultades de la situación de debilidad del PNV derivada de su crisis interna. Que en estas condiciones HB consiguiera atraerse algunos votos del PNV no tiene nada de extraño. Eso fue lo que el 22-J-86 ocurrió en el País Vasco y no una radicalización del electorado.

Coalición Popular, CDS y Euskadiko Ezkerra

Los resultados obtenidos por Coalición Popular, Centro Democrático y Social y

Euskadiko Ezkerra han venido a confirmar una vez más la gran pluralidad ideológica del País Vasco, reflejo de la existencia de una sociedad fuertemente fragmentada por razones culturales y políticas y donde se entrecruzan los ejes de división izquierda-derecha y nacionalistas-no nacionalistas. Tanto CP y CDS como EE, sin dejar de ser grupos minoritarios, el 22-J-86 han consolidado sus posiciones, apoderándose del voto útil que en determinadas circunstancias arrastran los partidos mayoritarios PNV y PSOE.

Coalición Popular y CDS, que compiten con el PNV por el voto del centro-derecha en el País Vasco, mantienen en conjunto sus votos con relación a las generales de 1982 y mejoran considerablemente con relación a las últimas elecciones al Parlamento Vasco de febrero de 1984. El centro-derecha no nacionalista, consti-

tuido por CP y CDS, a pesar del aumento de la abstención, con 169.691 votos (CP, 114.967 votos; CDS, 54.724), consigue superar el resultado de octubre de 1982

en 8.717 votantes (CP, 24.181 votos menos; CDS, 32.898 votos más). Mientras el CDS no obtiene ningún escaño, CP mantiene los dos que tenía en 1982, uno en Alava y otro en Vizcaya.

Con relación a las últimas elecciones al Parlamento Vasco el aumento de votos es mucho más significativo. CP y CDS obtienen en conjunto, el 22-J-86, 69.110 votos más que el 26-F-84 (14.386 votos más CP y 54.724 votos más el CDS). Indudablemente, dentro del centro-derecha vasco se ha producido un corrimiento de votos en perjuicio del PNV y en beneficio de CP y CDS.

Esto vendría a apoyar el análisis que hacíamos al comienzo de este trabajo al hablar de los resultados del PNV, en el sentido de que durante toda la transición el PNV había ido atrayéndose el voto de la derecha y del centro no nacionalista, no sólo por la coincidencia en cuanto al

modelo de sociedad sino, fundamentalmente, por creer que un PNV fuerte y con poder sería el principal freno frente al terrorismo y el nacionalismo radical. Al haberse frustrado estas esperanzas, el electorado no nacionalista de derechas vuelve otra vez hacia los partidos con los que se identifica ideológicamente. Así, podemos observar cómo el acercamiento del centro-derecha no nacionalista a las cotas electorales del 77-79 conlleva aparejado el retroceso del PNV hacia los resultados que obtenía en el mismo período del 77-79.

No hace falta insistir en el gran potencial electoral de que dispondrían, en unas circunstancias políticas normales, las formaciones políticas de centro-derecha no nacionalistas en el País Vasco, dada su gran tradición histórica y las características de la sociedad vasca, contribuyendo decisivamente a adecuar la realidad política a la realidad sociológica, además de ser el principal frente de contención del nacionalismo vasco por su derecha. Si ello no se produce no será porque el PNV, con sus ambigüedades, contradicciones y concesiones al nacionalismo radical no haya facilitado las cosas, sino por las insuficiencias y la incapacidad política del centro y de la derecha vascas no nacionalistas.

Por lo que respecta a otra de las fuerzas minoritarias del espectro político vasco, en este caso de izquierdas, Euskadiko Ezkerra, con el 9,11 % de los votos válidos emitidos, 99.408 votos y dos escaños (uno por Guipúzcoa y otro por Vizcaya), consolida sus posiciones, confirmándose una vez más la gran estabilidad de su electorado. Euskadiko Ezkerra consigue 7.481 votos y un escaño más que en 1982, y 13.737 votos más que en las autonómicas de 1984. La consolidación del voto de

Euskadiko Ezkerra se debe a la tardía pero gradual penetración que registra en Alava y especialmente en Vizcaya, donde partiendo desde un 6 % del electorado en

1982, va progresivamente —7 % en 1984, 8 % en 1986— acercándose a los niveles de Guipúzcoa, donde el voto de Euskadiko Ezkerra permanece estancado en torno al 10 % desde 1982.

Estos resultados, que no suponen ningún cambio en la correlación de fuerzas políticas del País Vasco, tampoco parecen indicar que se haya producido un trasvase de votos significativo en la izquierda vasca. Siendo EE un partido con gran aceptación entre el votante joven, no hay que olvidar los cien mil nuevos votantes que se incorporan al censo con relación a 1982, ni la desaparición de la coalición nacionalista de izquierdas Auzolan con relación a febrero de 1984. Además, mientras el PSOE, a partir de 1982, ha tenido que afrontar las responsabilidades del gobierno, tomando decisiones importantes, tema de la OTAN, política económica de austeridad, lucha antiterrorista, etc., Euskadiko Ezkerra ha podido rentabilizar las críticas a esa política fácilmente realizables desde unas posiciones de izquierda radical sin responsabilidades de gobierno. Finalmente, mientras los socialistas, debido al Pacto de Legislatura, veían limitadas sus posibilidades de hacer oposición en el Parlamento Vasco, Euskadiko Ezkerra ha tenido las manos libres para dedicar todos sus esfuerzos a esa tarea.

Todas estas circunstancias bastarían para explicar el ligero incremento de votos de Euskadiko Ezkerra, lo cual no resta méritos al alcance de sus resultados —los mejores de su historia— pues ha tenido que hacer frente, partiendo desde posiciones minoritarias, a dificultades importantes, como el interés del PNV y HB por desacreditar y debilitar a esta formación política y el freno que representaba para sus aspiraciones el creciente protagonismo político y electoral del PSE-PSOE en el País Vasco.

Euskadiko Ezkerra consolida sus posiciones, confirmándose una vez más la gran estabilidad de su electorado.

Tras el 22-J-86, Euskadiko Ezkerra comprueba la estabilidad de su voto, alejándose el temor de que el estancamiento

electoral de los últimos años, pudiese derivar hacia un gradual proceso de marginación política. De esta forma, EE, aunque procedente del campo nacionalista,

Se ha detenido la dinámica ascendente que registraba desde 1977 el conjunto del voto nacionalista.

debido a su esfuerzo racionalizador —«la fuerza de la razón», era su lema electoral— podrá continuar con su tarea de desmitificar las posiciones «fundamentalistas» del PNV y de HB, al tiempo que no dejará de ser una fuente de inquietud electoral para el PSOE por la competencia que pueda realizar desde la izquierda.

Para terminar con este análisis sobre los comicios del 22-J-86 en la Comunidad Autónoma Vasca, nos limitaremos a hacer una breve referencia a la abstención, la distribución provincial del electorado y la división en bloques ideológicos. En cuanto a la abstención (32,42 %), cuya significación para interpretar los resultados electorales en el País Vasco hemos reiteradamente señalado, ha sido, una vez más, superior a la media estatal, aunque en esta ocasión no supere los tres puntos de diferencia.

La distribución por provincias —porcentajes, votos y escaños— queda reflejada en el cuadro II. Únicamente en Alava se observa un comportamiento electoral diferenciado con respecto a las otras dos provincias, en beneficio de las formaciones políticas no nacionalistas. En Alava, el primer partido es el PSOE con el 32,26 % de los votos, seguido a gran distancia por el PNV con el 19,21 % de los votos. En Vizcaya y Guipúzcoa el primer partido es el PNV, seguido por el PSOE a tres y cinco puntos de diferencia. Herri Batasuna es la tercera fuerza política, salvo en Alava, donde es superada por Coalición Popular, que ocupa el cuarto puesto en Guipúzcoa y Vizcaya. A EE le corresponde el quinto puesto, salvo en Alava, donde es el CDS quien ocupa esta posición.

Por lo que respecta a la distribución por bloques ideológicos, diferenciando

entre nacionalistas y no nacionalistas, lo más significativo es la detención de la dinámica ascendente que registraba desde 1977 el conjunto del voto nacionalista,

que en esta ocasión sufre un retroceso con relación a elecciones anteriores. Curiosamente, sumando los votos de las formaciones estrictamente nacionalistas, PNV y HB (46 % de los votos), obtenemos la misma cifra que resulta de sumar los votos de las formaciones no nacionalistas (PSOE, CP, CDS, PCE-EPK, IU), que alcanzan también un 46 % de los votos.

A modo de conclusión

Sin ánimo de ser exhaustivos, pasamos a continuación a exponer algunas de las conclusiones más importantes que a nuestro entender se derivan del análisis realizado sobre los resultados del 22-J-86 en el País Vasco:

1.º) Se refuerza el pluralismo de la sociedad vasca. No aparece ningún partido hegemónico ni siquiera suficientemente mayoritario, las opciones minoritarias se consolidan, se impone el equilibrio entre los que se sienten nacionalistas y quienes no son nacionalistas, todo lo cual reafirma la tesis sobre la imposibilidad de imponer a la sociedad vasca proyectos políticos sectarios o excluyentes, sean éstos nacionalistas o antinacionalistas. Por el contrario, el peculiar pluralismo vasco, a cuyas características ya nos hemos referido, reclama de las fuerzas políticas democráticas un esfuerzo adicional en la búsqueda del diálogo y del consenso para conseguir la normalización y la estabilidad del sistema político y evitar que las profundas diferencias existentes conduzcan a una auténtica crisis de convivencia.

2.º) Otra de las conclusiones inevitables tras los resultados del 22-J-86, es la persistencia de una masa electoral que impugna el actual sistema político, articu-

lado en torno a HB y que, aún no superando el 17 % del electorado, por su vinculación política con ETA y la no aceptación de las reglas de juego y la no parti-

cipación en las instituciones, representa un factor constante de chantaje y desestabilización del sistema político. Neutralizar y reducir la incidencia y el protagonismo de esta fuerza política, acabando con el terrorismo y haciendo un frente común de todos los partidos democráticos para denunciar, rechazar y deslegitimar las propuestas y planteamientos políticos de HB, aparece como una de las tareas pendientes para la plena normalización de la vida política vasca. Ello conlleva inevitablemente la necesidad de reforzar la dirección y el liderazgo político en el País Vasco.

3.º) Si algo ha quedado claro en Euskadi, después de las elecciones del 22-J-86, es la ausencia de un liderazgo y una dirección política clara en el País Vasco. Hasta ahora, esta afirmación no dejaba de ser una valoración política discutible, pues existía un partido político mayoritario, el PNV, que en teoría debía de asumir esa función. Después del 22 de junio —al tiempo que se refuerzan los argumentos políticos que cuestionaban la capacidad de liderazgo del PNV: división interna, rechazo de su política en las urnas, etc.— el PNV deja de ser partido mayoritario, siendo ahora la insuficiencia de apoyo electoral lo que hace difícilmente viable que los na-

Las elecciones han dejado clara la ausencia de un liderazgo y una dirección política en el País Vasco.

cionalistas asuman en solitario la dirección política en el País Vasco.

La tendencia que ya se había observado en las últimas elecciones autonómicas,

donde el PNV consiguió el mismo número de parlamentarios que el conjunto de la oposición parlamentaria (CP, EE, PSE-PSOE), se refuerza con los resultados del 22 de junio de 1986 donde el principal partido en la oposición, el PSE-PSOE, supera al PNV en número de escaños y queda a escasa diferencia en cuanto al número de votos. Se llega así a una situación de equilibrio de fuerzas en la que es improbable que ninguna de las dos fuerzas mayoritarias, PSE-PSOE y PNV, puedan ganar las siguientes elecciones al Parlamento Vasco por un margen suficiente para gobernar en solitario. No existiendo un partido hegemónico y ante la gravedad de los problemas políticos y económicos, un gobierno de coalición en el País Vasco puede estar convirtiéndose en una necesidad histórica en un doble sentido: como algo prácticamente inevitable, debido a la correlación de fuerzas; y como algo políticamente conveniente, la mejor fórmula para orientar todas las energías de un país en un momento de graves dificultades políticas y económicas. Aunque lo que ocurra al final dependerá fundamentalmente de los resultados que arrojen las urnas, no convendría olvidar lo que la experiencia histórica ha puesto en numerosas ocasiones de manifiesto, que «allí donde no hay imaginación, los pueblos perecen».

Cuadro I

RESULTADOS 1977-1986

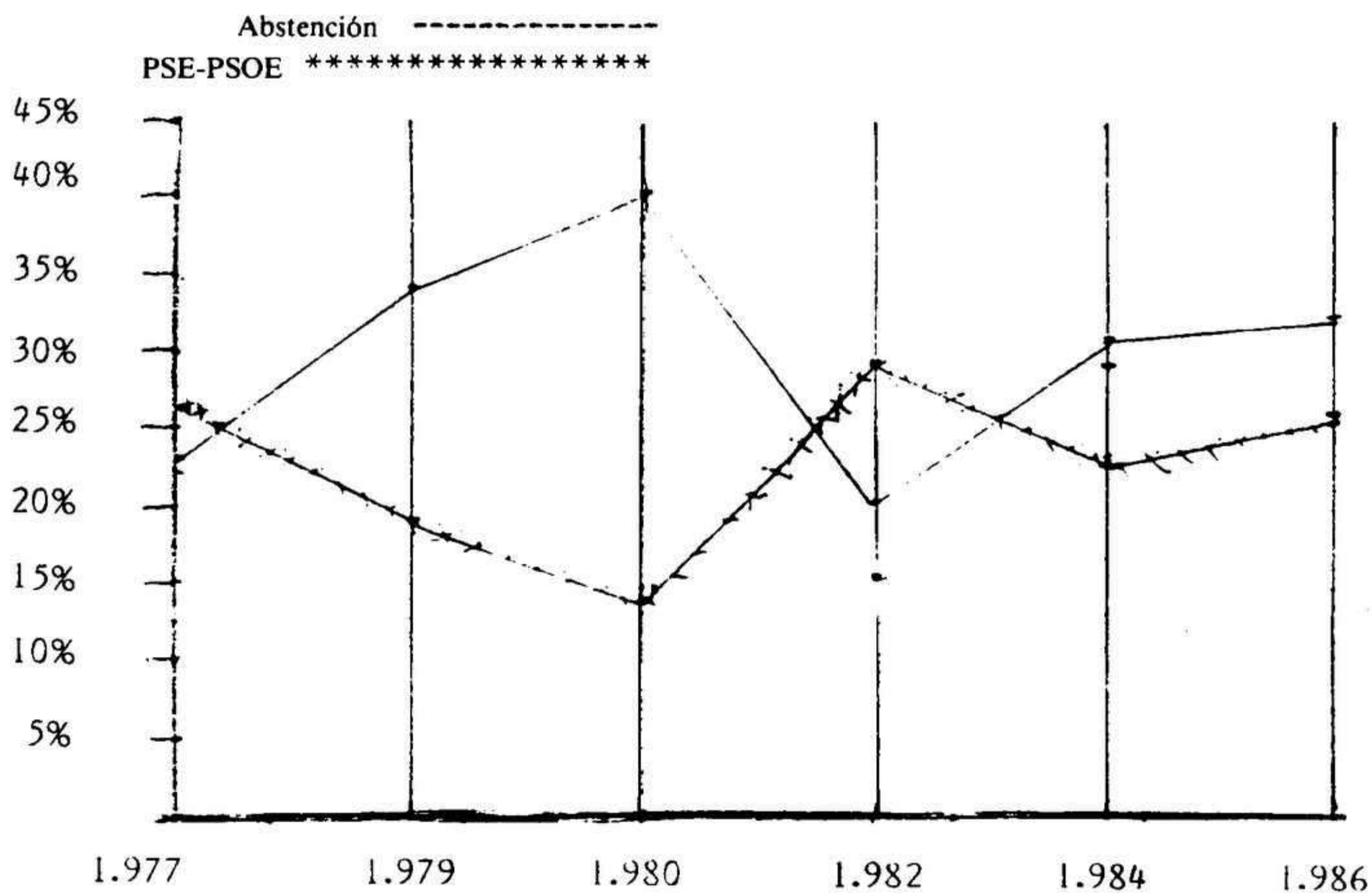
	Elecciones generales 15-VI-77			Elecciones generales 13-III-79			Parlamento Vasco 9-III-80			Elecciones generales 28-X-82			Parlamento Vasco 26-III-84			Elecciones generales 22-VI-86		
	%	Votos	Esc.	%	Votos	Esc.	%	Votos	Esc.	%	Votos	Esc.	%	Votos	Esc.	%	Votos	Esc.
Censo		1.346.222			1.547.472			1.554.927		1.538.133			1.584.540		1.643.612			
Abstención	23,4			34,0			40,2			20,6			31,5			32,4		
PNV	29,3	295.931	8	27,6	275.292	7	38,1	349.102	25	31,9	379.293	8	42,0	451.178	32	27,9	304.675	6
PSOE	26,5	269.261	7	19,1	190.235	5	14,2	130.221	9	29,3	348.620	8	23,1	247.786	19	26,3	287.918	7
HB				10,0	149.685	3	16,5	151.636	11	14,8	175.857	2	14,7	157.389	11	17,7	193.724	4
AP (CP)	7,1	71.912	1	3,4	34.108		4,8	43.751	2	11,7	139.148	2	9,4	100.581	7	10,5	114.967	2
EE	6,3	64.126		8,3	80.098	1	9,8	89.953	6	7,7	91.927	1	8,0	85.671	6	9,11	99.408	2
CDS										1,8	21.826					5,00	54.724	
PCE-EPK	5,1	46.001		4,3	45.893		4,0	36.845		1,8	20.954		1,4	14.985		0,9	10.139	
UCD	12,8	129.603	4	16,9	168.607	5	8,5	78.095	6	Fue con AP								
Otros	12,9	141.026		5,5	52.611		10,4	95.292	1	0,8	12.047		1,4	16.438		2,00	2.919	

Cuadro II

	Alava			Guipúzcoa			Vizcaya			C. A. Vasca		
	Votos	%	Esc.	Votos	%	Esc.	Votos	%	Esc.	Votos	%	Esc.
PSOE	45.259	33,1	2	80.336	23,0	2	162.323	26,5	3	287.818	26,39	7
PNV	26.000	19,1	1	99.515	28,6	2	179.130	29,3	3	304.676	27,92	6
HB	16.440	12,1		80.032	23,1	2	97.252	15,9	2	193.724	17,75	4
CP	21.600	15,8	1	28.155	8,0		65.212	10,7	1	114.967	10,53	2
EE	11.081	8,1		37.237	10,7	1	51.090	8,4	1	99.408	9,11	

Cuadro III

RELACION VOTO PSE-PSOE-ABSTENCION



LA POLITICA ECONOMICA DEL GOBIERNO SOCIALISTA

Miguel Angel Fernández Ordóñez



4

Con todas las dificultades que implica establecer una cronología sin tener apenas perspectiva, me atrevería a dividir la política económica socialista en dos períodos: el primero sería el que va de diciembre de 1982 al primero de enero de 1986; el segundo, en el que nos encontramos, arranca de esa fecha y, como poco, acabará con la III Legislatura de las Cortes democráticas.

Hay tres razones para tratar separadamente ambos períodos: en primer lugar, porque a finales de 1985 se puede dar por concluido en sus aspectos esenciales el proceso de ajuste de la economía; en segundo lugar, porque justamente en esas fechas se producen cambios importantes en el entorno económico internacional

—reducción de tipos de interés y, sobre todo, reducción de precios del petróleo— y, finalmente, porque el 1 de enero de 1986 comienza, con la adhesión al Mercado Común, un proceso de liberalización de la economía española desconocido por su magnitud desde principios de los años sesenta.

Por ello me propongo dividir mi intervención también en dos partes: en la primera describiré lo sucedido en el período 83-85 y destacaré las características de la

**A finales de 1985
se puede dar por concluido
en sus aspectos esenciales
el proceso de ajuste
de la economía.**

política económica aplicada. A continuación, y en la medida que el segundo período acaba de empezar, indicaré qué políticas son las que deben mantenerse y cuáles son los principales problemas que debemos resolver en el futuro.

El punto de partida

Al acabar 1982 la economía española se encontraba inmersa en todos los desequilibrios que cabe imaginar. La inflación estaba en el 14 %, seis puntos por encima de la media de las Comunidades Europeas, que entonces era del 8 %. La balanza corriente se había cerrado por segundo año consecutivo con un déficit de más de 4.000 millones de dólares, con lo que continuaba el empeoramiento progresivo de la relación endeudamiento/reservas. El déficit público se duplicaba cada año en términos de producto interior bruto. El ahorro nacional seguía imparablemente su curso descendente. El deterioro repetido de las cuentas de resultados de las empresas provocaba la destrucción de empleo a un ritmo de 150.000 empleos al año.

¿Cómo fue posible llegar a esta situación cuando, como se ha señalado con razón, los gobiernos que precedieron al socialista compartían con éste lo esencial de la política macroeconómica? A mi entender, son dos las razones fundamentales que lo explican: la primera es la aparición brutal de la segunda crisis del petróleo en 1979; la segunda es la debilidad política de los últimos gobiernos de UCD.

A la inversa, la fortuna de un entorno internacional más favorable y la fortaleza del respaldo popular con que llegó y se ha seguido manteniendo el Gobierno socia-

lista, explican en buena parte el éxito de la política económica socialista en la corrección de los desequilibrios de la economía española.

La lógica

Cuando el Gobierno socialista tomó posesión tenía algo claro: el objetivo esencial de la política económica, por encima de cualquier otro, era mejorar la situación del empleo. El empleo sólo puede mejorar si se produce un aumento estable de la tasa de crecimiento del producto interior bruto y si mejora la relación trabajo/producto. Para que aumente la inversión han de bajar los tipos de interés y ha de aumentar el excedente de explotación de las empresas. El empleo se destruye si las empresas entran en pérdidas o disminuyen sus beneficios. Las empresas con beneficios estables o crecientes crean empleo. El ahorro no mejora si no se desacelera la inflación. La moderación salarial es indispensable para mejorar el excedente de las empresas. Los tipos de interés sólo bajan si aumenta el ahorro, desciende la inflación y se reduce el déficit público. El déficit público sólo se reduce si disminuye el fraude, si se frena el aumento de los gastos corrientes, se reforma la Seguridad Social y se reducen las subvenciones a las empresas públicas. La carga de las empresas públicas sobre el trabajador contribuyente disminuye si se acomete la reconversión, se mejora la gestión y, sobre todo, si dejan de ser públicas aquellas cuya permanencia en el sector público no tiene ninguna justificación. La relación trabajo/producto mejora a medida que el mercado de trabajo se hace más flexible, etcétera.

Telegráficamente, ésta era la lógica de la política económica. Hoy, a la vista de los resultados, parece muy coherente pero la hemeroteca puede recordarnos que entonces estaban vigentes otros planteamientos: «la moderación salarial hace más ineficientes a los empresarios. El dé-

ficit público puede aumentar la demanda y, por tanto, el empleo. Los empresarios no invierten por el hecho de que aumente el excedente. Los tipos de interés pueden bajar si se renuncia a financiar ortodoxamente el déficit. Necesitamos las empresas públicas porque los empresarios privados no acometen proyectos de envergadura, etc.». Esta era la lógica que se presumía iban a aplicar los socialistas y, sin embargo, éstos optaron por lo que algunos han llamado una «política de oferta progresista».

Las medidas

Las medidas aplicadas pueden agruparse en dos categorías: por una parte, medidas de política macroeconómica y, por otra, medidas de reforma estructural.

Por lo que se refiere a las primeras habrá que recordar la política monetaria que planteó cada año unos objetivos de incremento de las magnitudes monetarias coherentes con el objetivo de reducción de la inflación, la política presupuestaria que trató primeramente de frenar la expansión incontrolada del déficit público para pasar después a reducirlo y, finalmente, una política de rentas basada en recomendaciones indirectas —anuncio de la inflación prevista y fijación de los aumentos de los sueldos de los funcionarios— de moderación de los incrementos salariales.

Pero, quizá, las medidas más importantes adoptadas por el Gobierno socialista no fueron las de política macroeconómica, sino las reformas estructurales acometidas. Desde el primer momento se pensó que los problemas de la economía española no podían resolverse sólo con medidas de ajuste macroeconómico, sino que sería necesario acometer reformas estructurales cuyos beneficios sólo aparecerían en el medio plazo.

Durante estos años se ha hablado larga-

mente de estas políticas debido, probablemente, a su carácter impopular, y por ello sólo voy a mencionar las que creo más importantes: la política energética con la introducción de una estructura de precios realista y con el saneamiento de las empresas eléctricas, la reconversión industrial, el ajuste y la privatización de las empresas públicas, los cambios en los sistemas de campañas agrícolas, la reforma del sistema de pensiones, la continuación de la reforma del sistema financiero, caracterizada por un mayor énfasis puesto en la solvencia de las instituciones y en la financiación del déficit público y, finalmente, la flexibilización del mercado de trabajo.

Los resultados

Como era de esperar en una política que había sido concebida para dar sus

Las medidas más importantes adoptadas por el Gobierno no fueron las de política macroeconómica, sino las reformas estructurales acometidas.

frutos en el medio plazo, los resultados fueron apareciendo poco a poco. Y, como es lógico, por parte de la oposición se iban reconociendo sólo los resultados obtenidos mientras se negaba sistemáticamente la posibilidad de que la cosecha continuara.

Los primeros meses fueron los más miserables. Incluso el comercio exterior, debido al efecto «jota» que acompaña a toda devaluación, empeoró y las presiones contra la peseta se hicieron sentir fuertemente en aquella primavera. Pero, en la segunda mitad del año 83, el panorama cambió y se cerró el año con un déficit de sólo 2.500 millones de dólares en la balanza corriente y con dos puntos menos de inflación.

Pero es en el año 84 en el que la situación de las empresas mejora profundamente, en que el excedente de explotación aumenta espectacularmente a costa de una reducción de salarios reales. El año 84 se cierra con otros tres puntos menos de inflación y, sobre todo, habiendo

aprobado las que, a mi juicio, son las medidas más importantes tomadas por el Gobierno socialista: la flexibilización del mercado de trabajo. Utilizando la vieja terminología, estas medidas dan a los jóvenes y las mujeres la posibilidad *real* de acceder a un puesto de trabajo a lo cual antes tenían sólo *formalmente* derecho.

A finales del año 1984 la música de fondo era la siguiente: «De acuerdo, se ha reducido la inflación. De acuerdo, se ha aumentado el excedente de las empresas, pero las empresas no invierten porque mejoren sus cuentas de resultados. No invierten y no se crea empleo».

Como sucede siempre, la opinión no experta juzga la realidad actual sobre la base de indicadores viejos de cuatro meses. Y así, mientras eso se decía, al acabar el tercer trimestre de 1984, se estaba iniciando un proceso de inversión en bienes de equipo cuyo ritmo no se ha detenido hasta el momento. 1985 vería, así, no solamente la continuación de este proceso inversor sino la reactivación de la construcción y —con los datos que hoy disponemos— el final de la destrucción de empleo.

«De acuerdo, se ha creado empleo pero, ¿y en el futuro?» Esta es la última melodía. Y ciertamente es difícil hablar de los resultados del futuro, porque, entre otras cosas, depende de lo que hagamos en el futuro. Pero los resultados del empleo de 1985 dan razones para ser optimistas, sobre todo porque se han conseguido con una tasa de crecimiento del producto interior bruto que ha sido la más baja de este trienio socialista. Ello significa, llanamente, que si el PIB crece por encima del 1,5 % se creará empleo, lo cual hasta ahora parecía casi increíble.

Los resultados de los dos primeros trimestres de 1986 permiten hablar de un cambio espectacular en la coyuntura del empleo: más de un cuarto de millón de em-

Los resultados de los dos primeros trimestres de 1986 permiten hablar de un cambio espectacular en la coyuntura del empleo.

pleos netos en un año. Casi medio millón en el sector no agrario.

Las características de la política económica socialista

La principal característica de la política económica socialista es que ha sido feliz, que sus resultados han sido exitosos, como diría un latinoamericano. En buena parte ello se debe a que, como se ha explicado, la lógica económica era la correcta. Pero la política económica no es sólo economía sino también política. Muchos gobiernos en el mundo han tratado de aplicar estos postulados económicos y han fracasado estrepitosamente. Por ello, y porque creo que los otros aspectos han sido tratados suficientemente en este Seminario, es por lo que me propongo hacer unas reflexiones algo más políticas sobre la política económica española.

1. La imagen de la política económica

a) En el interior:

En política, las formas son casi todo. Detrás de muchos fracasos en política económica suele estar, más que el error en el planteamiento, la ausencia de un estilo que puedan identificar los ciudadanos. Y no es razón estética la que justifica tal proposición sino que ella se fundamenta en el funcionamiento de una sociedad industrializada y democrática. El Gobierno puede hacer mucho, pero aquello que puede hacer el Gobierno por sí mismo es poco. Lo determinante son las conductas de numerosas empresas, instituciones y agentes sociales que no están sometidos directamente a las órdenes del Gobierno pero cuyo comportamiento depende decisivamente de la forma en que el Gobierno conduce sus negocios. Por ello paso ahora a ocuparme no de lo que el Gobierno hizo sino de cómo lo hizo.

Durante estos tres años *el rigor* ha sido el signo distintivo de la política económica del Gobierno. La falta de concesiones a lo que no fuera política de saneamiento

**Durante estos tres años
el rigor ha sido el signo
distintivo de la política
económica
del Gobierno.**

esta forma cuanto antes por la comunidad económica internacional. Ello es muy útil para llevar una política de tipo de cambio sin sobresaltos, para aprovecharse cuanto

ha llegado así hasta el último rincón de España. Hoy la pelea es por saber quién fue el primero que denunció el déficit público. Dirigentes políticos, académicos y editorialistas de periódicos se disputan la medalla. Hoy son pocos los sindicalistas que en una asamblea dicen que no les importa que su empresa entre en pérdidas. Hoy nadie dice que prefiere más inflación a cambio de no sé qué.

Esto me lleva a resaltar un aspecto de la política económica que tiende a olvidarse con frecuencia: la importancia no sólo de lo que hace el Gobierno sino de lo que no hace. Porque no hacer, decidir no hacer es uno de los instrumentos más importantes de la política económica en la economía de mercado. No hay nada peor que un Gobierno que no decida, pero es importantísimo contar con un Gobierno que esté dispuesto a decidir no hacer determinadas cosas.

Muchos problemas de la economía española provienen de Gobiernos que no tomaron las decisiones adecuadas —por ejemplo la política energética—, pero buena parte de los problemas aparecieron justamente porque los Gobiernos anteriores no decidieron no hacer determinadas cosas. Un ejemplo: el 70 % de las pérdidas del INI provienen de empresas que los Gobiernos que hubo en España de los años 76 al 82 decidieron incorporar al sector público.

b) *En el exterior:*

Para que una política económica sea aceptada en el exterior, como en el interior, lo fundamental es llevar a cabo una política económica adecuada, pero es muy importante que ésta sea percibida de

antes del flujo de inversión extranjera directa o para reducir costos de financiación. Y esta confianza se consigue a través de un trabajo con frecuencia poco valorado, que consiste en mantener un diálogo fluido y estrecho con los organismos internacionales, frecuentar los contactos con los responsables de la comunidad financiera internacional o cuidar la explicación a la prensa extranjera. Creo que el resultado, el reconocimiento internacional de la política económica española, está tan claramente a la vista que no compensa insistir más sobre este asunto.

2. *Una política liberalizadora*

Los que se colocan a sí mismos a la izquierda del Gobierno, dicen que éste ha hecho una política económica de corte liberal. Y justo es reconocer que el Gobierno ha llevado a cabo una política liberalizadora. Y ello, no sólo porque continuó las políticas de Gobiernos anteriores, como la disminución del número de productos sometidos a control de precios, o la liberalización del sistema financiero donde quizá el ejemplo más evidente ha sido la liberalización del sector seguros, por no hablar de la libertad absoluta concedida a los inversores extranjeros, campo en que la legislación española era ya muy avanzada, sino por la liberalización en campos donde los Gobiernos anteriores no se habían atrevido apenas a entrar: el mercado de trabajo, los arrendamientos y los horarios comerciales.

La liberalización del mercado de trabajo destaca no sólo por el coraje político que ha demostrado el Gobierno, sino por su efectividad, por los magníficos resultados que está produciendo en el terreno del empleo y a los que ya he hecho referencia.

Otra reforma de importancia es la de la Ley de Arrendamientos Urbanos que, suprimiendo la prórroga forzosa, liberaliza de un plumazo los nuevos contratos de arrendamientos. Dos dictaduras, una república y varios gobiernos democráticos no se habían atrevido con una reforma que finalmente se ha realizado sin generar ningún malestar social, que desgraciadamente suele ser la consecuencia que acompaña a todo proceso liberalizador, pues quien se ve despojado del privilegio suele, generalmente, quejarse.

Era tan evidente en este caso que el privilegio del arrendatario era cobrado en exceso por el arrendador que, una vez suprimida la restricción, ambas partes se han quedado, nunca mejor dicho, liberadas.

Finalmente, la libertad de horarios comerciales, medida que coloca a nuestro país entre los más avanzados del mundo, pues todavía subsisten restricciones importantes en esta materia en muchos países industrializados. Los efectos de esta medida van más allá del sistema económico puesto que, al favorecer la diversificación de tareas y horarios individuales, pueden transformar las propias estructuras familiares.

Siendo probado y conocido que los socialistas no se han caracterizado nunca por su amor a la economía de mercado, la pregunta políticamente relevante es: ¿por qué el Gobierno socialista español no sólo ha continuado sino que ha profundizado el proceso liberalizador de la economía española? La respuesta no es fácil y no pretendo poseerla, pero dejaré esbozadas algunas sugerencias para su contestación.

En primer lugar, habría que recordar la tradición española del maridaje derecha-intervencionismo. La derecha en España, que hoy es democrática, no es, sin embargo, liberal. No lo es en el terreno político,

familiar, etc., y no lo es tampoco en el terreno económico.

Probablemente ahí esté el fracaso de todas las experiencias que desde la derecha se han ensayado para formar un partido liberal. La derecha en España no vota liberal. Los escasos liberales de este país son de izquierdas y hoy votan al Partido Socialista.

No diré que no haya intervencionistas en el PSOE, puesto que no hay mayores regimientos en España que los de los arbitristas, y el Partido Socialista no es inmune a ello, lo que digo es que su proporción es menor que en otros partidos. Digo simplemente que, hoy por hoy, la atmósfera para los que creen en la libertad es más respirable en el PSOE que en los partidos de la derecha, y ello debe influir algo en la política que hace el Gobierno.

La segunda razón que puede explicar la

La liberalización del mercado de trabajo destaca por los magníficos resultados que está produciendo en el terreno del empleo.

política liberalizadora del PSOE es la del gato negro o blanco. La actitud del pragmatismo que impregna a los máximos dirigentes del Partido Socialista. Se buscan

unos resultados: mejorar el empleo, en especial el de los jóvenes, mejorar la situación de los más pobres, y parece no importarles la ideología de quien inventó y creó los medios con los que se obtienen esos resultados. Y se piensa que la liberalización de la economía española puede dinamizarla, puede servir para obtener los objetivos que se han propuesto.

Algunos han emitido un juicio moral sobre esta actitud, recordando el viejo adagio de que el fin justifica los medios, y atacando al Gobierno por su actitud pragmática, pero cuando nos encontramos con medios que moralmente tienen el mismo rango, cabe preguntarse si el juicio moral no debe hacerse a la inversa. Si no es absolutamente inmoral utilizar un medio determinado dando igual los resultados que obtenga, si da igual que se transforme o no la sociedad, preocupándose por ejercer el poder de una determinada

forma y no al revés. Esta actitud que me parece deleznable podría definirse así: yo lo que quiero es un gato negro, me da igual que cace o no cace ratones, yo lo que quiero es hacer política que quede identificada en sus formas y no en sus resultados. Esta actitud sí es inmoral.

3. *Una política de izquierda*

La política económica socialista ha sido una política nacional en el sentido que todo el país, todas sus clases, se han visto favorecidas por la misma. Pero cabe también caracterizarla como una política de izquierda.

Dos son las formas para juzgar si una política es de izquierda o de derecha. Una, poco común, consiste en comprobar si favorece a los más pobres y mejora las perspectivas de empleo de los que quieren trabajar o no. La otra, de uso más extendido, es juzgarla por los instrumentos empleados a los que previamente se les etiquetó con su marca de izquierda o de derecha.

No cabe duda que, por sus resultados, el Gobierno socialista ha hecho una política de izquierda, y no sólo porque por primera vez en muchos años estamos viendo mejorar el mercado de trabajo, sino por los avances obtenidos para los más desfavorecidos. Por citar algunos ejemplos, se ha triplicado el valor de las pensiones asistenciales, las de los más pobres, el número de becas ha experimentado un salto impresionante y se han reducido fuertemente los impuestos a los que ganan menos. Los cambios de la distribución funcional en favor de los beneficios han confundido a algunos que no se han percatado de los pasos dados estos años en la mejora de la distribución personal. Se han extendido notablemente los períodos cubiertos por el seguro de desempleo, favoreciendo especialmente a los parados con cargas familiares. También ha aumentado la cobertura de la asistencia sanitaria.

**No cabe duda que,
por sus resultados,
el Gobierno
ha hecho una política
de izquierda.**

Pero la crítica de la izquierda al Gobierno no ha venido por los resultados sino por la utilización de lo que ellos llaman política de derechas. ¿Por qué el PSOE no debía hacer la política que ha hecho? La respuesta, cuando uno escarba, es de una gran miseria: porque los socialistas en el pasado no usaron tales políticas. No hay análisis alguno, es socialista lo que los socialistas hicieron. La pobreza de análisis de aquellos cuya boca se hincha al pronunciar la palabra teoría es una constante en nuestra historia. No se les ocurre pensar que la política que hoy reivindican como de izquierdas fue empleada por gobiernos de izquierda por sus efectos, porque entonces favorecían a la clase trabajadora. Pero la izquierda de la izquierda siempre se ha caracterizado por su carácter tradicional, conservador, en el sentido más exacto de la palabra. Y así, los que hoy ya sin vergüenza se declaran no marxistas se resisten a renunciar a lo que llaman política keynesiana. Parecen estar de acuerdo en abjurar de Marx pero Keynes es su última agarradera para evitarles una crisis de identidad, cuando Keynes, por cierto, no fue nunca socialista.

Sucede, sin embargo, que ya han pasado casi cuatro años y que estamos hablando del pasado. Que si socialista es lo que hicieron los socialistas, los socialistas hicieron política socialista. Con lo cual podemos ver a pragmáticos y doctrinarios fundirse en un abrazo apasionante.

El paso del tiempo, implacable, no sólo ha arrumbado a los doctrinarios sino que también pone en aprietos a la derecha. Si ahora llega a España un nuevo gobierno y la inflación sube al 14 %, ese gobierno será considerado por la mayoría de la población como de derechas, porque con los socialistas la inflación baja. Si con ese gobierno el déficit público aumenta en proporción al PIB es que ese gobierno es de derechas porque con los socialistas, lo dice la experiencia, el déficit público se re-

duce. Si en España las empresas vuelven a entrar en pérdidas, si su situación financiera empeora, si los tipos de interés suben, es que está gobernando la derecha, porque la experiencia dice que con los socialistas sucede todo lo contrario.

Los beneficios del ajuste y de todas las reformas estructurales realizadas en el pasado han de hacerse sentir en los próximos años.

vida de Alemania, Francia y Holanda, necesita crecer mucho más rápidamente que esos países. Nuestro objetivo no debe ser sólo vivir mejor que en el pasado sino disminuir nuestra distancia en bienestar de la de esos países.

Así, después de estos tres años de política económica, la derecha y la izquierda de la izquierda lo van a tener mal, muy mal, en la batalla ideológica. Y pasados unos años comprobaremos que, por importante que haya sido lo conseguido en el terreno de los hechos, lo decisivo habrá sido la victoria obtenida en el campo de los signos.

El futuro de la política económica española

1. El riesgo de la abundancia

Los españoles van a vivir mejor en los próximos cuatro años. Los beneficios del ajuste y de todas las reformas estructurales realizadas en el pasado han de hacerse sentir en los próximos años, si el entorno internacional no empeora radicalmente. La economía española puede ver tasas de crecimiento entre tres y cinco veces superiores a las que vivió bajo el último Gobierno de UCD.

Y esto sucederá aún cuando la política económica no fuera la más adecuada. Y este es el riesgo. El riesgo es que los beneficios de una política económica rigurosa son relativamente mucho menores que en una situación tan dramática como la que vivíamos en 1982.

Pensemos, por hablar gráficamente, que el efecto de una política económica adecuada fuera aumentar el crecimiento de la economía española en un 0,7 %. El riesgo sería quedarnos en un 4 % y no en un 4,7 %. El riesgo sería quedarnos en un 5 % y no en un 5,7 %. Y la sociedad española, si quiere acercarse a los modos de

Sin embargo, creo que los peligros fundamentales se han alejado con los resultados de las elecciones del 22 de junio. Se va a mantener una política económica adecuada porque va a poder hacerse. Pero en todo caso me parece necesario que todos los agentes económicos (empresarios, sindicatos, Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales, etc.) se den cuenta que el hecho de vivir mejor no debe hacernos menos ambiciosos en nuestros objetivos. Que con nuestras actuaciones, las del Gobierno, las de los sindicatos, las Comunidades Autónomas, etc., debemos seguir intentando elevar nuestras tasas de crecimiento sobre las que se producirían por los solos factores tendenciales.

2. El norte: la adaptación a la CEE

Creo que el discurso de Carlos Solchaga en febrero ante la APD fija con claridad las orientaciones de la política económica, después del 1 de enero de 1986, después de nuestra entrada en la CEE.

La idea clave es que una buena parte de la política económica de los primeros años está dada, está incorporada al Tratado de Adhesión a la CEE. El Gobierno, en los próximos 7-10 años, deberá tomar obligadamente una serie de medidas de política económica que están previstas en el Tratado. Y además deberá hacer otras cosas. Por una parte, continuar con la política de restablecimiento de los equilibrios allí donde no se han alcanzado previamente y, por otra, tomar una serie de medidas no previstas en el Tratado, pero que van a venir exigidas por coherencia con el proceso de liberalización que supone la entrada en la CEE.

a) *La continuidad*

La continuidad supone mantener los equilibrios alcanzados (fundamentalmente el sector exterior y la situación de rentabilidad de las empresas) y terminar la tarea comenzada en cuanto al déficit público y la reducción de la inflación.

En cuanto a la reducción de la inflación el objetivo es situarse en la tasa media de crecimiento de los precios de la CEE en dos años, lo que permitirá una entrada sin traumas en el sistema monetario europeo y, por tanto, una política de cambio estable y favorable al propio objetivo de estabilidad de precios.

En cuanto al déficit público, el objetivo es conseguir el equilibrio de ingresos y gastos —excluidas las cargas financieras— en un período de cuatro años, lo cual supondrá volver al ahorro positivo del sector público al principio del período.

Todo ello lleva al mantenimiento de muchas de las políticas que se han aplicado en los últimos años y de ellas destacaría la política monetaria y la política de rentas.

b) *Las nuevas tareas*

— Flexibilidad y desburocratización.

Aunque se han dado pasos sustanciales en este área todavía queda un largo camino por recorrer. El Decreto-ley de marzo de este año ha iniciado un camino que deberá recorrerse en los próximos cuatro años.

— La exportación.

Los buenos resultados en términos de caja no nos deberían hacer olvidar la importancia de la exportación desde el punto de vista de la actividad y como testigo

Hay que aumentar un 10 % la ocupación de los varones, pero hay que aumentar un 60 % la ocupación de las mujeres.

de la competitividad de nuestra economía. Pero el escenario ha cambiado. De una exportación basada en salarios bajos, fiscalidad baja y permanente devaluación de la peseta, nos trasladamos a un escenario en que la peseta se moverá con las monedas europeas más fuertes y, sin duda, en el medio plazo salarios y fiscalidad habrán de unirse a los niveles europeos.

— La política fiscal.

Este verano, en estas aulas, se ha hablado bastante sobre este asunto. Yo diría que en cuanto a las soluciones se ha hablado con una cierta precipitación pero, sin embargo, creo que, desde el punto de vista de los problemas, los planteamientos han sido correctos. Es sabido que hay una interrelación profunda entre el fraude y el nivel de tipos en el Impuesto sobre la Renta. El avance en la lucha contra el fraude permite recaudar lo mismo con tipos más bajos y, a su vez, tipos más bajos disminuyen el nivel del fraude. Y es posible que el sistema fiscal pueda ser más progresista, más redistributivo en la práctica con una estructura distinta que en la teoría parecería perder progresividad. Como socialista, el que el sistema sea progresista en el terreno real me parece una restricción a cualquier tipo de reforma que se lleve a cabo. No acepto hacer menos progresivo el sistema pero, sin embargo, no me importa en absoluto que, aparentemente, sea menos progresivo si beneficia a los sectores más desfavorecidos de la sociedad.

Aquí sucede como en el mercado de trabajo. Las reformas del 84 llevaban a un sistema del mercado de trabajo aparentemente menos progresivas, pero en la práctica ha sucedido lo contrario. Gracias a

esas reformas las contrataciones y el empleo se han disparado, que era el objetivo buscado.

Por ello, insisto, si los cambios que se

proponen en el Impuesto sobre la Renta no hacen más regresivo el sistema y si no se pierde recaudación, no veo nada que impida a un Gobierno socialista no doctrinario hacer tales cambios.

— Mercado de capitales.

Es la reforma que queda por hacer en el sistema financiero. Basta con que observen ustedes la flexibilidad de los tipos de interés a corto y la rigidez de los tipos a medio y largo plazo. Si las instituciones financieras actúan así se debe, entre otras cosas, a la falta de competencias. Es un asunto a resolver, y dentro de él destaca la reforma del mercado de valores que viene exigida aún más que nunca por la entrada en vigor de la Ley de Fondos de Pensiones.

3. *La importancia de la concertación*

El éxito en la reducción de salarios reales que se produjo en 1984 sin concertación ha llevado a pensar a algunos que la economía española funciona mejor sin concertación. No participo de esta opinión. Creo que el 84 forma parte de una tradición de concertación que debemos mantener; el año 84 significó, en ese proceso, la posibilidad de que no haya acuerdo, lo cual proporciona a la concertación todo su valor porque el acuerdo tiene sentido si no es obligatorio, si subsiste siempre la posibilidad del desacuerdo.

Pero si el desacuerdo, o la falta de acuerdo, pudo tener algún efecto beneficioso en 1984, ello fue posible porque se produjo en una coyuntura muy distinta de la actual. Las píldoras valen para salvar al enfermo, pero cuando éste está sano lo que le conviene al organismo es que mastique lentamente los alimentos. En la coyuntura actual la falta de acuerdo sería negativa en cuanto a la evolución salarial y nos haría perder uno de nuestros principales activos: la paz social.

El objetivo básico debe ser disminuir la tasa de paro juvenil y aumentar la tasa de ocupación de las mujeres.

Por otra parte, la concertación ha de ensanchar su campo: productividad, flexibilidad, movilidad, participación, etc. El mercado de trabajo no se reduce a la fijación de un precio, y todos los cambios que se operen en él, aunque requieran la intervención del Gobierno, exigen la gestión previa de los interlocutores sociales.

jación de un precio, y todos los cambios que se operen en él, aunque requieran la intervención del Gobierno, exigen la gestión previa de los interlocutores sociales.

4. *Un final sobre el paro y la ocupación. Sobre los jóvenes y las mujeres.*

Cuando en 1982 el Partido Socialista eligió como objetivo la creación de 800.000 puestos de trabajo se equivocó en la cifra pero no en la variable objetivo. El objetivo no era reducir el paro sino aumentar la ocupación, y éste debe seguir siendo el objetivo. Desgraciadamente el público, incluso el bien informado, confunde ambos conceptos y por eso es oportuno destacar que lo importante para el bienestar de nuestro país es lo que suceda con la ocupación y no con el paro.

Lo que de verdad importa es la división de la población en edad de trabajar entre ocupados y no ocupados, mientras que la cifra de paro es una fracción, relativamente pequeña, de los no ocupados. Y una fracción que sólo parcialmente se mueve con la mejora o el empeoramiento del mercado de trabajo.

Una comparación internacional puede ayudarnos a entender lo que estoy diciendo. En 1985 en España había, según la EPA, 2.910.000 parados con una tasa del 21,9 %. Si tuviéramos la tasa de paro europea —un 11 %— el número de parados sería de 1.459.000, lo cual llevaría a pensar que nuestra distancia con Europa se solucionaría dando empleo a 1.450.000 personas.

Desgraciadamente no es así. Nuestra población en edad de trabajar era enton-

ces de 22.776.000 personas, 11.203.000 varones y 11.573.000 mujeres. De éstos estaban trabajando 7.351.000 varones y 3.005.000 mujeres. Pero si tuviéramos las tasas de ocupación europea deberían estar trabajando 8.100.000 varones y 4.814.000 mujeres, esto es 750.000 varones más y 1.800.000 mujeres más. Nuestra distancia con Europa no es, pues, de 1.450.000 parados sino de 2.500.000 empleos. Y puede verse claramente que la distancia está, sobre todo, en las mujeres. Hay que aumentar un 10 % la ocupación de los varones pero hay que aumentar un 60 % la ocupación de las mujeres.

Digo ésto porque una política muy acti-

va de incorporación de la mujer al trabajo puede no hacer disminuir la cifra de paro sino incluso aumentarla, y sin embargo el bienestar del país está aumentando. Digo ésto porque temo que una vez más la ignorancia y la reacción se unan para entorpecer la consecución de lo que debe ser el objetivo básico de la política económica española: disminuir la tasa de paro juvenil y aumentar la tasa de ocupación de las mujeres.

Guión para intervención en la Mesa Redonda «Debate sobre la política económica en España», el 8 de agosto de 1986. UIMP, Santander. (La primera parte es, puesta al día, reproducción de un artículo publicado en el número 2 de *L'opinió socialista*.)

Colectivo Miguel de Unamuno

Escritos sobre la tolerancia

Homenaje a Enrique Casas

Este libro, que tiene como hilo conductor la reflexión en torno a la idea de tolerancia, es una expresión de homenaje y recuerdo al desaparecido senador socialista Enrique Casas. Los distintos artículos en él recogidos, las plurales actitudes políticas e intelectuales de los colaboradores, coinciden, sin embargo, en valorar la significación que el definitivo asentamiento de la idea de tolerancia entre nosotros habrá de tener para hacer inamovible la convivencia política en el País Vasco y en el conjunto de España.

ESCRITOS SOBRE LA TOLERANCIA
Homenaje a Enrique Casas
Colectivo Miguel de Unamuno
Editorial Pablo Iglesias
254 págs.; 950 ptas.

PEDIDOS:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30 - 28010-Madrid
Tels.: 410 46 96 y 410 47 98

UN DISCURSO SINDICAL EUROPEO

**José M.^a Zufiaur, Manuel Ventura,
Carlos Trevilla**



Aquellos que hemos participado en la discusión de la política sindical que la UGT se propone practicar a partir del XXXIV Congreso, nos hemos sentido profundamente gratificados por el hecho de coincidir en la globalidad de nuestro análisis y nuestras propuestas con la reflexión que los trabajadores de los países más avanzados social y económicamente del mundo, los de Europa occidental, están hoy realizando.

En efecto, después de un período en que las fuerzas económicas y políticas de la derecha han intentado imponer lo que se ha dado en llamar posiciones neoliberales, los sindicatos de toda Europa han reaccionado aprobando resoluciones de trabajo donde no solamente denuncian los efec-

tos devastadores de dichas políticas, sino que proponen una vía de trabajo sindical en la que los mismos principios y las mismas necesidades que dieron lugar al nacimiento de los sindicatos adquieren un profundo sentido de modernidad y racionalidad. Como alguien ha dicho, la mejor

conquista de los trabajadores en más de 100 años de lucha organizada en defensa de sus intereses es la razón.

Ha sido, pues, en ese marco europeo al que pertenecemos de derecho, y dentro de esa tradición sindical europea a la que siempre hemos pertenecido, y en la misma dirección que los sindicatos europeos afiliados a las CES, de la que UGT es miembro fundador y activo, en la que hemos concluido nuestras resoluciones.

Si tuviéramos que resumir en una sola frase la posición de la UGT definida por su XXXIV Congreso, asumiendo el riesgo que supone el intento por lo simplificador y, por tanto, obviador de importantes propuestas, tendríamos que decir que, en él, la UGT se pronuncia por, y además exige, una política de crecimiento del empleo concertada.

Tendríamos, después, que dar bastantes explicaciones, pues ese pronunciamiento podría ser asumido, o debería ser asumido, por todos los agentes sociales, y la propia fuerza que tienen las palabras podría perderse si es que no podemos explicar con rigor (altanero intento: el rigor, patrimonio de los técnicos, pretendido por los sindicalistas), por qué hacemos esa exigencia, por qué creemos que es posible y cómo creemos que es posible. Como no nos falta la soberbia, y al lector interesado por el tema forzosamente no le falta la paciencia, vamos a intentarlo. A ello.

La concertación, un proceso inacabado

Viene a decir Duverger que la política es la resolución de los conflictos de intereses legítimos por métodos no violentos. Esa definición alcanza por supuesto a los conflictos sociales, que son manifestación de distintos intereses cuya existencia caracteriza una sociedad civil.

Desde ese punto de vista, la estrategia de la concertación es una estrategia política, es política.

En su Congreso la UGT se pronuncia por, y además exige, una política de crecimiento del empleo concertada.

El escenario en que se desarrolla es el dominado por una insistente presión sobre las conquistas que el movimiento obrero ha conseguido en los últimos cien años, tanto en la dimensión de las condiciones de trabajo, como en la del bienestar social.

Frente a esto, la UGT ha defendido y practicado durante los últimos años la concertación social. Es decir, la búsqueda sistemática del consenso social acerca de las políticas que afectan a los trabajadores, y esto ha dado lugar a importantes acuerdos con los empresarios, con el Gobierno y con ambos, y, pese a existir problemas y limitaciones, han conseguido resultados importantes y globalmente positivos para los trabajadores. No ha sido el menor de ellos el aporte a la consolidación del sistema democrático y es, entre otras cosas, la escasa importancia que a veces se da a esta consolidación —dándola como un hecho natural, lógico, como un dato de partida— una buena demostración de hasta qué punto se ha logrado el éxito en ese empeño fundamental.

Ha sido también esa política la que ha permitido combatir la inflación (impuesto oneroso sobre los más débiles: los jubilados, los parados y los que tienen menos fuerza reivindicativa), aumentar espectacularmente el número de trabajadores protegidos por convenio colectivo, generalizar la cláusula de garantía salarial, mantener a los colectivos con menos poder de negociación en incrementos salariales similares al aumento del IPC. Y limitar los efectos tan nefastos sobre el empleo y las condiciones de vida de la crisis económica.

Creemos haber esquivado un riesgo importante: la conversión del sindicato en una oficina de negociación institucional, en un sindicato de Estado más que en un sindicato de sociedad. Y lo hemos hecho desde el convencimiento de que corríamos el riesgo de practicar un sindicalismo ilus-

trado en que unos pocos no sólo reflexionan, sino que identifican con su medida los límites de aceptabilidad de los costes que pueden imponerse a los trabajadores.

No ha sido así, ni en el contenido de la política de la UGT por una parte ni en la forma, por otra. No en la forma, porque la exigencia de la concertación aparece habitualmente como reivindicación de los trabajadores desde el más insignificante convenio al máximo acuerdo, y no ha sido así porque se ha evitado cuidadosamente ahogar a la acción sindical en el nivel de sector o de empresa. En efecto, los acuerdos han enmarcado la acción sindical pero han permitido el libre juego de la negociación colectiva. Tampoco en los contenidos; cuando éstos no eran aceptables no hemos llegado a acuerdos: por citar sólo un ejemplo, el año 1984.

En nuestra opinión, la discusión no es

baladí. ¿Es posible conducir un cambio político en profundidad sin incluir en el proyecto una dimensión social? ¿Es posible compartir un proyecto de sociedad con

una organización política que detenta el poder y colaborar en ese proyecto de transformación autoinmolando la autoridad moral del sindicato como interlocutor legítimo en el ámbito de los asalariados? ¿Es incompatible la voluntad de cambio del poder político con la conservación de la iniciativa social del cambio? ¿Puede sobrevivir una democracia que limita su dominio en la puerta de las empresas?

Demasiadas preguntas. Hagamos luz con velas que no hemos encendido nosotros. Dice Virgilio Zapatero en el libro *El futuro del socialismo*: «Cualquier programa que pretenda ser duradero requiere un nuevo consenso. En época de escasez es precisa la *selección racional, democrática, de las demandas sociales*, el consenso social, estrategia que levanta las suspicacias de la derecha neoliberal para la que “todo pacto social sustituye al mercado con preocupantes consecuencias”».

«Norberto Bobbio, en su conferencia en el Congreso de los Diputados en 1982 en torno al *futuro de la democracia y sus peligros*, señalaba cómo uno de los peligros que acechan a los sistemas democráticos es el incremento de las demandas sociales que podrían verse frustradas. En efecto, un sistema autoritario, en el que por definición faltan los derechos de expresión, reunión y asociación, consigue la limitación de las demandas sociales por vías puramente represivas: pues sólo es posible pedir del Estado aquello que previamente está dispuesto a conocer. El volumen de demandas se ajusta a la oferta, aunque dicho ajuste, ocioso es decirlo, se realiza por vías puramente represivas.

Distinto es el supuesto de un sistema democrático: oferta y demanda no necesariamente se equilibran. Con libertad de expresión, reunión y asociación surgen a

**Los acuerdos han enmarcado
la acción sindical
pero han permitido
el libre juego
de la negociación colectiva.**

flor, inexorablemente, un número ilimitado de demandas sociales. Y así, mientras la demanda es ilimitada, la oferta, la capacidad del Estado de dar satisfacción a las mismas, es siempre limitada. La frustración, y quién sabe si como señalábamos, la deslegitimación, de tal desajuste puede poner en peligro el futuro del sistema.

De ahí la importancia de unos agentes sociales poderosos y serios, como los sindicatos, únicos sujetos que pueden modular las expectativas sociales. Si es precisa una limitación racional, democrática de las demandas sociales, es *precisa la concertación social*, el acuerdo entre los agentes para que el Estado no sea desbordado y se produzcan innecesarias y peligrosas frustraciones sociales»¹.

Concertar no es legitimar

La UGT no pretende suplantar al poder del Estado. Aceptamos y defendemos como nuestro un sistema democrático que consagra la fortaleza y la articulación de

una sociedad civil en la que nos sentimos un agente legítimo y legitimado por nuestros representados.

Desde esa idea de sindicato de sociedad, hemos planteado la concertación como un instrumento útil, no sólo en situación de crisis económica sino válida también en situaciones de *relanzamiento* y prosperidad. Por una parte, por la inutilidad de una acción sindical que, limitándose al ámbito de la empresa, sería incapaz de consolidar ésta mediante medidas legislativas, no podría conseguir la puesta en práctica de políticas económicas y sociales que protejan a los colectivos sin capacidad de negociación, no crearía condiciones para la generación de empleo, e incluso desbarataría, mediante una política fiscal y de precios incontrolada, los niveles de renta que se consiguen en los convenios.

Es, desde ese punto de vista, un sindicalismo solidario, donde la organización en el sindicato de los más fuertes, para empezar, de los que tienen empleo, se usa en favor de todo el colectivo de trabajadores, de los que no tienen capacidad de presionar y de negociar: los jubilados, los desempleados, los trabajadores de pequeñas empresas y su organización sindical y los de sectores con poca capacidad negociadora.

Que no se deduzca de lo anterior que damos por liquidado el proceso de crisis. No es así, y una ojeada, a las dificultades que persisten lo demuestra. Sin embargo, una gran parte del duro ajuste ya está hecho, con un fuerte coste para los asalariados, por cierto, y no puede negarse que, entre la corrección parcial de graves desequilibrios y la favorable coyuntura internacional, podemos ser algo más optimistas y por tanto algo más exigentes.

Porque si es cierto, y se nos ha repetido hasta la saciedad, que la interdependencia de las distintas economías nacionales hacía imposible un proceso unilateral de relan-

Hemos constatado la insuficiencia de políticas que actúan exclusivamente sobre la oferta, generando aún más crisis y más desempleo.

zamiento de nuestra economía, no podrá negarse ahora que, tanto el descenso en el precio del petróleo y de otras materias primas, como el de los tipos de interés y la recuperación de excedente empresarial con la consiguiente disminución del endeudamiento financiero, no deben redundar en beneficio también de quienes han soportado los mayores sacrificios.

Objetivos y contenidos de la concertación

Los más listos de la clase nos han explicado, con rigor, que rigurosamente debíamos entender que la salida de la crisis (empleo, calidad de vida...) debía aplazarse hasta la consecución, mediante el exclusivo recurso a la moderación salarial, de los excedentes empresariales. Eso conduciría a una recuperación de la inversión y, automáticamente, a la generación de empleo. Hemos sufrido esos rigores.

Nos debimos dormir en mitad de la clase, o bien los pícaros dejaron para otra magistral la segunda parte del discurso: con los excedentes en el bolsillo, encontramos donde había crisis de rentabilidad del capital una hermosa duda entre comprar pagarés del Tesoro, o tal vez bonos, del Tesoro, claro.

Los sindicatos, en toda Europa, ya tenemos un traje de ese color. En la reflexión común de la CES hemos constatado la insuficiencia de políticas que actúan exclusivamente sobre la oferta, generando aún más crisis y más desempleo.

Por ello, la UGT plantea hoy una política de generación de empleo, basada en un crecimiento importante, cualitativa y cuantitativamente, de nuestra actividad económica. No de una forma alocada, sino en la línea de seguir luchando contra los desequilibrios, contra la inflación, el endeudamiento, el déficit, etc.

Se habla de una cifra clave, el 3, el 3,5 %, para conseguir una reducción paulatina del desempleo, pero tan importante como lo anterior es conseguir la orientación de ese crecimiento en sectores de futuro, con potencialidad de consolidar el empleo que creen, con capacidad de competir dentro y fuera.

Y es difícilmente sostenible que eso se pueda lograr sin una dinamización de las políticas que potencien la demanda, el consumo interno y, por tanto, la disponibilidad de renta de los activos y de los pasivos. Estamos hablando, por consiguiente, de que los salarios ganen parte del terreno que han perdido frente a la inflación, manteniendo una política salarial no eufórica, pero que permita aumentar la renta real disponible. Y estamos hablando del aumento de las prestaciones sociales, no sólo como exigencia de la más elemental solidaridad, sino como soporte fundamental de la actividad económica.

Nadie desea un rebrote de la inflación, y no queremos, por tanto, una carrera salarios-precios, que creemos que hay que evitar y que puede evitarse. A este respecto, tenemos que reconocer la insuficiencia de la política de rentas que hemos practicado hoy, por su desconexión con apoyos coherentes en cuanto a fiscalidad y precios.

En efecto, se debe constatar que ha habido una identificación automática, exclusiva y falsa entre aumento salarial e inflación, sin considerar la evolución de otros costos adicionales como las materias primas, el crédito o la fiscalidad. También, que muchas veces la consecución, por otra parte necesaria, de incrementos salariales similares a la inflación, a veces no consigue más que colocar al afectado en un lugar más alto de la curva de presión impositiva directa, con lo que el afectado, en la práctica, ha disminuido su renta disponible. No hablemos ya de quienes, aprovechando su mayor nivel de combatividad,

Algunos han conseguido aprovecharse del esfuerzo de todos contra la inflación para que unos pocos mejoraran su nivel de renta real.

una situación próspera de su empresa o sector (porque comunicamos para general conocimiento que en esta época de crisis ha habido también islas de prosperidad), o la conversión de la negociación colectiva en *terreno de lucha* contra la propia concertación, han conseguido aprovecharse del esfuerzo de todos contra la inflación para que unos pocos mejoraran su nivel de renta real (curioso sentido de la solidaridad: el trabajo de los más débiles a favor de los más fuertes).

Por eso, planteamos la combinación de la política salarial con el consenso, la concertación, acerca de la política fiscal y de precios y de un trabajo intenso sobre la productividad.

Solamente si somos capaces de poner en práctica, desde la acción sindical en la empresa, un proceso de presión sobre las magnitudes renta nominal, fiscalidad directa e indirecta, precios y productividad, podremos afrontar a la vez la reactivación, la creación de empleo y la mejoría relativa de las condiciones de vida a través del salario y las prestaciones sociales.

¿Utópico? Vamos a ver. Si la imposición indirecta se mantiene y logramos aumentos considerables de la productividad (entendiendo por productividad no los meros aumentos de ritmo o la sustitución de trabajo por capital) podríamos seguir negociando sobre la previsión de inflación en el crecimiento de las rentas con la esperanza de conseguir IPC reales, menores que los previstos, y recuperaríamos renta real con el consiguiente aumento del consumo y de la actividad y, por tanto, de empleo. Es, justamente, pues, el incremento de productividad que consigamos, el margen en que podemos movernos desde el IPC final para conseguir un aumento real del salario sobre la propia inflación.

El intento sería inútil si no se concierta con el poder una *política* fiscal que revise

adecuadamente los tipos medios y marginales y una *política* más activa en precios, con participación sindical en el control real, aumento del número de productos de precio autorizado, revisión de los componentes estadísticos del IPC e, incluso, una acción sindical en las empresas, sobre todo las de precios *tarifarios* y públicas, que relacione estas mismas magnitudes.

No está de más decir aquí, una vez más, qué entendemos por productividad. Es ni más ni menos lo que la misma CEOE ha aceptado *teóricamente* en los acuerdos confederales: es decir, un proceso de discusión y de acuerdos con participación sindical, en que se relaciona la inversión, la organización del trabajo, la introducción de nuevos sistemas, la reducción de jornada y la creación de empleo. Hemos subrayado el *teóricamente* porque, en la práctica, ha sido muy difícil que el empresario individual aceptara ese planteamiento en la negociación concreta de convenios colectivos. Sin duda, por una posición de resistencia al proceso de participación sindical en la empresa que conlleva, al cual no podemos ni vamos a renunciar, superado, por lo tanto, el criterio de la eficiencia al de autoridad, *en un entendimiento casi feudal de la actividad empresarial.*

¿Qué hacer en esas islas de prosperidad a las que hemos aludido? ¿La política de solidaridad se traduciría en ese caso en un simple aumento del excedente empresarial? No sería justo. Por el contrario, es la situación ideal en que se debe practicar la propuesta de relacionar la reducción de jornada con la creación de empleo y la productividad.

Exige valor sindical y vencer resistencias corporativas importantes, pero quien haga objeciones al planteamiento, que no se llame solidario: le llamaremos, como se dice ahora, «izquierdista de fin de semana».

Tal vez sea el tratamiento que el Con-

greso da a la reducción de jornada uno de sus aspectos más interesantes en cuanto a su potencial capacidad de creación de empleo y en cuanto al tratamiento de los problemas de eventual aumento de los costos de producción derivados de ella.

En efecto, después de la importante reducción de la jornada pactada en los acuerdos firmados por UGT y CEOE y consolidados en la legislación por el gobierno socialista, se ha podido observar un importante parón en la tendencia que, incluso, ha llegado a invertirse, según cifras oficiales que señalan un aumento de la jornada media en 1985.

Dice la resolución que comentamos:

«(...) rechazamos que dicha reducción sea soportada sistemáticamente por las rentas de los trabajadores, pues ello, unido

¿No son acaso los países con un sindicalismo más fuerte aquéllos que mejor representan la modernidad y la eficacia económica?

a los constantes y deseables aumentos de la productividad, podría crear la paradoja de que el aumento de la competitividad y de los excedentes empresariales corriera parejo a una menor participación de los trabajadores en la riqueza nacional e incluso, por la imposibilidad de definir unilateralmente el volumen del mercado sin una política expansiva del consumo, a un mantenimiento del desempleo.

(...) Reivindicamos el control de la implantación de la reducción de jornada para que no se vea absorbida por una utilización de otros métodos de aprovechamiento intensivo del trabajo (horas extras, ritmos, etc.).

Debemos reforzar la búsqueda de vías en el entorno internacional para que se produzcan reducciones importantes de jornada, apoyando la estrategia de la CES y evitando así que estas reducciones de jornada tengan costes comparativos.

Como sindicato estamos dispuestos a negociar las eventuales elevaciones de cos-

te unitario exclusivamente en los casos en que la reducción de jornada acarree efectos positivos de generación de empleo en la empresa y cuando sea imprescindible para no poner en riesgo la propia viabilidad de la actividad. En ningún caso se compartirán estos costes en niveles que afecten a las rentas más bajas.

(...) Esta negociación, que puede darse a diversos niveles, encontrará en el ámbito de la empresa su marco privilegiado de tratamiento y deberá tener en cuenta temas tales como el aumento de la productividad, los beneficios empresariales y las ayudas del Estado, antes de analizar eventuales sacrificios salariales de los activos.»

¿Flexibilidad? ¿Qué flexibilidad?

Hemos constatado una paradoja: se nos ha esbozado un escenario de modernidad económica en el que desaparece el personaje llamado sindicato. Sin embargo, las características de esa modernidad conducen a una sobreexplotación de similar dimensión a la que, en su día, dio lugar a la creación de sindicatos tal y como hoy los conocemos.

Es un discurso peligroso. Y contradictorio. Sólo sobre la base de la ignorancia o de una profunda voluntad de tergiversar los hechos y la historia puede alegarse la identificación entre sindicato, inflexibilidad, rigidez y retraso económico. ¿No son acaso los países con un sindicalismo más fuerte, y donde se mantienen sistemas de protección social más altos, aquéllos que mejor representan la modernidad y la eficacia económica?

En esta merienda de negros, lo mejor del menú es el primer plato: la flexibilidad. He aquí que la derecha económica es flexible.

Como rechazo a un concepto de flexibilidad que sólo contiene medicina de resig-

nación ante la individualización de las relaciones laborales, incluyendo libertad individual para ser despedido sin protección pública ni sindical, la UGT pudo adoptar el rechazo a la propia palabra flexibilidad.

Sin embargo, el discurso sindical es aquí nuevo y valiente, es decir, avanzado. Por una parte, porque los datos que ya son públicos demuestran que en el puro aspecto del mercado de trabajo los mecanismos de contratación son sumamente flexibles y los de despido, de tan flexibles, pura natilla. Por otra, porque semejante coeficiente de flexibilidad (casi de nula viscosidad) ha conseguido una disminución de porcentaje equiparable del desempleo (en el año 1985 se han formalizado más de dos millones de nuevos contratos mientras continuaba el desempleo en niveles alarmantes). Por último, porque la UGT defiende su propio concepto de flexibilidad.

Afirma Edmond Maire:

«Cierta número de patronos han comprendido ya que el autoritarismo y el taylorismo no son rentables en una época en que la creatividad y la innovación, que pasan necesariamente por la participación de los asalariados, son una condición esencial del progreso económico y de la eficacia ante la competencia internacional. Y de ahí que los propios patronos hayan puesto en marcha experiencias que hacen posible que los trabajadores se manifiesten sobre sus condiciones de trabajo. Pero los resultados, hasta el momento, han sido forzosamente limitados porque, al mismo tiempo, el empresario ha tratado de orillar a las organizaciones sindicales y de canalizar la expresión de los trabajadores a través de los mandos intermedios. En estas condiciones, ¿cómo van los asalariados a comprometerse realmente en este juego, si una acción sindical entraña el riesgo de acarrearles consecuencias negativas, en lo referente a la promoción, por citar sólo

La flexibilidad que busca la eficacia, que fomenta la participación, es un concepto compartido entre los sindicatos y los empresarios inteligentes.

un ejemplo? Una verdadera extensión de los derechos de los trabajadores es hoy la condición para una innovación social, económica y, en consecuencia, también para el desarrollo del empleo. Es a esto a lo que nos aferramos»².

Pero, vamos a ver, ¿puede la flexibilidad ser propiedad de sectores autoritarios, genéticamente rígidos, estereotípicamente antiguos? Evidentemente, no. La flexibilidad, esa flexibilidad que implica al trabajador, que busca la eficacia, que fomenta la participación, es un concepto compartido entre los sindicatos y los empresarios inteligentes, los que negocian, los que respetan a los representantes genuinos de sus trabajadores porque los necesitan para construir unidades económicas rentables.

La negociación colectiva

En ese sentido de defensa de la modernidad, de la racionalidad, nos sentimos especialmente identificados con la propuesta que hace el XXXIV Congreso sobre la negociación colectiva, que deseamos articulada, descentralizada desde acuerdos globales para, de forma flexible, estudiar las peculiaridades de la empresa.

Después de denunciar atentados graves a la autonomía contractual de los agentes sociales, la resolución dice lo siguiente:

— «Se habrá de obtener un máximo de convenios sectoriales estatales, según hemos propugnado siempre. Ello permitirá la concentración de la negociación para los problemas homogéneos de un sector, evitando las ineficacias, deseconomías y redundancias de la atomización.

Asimismo, ello será un freno eficaz contra los intentos sindicales corporativos y localistas o nacionalistas que intentan desmembrar y parcelar la negociación colectiva.

— La consecución de acuerdos sectoriales estatales presupondrá una labor previa de homogeneización de los distintos acuerdos provinciales y de intercambio vertical de información desde la empresa que permite delimitar claramente los problemas comunes y las materias de envío y reenvío entre distintos escalones de la negociación.

— Los convenios sectoriales estatales sólo tratarán de los problemas comunes y homogéneos del sector, creando un acuerdo marco para su solución. En ningún caso deberá cerrar excesivas materias ni entrar en detalles puntuales que desincentivan la negociación en escalones inferiores y la debilitan. Las materias propias de cada nivel y su grado de concreción habrán sido discutidos y acordados previamente según las peculiaridades características de cada sector.

— La UGT propondrá en la Comisión

Consultiva Nacional de Convenios Colectivos cuantos estudios y medidas ayuden a conseguir lo expuesto.

— La actividad contractual dentro de nuestra estrategia de negociación articulada no puede acabar a las puertas de la empresa, pues es en ella donde se consigue la mayor eficacia. Algunos aspectos claves para la vida y el desarrollo del trabajo del asalariado, tales como productividad, condiciones de trabajo, horario flexible, democracia industrial y un largo etcétera, sólo pueden concretarse de manera eficiente en el marco de la empresa.

— La UGT, por lo tanto, propulsará con toda energía en los próximos años, a través de todos sus cuadros y organismos, la actividad sindical y la negociación en las empresas como último elemento indispensable para la vertebración de la negociación articulada.

— La negociación a nivel de empresa, en aras a la articulación, será la implemen-

Creemos en la necesidad de incorporar España al grupo de los países que generan innovación y competitividad y, por tanto, garantía de empleo.

tación y adaptación final (y, por lo tanto, eficaz) de las grandes líneas acordadas, pero no cerradas, en ámbito superior.

**Planteamos un constante
proceso de información, negociación
y control de la introducción
de nuevas
tecnologías.**

— A través de la implantación sindical en las empresas y de la activación de la acción sindical se romperá el actual dinamismo de «repetición mimética» que se observa muchas veces, consistente en copiar tal cual los convenios de ámbito superior sin negociar ningún aspecto. Esta esclerosis en la base no puede ser tolerada por la UGT, sabiendo, además, que suele ser bien fomentada por la patronal. Con esta activación se conseguirá, además, que la cifra de trabajadores sometidos a convenio se convierta en una cifra real de trabajadores que negocian su convenio.

— Este gran esfuerzo que debe desarrollar la UGT para conseguir una negociación articulada debe acompañarse de un enriquecimiento de dicha negociación, sobre todo a nivel de empresa, como elemento incentivador de la acción sindical y como instrumento de defensa y mejora de los derechos de los trabajadores, objetivo principal de la labor de un sindicato.»

Es necesario señalar la incorporación en nuestras propuestas de contenido a negociar la introducción de las nuevas tecnologías. Le dedican los documentos congresuales amplio espacio y una gran atención.

Tan lejos de un primitivo suicida como de la fascinación excluyente, creemos firmemente en la necesidad de incorporar España al grupo de los países que, median-

te una política de investigación y desarrollo activa, generan innovación y competitividad y, por tanto, garantía de empleo.

Por lo tanto, además de la necesaria atención a todas las modificaciones sobre las condiciones de trabajo que implica el proceso, planteamos un constante proceso de información, negociación y control de la introducción de nuevas tecnologías. Sólo así podremos conseguir la defensa del empleo y la mejora de las condiciones de trabajo que deben ser datos determinantes de la sociedad nueva.

Nota final y deseo ferviente

En la nomenclatura romana, que usamos para designar los siglos, para escribir el número que sigue al XX, es necesario añadir una I al final y no, decididamente, entre las dos X. A algunos los esperamos en el XXI. Que no tarden.

¹ *El futuro del socialismo*. Madrid, 1986. Ed. Sistema, pág. 81.

² *La crisis y los nuevos horizontes del sindicalismo contemporáneo. (Entrevistas con Edmond Maire, Michael Foucault, Pierre Rosauvallon, Paul Thibaud)*. Instituto de Estudios Laborales y de la Seguridad Social, pág. 21. Madrid, 1984.

Cuadernos de 3 Alzate

1986/1

Revista Vasca de la cultura y las ideas

El 1 de enero de 1986 hemos entrado definitivamente en Europa. Parece apropiado que, en este número, la primera sección se dirija a reflexionar desde diversos puntos de vista sobre el significado que esto tiene para el País Vasco. J. M. MARDONES aborda el aspecto cultural en "Modernidad y Postmodernidad en Europa y el País Vasco"; L. I. SANCHEZ analiza el aspecto institucional en "Comunidades Autónomas y Relaciones Internacionales"; JOSE M.^a BENEGAS, desde una perspectiva más amplia, plantea el tema de "Europa como Proyecto Socialista: Los Aspectos Económicos"; la sección se cierra con un artículo de MANUEL ESCUDERO acerca de "El Nacionalismo, cruz de la Izquierda Europea".

La segunda sección de este

número recoge diversas aportaciones literarias: "Mirando al Sol, frente a un lago de muchas ranas", de ANGEL M.^a ORTIZ ALFAU; "Iraklii Abasidze: sus versos a Euskadi", con una introducción de RAUL GUERRA GARRIDO, y, finalmente, una narración de RAFAEL BRAVO ARRIZABALAGA titulada "El Reloj de San Lorenzo".

La última sección recoge dos breves ensayos de ANDRES DE BLAS GUERRERO, "Nación y Nacionalismo en Manuel Azaña" y PATXO UNZUETA que escribe sobre "Moderados e inmoderados en la política nacionalista vasca". El número se cierra con tres notas de JAVIER CORCUERA, JUAN LUIS IBARRA y JOSE ANTONIO ZARZALEJOS en torno al tema común de los Derechos y los Territorios Históricos.

ANDALUCIA: APORTACION A UN DEBATE

José Rodríguez de la Borbolla



Andalucía es, sin duda, uno de los ejes esenciales sobre los que gira la realidad total de España. Sus especiales dimensiones, su privilegiada posición estratégica meridional y su indudable personalidad cultural, la convierten en referencia obligada de cualquier planteamiento sobre la cuestión nacional.

El interés que siempre ha despertado ante propios y extraños ha ido mucho más allá de coyunturales protagonismos históricos y ha sido independiente de cualquier situación de bonanza o desgracia socio-económica.

Especial relieve ha adquirido Andalucía en los llamados tiempos modernos. A partir

de ese instante, el interés por los temas de Andalucía se ha incrementado de forma indiscutible. Con mayor o menor precisión, los viajeros románticos, los pensadores de fuste, los historiadores o los sociólogos han hecho del caso andaluz objeto de múltiples clichés, análisis e interpretaciones.

En esta variada acumulación de textos

y datos, hay que saludar con agradecimiento importantes aportaciones científicas que han desvelado con rigor gran parte de nuestro pasado, y han sugerido nuevas

En Andalucía han proliferado más las historias locales y aún localistas que los estudios globales o regionales.

investigaciones que aún aguardamos. Hay también, sin embargo, una abundante literatura andaluza o sobre Andalucía, que ha utilizado nuestra historia como precipitado campo de experimentación metodológica o, lo que es más preocupante, la ha moldeado subjetivamente a favor de intereses ideológicos determinados.

Andalucía: un problema de interpretación

En oposición a otras zonas de España, en Andalucía han proliferado más las historias locales y aún localistas que los estudios globales o regionales. Distintos factores han influido en esta curiosa inflexión. Como bien apunta Domínguez Ortiz, la ausencia de estructuras político-administrativas unitarias en el pasado de Andalucía influye decisivamente en la falta de archivos de carácter regional, propiciando además el descuido, la desaparición de algunas fuentes y la general dispersión documental. Tales problemas han impedido o dificultado la labor integradora de los especialistas.

Este dato indiscutible habría que completarlo con un factor añadido y, desde nuestro punto de vista, nada despreciable si queremos entender la particular idiosincracia de nuestra historiografía. Me refiero a la fuerza, a la atracción casi telúrica que el andaluz siente por sus raíces más inmediatas. En su interpretación de Andalucía, tan discutible en tantos aspectos, Ortega intuye, sin embargo, «ese peculiar entusiasmo del andaluz por su trozo de planeta», y añade: «La unión del hombre con la tierra no es aquí un simple hecho, sino que se eleva a relación espiritual, se idealiza y es casi un mito». La configuración de la realidad está, pues, condicionada por la vinculación a una raíz con-

creta que se atesora con exquisito mimo. Esta vivencia no está reñida con la de una pertenencia más amplia —Andalucía y, por ende, España—; pero esta perspectiva

superior está conformada desde abajo. Es éste un matiz que explica multitud de comportamientos y actitudes no siempre tenidas en cuenta en análisis apresurados. Cuando el andaluz, por ejemplo, se enfrenta al proceso autonómico, lo hace más con la esperanza intuida de que se le abre la posibilidad de superar una situación dada que con el ánimo de conquistar unas formas jurídicas de autogobierno.

Podría explicarse así que los intentos más recientes de interpretación de Andalucía se hayan realizado a partir del condicionante socio-económico inmediato. Más que Historia de Andalucía —salvo contadas y honrosas excepciones—, se han elaborado teorías para hurgar, a veces con fuertes dosis de masoquismo, en el tema del subdesarrollo, su origen y sus causas.

Este singular y polémico punto de vista proporcionó, en su momento, importantes datos y algunas sugerentes interpretaciones. Pero no cabe duda que determinados análisis, contemplados con la perspectiva de los últimos años, han podido también influir negativamente por más de un concepto. Se ha pretendido demasiadas veces utilizar tesis interpretativas para afianzar determinados posicionamientos ideológicos. Se ha olvidado, con lamentable frecuencia, el sabio consejo y rigurosa advertencia lanzada por uno de los maestros andaluces del quehacer histórico: «Hay que hacer un gran esfuerzo para que, ni siquiera de manera inconsciente, traslademos al pasado preocupaciones, anhelos y juicios de valor que pertenecen exclusivamente al presente» (A. Domínguez Ortiz).

Algunas teorías, por ejemplo, han pretendido justificar la realidad andaluza acudiendo a viejos tópicos reaccionarios y a afirmaciones en las que se mezclaban la

adulación con la descalificación global y la ausencia de cualquier rigor. Frases como la incapacidad para el trabajo, el sentido hedonista o extrovertido de la existencia y un clima propicio al ocio o, como mucho, a la mera inspiración estética, pueden servir de ejemplo e ilustración.

En determinados sectores de la burguesía autóctona más tradicional se ha intentado ocultar la propia inoperancia, acuñando la especie de que el atraso de Andalucía, su progresiva involución desde comienzos del siglo XIX, se debe sólo a la nefasta política de las sucesivas administraciones públicas, sin ninguna matización al respecto. El análisis de este principio les llevó poco a poco a establecer una peligrosa conclusión, una estrategia de agravio comparativo con otras zonas de España, que sería aprovechada después por ciertos sectores urbanos y pequeño-burgueses. Estos

grupos han derivado posteriormente hacia ambiguos planteamientos políticos, que han seguido utilizando la pura reivindicación como instrumento único de conexión

con la población a fin de movilizarla en pos de determinados objetivos. Partiendo de la situación real de atraso de Andalucía, se recurre a la comparación con otras zonas de España para intentar la identificación ciudadana con la herida regionalista en contra de aquellos poderes e instituciones del Estado a las que se achacan todos nuestros males.

Si de estas interpretaciones conservadoras pasamos a otras valoraciones de signo opuesto, nos encontramos con un panorama muy distinto. Ante todo por su amplitud y variedad, pero especialmente por estar dotadas de un aparato científico de indudable atractivo. Es evidente que algunas de estas teorías jugaron un decisivo papel en el análisis de la realidad andaluza y sirvieron para dinamizar la toma de conciencia política y social de importantes sectores andaluces frente a la conflictiva y endémica situación de nuestra tierra.

Sin embargo, algunos aspectos y determinadas afirmaciones doctrinarias de estos planteamientos teóricos se han manifestado a la larga insuficientes; se han ido en parte desvirtuando con el paso del tiempo y preciso es reconocer incluso que adolecen de una aplicación apriorística, casi mecánica, de metodologías y tesis elaboradas para explicar realidades sociales distintas a la andaluza del siglo XX.

La tesis del *capitalismo colonizador* pretende, en origen, explicar la etapa decimonónica del desbordamiento europeo por otros continentes y sus consecuencias, sobre todo a raíz de la segunda fase de la industrialización, desde 1870. No faltan en esta teoría aspectos concretos aplicables a Andalucía. El caso de la explotación minera tal vez sea el más significativo de todos. Sin embargo, resulta difícil aceptar en todo momento el hilo conductor de

este razonamiento, a no ser que se introduzcan sustanciales matizaciones. Cuando, por ejemplo, esta tesis achaca con exclusividad los males de nuestra tierra a

una acción de «conquista» por parte de Estados, grupos, personas e intereses ajenos y enemigos de Andalucía, se está olvidando, o al menos disimulando, la culpable complicidad ejercida en todo este proceso por sectores de la propia clase dominante andaluza. Y eso sin entrar en la equívoca y peligrosa simplificación que significa reducir toda la historia a una batalla entre buenos y malos, a una dudosa confrontación de perfiles meramente maniqueos.

De manera similar, aunque con matizaciones específicas, se expresa la teoría del *centro-periferia*, tan atrayente cuando Samir Amin y otros autores la pusieron en boga para explicar el papel del Tercer Mundo en la fase imperialista del capitalismo. Aplicada al caso que nos ocupa, significaría que Andalucía formaría parte de ese mundo «dependiente». Su papel se reduciría a proporcionar mano de obra y pro-

**La realidad andaluza,
sobre todo en los últimos años,
está adquiriendo un ritmo
nuevo que no es posible
desconocer.**

ductos baratos, a cambio de importar, por añadidura, manufacturas y bienes de equipo de alto coste y elevada tecnología. De esta forma, se alimentan sin cesar los beneficios del núcleo dirigente de la economía mundial, que consolida así su doble papel explotador y hegemónico. Se concluiría —social y políticamente o hablan— que la sociedad andaluza, las relaciones sociales en Andalucía, estaban meramente subordinadas en su comportamiento a las directrices que llegaban de fuera. Más aún, que la clase dirigente andaluza o los grupos dirigentes andaluces estaban supeditados a los impulsos procedentes de grupos políticos instalados en el centro de poder de la nación española o en núcleos de decisión de más allá de nuestras fronteras.

Sin discutir la situación secundaria de la economía española y andaluza en el concierto mundial, es necesario, sin embargo, precisar con más pormenor el alcance de algunos de los supuestos teóricos de los que se parte. Nuestra estructura productiva tiene hoy actividades, presencias e incluso impulsos competitivos que con dificultad pueden integrarse en el contexto marginal que se prejuzga. Afirmarlo sería desconocer la realidad, aunque tampoco sería convincente empeñarse en defender un triunfalismo a ultranza.

Por otra parte, el enunciado de referencia peca de excesiva globalidad, de cierto ingrediente espacial que se rebela a la hora de la verdad. La dicotomía internacional establecida no es tan clara y absoluta como se pretende. Entre ambas márgenes extremas, queda oscurecido el papel de las zonas intermedias, así como las relaciones económicas y de cualquier otro tipo que necesariamente se establecen entre estos países medios y aquellos otros más avanzados o más deprimidos y atrasados.

Es verdad que mucho de los temas tratados representan aspectos parciales, pero que exigen también un planteamiento exacto a la hora de establecer con rigor un

**La transición política,
el arraigo de la libertad,
ha provocado una maduración
global de la sociedad
española.**

análisis interpretativo de la realidad andaluza. Una realidad que, sobre todo en los últimos años, está adquiriendo un ritmo nuevo que no es posible desconocer.

Con demasiada frecuencia los esquemas fijos y preconcebidos carecen de sentido; sobre todo cuando se aplican a una realidad viva y dinámica como son las colectividades humanas. Andalucía no sólo no es una excepción, sino que por sus peculiares características de vitalidad social se escapa a cualquier concepción fixista con especial habilidad. Las frases hechas son casi siempre frases muertas. Afirmaciones *definitivas* sobre la esencia de un pueblo, sobre su nivel cultural o sobre su sistema productivo, carecen de sentido. Entre otras razones porque son, como mucho, afirmaciones referidas a una situación histórica puntual, son productos en cierto sentido anecdóticos, cuya pretensión categórica negaría el sentido mismo de la historicidad.

Se ha dicho tantas veces que Andalucía es una realidad compleja, difícil de atar y encasillar bajo esquemas previos, que parece tópico insistir en ello. Ya Richard Ford, tal vez el más brillante y certero de los cronistas románticos, subrayó con vigor la rica heterogeneidad andaluza. Heterogeneidad y diversidad que llega incluso a convertirse, como el río que la atraviesa y fecunda, en un factor definitorio de lo andaluz; un elemento que afecta a su estructura geológica, a la distinta experiencia vivida a lo largo de su evolución histórica y a la espléndida textura de su urdimbre cultural.

Andalucía en un contexto de cambio

Lo expuesto hasta aquí desde una perspectiva historiográfica debe complementarse con el referente actual; con una serie de alusiones a las profundas y recientes transformaciones que han ido alterando progresivamente nuestra realidad.

En los últimos años se ha producido un conjunto de acontecimientos vitales —unos en Andalucía, otros fuera de Andalucía e incluso fuera de España— que exigen completar y enriquecer los instrumentos de análisis para saber con exactitud qué es necesario hacer a fin de superar la situación actual. Una política realista y concienzuda no puede desentenderse de estos datos.

Sin ánimo excluyente y sin pretensiones de agotar todo el espectro, es preciso reconocer que ha surgido un nuevo contexto, político y económico, que ha provocado las correlativas alteraciones dialécticas en el campo cultural, ideológico o social.

Es innegable, por ejemplo, que la transición política española ha experimentado de unos años a esta parte un decidido avance. Ha progresado en la dirección de consolidar la democracia, de ajustarla con precisión a los esquemas civiles, reforzando así el goce y disfrute de las libertades públicas contenidas en el texto constitucional. Pero es que, además, la transición política, el arraigo de la libertad, ha provocado una maduración global de la sociedad española. De una sociedad dependiente, escasamente vertebrada y ayuna en la práctica de instrumentos de actuación política, hemos pasado en poco tiempo a ser una sociedad dinámica, tolerante y protagonista. España es hoy un colectivo de ciudadanos dueños de su propio destino gracias, sobre todo, a ese dominio del entorno que se produce a través de la participación activa en los asuntos públicos.

Uno de los aspectos más relevantes de la transición política ha sido, sin duda, la instauración de un nuevo modelo de Estado: el Estado de las Autonomías. La organización territorial autonómica exige de hecho una concepción distinta de ejercer el poder político y significa un sustancioso cambio en la responsabilidad institucional. Hemos superado felizmente en

Desde el punto de vista social, las Comunidades Autónomas han supuesto un eficaz instrumento para la dinamización y vertebración de la sociedad.

España aquella época en que un destino periférico era sólo una ocasión de ascenso, un eslabón inicial en la carrera del meritorio político, cuyo objetivo final era casi

siempre un alto puesto en la Administración central. En la actualidad, el gobernante autonómico tiene una específica vinculación al territorio, una mayor proximidad al ciudadano, a sus problemas cotidianos, a la solución de los mismos y, en consecuencia, tiene también una mayor responsabilidad ante la población de cuya periódica voluntad electoral depende en última instancia.

Además de esta virtualidad democrática, el Estado de las Autonomías proporciona un doble efecto añadido. El primero de ellos es *económico*, y consiste en la posibilidad de planificar adecuadamente las potencialidades de un territorio determinado. Por lo general, y desde luego éste es el caso de Andalucía, una Comunidad Autónoma tiene el tamaño propio y exacto para que la programación racional de su economía produzca, a medio y largo plazo, frutos de rentabilidad que incidan tanto en el aumento de bienes y servicios, como en el mercado potencial de trabajo.

Desde el punto de vista *social*, las Comunidades Autónomas han supuesto un eficaz instrumento para la dinamización y vertebración de la sociedad. La presencia de responsables políticos propios en el territorio concreto, ha originado paralelamente una dinámica de reforzamiento de la capacidad de interlocución y representación por parte de los agentes sociales autóctonos. Tal vez a alguien este fenómeno le parezca paradójico, pero es perfectamente inteligible. El hecho de tener que dilucidar problemas específicos con las personas que tienen la responsabilidad política democrática, ha decantado en los distintos territorios interlocuciones empresariales, sindicales o sociales que antes no existían. Así está ocurriendo hoy en Andalucía y me congratulo de ello, porque

ese diálogo constante, al mismo tiempo que ahorma y vertebrata a nuestra sociedad, la consolida como una colectividad moderna y participativa, dispuesta a construir solidariamente el futuro.

En esta apresurada nómina de transformaciones que vive la sociedad española, no puede olvidarse que estamos asistiendo a la primera fase del cambio socialista en España, cuyas repercusiones en Andalucía son innegables. En estos cuatro años de gobierno se han producido impulsos irreversibles tendentes a la modernización de la sociedad. La política de bienestar social en sectores cruciales como la sanidad o la educación, la organización del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas, así como la actualización de la maquinaria administrativa y el desarrollo de los derechos y libertades de los ciudadanos, son datos incuestionables de ese proceso global de modernización.

Un proceso que, por otra parte, se ha completado en uno de los más decisivos sectores estratégicos: el internacional. El ingreso de España, como miembro de pleno derecho, en las Comunidades Económicas Europeas, y nuestra permanencia en el dispositivo de seguridad y defensa de los países occidentales, ha resuelto definitivamente el viejo contencioso histórico del aislamiento español. La presencia de España en estos organismos hay que contemplarla desde una perspectiva dinámica. Nuestra postura no será la de meros espectadores, sino la de un país que pretende revitalizar las instituciones europeas. Europa ha de tener cada vez más peso y capacidad de decisión, mayor homogeneidad interna, si de verdad quiere convertirse en un ámbito de paz y distensión dentro del agitado panorama mundial que nos ha tocado vivir.

Sobre todo en el momento actual en el que se empieza a superar la crisis económica de los últimos años y el mundo se abre ya a las incitaciones del próximo si-

glo. Un nuevo modelo de sociedad, unas nuevas relaciones sociales y laborales, unos nuevos comportamientos, unas nuevas formas de producción, unas nuevas fuentes de energía, etc., van a cambiarlo todo en un corto espacio de tiempo.

En este contexto de cambio Andalucía puede jugar un papel determinante. Esta cálida tierra meridional puede estar mejor preparada que otras —aunque parezca lo contrario— para hacer frente a ese horizonte que se nos aproxima. Andalucía es un territorio amplio y escasamente contaminado; seguramente porque el proceso tradicional de industrialización le afectó escasamente y tardíamente. Los nuevos esquemas productivos pueden aclimatarse aquí con más facilidad que en otros lugares donde la inercia del pasado supone con frecuencia una rémora para encarar con energía el futuro.

Andalucía ofrece un tejido urbano a la medida de la sociabilidad y el sosiego que el hombre contemporáneo exige.

Andalucía ofrece además un tejido urbano hecho a la medida de la sociabilidad y el sosiego que el hombre contemporáneo

exige. Por poco que nos esforcemos en dotar a nuestras ciudades de mejores servicios sociales y a nuestro territorio de mejores comunicaciones, será mucho más agradable vivir en Sevilla, en Córdoba, en Granada o en Jerez que en Hamburgo, Manchester o Lyon.

Finalmente, con el ingreso de España en la CEE Andalucía ha dejado de ser el fondo de saco de un país aislado y lejano, un lugar a donde nunca se llegaba y sólo se venía para conocer de cerca el extraño signo diferencial de España. Sin embargo, casi de pronto, Andalucía aparece ante el mundo como la «puerta de Europa», el viejo solar de comunicación y encuentro de tres continentes y de las dos vías claves de la comunicación marítima. Este recuperado papel de protagonista convierte a Andalucía en tierra de futuro y con futuro; un lugar privilegiado para vivir y para trabajar, para invertir y para investigar.

Todos estos datos hay que incorporar-

los en un análisis preciso y científico de la actualidad andaluza. Andalucía es una realidad histórica compleja, aquejada todavía por graves problemas estructurales pero enriquecida por las transformaciones de los últimos años y abierta con especial vigor al mañana. Si estos factores no se tienen en cuenta, la suma final de resultados no puede vanagloriarse de haber alcanzado la exactitud.

Andalucía hoy: una compleja realidad económica

Conseguir abarcar esa amplia, rica y compleja realidad no es, como ya se ha dicho, tarea fácil. Sobre todo si se pretende huir del estereotipo y de la simplificación. Intentaré describir la situación de Andalucía, tal y como hoy se puede contemplar. Esta reflexión es producto de la permanente preocupación por nuestra tierra, que comparto con otros andaluces y con tantos estudios, y de la abundante información que a diario me proporciona la responsabilidad que desempeño. Estoy firmemente convencido de que, tras una época de lamentaciones inútiles y agravios desazonantes, es preciso abrir nuevos frentes de reflexión teórica, que incorporen las últimas transformaciones, los latidos continuos de una tierra viva que lucha y se estremece. La empresa es delicada, pero la afronto con el ánimo ilusionante de impulsar un debate abierto, una propuesta rigurosa de diálogo.

Cuando España acaba de ingresar en el Mercado Común y estamos a punto de franquear el umbral del siglo XXI, Andalucía ofrece al menos una triple dimensión socio-económica que, a grandes rasgos, podría quedar por el momento así:

— una economía de vanguardia, en la que ya se vislumbra el siglo próximo;

— una economía en estancamiento, típica de mediados de la actual centuria;

El último cuarto del siglo XX se ha convertido en el escenario del alumbramiento doloroso de una nueva sociedad.

— una economía en regresión, más propia del ya superado siglo XIX.

Antes de definir las o describirlas, es preciso aclarar tres cuestiones

previas, decisivas para la adecuada inteligencia del carácter propio de cada una de ellas:

a) No se trata de una división clásica por sectores. Por el contrario, los tres sectores tradicionales de la estructura económica (Agricultura, Industria y Servicios) participan en Andalucía, al mismo tiempo, del triple carácter que acabo de exponer, bien que con matizaciones y grados.

b) Aunque existen lógicas diferencias interprovinciales, tampoco pretendo hacer una clasificación espacial de la economía andaluza de nuestros días. Estas tres economías, a veces de forma imperceptible, se difunden y extienden por toda la malla de la geografía regional.

c) Preciso es insistir en que esta triple realidad a la que me vengo refiriendo coexiste en el tiempo. Este dato de perfecta sincronía define con precisión el carácter diferencial de Andalucía. En otras zonas de Europa y de España conviven, por ejemplo, la primera y segunda dimensión económica aludida; en algunos lugares, la segunda y la tercera; en ninguno, la primera y la última. En Andalucía, sin embargo —y éste es un dato a tener en cuenta—, el siglo XXI, el XX y el XIX se amalgaman de forma extraña y singular.

Una vez realizada estas mínimas precisiones previas, conviene avanzar una descripción aproximada de cada una de estas economías simultáneas y en presencia aunque, en razón a la claridad, sea necesario distinguirlas separadamente.

1. Una economía de vanguardia

Toda historia tiene su prehistoria. El último cuarto del siglo XX, en medio de

una profunda crisis económica —tradición mantenida a lo largo y ancho de las grandes transformaciones que en el mundo han sido—, se ha convertido en el escenario del alumbramiento doloroso de una nueva sociedad. Una doble oleada centenaria ha conmovido sucesivamente al mundo occidental. Desde la primera revolución industrial (c. 1770-1870), hemos pasado por la fase generalizada de la industrialización que culmina y se agota en 1973. A partir de este momento, entramos en la descomposición progresiva del modelo industrial tradicional. Estos críticos años que ahora vivimos darán paso, sin duda, a un sistema nuevo, a unas formas de producción y a unas relaciones sociales distintas, que algunos teóricos empiezan a denominar la era posindustrial.

En medio del desconcierto actual podemos atisbar ya algunos de los elementos que caracterizarán al futuro. No es ilusorio, por ejemplo, adivinar que el factor trabajo (en el sentido de esfuerzo físico, dedicación, oferta y especialización) sufrirá una radical alteración. Por su parte el ocio, entendido como oportunidad y liberación creadora que se ofrece al hombre, va a convertirse en una realidad más difundida en la sociedad, y a generar —sin que ello signifique una contradicción— nuevas perspectivas de ocupación, por medio de las cuales numerosas personas se incorporarán a un mercado de trabajo absolutamente desconocido hasta ahora. Por su parte, sectores todavía germinales ocuparán un espacio tan amplio y extenso que terminarán casi por cubrir la globalidad de la sociedad futura. Me refiero al mundo apasionante de la comunicación, en el sentido más genérico de este concepto, y a la robótica e informática como aplicaciones inmediatas y concretas.

En definitiva, nos aguarda un siglo XXI en el que imperarán unas formas distintas, unos comportamientos nuevos y un sistema de producción que mirará con la

altanería del progreso a nuestras ruidosas naves industriales y a la amenazadora contaminación de las fábricas que heredamos del pasado.

Ante ese futuro, que en parte ya está aquí, Andalucía ofrece, como ya he insinuado, unas condiciones de privilegio que algunos grupos emprendedores han empezado a aprovechar. La estratégica posición geográfica, que hace de Andalucía una puerta entre continentes; el clima excepcional de nuestra tierra, atravesada de parte a parte por el mítico paralelo 37; la doble y crucial ventana marítima, prerrogativa andaluza en toda la CEE; la escasa contaminación que padece, única deuda contraída por Andalucía con el proceso de industrialización tradicional; y, en fin, el tamaño exacto y justo de nuestras ciudades, son algunos factores que están jugando fuerte y que sirven para comprender un proceso que no ha hecho más que empezar, pero que anuncia ya el próximo siglo y que se manifiesta con fuerza creciente en numerosas actividades y proyectos en marcha.

En la agricultura, por ejemplo, de amplias zonas costeras de Almería, Cádiz y Huelva, así como en las hoyas litorales cálidas de Granada y Málaga o en abrigados valles del interior, se ha venido desarrollando una importante actividad de vanguardia, cuyos frutos son hoy una alentadora realidad. Se trata de una agricultura intensiva, de alta productividad y especialización, que ha incorporado una avanzada tecnología en los sistemas de regadío o en la selección de semillas. Más que de agricultura en sentido estricto, se puede hablar sin precipitación alguna de agroindustria e incluso de biotecnología aplicada a la producción agraria. Todo ello ha capacitado a estos agricultores para introducirse competitivamente en los mercados internacionales. Se trata, en síntesis, de un sector primario que ha sabido integrar, con esfuerzo de imaginación, dosis adecuadas de industrialización y comercialización, generando en su entorno una

La industria, el más castigado de los sectores productivos en la presente crisis, está abriéndose en Andalucía hacia horizontes nada convencionales.

sociedad de nuevo cuño y de mayor bienestar.

Las óptimas condiciones climáticas de nuestras costas atlánticas están permitien-

do ya —con el apoyo de una pionera investigación de base— introducir determinadas variedades de cultivos marinos, cuyas posibilidades pueden ser imprevisibles de cara al futuro. No sólo como creadoras de riqueza y empleo, sino como fuente alternativa de producción alimentaria y como impulsora de nuevas formas de organización empresarial. El desarrollo de tecnología de vanguardia y su aplicación a la acuicultura o a la producción de algas, placton, etc., está elevando la rentabilidad de nuestras costas y ahorrando meses e incluso años en la comercialización de una amplia gama de mariscos, moluscos y crustáceos.

Por su parte la industria, el más castigado de los sectores productivos en la presente crisis, está abriéndose en Andalucía hacia horizontes nada convencionales. La paulatina incorporación de energías renovables y no contaminantes (solar, eólica o marina), junto a la producción de sofisticados componentes informáticos, electrónicos y fotovoltaicos, patentizan esta renovadora orientación de nuestra economía. El reciente convenio entre SECOINSA de Málaga y la empresa japonesa FUJITSU, que implica un importante desarrollo en la fabricación de ordenadores y en programas de formación e investigación, es el más significativo ejemplo pero, afortunadamente, no el único. En la ZUR de la bahía de Cádiz y en algún otro lugar de Andalucía están surgiendo también iniciativas importantes en estos avanzados y estratégicos proyectos.

En el sector servicios, preciso es hablar del turismo. No sólo por su importancia, sino por ser una de las más claras actividades andaluzas en transformación. La infraestructura hotelera en su conjunto está adecuándose a la nueva sociedad del ocio, en la que el turismo y los intercam-

**La economía estancada
en Andalucía es la más extensa
y la que más empleo
y riqueza genera
por el momento.**

bios internacionales van a ejercer un protagonismo indiscutible. Del tradicional aparcamiento y apresurado trasiego de turistas estamos pasando a una estrategia

global que incorpora servicios de alta especialización. En Andalucía se está produciendo ya la transición del turismo convencional a una moderna industria del ocio. No debe entenderse este concepto como mero divertimento, sino como disfrute de una singular calidad de vida y un uso enriquecedor del tiempo libre. Sin olvidar requerimientos tradicionales inmediatos, se han empezado a introducir con éxito aspectos ecológicos, deportivos, gastronómicos, informativos y de participación cultural de nuestros visitantes. No se trata tanto de que «vean» como de que «conozcan»; se les está ofreciendo la oportunidad de que profundicen, convivan y compartan el embrujo singular de esta tierra. Andalucía, por su clima, su patrimonio artístico y su indudable personalidad colectiva, es el sur más atractivo del sur hacia el que Europa retorna.

No se agota en estos perfiles rápidos, en estos trazos puntuales, el carácter vanguardista de la actual economía andaluza. Sirvan, sin embargo, de muestra y argumento en favor de la tesis que proponemos en estas páginas. Más adelante me referiré también a otros problemas aflictivos y lacerantes. Pero no pueden olvidarse o disimularse estos relieves del retablo como si de una excepción se trataran. Andalucía es una tierra con futuro en la nueva sociedad que se adivina ya cercana. Cuanto precede confirma este principio cabal y exacto.

2. *Una economía estancada*

En conjunto, la estructura básica de la economía actual tiene su origen en la segunda fase de revolución industrial y sus consecuencias. Una economía que, a lo largo de más de un siglo, se ha ido expresando en un potente sector industrial con-

vencional, una agricultura extensiva derivada de las desvinculaciones liberales del siglo XIX, y un proceso de aglomeración demográfica y de servicios en torno a las grandes ciudades. Como es bien sabido, esta triple distribución es casi ilusoria; en realidad, se trata de un único conjunto perfecta y sólidamente trabado.

Hasta la reciente década de los años 70 de este siglo, la progresiva evolución de este modelo económico fue evidente, aunque las naturales oscilaciones coyunturales del sistema provocaran periódicas recesiones cíclicas. Al producirse la actual crisis económica mundial, toda esta organización se tambalea. La dinámica interna llega a su culminación. El agotamiento del sistema se hace patente, al evidenciarse la quiebra de gran parte de sus fundamentos productivos, financieros y mercantiles.

La situación, generada inicialmente por la llamada crisis del petróleo, no afectó por igual a todos los sectores, aunque todos de alguna manera se han visto finalmente implicados. De todos ellos, el sector industrial ha sido, tal vez, el más castigado. El coste energético, la difícil comercialización de algunos bienes y productos, y la escasa ductilidad o adaptabilidad de la mano de obra, han incidido decisivamente en la dimensión y en el coste social que aún experimentamos.

Esta impostación industrial de la crisis ha hecho que la misma no tenga en Andalucía unas consecuencias excesivas. La estructura socio-económica andaluza, por sus propias características, quedaba en cierto modo al margen de los efectos dramáticos que la crisis ha tenido en otras zonas.

Ocurre, sin embargo, que las consecuencias de la misma sí nos afectan, y muy directamente. Sería irreal no reconocerlo así. Nuestra industria tradicional ha entrado en una aguda situación de precariedad que,

dada la escasez y debilidad originaria de la misma, podría generar un desmantelamiento de los islotes industriales tan trabajosamente conseguidos. Y con ellos, el de las pequeñas industrias auxiliares surgidas a su amparo.

En una consideración global, más allá de cualquier supuesto inmediato, esta actividad económica tiene hoy en Andalucía una indiscutible importancia. Entre otras razones porque es la más extensa y, desde el punto de vista socio-económico, la que más empleo y riqueza genera por el momento. Me refiero a ella bajo el calificativo de *economía estancada*, porque la actual situación de crisis le afecta decisivamente y porque está exigiendo una urgente terapia de adecuación a los nuevos tiempos.

**La economía
en regresión tiene
como característica
común su carácter
rural.**

Este es el caso, por ejemplo, de la agricultura extensiva, en la que el sistema de propiedad juega al servicio prioritario del enriquecimiento y la productividad. Se

trata, pues, de una agricultura de origen liberal, protagonizada en la actualidad por unos herederos entre los que no han faltado ciertas inquietudes de carácter innovador, al menos en los últimos veinticinco años. Una agricultura que ramifica su hegemonía por las ricas comarcas del interior y, sobre todo, domina —desde Jaén a Cádiz— en la fértil planicie del valle del Guadalquivir. Este amplio sector primario ha alcanzado aceptables niveles de rendimiento y no ha descuidado la mecanización o la incorporación de ciertos avances tecnológicos. Sin embargo, su diversificación productiva ha sido escasa, y muy débil aún la integración empresarial del área ganadera. Junto a algunas de sus virtudes, un apunte también de sus problemas más acuciantes.

Por lo que respecta a la industria y a su actual situación crítica, algo se ha insinuado en párrafos anteriores; añadamos ahora alguna concreción práctica. Aspectos tan determinantes y, en su momento,

dinámicos, como la minería, la construcción naval y la producción textil, pueden servir de ejemplo. Ilustran un mundo económico típicamente tradicional, representativo de esa segunda fase de la industrialización y, en algunos casos, con una fuerte presencia en la Andalucía de los años cincuenta y sesenta. Se diría que la crisis les sorprendió con armas y bagajes, en plena euforia y sin otra perspectiva inmediata que un horizonte indeterminado de expansión. El encuentro con la realidad de una nueva época y de unos nuevos parámetros ha significado un impacto decisivo, cuyas proporciones hubieran sido impredecibles caso de no haberse controlado a tiempo.

Queda por anotar, en este repaso apresurado, el sector de los servicios. Puede reseñarse en este campo al comercio urbano de carácter familiar, cuya sistemática de funcionamiento ha estado dominada por una cierta inercia y docilidad. Empresas por lo general de tamaño medio, que han evolucionado sin grandes alteraciones internas ni aspiraciones relevantes, apoyadas por una clientela de heredadas fidelidades domésticas.

La situación actual de toda esta gama de actividades se resume en una causa —*crisis*— y en una consecuencia —*estancamiento*—. No se puede, sin embargo, permanecer conformista o inactivo ante un diagnóstico tan duro. Está en juego una parte demasiado significativa de la vida económica y social de Andalucía.

3. *Una economía en regresión*

Existe aún una Andalucía lejana y como olvidada. Un área económica de nuestra tierra que, aunque marginal y minoritaria, no podemos obviar en esta descripción que pretende ser globalizadora de la realidad.

Cuando estamos a punto de ingresar en

el siglo XXI, cuando la sensación auroral de un mundo nuevo casi nos deslumbra ya, en Andalucía podemos remontar el tiempo hacia el pasado e introducirnos en un arcaico sistema de valores y referencias.

Esta área económica regresiva está dominada por una agricultura decimonónica y deprimida. Dominación que se ejerce en el doble y férreo sentido de ser, por una parte, el sector hegemónico en el medio y, por otra, de condicionar a los restantes, cuya evolución social y económica pende, en última instancia, de tan escasos impulsos.

Tal vez el carácter más indeleble de esta agricultura sea su dimensión patrimonial. La propiedad agraria, en este caso, tiene como objetivo principal subrayar el «status» social del poseedor, por encima de cualquier otra consideración o finalidad. Es ésta una típica herencia del pasado, cuyas raíces, sólidamente asentadas en principios semif feudales, recorren casi indemnes y soterradas varios siglos de la modernidad. Surgen de ahí todos los demás vicios que le son propios: las ansias de acumulación y privatización, la rutinaria manía de sus esquemas productivos, la deficiente rentabilidad o la carencia de cualquier proyecto de competitividad.

La propia inercia de la agricultura arrastra y condena al resto de las actividades económicas. El comercio, por ejemplo, ayuno de cualquier contabilidad, se resuelve en meras fórmulas de supervivencia, prácticamente agotadas ya. Puede incluso afirmarse que no existe siquiera como negocio. Se trata de un «comercio» al por menor, minucioso y disperso, donde todo y nada se expende, sin ningún tipo de previsión o especialización. Tal precariedad configura un funcionamiento tan singular y mortecino que está llamado a desaparecer bajo la oleada que las nuevas formas de comunicación están generando por todas partes.

Algo similar cabría decir de la actividad preindustrial de algunos talleres, cuyas

Los cambios políticos y sociales en España han generado nuevas condiciones estructurales y de funcionamiento en la mecánica del Estado.

rudimentarias condiciones técnicas les califican para aparecer también en este cuadro general del atraso y la marginación.

Hay una característica común que engloba y afecta a toda esta área económica regresiva. Me refiero a su carácter rural; una considerable aunque discontinua zona de la geografía andaluza, que quedó como a trasmano de cualquier evolución modernizante. Varias razones podrían esgrimirse para explicar este fenómeno. Como no es momento para divagaciones eruditas, voy a centrar el problema aludiendo a dos causas perfectamente concatenadas entre sí.

En primer lugar, la ausencia de comunicaciones. Lejos de las grandes líneas de los intercambios humanos y económicos, estos colectivos se agruparon en los estrechos límites de su entorno natural. Evo-

lucionaron siguiendo usos y costumbres ancestrales, casi ajenos a la renovación de los aires económicos que el mundo exterior experimentaba. Se les separó así des-

de otra posibilidad o perspectiva nueva, a la que llegarían —ya en los años 60— sólo los más jóvenes por el áspero camino de la emigración. Al mismo tiempo, esta sociedad cerrada se vió sometida al dirigismo de un cacicato inveterado y secular. El caciquismo de base agraria moldeó de esta forma y en beneficio propio las relaciones sociales y de producción de unas comarcas empobrecidas por el atraso y mediatizadas por el control de sus señores.

Sin pretensiones de exclusividad o intentos de justificación, estos dos argumentos ayudan a comprender la evolución económica y social experimentada por determinados sectores del mundo rural.

Hacia una estrategia de futuro

Como ya he dicho, en los últimos años se han producido en España trascenden-

tales cambios políticos y sociales. Estas transformaciones han generado nuevas condiciones estructurales y de funcionamiento en la mecánica del Estado y de la colectividad nacional. Interesa destacar, entre otras, aquéllas que se han revelado especialmente significativas:

— la construcción y consolidación del modelo autonómico diseñado en la Constitución, en el que Andalucía juega un papel decisivo como factor dinamizador y solidario;

— el ingreso de España, como miembro de pleno derecho, en la Comunidad Económica Europea, tras un largo período de diálogo y negociación, que abre amplias perspectivas económicas junto a serios desafíos competitivos.

No puede olvidarse además que tales

**La economía de vanguardia
ha provocado
un conjunto social abierto,
dinámico
y emprendedor.**

acontecimientos coinciden con el final de la grave crisis que, desde años atrás, venía aquejando al conjunto de los países occidentales. Este nuevo contexto económico

dotará de condiciones singulares a ambos procesos que, de por sí, encierran algunas dificultades y alentadores desafíos.

En Andalucía, donde hay que sumar el ingrediente expectante del 92, todos estos retos han servido de estímulo y acicate. Al menos, en determinadas áreas decisivas de la actividad socio-económica y en la dimensión profunda de la conciencia colectiva. En efecto, son muchos los que husmean y atisban, un poco como a tientas aún, que Andalucía puede jugar fuerte en la apuesta del futuro. Con mayor precisión tal vez lo han advertido así observadores y analistas perspicaces del exterior.

Un producto previo de esta inquietud tentativa es la Andalucía de hoy, donde se mezclan y confunden las ansias de rumbo nuevo con los lastres que heredamos del pasado. Es una mezcla deletérea, pero es una vez más la mezcla de la heteroge-

neidad, magnífica gala y singular atributo de la complejidad de nuestra tierra. Si queremos ser fiel a ella, sin escamoteos ni disimulos, es preciso apuntar los datos completos del panorama andaluz. No para quedarnos complacientes en él, sino para estimular actuaciones o para transformar y erradicar los aspectos negativos de la realidad.

Una realidad económica que, como hemos visto, se descompone y reparte en tres áreas distintas, sincrónicas y unitarias. Cada una de ellas se corresponde con un tipo especial de sociedad, posee sus propias relaciones sociales internas, y cada una exige una contemplación singularizada por parte de la Administración a la hora de dictaminar sobre sus posibilidades o sus problemas. Muy brevemente ya, esbozaré sólo algunas consideraciones al respecto, dejando abierto este capítulo a futuras y más analíticas conclusiones.

La primera de las economías estudiadas, la llamada economía de vanguardia, ha provocado un conjunto social abierto, dinámico y emprendedor. Un tipo de sociedad en marcha, decidida a abrirse paso y capaz de auto-organizarse, con genio e imaginación, en el arriesgado mundo que se avecina. Sus relaciones sociales íntimas, sus pautas de comportamiento se empiezan a regir por modelos plurales y diversificados, rompiendo poco a poco con sus esquemas originarios.

Esta propuesta tiene que ser contemplada desde la Administración implementando una política de estímulos e impulsos. Tal vez esta afirmación parezca sólo una declaración de buenas intenciones sin compromiso alguno. No es así; estimular e impulsar, desde mi óptica, se resuelve en medidas concretas de apoyo a la comercialización, ayudas puntuales para la instalación de nuevas iniciativas y, sobre todo, establecer un programa riguroso de desarrollo científico y técnico. Esta última

referencia posee un relieve especial. Las actividades pioneras sólo se consolidarán sobre la base de una investigación concienzuda, la incorporación de nuevas técnicas y la preparación solvente de un personal cualificado. Sobre este diseño estamos trabajando, abriéndole sendas al futuro.

El mundo económico dominado por la crisis se expresa en un modelo de sociedad tradicional, cuya principal característica tal vez sea el desconcierto, la confusión. Es ésta una situación típica de las capas acomodadas cuando las alteraciones históricas profundas hacen que los valores y los puntos de referencia dejen de ser fijos y absolutos.

En manos de este sector se encuentra gran parte de la actividad económica presente y el mayor número de empleos disponibles. Ahí radica su enorme peso y la necesidad de establecer, desde los poderes públicos, una clara y adecuada estrategia. Quizá la palabra «reconversión», tan en boga, sea la más apta. Urge la modernización de sus mecanismos —los gerenciales y los productivos— a fin de obtener una reutilización beneficiosa de sus instalaciones. Una operación de este calado resulta complicada y, desde luego, no se sustancia en unas cuantas jornadas. Cualquier proceso de adecuación es siempre sacrificado, pero indudablemente será menos costoso, situándolo con precisión en el marco de una planificación general del mapa económico, así como en un ambiente de distensión y concertación social con las fuerzas empresariales y sindicales implicadas e interesadas en su culminación.

Finalmente, el área económica rural segregada con frecuencia un tipo de sociedad anquilosada y empobrecida; una sociedad

El mundo económico dominado por la crisis, se expresa en un modelo de sociedad tradicional, cuya característica tal vez sea el desconcierto.

replegada en sí misma, condicionada a veces por el temor y, en general, por la reiteración formal de los comportamientos. La precariedad de medios caracteriza y

explica las limitaciones individuales o colectivas de esta sociedad.

Frente a este lejano universo, los poderes públicos deben actuar con especial delicadeza y tacto. Resulta difícil a estas alturas contribuir a la reanimación de una economía en regresión. Pudiera parecer duro, pero una parte considerable de sus peculiaridades productivas han de perder progresivamente el peso que aún mantienen. De lo contrario, ese lastre puede ser una excesiva rémora para el conjunto de la economía andaluza.

De manera alternativa, hay que esforzarse en recuperar originales sectores artesanales que emanan de las profundidades de su historia colectiva y reorientar, es sólo un ejemplo, hacia un nuevo tipo de turismo, formas más vivas de actividad. Asimismo, en beneficio del conjunto de la sociedad rural, las instituciones públicas han de realizar un esfuerzo denodado y

coordinado para dotar a estas colectividades de servicios sociales adecuados. Desde infraestructura de comunicaciones a medios sanitarios, educativos y culturales. Sólo así la incorporación de este mundo y su interna dinamización social, dejarán de ser asignaturas pendientes y olvidadas.

Frente al lamento sin rumbo o al agravio comparativo de otras épocas, se impone una nueva y más completa reflexión, una elaboración teórica global sobre la realidad andaluza de hoy. En ella hay indicios sobrados para incluir junto al realismo, la ilusión. Ambos conceptos deben ir unidos. La ilusión, por sí misma, puede llevar a falsas y frustrantes expectativas. Un realismo incompleto, solitario y adusto, conduce a la impotencia y a la desesperación.

Conferencia pronunciada en las Jornadas «Andalucía hoy», organizadas por la Fundación Pablo Iglesias, el 25 de abril de 1986.

AMERICA LATINA: LA DEMOCRACIA DIFICIL

Giancarlo Pasquini



El ciclo de la dictaduras militares, salvo algún posible contragolpe, parece concluido. Los generales aparecen ante los tribunales (Argentina) a rendir cuentas de sus delitos, o ceden voluntariamente el poder (Brasil) o se verán forzados a cederlo (Chile). Todo cambia o está cambiando, pero las nuevas democracias son todavía frágiles y vulnerables.

Observando a América Latina en esta primera mitad de los años ochenta, se tiene la impresión de asistir a un *film* lleno de *flash-backs* en el que las imágenes del presente coexisten y se superponen a las del pasado. Fotogramas y escenas de una realidad ya conocida se mezclan con imágenes nuevas y en muchos aspectos inéditas.

Nuevo es el clima político que se respira en gran parte del continente: elecciones en vez de golpes, paso ordinario de los poderes de regímenes militares autoritarios a gobiernos civiles, el voto popular que sustituye a la fuerza, la competencia entre partidos, el pluralismo de las ideas y las opiniones, el consenso como legiti-

mación del poder. Nuevos líderes que no se parecen en nada a los viejos caudillos del pasado, ocupan el proscenio y recitan su papel según el texto y las reglas de la

**A finales de los setenta,
el 80 % de la población
latinoamericana estaba gobernada
por regímenes
autoritarios.**

mente «Occidente», se siente en cierta forma hijo ilegítimo de la cultura occidental y no se identifica plenamente en ella. Un continente de dualismos entre

democracia. Pero son inéditas las secuencias que muestran a generales y almirantes desfilando por el banco de los acusados para responder de los crímenes cometidos, como está sucediendo en Argentina, o bien siendo destituidos de su autoridad como ha sucedido en Perú.

continuidad y cambio, entre lo viejo que nunca acaba de morir y lo nuevo que no logra nacer del todo; entre una cultura tradicional —autoritaria y jerárquica— que resiste y no se resigna a sucumbir, y nuevos modelos culturales que no consiguen afirmarse. Un continente de contrastes violentos entre riqueza y miseria; entre un subdesarrollo de Tercer Mundo en algunas áreas y un desarrollo industrial avanzado en otras; entre el inmovilismo arcaico de las zonas rurales en donde sobreviven relaciones de tipo feudal, y el dinamismo de las áreas urbanas en donde avanzan impetuosos procesos de transformación de las costumbres, de secularización y modernización.

Pero, junto a estas imágenes, pasan otras de signo distinto que turban la visión de una América Latina encaminada a superar sus taras históricas y que nos recuerdan que el camino de la democracia será arduo y sembrado de obstáculos. Son las imágenes tradicionales que los periódicos nos han acostumbrado a relacionar con Latinoamérica: convulsiones, violencia y violaciones de los derechos humanos que continúan en algunos países, no obstante el cambio de régimen; guerrilla y represión que se suceden y se persiguen en una espiral perversa; sociedades divididas e irreconciliables que hacen difícil la gobernabilidad y acentúan la inestabilidad política; y además la injusticia, la bancarrota económica, la hiperinflación, una deuda externa terrorífica, que son en gran parte la herencia más desastrosa de los regímenes militares y que hacen extremadamente vulnerables a los nuevos gobiernos civiles e hipotecan el futuro del continente.

Pero, dentro de esta caleidoscópica realidad, Latinoamérica vive también una aceleración del tiempo histórico. Muchas cosas han cambiado o están cambiando, y los viejos clichés y estereotipos con los que estábamos acostumbrados a observar la realidad latinoamericana ya no sirven en la actualidad. Se han convertido en lentes deformantes que obstaculizan la comprensión de la realidad.

Señales ambivalentes, pues, que enturbian el cuadro de conjunto y hacen incierto el juicio y el análisis. Un continente complejo y contradictorio por excelencia, que encierra en sí dualismos y contrastes violentos, y en donde los procesos de modernización y transformación son necesariamente partos difíciles que a menudo han exigido intervenciones cesáreas. Un continente que para colmo vive la ambigüedad de una identidad no definida, que sabe que no es «Oriente» y tampoco «Tercer Mundo», pero que no es completa-

Uno de los cambios más notables —que es reflejo de otros más profundos y subterráneos— concierne a la esfera política e institucional. El ciclo de las dictaduras militares —aparte algún posible contragolpe— parece sustancialmente concluido; se ha abierto una fase de rearticulación de las fuerzas sociales y de las relaciones políticas que ha producido el fenómeno de la «transición a la democracia». Cualquiera que sea el juicio sobre los cambios ocurridos o en vías de producirse, no se pueden negar algunos hechos. A finales de los años setenta, el 80 % de la población latinoamericana estaba gobernada por regímenes militares autoritarios o por

arcaicas dictaduras personalistas. Sólo en Venezuela, Colombia y Costa Rica sobrevivían gobiernos civiles electos que conservaban las apariencias de un sistema representativo. Actualmente la situación ha dado la vuelta. El 90 % de la población del continente es regida por gobiernos constitucionales, llegados al poder a través de elecciones libres. En la práctica sólo Chile y Paraguay permanecen bajo el yugo de dictaduras que son en realidad autocracias. En el espacio de pocos años, en once países del continente (Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, Guatemala, Panamá, Perú, El Salvador, República Dominicana, Uruguay) se han producido cambios de régimen de carácter «democrático»; en uno (Nicaragua) de carácter «revolucionario». En cinco países (Bolivia, Ecuador, Honduras, Perú, República Dominicana) se ha dado la alternancia regular de un gobierno civil a otro democráticamente elegido, después de concluir el primer mandato constitucional; en otros se han realizado elecciones de *middle-term* mediante la renovación parcial de la Cámara de diputados (Argentina) o administrativas (Brasil). En un solo país (Panamá), el presidente electo, de forma obviamente fraudulenta, ha sido destituido mediante un golpe palaciego.

Estos simples datos bastan para dar la dimensión y la extensión del fenómeno, pero dicen poco sobre su naturaleza y características. Para evitar cualquier generalización indebida, nos ocuparemos únicamente de los grandes países de Suramérica, dejando fuera de nuestro análisis a Centroamérica y al área caribeña, que presentan características peculiares a nivel económico, social y cultural y que se hallan enfrentadas actualmente a procesos de polarización política interna, y de interferencias externas, difícilmente situables en un cuadro democrático. Pero incluso con estas limitaciones sigue resultando problemático hacer un discurso unitario sobre Latinoamérica por la evidente razón

de que se trata de un continente complejo y diferenciado, que engloba una serie muy variada de procesos históricos y de situaciones políticas.

Antes de pasar a ilustrar la naturaleza y características de los procesos de transición a la democracia, es oportuno dar un paso atrás para encuadrar históricamente el contexto en el que aquéllos se insertan. Los años sesenta —iniciados bajo el signo de la victoria de Castro en Cuba en 1959— fueron también los años del «desarrollismo», de las tentativas de desarrollo económico y de las guerrillas. Ya desde entonces América Latina parecía «poseída» por una voluntad de cambio y por la expectativa de rápidas transformaciones. Ya desde entonces, bajo la influencia de la Alianza para el Progreso de Kennedy, crea-

Sigue resultando problemático hacer un discurso unitario sobre Latinoamérica por la evidente razón de que se trata de un continente complejo y diferenciado.

da como alternativa al castrismo, Latinoamérica vivía una etapa de apertura democrática y de modernización económica. Parecía que el desarrollo económico y

el desarrollo político debieran caminar juntos y que la industrialización y la democracia fuesen proyectos inseparables.

La democracia fue pensada entonces por los teóricos del «desarrollismo» de la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aníbal Pinto, como resultado de la modernización de la sociedad, inducida por un crecimiento económico sostenido, por el desarrollo de fuerzas empresariales locales y por la integración económica a escala continental. Gobiernos reformistas —como los de los democristianos Frei y Caldera en Chile y Venezuela, de Kubitscheck y Frondizi en Brasil y Argentina— trataron de poner en práctica las recetas «desarrollistas» de la CEPAL, bien a través de una política de «sustitución de las importaciones» que permitiese ampliar las bases industriales de aquellos países, o bien mediante una política de redistribución del ingreso para permitir la cooperación en el sistema de nuevos estratos

sociales (capas medias urbanas, clase obrera organizada) que se encontraban al margen del mismo.

Pero muy pronto se advirtió que estas expectativas no podían realizarse. Por diversas razones, la reestructuración de los modelos de desarrollo con miras a una centralización urbana-industrial generó en los países más grandes del continente (los del Cono Sur) crisis sociales y políticas aún no resueltas.

«Toda la historia de esta segunda modernización» —escribe el sociólogo argentino Juan Carlos Portantiero— «podría ser leída como una secuencia traumática de búsqueda e incorporación y de intentos de exclusión de nuevos sectores sociales en los modelos de consumo y de participación política»¹. El proyecto «desarrollista» fracasó porque se encontró aprisionado por unas tenazas y resultó triturado. Por una parte fue incapaz de hacer frente a las «crecientes expectativas» que había suscitado y de absorber las demandas, durante tanto tiempo desatendidas, de mejoras sociales, creación de nuevos puestos de trabajo, aumento de los salarios que las capas medias y las clases populares reclamaban. Por otra parte fue fuertemente obstaculizado tanto por la derecha, que veía amenazados algunos de sus intereses, como por la izquierda, que lo consideró un proyecto de racionalización capitalista, inspirado por las odiadas multinacionales para apretar aún más en torno al cuello de América Latina la soga de la dependencia y de la subordinación al detestado imperialismo *yanqui*. Incluso cuando un gobierno más radical, como el de Allende en Chile, intentó forzar con un programa de reformas estructurales los límites propios del proyecto «desarrollista», se vio claramente que una democracia simplemente redistributiva **tiende a devorarse a sí misma y crea tensiones que luego provocan el uso de la fuerza.**

La escena política de los años sesenta en

Las ideas de la izquierda radical de los sesenta contribuyeron a la «desvalorización» de la democracia en América Latina.

América Latina fue profundamente transformada por efecto de las teorías y las prácticas de los nuevos grupos de izquierda, surgidos al amparo de la revolución cubana e influidos por las ideas castristas y guevaristas. En todo el continente se afirmó el mito de la violencia revolucionaria y por doquier se encendieron focos de guerrilla. Jóvenes idealistas, estudiantes, intelectuales, curas conciliares, en algunos casos incluso militares, creyeron posible forzar los tiempos de la historia y acabar con las escandalosas injusticias de sus países con la antorcha de la lucha armada. Utopía e ideología, militarismo y culto a la violencia se fusionaron en una mezcla explosiva. Esta nueva izquierda, que se diferenciaba profundamente de los PC tradicionales, no llegó jamás a ser una realidad alternativa de poder en ningún país de América Latina, pero ocupó con sus empresas las primeras páginas de los periódicos en Europa y dio la impresión, a una izquierda dispuesta a engañarse, de que había llegado la hora de la «revolución continental» (basta releer las páginas de Régis Debray). Dentro de sus países los grupos armados estaban totalmente aislados de las «masas» en nombre de las que decían combatir. La población campesina fue indiferente y a menudo hostil, las capas medias se asustaron y refluieron hacia posiciones de derecha, mientras que las clases dominantes percibieron la radicalización de izquierda como una amenaza directa a sus intereses y no titubearon en echarles encima la fuerza del ejército. Las guerrillas fueron derrotadas en todas partes, pero las consecuencias que provocaron fueron devastadoras.

En primer lugar, en el plano teórico, las ideas de esta izquierda radical contribuyeron a la «desvalorización» de la democracia en América Latina. De hecho

su influencia se extendió mucho más allá del estrecho círculo de sus militantes y contaminó a gran parte de las élites intelectuales y académicas, vastos sectores de

la Iglesia, de los partidos políticos no marxistas, del mundo juvenil y universitario. El paradigma teórico, del que aquélla se nutría, partía de la premisa de que en La-

**La práctica del terrorismo
y de la lucha armada contribuyó
a pavimentar el camino
a los regímenes
autoritarios.**

tinoamérica ya no había lugar para políticas reformistas y que se concedía prioridad a las transformaciones sociales —realizadas desde arriba y por vía revolucionaria— más que a la representación política democrática. «Fascismo o revolución» fue el lema teorizado y predicado como única alternativa posible. El valor de la democracia era negado y ridiculizado, y se afirmó con notable desenvoltura que la diferencia entre un régimen democrático y una dictadura era puramente formal, y servía para disfrazar la dominación de las clases poseedoras, locales o extranjeras. Veamos cómo resumió esta idea uno de los principales dirigentes de la guerrilla venezolana, Douglas Bravo: «Hoy se ha tenido en todo el continente la demostración de que existe un solo sistema neocolonial de explotación, que orienta su saqueo tanto a través de las dictaduras militar-policíacas como de las dictaduras de democracia representativa»².

En segundo lugar, la práctica del terrorismo y de la lucha armada contribuyó a pavimentar el camino a los regímenes autoritarios. La represión de la guerrilla fue de hecho en algunos casos (Perú, 1968; Uruguay, 1973; Argentina, 1976) la ocasión que proyectó a las fuerzas armadas al escenario político empujándolas a adueñarse del poder. En otros casos fue sólo un pretexto indirecto, pero de cualquier modo, como escribe el historiador Ricardo Sidicaro: «Con la aparición de las nuevas izquierdas, los militares vieron reforzadas sus posiciones en todos los países de la América Latina. Si hasta ahora los golpes de Estado expresaban los intereses de sectores acaudalados o de camarillas militares, con el “peligro castrista” las fuerzas armadas latinoamericanas hallaron una justificación de alcance más universal para su ingerencia en la política»³.

Los años setenta fueron, en consecuencia, la década del militarismo triunfante, del autoritarismo, de la violencia sistemática e institucional, de la violación pla-

nificada de los derechos humanos, con su séquito de horrores, muertes, «desaparecidos», torturas. En vez del socialismo, del «hombre nuevo», de la «sociedad armónica» y de la justicia social, llegaron los militares y con su «orden» destruyeron incluso lo poco bueno que existía en las experiencias democráticas de los años sesenta.

Cierto que el autoritarismo no es nada nuevo en América Latina. Pero el de los años setenta adopta características distintas del pasado. No ya el autoritarismo paternalista y arcaizante de los regímenes despóticos y autocráticos, tan caros a la literatura latinoamericana (desde el *Señor presidente*, de Miguel Ángel Asturias, a *El otoño del patriarca*, de García Márquez, y a *Yo el supremo*, de Roa Bastos), sino un nuevo tipo de autoritarismo con su proyecto económico y político propio. Según los análisis de los más acreditados sociólogos y politólogos latinoamericanos (como Fernando H. Cardoso y Guillermo O'Donnell), el nuevo autoritarismo de los años setenta nace bajo el impulso de segmentos de la burocracia civil y militar que intentan la formulación de políticas de desarrollo en el contexto de una estrategia de internacionalización de la economía. Además de adoptar formas políticas autoritarias, dice Cardoso, estos regímenes persiguen el objetivo de acelerar el crecimiento económico por medio de una inserción en la división internacional del trabajo con el fin de permitir la industrialización y la integración de economías periféricas en el mercado internacional. Pero, para realizarse, este proyecto exige la eliminación del conflicto social y de la contestación política (por lo tanto de las instituciones democráticas, de los partidos, de los sindicatos), en cuanto que de los frutos del crecimiento económico podrían benefi-

ciarse solamente limitados grupos sociales, con la exclusión de las grandes masas de la población. En cierto sentido, por lo tanto, la instauración del autoritarismo era necesaria por el ritmo del desarrollo económico y por las exigencias de la acumulación.

Según estos autores, las características de los regímenes burocrático-autoritarios han sido: a) un proceso político de fortalecimiento de la autoridad central del Estado y de su capacidad decisoria, y b) bajo control directo de las fuerzas armadas, que ejercen el poder en cuanto institución y no en cuanto jefes militares (la excepción es el Chile de Pinochet), con el fin de reorientar la economía y articularla según las nuevas formas del capital multinacional. Durante este proceso el régimen autoritario debe justificar las formas políticas adoptadas (negación del Estado de Derecho, de las libertades políticas, de los derechos individuales, etc.) y lo hace presentándose, ideológicamente, en el contexto de la lucha por la conservación de los valores occidentales y cristianos, amenazados por el comunismo.

Se puede compartir o no compartir esta interpretación «economicista» (y de hecho ha sido discutida por diversos grupos), pero no se puede negar que en algunos países (Brasil y Perú sobre todo) los regímenes militares han tenido una función modernizadora, aunque de signo distinto. En Brasil, además del *boom* económico de los años entre 1968 y 1973, cuando se registraron tasas de crecimiento «japonés», se creó un capitalismo dinámico con tecnologías punta en algunos sectores, se realizaron colosales proyectos infraestructurales, algunos seguramente inútiles pero otros destinados a dar frutos duraderos, se reforzó el papel del Estado como centro de integración de este país-continente. Aunque todo esto se realizó con costos sociales muy elevados, el Brasil de los años ochenta está entre los diez países más in-

dustrializados del mundo y, no obstante la crisis de estos años, no es ya el gigante de pies de barro que era hace veinte años.

En Perú, con el gobierno del general Velasco Alvarado (1968-73) se produjo una variante nacionalista y populista del autoritarismo militar. Se emprendieron reformas importantes, como la reforma agraria, la reforma de las empresas industriales, transformadas en entidades auto-gestionadas, nacionalizaciones, estímulo a la «propiedad social». Fueron reformas hechas desde arriba, fruto del voluntarismo de un grupo de oficiales que querían cambiar el país sin cambiar la concepción autoritaria del poder propia de las fuerzas armadas. Esto explica la facilidad con que muchas de estas reformas fueron abandonadas o arrinconadas en el siguiente período de gestión militar (1975-80), aunque de todos modos dejaron su huella en la sociedad peruana y en el imaginario colectivo de las clases más pobres.

La década de los regímenes militares (dos décadas en el caso de Brasil) ha modificado, para bien y para mal, la morfología de las sociedades latinoamericanas. Cualquiera que sea el juicio político que se quiera dar de ellas, hay que reconocer, con Cardoso, que en este período se han producido cambios difícilmente reversibles: «Los regímenes autoritarios han proseguido e incluso acelerado el proceso de transición desde una sociedad tradicional a una sociedad de masa o, mejor aún, el paso de una economía capitalista competitiva a una economía internacionalizada y oligopolista. Con los nuevos modelos de crecimiento económico se ha transformado también el modelo social y se ha llegado al surgimiento de lo que los sociólogos llaman sociedades urbanas de masa. En su interior las clases siguen siendo la matriz de la organización social, pero la fragmentación provocada por la jerarquía de los salarios y por las oportunidades dentro de cada clase (a lo que se añade la tec-

**Los años setenta fueron
la década del militarismo,
del autoritarismo, de la violencia
sistemática
e institucional.**

nificación del modo de producir y de vivir, junto a la revolución y difusión de los medios de comunicación de masas) redefinen todo el comportamiento social... La gran empresa, el Estado, los medios de comunicación de masas, son los mecanismos que organizan la vida social. Al contrario del partido, el sindicato, la escuela—instituciones características de la democracia liberal— han perdido su influencia»⁴.

En este punto el problema es preguntarse por qué los regímenes autoritarios, a los que se había atribuido una larga duración, entran en crisis a comienzos de los años ochenta, reconociendo haber agotado su propia tarea, y deciden ceder el paso. Naturalmente las causas varían de país a país y reflejan dinámicas políticas internas difícilmente generalizables. A grandes rasgos indicaremos tres causas principales a las que podrían sumarse otras:

1) La causa determinante debe buscarse en el fracaso de su proyecto económico y de las políticas neoliberales practicadas por ellos. No obstante haber basado su propia legitimidad en los resultados económicos conseguidos, y a pesar de su carácter «excluyente» y el control represivo ejercido sobre las clases populares y la sociedad en su conjunto, estos regímenes no lograron asegurar el desarrollo y la estabilidad de sus sociedades, mientras que negaron y conculcaron sin más la democracia y los derechos humanos. Esto los privó de la legitimación y del consenso tácito de que gozaban.

2) Los errores cometidos en la gestión de la economía, evidenciados por el crecimiento incontrolado de la deuda externa, del déficit estatal, de la inflación, han provocado divisiones en el seno de las fuerzas armadas y conflictos de intereses entre éstas y los sectores civiles que apoyaban al régimen, conduciendo a una erosión progresiva de la coalición dominante. Sectores militares, percibiendo el carácter

agudo de la crisis y no estando dispuestos a soportar sus costos sociales y políticos, deciden compartir la carga con la sociedad civil, promoviendo una «apertura» política, en contraste con otros sectores que habrían deseado un endurecimiento autoritario ulterior. Al mismo tiempo, las élites civiles (burocracia, sectores empresariales, clases medias), que habían proporcionado la base de apoyo al régimen, se desolidarizaron de él, considerando llegado el momento para otras políticas que prescindan de los condicionamientos de los militares. La ruptura de la coalición dominante que así se propicia provoca una ulterior pérdida de legitimación y vuelve urgente un cambio político.

3) Las presiones desde abajo, provenientes de una sociedad civil que en el entretanto se ha reforzado y movilizó para los más diversos objetivos (luchas por el respeto a los derechos humanos, por la

La década de los regímenes militares ha modificado, para bien y para mal, la morfología de las sociedades latinoamericanas.

amnistía, por la libertad de prensa, el derecho de huelga, etc.) y de las fuerzas de oposición política que se han reorganizado y han recommenzado a desempeñar su papel, ponen en dificultades a los militares que se hallan frente a la alternativa de recurrir a una represión generalizada, que puede resultar insostenible para el mantenimiento de la coalición, o bien de acoger en parte las exigencias de la sociedad y de los partidos y buscar «una salida negociada» a la crisis autoritaria.

Es esta segunda solución la que prevalece en casi todos los países del continente (desde Brasil a la Argentina, de Perú al Uruguay) y asume la forma de una liberalización controlada desde arriba. Son los militares quienes dictan las reglas del juego, quienes establecen modalidades, tiempos y reglas de la transición, que contratan con los partidos políticos de oposición, a menudo reagrupados en coaliciones multipartidarias, la salida indolora del sistema autoritario. No se produce ni el hundimiento del régimen, ni una ruptura polí-

tica visible, sino un paso controlado y gradual hacia elecciones en general libres y competitivas, sin limitaciones particulares ni interferencias de los anteriores de-

tentadores del poder, o sea de los militares. La solución de la crisis autoritaria y de la instauración democrática ha obedecido a una serie de variables diversas de un país a otro, que sería demasiado largo examinar. En general puede decirse de todas formas que, aunque la salida del autoritarismo se haya producido a través de los mecanismos típicos de la «democracia *octroyée*», o sea concedida desde lo alto, no ha sido este el punto de llegada del proceso sino solamente su punto de partida. Una vez restauradas las instituciones democráticas, éstas han demostrado poseer mucha más fuerza, y más agarre con la sociedad, de cuanto muchos observadores escépticos habían previsto.

La geografía política de América Latina, como se ve, ha cambiado, pero, ¿qué decir de la naturaleza de estos cambios? En el debate que se ha abierto son dos las orientaciones dominantes. La primera identifica en estas transformaciones nada menos que un ciclo de aquella eterna «oscilación del péndulo» entre un régimen autoritario de dominante militar y un régimen civil, más o menos democrático, que caracteriza desde hace cincuenta años la historia de América Latina. La segunda percibe ahí una novedad importante, no una simple etapa coyuntural, sino el comienzo de una transformación más profunda que afecta a la política, las instituciones, la cultura, la sociedad civil.

Entre los defensores de la primera tesis hay dos corrientes de pensamiento, distintas entre sí pero que llegan a las mismas conclusiones. Algunos politólogos de la escuela liberal, predominantemente anglosajones, basan su argumentación en una especie de «fatalidad geográfica» que asigna a la democracia un espacio geográfico determinado de una vez por todas, y una

Los regímenes militares no lograron asegurar el desarrollo y la estabilidad de sus sociedades, mientras que negaron y conculcaron la democracia y los derechos humanos.

serie de requisitos sin los cuales aquélla no puede existir. Según esta tesis, es muy difícil que una democracia pluralista de tipo occidental pueda arraigar y crecer en Amé-

rica Latina, porque el contexto histórico, la cultura política, las condiciones sociales, económicas e incluso antropológicas son tan distintas de aquéllas en que nació y se desarrolló la democracia que la vuelven impracticable. El *background* histórico común a todos estos países, la herencia de la colonización española y de una cultura extensamente impregnada de valores como la jerarquía, la autoridad, el personalismo, los vínculos de parentesco y el clientelismo, el centralismo estatal, han forjado naciones y sociedades naturalmente predisuestas al autoritarismo e impermeables a los valores de la democracia. En sociedades de este tipo, con tradiciones y registros culturales similares, el sistema político no puede sino oscilar entre el populismo de los viejos y nuevos «caudillos» y el autoritarismo de las oligarquías y de las instituciones militares. Pueden estar en el límite de los «cambios revolucionarios» como en Cuba y en Nicaragua, que no alteran la esencia de aquella cultura autoritaria, sino que más bien la refuerzan e institucionalizan. Pero es difícil que en sociedades de este tipo pueda germinar una democracia de tipo occidental.

Otros autores, de escuela marxista tanto latinoamericana como europea, ponen el acento más que sobre los factores culturales sobre los estructurales. La naturaleza predadora del capitalismo ibérico, la ausencia de la revolución burguesa, la institución del latifundio que da vida a un tipo de relaciones sociales y políticas de tipo oligárquico, la concepción patrimonialista del poder, han engendrado un modelo de dominación cuyos pilares son el Estado, con sus aparatos represivos, las burguesías locales y el imperialismo norteamericano. Mientras subsista esta estructura social y esta organización del poder, el contenido de la democracia será pura-

mente «formal», un disfraz para ocultar la realidad de un sistema de dominación clasista y autoritario.

Semejante razonamiento, que roza el más puro historicismo, sobreentiende que la democracia no puede existir más que en ciertas condiciones históricas, las cuales no se reproducen. Por eso cualquier tentativa de reiventarse la democracia estaría condenada al fracaso.

El principal defecto de estas teorías consiste en su fijeza y estaticidad, casi como si los datos de la realidad fuesen inmutables. Ciertamente es que hasta ahora la democracia en América Latina ha tenido una vida penosa e incierta, ha sido más la excepción que la regla, no ha logrado implantarse de manera estable como régimen político realmente representativo de las diversas instancias sociales e intérprete de la soberanía popular.

En algunos casos la manipulación de sus principios constitutivos ha sido tan descubierta y el rendimiento de sus instituciones tan bajo que

han acabado por desacreditar la idea misma de democracia. ¿Pero significa esto que siempre será así y que la democracia no es susceptible de desarrollo en América Latina?

El escritor mexicano Octavio Paz afirma que, aunque la democracia en América Latina haya sido vilipendiada, traicionada, ultrajada, su autoridad moral ha permanecido indiscutida y casi todo lo bueno que se ha hecho desde hace siglo y medio se ha hecho bajo un régimen democrático. «Es significativo» —escribe Paz— «que la frecuencia de los golpes de Estado no haya oscurecido jamás la legitimidad de la democracia en la conciencia de nuestros pueblos». Pero también es cierto, como dice el politólogo brasileño Luciano Martins, que «la democracia ha sido siempre un ideal proclamado, como si el lugar posible de su existencia fuese el de los ideales»⁵. Y Juan Carlos Portan-

tiero, por su parte, añade que el rasgo común de los países latinoamericanos «es el carácter liberal, constitucionalista y republicano que preside la organización de los Estados. Pero otro rasgo común es el secular divorcio entre realidad legal y realidad política»⁶.

Vale la pena detenerse en este aspecto para ver cómo y por qué se ha realizado este divorcio y por culpa de quién. Sintéticamente podría decirse que en América Latina se ha producido un extraño fenómeno por el cual quienes se presentaban como defensores de la democracia eran aquéllos que rechazaban cualquier reforma social, mientras quienes auspiciaban las reformas sociales despreciaban la democracia en cuanto «burguesa» y concebida únicamente como una vitrina jurídica tras la cual se ocultaba la realidad de las relaciones oligárquicas y clasistas. Es-

Una vez restauradas las instituciones democráticas, éstas han demostrado poseer mucha más fuerza de cuanto muchos observadores escépticos habían previsto.

ta disociación entre preocupaciones sociales y democracia, aunque presente en otros contextos y en otros países, adopta en América Latina un carácter distinto y más

grave. Distinto porque toda ella se juega en el seno de las élites y no llega a traducirse en un pluralismo político basado en un sistema estructurado de representación de los intereses. A falta de partidos reformistas modernos, capaces de recomponer la fractura y de reconciliar la democracia con las reformas, es el populismo el que provee a ello en América Latina, pero a su manera: o sea, dejando a las capas populares de las masas de maniobra carentes de representación política propia y aún más dependientes del Estado. Más grave aún en cuanto que esta disociación asume un fundamento ético que podría formularse así: la abolición de las desigualdades sociales debe venir antes de cualquier otra cosa, aunque para esto haya que renunciar a libertades, de las que no puede disfrutar más que un restringido estrato de privilegiados. Esto ayuda a comprender por qué esta *forma mentis* se extiende más allá de quienes operan la

misma disociación en nombre de una cierta filosofía de la historia e implica a gran parte de las élites intelectuales incluso no marxistas y a vastos sectores de la sociedad civil. A falta de defensores a la izquierda, la idea de democracia es adjudicada a la derecha, que la utiliza como fachada institucional, sin que eso le impida desfigurarla o desembarazarse de ella cuando sus intereses dejen de coincidir con aquella superestructura jurídica o se vean amenazados.

Partimos de la convicción de que algo ha cambiado en estos años en América Latina y que la fase posautoritaria se caracteriza por un intento serio de reimplantar un sistema democrático que no sea la simple restauración de la situación anterior. ¿Cuáles son los elementos que aportamos para apoyar esta tesis? Resumimos algunos:

1) Dos mitos se han derrumbado en América Latina como resultado de la experiencia histórica vivida en las últimas décadas. El primero es el mito de la «revolución», que parece no tener ya curso en los grandes países del continente. El segundo es el mito de la función demiúrgica atribuida a las fuerzas armadas y a su intervención en la vida política. Contra estos dos extremos las sociedades latinoamericanas están suficientemente vacunadas. Cada vez que se les ha dado a estas sociedades la oportunidad de expresarse mediante el voto, han manifestado un claro repudio tanto al autoritarismo en todas sus formas como al extremismo revolucionario. Sus preferencias se dirigen mayoritariamente hacia partidos centristas, liberales o reformistas que auspician cambios graduales en un cuadro de convivencia civil y de evolución pacífica. Fenómenos como el de «Sendero luminoso» en

Perú, o el de «M-19» en Colombia, deben considerarse como hechos residuales y aislados (además de ambiguos) que la inmensa mayoría de la opinión pública,

En América Latina se ha producido un extraño fenómeno por el cual quienes se presentaban como defensores de la democracia eran aquéllos que rechazaban cualquier reforma social.

incluso de izquierda, condena. Análogamente, no hay lugar para nuevas experiencias autoritarias, aunque no sea posible excluir en los países más débiles intentos de retorno de los militares. Después de la experiencia fallida y en algunos casos traumática del poder militar, las fuerzas armadas ya no son consideradas como lo fueron en el pasado, como recurso extremo al que recurrir en caso de conflictos y tensiones incurables. Sobre ellas pesa un descrédito proporcional a las derrotas y fracasos que han propiciado. Donde más graves han sido las derrotas y mayores los fracasos, como en Argentina, el poder político ha logrado, con el convencido apoyo de la opinión pública, emprender procesos de «desmilitarización» de la vida política para restablecer la supremacía del poder civil sobre el militar. El proceso y la condena de los jefes de las tres juntas militares argentinas, además de hacer justicia, ha servido para remachar este principio. Y en este sentido está destinado a tener un alto valor simbólico en toda América Latina. Por otra parte, no hay que pasar por alto la evolución interna de las fuerzas armadas, donde las corrientes favorables al regreso a los principios de la profesionalidad han ganado ventaja sobre los sectores más politizados en sentido antidemocrático y golpista (Brasil, Uruguay, Perú).

2) En el mismo contexto, se asiste en América Latina a una recuperación y revalorización de la democracia. La misma experiencia de la lucha política en los años oscuros de las dictaduras militares, las atrocidades de la represión —con los d. a. mas y las crueldades que la acompañaron— hicieron madurar una conciencia política nueva y restituyeron a la democracia todo su valor como sistema capaz de preservar y garantizar los derechos

humanos, pero también relaciones políticas y sociales más articuladas y justas. Basta pensar en la larga lucha del pueblo chileno que, más allá de todas las divisio-

nes, ha puesto en el centro de sus reivindicaciones la exigencia del restablecimiento de la democracia. Y por este objetivo ha pagado un elevado tributo de sangre. En

En todo el continente se advierte una nueva conciencia y madurez sobre la importancia y la insustituibilidad de la democracia.

todo el continente se advierte una nueva conciencia a nivel de pueblo y una nueva madurez a nivel de élites intelectuales sobre la importancia y la insustituibilidad de la democracia que se expresa de diferentes modos. Ante todo como participación en las elecciones, que ha destruido la leyenda sobre la apatía e indiferencia de las masas latinoamericanas. Los porcentajes del abstencionismo, muy altos en el pasado, se han reducido drásticamente, signo de que las elecciones no siguen siendo consideradas un ritual inútil. En segundo lugar, como afirma Norbert Lechner, la *intelligentsia* latinoamericana ya no se inclina actualmente a «flirtear» con la revolución y ha redescubierto que la vituperada democracia burguesa es, sin duda, preferible a otros regímenes, cuyo atractivo parecía irresistible en el pasado. Incluso las capas empresariales más modernas de algunos países, como Brasil, han apoyado la transición, considerando que sus intereses se hallan mejor garantizados en un régimen en el que las reglas del juego son más transparentes, contraponiendo al estatismo de los militares las exigencias de la libre empresa. Obviamente esto no significa que todos estos sectores tengan una concepción igual de la democracia, pero aquí lo que importa es subrayar que todos ellos reconocen que la democracia «formal» es tan importante como la «sustancial».

3) La sociedad civil y el sistema de los partidos presentan en América Latina déficits considerables. En general los partidos tienen escasas raíces y esporádicas vinculaciones con los intereses que son llamados a representar. Las organizaciones sociales de los tipos más diversos presentan relaciones, recursos y formas de asociación de tipo embrionario. La participación en estos movimientos sigue sien-

do minoritaria, mientras que, en general, prevalece un tipo de representación basado en relaciones de clientelismo y jerárquicas, que son señal de un desarrollo

democrático incompleto. Pero no obstante estas limitaciones, ha habido en estos años un crecimiento y una mayor articulación tanto del sistema de los partidos como de la sociedad civil. Salidos de la clandestinidad o del congelamiento en que fueron mantenidos durante tantos años, algunos partidos, como por ejemplo la Unión Cívica Radical de Raúl Alfonsín en Argentina, o el APRA peruano, han conseguido reorganizarse y renovarse, sellando en parte aquella fractura de que hablábamos entre democracia y reformas sociales. Las elecciones y la alternancia han llevado a los vértices del poder estatal a un personal político en buena parte nuevo, más preparado, no ligado a viejas lógicas de poder, y de una fe democrática más probada. Pero, sobre todo, han crecido y se han fortalecido las organizaciones surgidas del seno de la sociedad civil (sindicatos, comunidades cristianas, movimientos por los derechos humanos, por la amnistía, etc.) que han conducido primero una dura lucha contra el poder autoritario, para luego ser reconocidas como sujetos sociales autónomos, portadores de un derecho de participación y de control sobre las decisiones del poder político. La Iglesia católica, bien sea como institución o como inspiradora de diversos movimientos sociales, ha desempeñado un papel de primer plano en la contestación del poder autoritario en muchos países (desde Chile a Brasil, pero no en Argentina), y ahora actúa como «conciencia crítica» de las nuevas instituciones democráticas.

4) Ya se ha dicho cómo el paso del autoritarismo a un régimen democrático se ha dado a través de un «pacto» que permitió la salida de escena de los viejos detentadores del poder y la celebración de elecciones, en general correctas, que han

premiado a los partidos de centro, moderados o reformistas. En este sentido, el modelo de la transición española ha hecho escuela en América Latina y, donde no ha sido posible estipular una solución pactada, como en Chile, no ha habido transición política, sino una radicalización del enfrentamiento que amenaza con desembocar en una ruptura violenta. También este método es profundamente innovador en la cultura política latinoamericana e indica que se va difundiendo la convicción de que el único elemento de legitimación del poder es el consenso y no la fuerza. La política no se concibe ya como una «guerra», en la que el adversario debe ser aniquilado, sino como paciente construcción del consenso en torno a un proyecto de sociedad y de Estado, que no puede ser reserva exclusiva del único partido en el poder. Por eso en muchos países se ha institucionalizado la fórmula de la «concertación» y de la negociación entre el gobierno y la oposición, o bien entre el gobierno y las principales fuerzas sociales y sindicales. La vida política se ha vuelto más flexible y tolerante, con una sensible disminución de las actitudes exclusivistas y una mayor atención a la práctica de la mediación. Lo que es importante porque se ha establecido un consenso institucional sobre la necesidad de defender y consolidar el sistema democrático que agrupa a las fuerzas políticas y sociales más importantes.

La calidad de la democracia en estos países (sobre todo en los andinos) es todavía muy baja si la parangonamos con los parámetros europeos. Es frágil, insegura, incierta, manipulable y a menudo manipulada. Pero en un continente en donde la transmisión del poder se ha pro-

La política no se concibe ya como una «guerra», sino como paciente construcción del consenso en torno a un proyecto de sociedad y Estado.

ducido frecuentemente a través de «golpes», la violencia o las revoluciones, haber establecido reglas de juego para la alternancia de los gobiernos, para la renovación

periódica del Parlamento y para la elección del Presidente, a través del voto y un sistema de competitividad entre los partidos, es un importante paso hacia delante. No obstante, la gravedad de los problemas dejados en herencia por los militares, las dimensiones de la crisis económica agigantada por el aún no resuelto problema de la deuda, el nuevo ciclo que se abre se apoya en cimientos más sólidos con respecto al pasado, no está edificado en el vacío, tiene un respaldo social y político más consistente. De todas maneras queda aún mucho camino que andar para la consolidación de la democracia, pero eso no significa que la empresa sea imposible. Porque la democracia no es un hecho consumado de una vez por todas, sino un «proceso» que se construye de día en día no sólo en las instituciones, sino también en la sociedad y en la conciencia de los ciudadanos.

© Mondoperaio

¹ Juan Carlos Portantiero: «Sociedad civil, partidos y grupos de presión», en AA.VV., *Caminos de la democracia en América Latina*. Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1984.

² Douglas Bravo, en el semanario *Marcha*, Montevideo, 15 de marzo de 1970.

³ Ricardo Sidicaro: «Transformation et diversité des gauches latinoaméricaines», en *Amérique Latine*, número 21, enero-marzo de 1985, París.

⁴ Fernando H. Cardoso: «Transizione politica in America Latina», en Scartezzini, Germani, Gritti (edición a cargo de), *I limiti della democrazia*, Liguori, Nápoles, 1985.

⁵ Luciano Martins: «De la non démocratie en Amérique Latine», en *Esprit*, núm. 10, octubre de 1983.

⁶ J. C. Portantiero, *op. cit.*

EVOLUCION SOCIO-POLITICA EN EL CONO SUR

Sergio Spoerer



8

La situación que permitió afirmar que América Latina era «el continente del crecimiento» ha cambiado radicalmente. Lejanas aparecen las tres décadas (1950-1980) en que el crecimiento promedio anual fue de 5,5 %. Crecimiento con pobreza, se decía para explicar las manifiestas desigualdades; hoy el crecimiento ha desaparecido y la pobreza aumenta: «el año 1983 ha sido para la región en su conjunto el peor del último medio siglo», decía la CEPAL ¹ a comienzos de 1984. Las cifras son elocuentes.

El marco latinoamericano

En 1983 la reducción del producto interno bruto por habitante fue de un 5,6 %, superando las cifras negativas ya alcanza-

das en 1981 (-1 %) y 1982 (-3,3 %); en 1984 el PIB por habitante creció en un 0,2 % respecto al bajísimo nivel alcanzado en 1983. Así, América Latina en vez de crecer disminuye: en 1983 ella alcanza los

niveles de vida que tuvo... en 1977. El análisis del deterioro producido por países entre 1981 y 1984 establece proporciones dramáticas; durante este período el PIB por habitante cayó cerca del 25 % en Bolivia y 22 % en El Salvador; se redujo en un 16 % en Uruguay, Venezuela y Guatemala; en casi un 14 % en Perú y Costa Rica; un 12 % en Argentina, Haití y Honduras; 11 % en Chile, y 9 % en Brasil.

La situación del empleo hace visible el impacto social del deterioro económico producido. Hasta 1980 el problema mayor parecía ser el del subempleo y no el de la cesantía abierta. Con su concepto de «subutilización total de la mano de obra», estimado en cerca de un tercio del total de la fuerza de trabajo de América Latina, el PREALC² da cuenta de una situación global que contiene distintas formas de desempleo (abierto, parcial, disfrazado, etc.). El fenómeno más visible desde 1980 es el de la cesantía abierta producida principalmente en el sector urbano como resultado de la brutal caída de la producción industrial en el continente. Esta «desindustrialización precoz» hace aumentar en más de un tercio las tasas de desempleo urbano observadas en los años setenta. Según cifras de CEPAL, entre 1978 y 1983 el desempleo urbano pasó de 13,3 a 19,7 % en Chile (país que presenta la más alta tasa de desempleo de todo el continente³; de 10,1 a 15,7 % en Uruguay; de 4,5 a 12,6 % en Bolivia; de 6,9 a 12,5 % en México y de 9 a 11 % y 2,8 a 4,9 % en Colombia y Argentina, respectivamente. El efecto combinado de la caída de la producción —que en el sector industrial implica muchas veces un deterioro irreversible de la capacidad instalada— y el explosivo aumento de la población económicamente activa hacen del empleo la prioridad absoluta de cualquier política de reactivación.

A la brutal caída del PIB «per cápita»,

Hasta 1980 el problema mayor parecía ser el del subempleo y no el de la cesantía abierta.

y al aumento del desempleo, se suma en los últimos años un nuevo y brutal recrudescimiento del proceso inflacionario. Respecto de 1983 el diagnóstico de la CE-

PAL es no menos implacable que en los aspectos antes analizados: «la inflación se aceleró espectacularmente, como había ocurrido ya en los tres años anteriores, y alcanzó niveles jamás registrados». En 1984 la situación inflacionaria fue aún peor: el ritmo de aumento de los precios subió en la mitad de los países latinoamericanos y alcanzó en el conjunto de la región un nuevo máximo histórico; en efecto, la tasa media simple de aumento de los precios al consumidor subió del 66 % en 1983 al 145 % en 1984.

Estancamiento, desempleo e inflación producen —entre otros efectos— una profundización de las desigualdades sociales y una extensión de las situaciones de exclusión y de miseria. En los países del Cono Sur de América Latina que han sufrido la aplicación de políticas monetaristas en condiciones de dictadura, el impacto social es percibido como abierta regresión respecto de los niveles de vida alcanzados por dichos países en las décadas anteriores.

Para el conjunto de América Latina el porcentaje estimado de la población en condiciones de pobreza es de un 35 %, es decir, 130 millones de latinoamericanos que viven en condiciones inferiores al mínimo de satisfacción de sus necesidades básicas. No es difícil imaginar lo que cotidianamente esto significa en términos de hambre, miseria, falta de atención médica, de vivienda, de educación para cada uno de esos 130 millones de pobres que configuran la masa de los excluidos, cuya situación debería ser preocupación prioritaria en cualquier alternativa de desarrollo.

La presentación del paisaje social más arriba intentado no podría sino ser reali-

zado con trazos gruesos. Pero la comprensión de dicho paisaje requiere además de un conocimiento de sus diferenciaciones internas y de las dinámicas que ocurren en su seno.

Pese a sus problemas y desafíos compartidos, América Latina presenta una importante y creciente diferenciación interna. A «grosso modo» es posible identificar tres tipos de países:

a) Los países de modernización temprana y avanzada que han vivido en los años recientes procesos francamente regresivos que hacen aumentar en ellos los indicadores de tradicionalismo. A este grupo pertenecen, principalmente, los países del Cono Sur (Argentina, Chile, Uruguay) que alcan-

zaron antes que el resto del continente altos niveles de ingreso «per cápita», de urbanización, industrialización, escolaridad, salud, a lo cual se

agregaba un importante desarrollo de sus capas medias en condiciones de integración social y nacional e, incluso, en los casos de Chile y Uruguay, de considerable estabilidad política hasta 1973.

b) Un segundo grupo de países está constituido por aquellos de modernización más reciente y rápida; este es el caso de Brasil, México, Venezuela, Colombia, Costa Rica, en los cuales —pese a los desequilibrios y desigualdades— se ha constituido un dinámico sector moderno en sus economías, con altas tasas de inversión (importante diferencia con los países del grupo anterior) y alta participación del Estado. Estos países han acelerado sus procesos de urbanización y de creación de empleos en el sector moderno de sus economías.

c) El tercer grupo de países está formado por aquellos en que priman las características de tradicionalismo propias de sociedades agrarias, con una mayoritaria población campesina, una economía urbana de baja productividad y con también

bajas tasas de inversión y crecimiento. Son los países más pobres del continente: Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Haití y, en menor medida, Perú, Paraguay, Ecuador.

Este esbozo de tipología que responde más bien a criterios de orden estructural y socio-económico puede completarse con otro ejercicio que responda a criterios más propiamente políticos; según éstos, podríamos establecer cuatro tipos de países:

a) Los países de dictaduras estables y prolongadas: Chile, Haití, Paraguay.

b) Los países con estabilidad institucional de tipo democrático: Colombia, Venezuela, México, Panamá, Costa Rica (Cuba).

c) Los países en vías de redemocratización, tales como Argentina, Uruguay y Brasil.

d) Los países de fuerte inestabilidad y/o situaciones de guerra interna y/o fronteriza: este sería el caso de los países centroamericanos (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua) y, en menor medida, Perú y Bolivia.

Si los elementos de diagnóstico más arriba expuestos fueran completados con un análisis de las relaciones exteriores de América Latina, su situación actual —pese a su diversidad— podría resumirse en tres rasgos principales: vulnerabilidad exterior, cuya máxima visibilidad la proporciona el masivo endeudamiento del continente; estancamiento económico y profundización de las desigualdades sociales; y, finalmente, ausencia o fragilidad de sus instituciones democráticas.

El perfil específico del Cono Sur

Intentar una caracterización sociológica de Argentina, Chile y Uruguay, poniendo énfasis en sus rasgos comunes, no

Estancamiento, desempleo e inflación producen una profundización de las desigualdades sociales y una extensión de las situaciones de exclusión y de miseria.

es una opción del todo arbitraria. Ella no contraría tampoco el sentido común popular que percibe la especificidad del «Cono Sur» tanto por su mayor y antigua apariencia europea como por la similitud de los capítulos más recientes de su historia. «Países de modernización avanzada», Argentina y Uruguay iniciaron antes que cualquier otro en las primeras décadas de este siglo los procesos demográficos y sociales que harían de ellos sociedades urbanas de alta integración; aunque más tardío y menos avanzado, el caso de Chile puede ser asimilado a los dos anteriores⁴. La dominante urbana de este grupo de países es la variable que determina algunos de los indicadores que configuran su singularidad. En 1950, mientras el promedio de la región en su conjunto era de 40,9 %, la población urbana de Argentina alcanzaba a un 65,9 %, 59,1 % en Chile y 70,5 % en Uruguay. En 1980, el promedio regional era de 63,3 % y las cifras respectivas de Argentina, Chile y Uruguay eran 81,6, 78,7 y 83,8 %.

La tasa bruta de natalidad (por mil habitantes) de Argentina (23,0), Chile (35,7) y Uruguay (22,0) era ya en el período 1960-65 sensiblemente inferior al promedio regional (41,2). Por su parte, la esperanza de vida al nacer en el mismo período era de 66,0 años en Argentina, 57,6 en Chile y 68,3 en Uruguay, todas cifras superiores al promedio regional de 56,8 años. La comparación de ambos indicadores para el período 1975-80 confirma las tendencias anotadas. Por el contrario, las tasas de mortalidad infantil permanecen elevadas en relación al promedio, especialmente en el caso de Chile (62 por mil en el período 1975-80), lo que aparece como un indicador de la marginalidad social existente.

En materia de escolaridad, cada uno de los países analizados presenta altas y tempranas tasas en relación al conjunto. El analfabetismo era en 1950 de 13,6 % en

Argentina y de 19,8 en Chile; treinta años después, en cada uno de los tres países el analfabetismo apenas sobrepasa el 6 %. La educación media y básica alcanzan también desde temprano altos niveles. Así, por ejemplo, en el caso de Chile, la tasa de escolarización de la población de 7 a 18 años es, en 1956, de un 56,2 %⁵.

Las altas tasas de población urbana y de escolarización crean las condiciones de una también temprana y progresivamente importante incorporación de la mujer tanto a los distintos niveles del sistema educacional como al mundo del trabajo.

El desarrollo de la educación superior, de los medios de prensa y radio y de la industria editorial crearon las condiciones de una moderna constelación cultural⁶ asentada, básicamente, en la singular expansión que los sectores medios alcanzan en estos países.

En 1950 los estratos medios y superiores constituían un 35,9 % de la población en Argentina y un 21,4 % en Chile. En 1970 este porcentaje había aumentado a un 38,2 % y 29,0 % respectivamente; en este mismo año la cifra correspondiente a Uruguay era de un 35,0 %⁷. La homogeneidad étnica reforzaba el temprano y singular perfil social y demográfico de los tres países del «Cono Sur».

La evolución del PIB por habitante también permite comprender la especificidad de la transición estructural que estos tres países iniciaron antes que el resto del continente. Mientras que el promedio regional del PIB por habitante era en 1950 de 439 (dólares de 1970), las cifras de Argentina eran 859, de Chile 667 y de Uruguay 956. En 1980, el mismo indicador

era en Argentina y Uruguay un tercio superior al promedio regional, mientras que las cifras de Chile eran equivalentes al nivel alcanzado por dicho promedio.

Los tres rasgos principales de América Latina son su vulnerabilidad exterior, estancamiento económico y ausencia o fragilidad de las instituciones democráticas.

Los datos relativos a situaciones de pobreza e indigencia presentan también en estos tres países un balance positivo en relación al resto de la región⁸. Sociedades

El aumento de las tasas de descripción ha sido ostensible en Chile durante todo el período y en Uruguay hacia el final de éste.

gresso de capitales, hacían parte de este objetivo. En segundo lugar, la reducción de la intervención reguladora del Estado en la economía, la disminución de las po-

urbanas, industriales, con altos niveles de ciudadanía social y política, este grupo de países presenta también sistemas democráticos comparativamente más abiertos y estables que el resto de la región. En particular, la existencia de una mayor integración social y de una cultura y sociedad nacionales crearon las condiciones de un sistema de valores y normas, de prácticas y de creencias que permitieron la existencia de pautas de socialización ampliamente compartidas que hicieron posible amplios niveles de ciudadanía social y política.

Estos son, sumariamente, los perfiles que hacen simultánea y profundamente crisis en los años setenta. Apenas diez años más tarde, el panorama antes esbozado ha cambiado radicalmente.

Nos hemos referido antes a los efectos más visibles de la reciente evolución de América Latina. ¿Escapan Argentina, Chile y Uruguay a este sombrío panorama? No. Por el contrario, ellos ilustran algunos de sus rasgos más deformados. Ellos no aparecen como síntomas aislados ni como accidentes de coyuntura, sino que configuran más bien un síndrome de crisis. Este es el resultado tanto de problemas estructurales no resueltos en la fase anterior, como de políticas aplicadas desde el Estado a partir del quiebro institucional que viven Argentina, Chile y Uruguay en la década pasada⁹.

Aunque con variantes según los países y las fases, el modelo de liberalismo autoritario descansaba en tres ejes. En primer lugar, el intento de maximizar las ventajas comparativas de cada economía nacional significaba una completa apertura de éstas respecto del exterior; la baja de aranceles, el fomento a las exportaciones y la adopción de medidas que favorecían el in-

tervenido de los activos públicos, eran otras tantas medidas destinadas a restaurar el libre juego del mercado. Mediante el cierre de los sistemas políticos se trataba, en tercer lugar, de garantizar la existencia de las condiciones extraeconómicas que hicieran posibles los objetivos anteriores impidiendo la expresión de interferencias sociales.

Escapa a los objetivos de este trabajo caracterizar este modelo y sus políticas específicas. Lo que nos interesa es, básicamente, dar cuenta de su impacto social. Para ello analizaremos tres variables: composición de la población económicamente activa y estratificación social, distribución del ingreso y, finalmente, los cambios en las pautas de consumo.

a) Población económicamente activa y estratificación social

En las transformaciones habidas aparecen dos tipos de fenómenos: por una parte, franca acentuación de tendencias presentes desde las décadas anteriores y, por otra, emergencia de fenómenos nuevos¹⁰.

Prosigue la urbanización creciente de la población de los tres países. Se asiste a un relativo estancamiento del crecimiento de Buenos Aires y Montevideo debido, especialmente, a una reversión de los flujos migratorios internacionales; Santiago, por el contrario, continúa registrando altas tasas de crecimiento demográfico. En cuanto fenómeno nuevo, destaca el mayor crecimiento relativo de ciudades intermedias como principales receptoras de los flujos migratorios. En Argentina este es el caso de Mendoza, Córdoba, Rosario; en otra escala, de Rancagua, Temuco y Coyhaique en Chile y, por otras razones, de

Punta del Este en Uruguay. Las modalidades del crecimiento urbano han reforzado los desequilibrios existentes en materia de asentamientos humanos tanto a nivel nacional, regional y local ¹¹. Encarecimiento de terrenos y viviendas, creciente déficit de éstas, segregación espacial de población urbana según ingresos, deterioro ecológico, discriminación en el gasto público en materia de servicios básicos (vialidad, agua, electricidad, alcantarillado, educación, salud) ¹², son todos síntomas de una intensificación de los desequilibrios espaciales y, en particular, de una desintegración y polarización urbanas.

La expansión del sector terciario continúa el proceso iniciado décadas antes. Pero en el crecimiento de las actividades productoras de servicios se produce un cambio de composición. Tiende a decrecer la población ocupada en los servicios estatales de fuerte impacto distributivo (salud, vivienda, educación) mientras aumenta considerablemente el empleo en actividades de comercio, finanzas y defensa.

La reconstitución de un sector primario exportador —moderno y sin absorción de empleo— va acompañada de la que aparece como principal transformación estructural del período: la desindustrialización de cada uno de los tres países.

Importantes cambios en la composición de la fuerza de trabajo derivan de las transformaciones anotadas. La caída del empleo industrial reduce significativamente el peso de los sectores obreros en el conjunto de la PEA. Correlativamente, aumentan los empleos no manuales y por cuenta propia (independientes). Pese a las dificultades de operacionalización existentes, es claro que la categoría de empleo informal ¹³ designa modalidades laborales diversas en franca expansión, en desmedro de procesos de trabajo más estables en el tiempo y el espacio y de mayor normatividad.

El aumento de las tasas de desocupación —particularmente de la urbana abierta— ha sido ostensible en Chile durante todo el período y en Uruguay hacia el final de éste; en Argentina, por el contrario, estas tasas han preservado su moderación histórica.

Uno de los efectos más importantes del aumento del empleo informal y de la desocupación es el crecimiento del empleo secundario en el total de la fuerza de trabajo. La mayor incorporación de mujeres y jóvenes al mercado de trabajo aparece como resultado de una estrategia de percepción de ingresos que tiene al núcleo familiar, y ya no sólo al «jefe de hogar», como responsable de la sobrevivencia material de la familia. Una extraordinaria movili-

El aumento de las desigualdades en la distribución del ingreso ha sido, en Argentina, Chile y Uruguay, superior al promedio regional.

dad se produce así entre los diferentes miembros de una familia respecto del mercado de trabajo: miembros inactivos (a menudo el «jefe de hogar» que, desalentado por la pérdida de posibilidades ocupacionales, deja de ser demandante de empleo), asalariados permanentes, asalariados ocasionales, desocupados, etc.

La diferenciación interna de las capas medias es otra de las transformaciones producidas en los últimos años. Es en estas capas que se hace más visible el desplazamiento desde adscripciones socio-ocupacionales ligadas al Estado y los servicios públicos hacia puestos de trabajo generados por la expansión del comercio y las finanzas. Aquellos sectores de capas medias que se insertan en los núcleos más dinámicos del sector terciario en expansión adquieren niveles de ingreso y «status» que los asimilan a los estratos altos de la sociedad. Por el contrario, otros sectores de capas medias al ser excluidos de sus puestos de trabajo tradicionales no logran una reinserción adecuada y ven asimilarse sus condiciones de trabajo y de vida a las de los sectores denominados genéricamente «marginales» de la sociedad.

Esta categoría de sectores marginales es

la que más se ve afectada por la falta de una información estadística actualizada para el período 1981-83. Sin embargo, los datos relativos a segregación espacial urbana, distribución de ingresos e indicadores de extrema pobreza, permiten estimar que el aumento de estos sectores es uno de los principales efectos sociales del estilo de desarrollo vigente en los países del «Cono Sur» durante los últimos diez años.

b) *Distribución del ingreso*

Según un estudio de la CEPAL ¹⁴, «los datos disponibles (salarios y empleo) indican que en los tres países hubo durante todo el período neoliberal una clara e importante pérdida distributiva para el sector trabajo (...). Las remuneraciones reales cayeron inicialmente en promedio entre 20 % y 45 % respecto a los niveles que tenían en el período previo a la instauración del liberalismo». Según los datos proporcionados por este estudio, tanto la participación del trabajo en el producto interno bruto, como los salarios reales eran en 1982, «a grosso modo», inferiores en un tercio al nivel alcanzado en 1970 por cada uno de los tres países (salvo en el caso de Chile respecto del indicador salario real que es prácticamente equivalente en ambos años).

«La fuerte y regresiva redistribución del ingreso» que se produjo en los tres países, según el estudio citado, fue acompañada de una tendencia «a agudizarse la concentración de activos reales y financieros»; manifestándose en los tres países, «este proceso se dio con más fuerza en Chile».

Si para el conjunto de América Latina «las desigualdades en la distribución del ingreso se incrementaron, pues la participación del 20 % más pobre bajó del 3,1 % en 1960, a 2,3 % a principios de la década

de los años 80» ¹⁵, es posible plantear la hipótesis que el aumento de dichas desigualdades ha sido en Argentina, Chile y Uruguay superior —en términos relativos— al promedio regional ¹⁶. Al menos en el caso de Argentina y Uruguay, esta es la conclusión a que llega el estudio de C. Filgueira ¹⁷.

Aunque las políticas aplicadas en el período han reforzado tanto las tendencias concentradoras en el vértice superior de la pirámide social como los niveles de pobreza e indigencia, el fenómeno quizá más singular es el considerable aumento de los niveles relativos de ingreso del 20 % de la población situada inmediatamente bajo el vértice superior de la pirámide de ingresos. La existencia de este segmento de capas medias urbanas modernas de altos ingresos aparece, sin duda, como un trazo inédito en el paisaje social de la región.

c) *Pautas de consumo*

La apertura exterior de las economías nacionales fomentó, mediante una fuerte baja de aranceles, un aumento de las importaciones de bienes de consumo durable creando disponibilidades internas de estos bienes sin precedentes en el pasado. C. Filgueira ¹⁸ señala que «en sólo tres años, entre 1976 y 1979, el crecimiento de las importaciones de bienes durables crece en Argentina un 198,7 % y en Uruguay 130,3 % (respecto a 1974 un 762 %)». Por su parte, el estudio de Javier Martínez ¹⁹ establece que este fenómeno se produce también en Chile con similares características. Una fuerte caída de la parte de los bienes de capital en el total de las importaciones acompaña este proceso; así, por ejemplo, en Argentina en 1970 por cada 4,4 unidades gastadas en la importación

de bienes de capital se gastaba uno en bienes de consumo durables, en 1980 la relación cambia, por cada 1,5 unidades de bienes de capital, una de bienes de consumo durables ²⁰.

Existe una mayor «latinoamericanización» del perfil de Argentina, Chile y Uruguay a comienzos de los 80 respecto de mediados de siglo.

Los bienes de consumo cuyas importaciones crecen mayormente son los electrodomésticos —en primer lugar, los aparatos de televisión—, automóviles, juguetes y alcoholes. La constitución de un mercado interno para estos bienes se produce mediante cambios en el sistema de precios relativos, el aumento del crédito al consumo y una fuerte inversión publicitaria²¹. Importantes cambios en la estratificación y composición del consumo derivan de estos nuevos fenómenos.

De los estudios disponibles no es posible concluir que los cambios en las pautas de consumo hayan producido una «democratización» de éste y un aumento correlativo de los niveles de satisfacción de las necesidades básicas. Las tendencias observables son más bien las opuestas. La concentración del consumo en los deciles de más altos perceptores de ingreso es sensible en los tres países²². La paralela privatización de los servicios satisfactores de necesidades básicas (salud, vivienda, educación) ha reforzado la tendencia ya anotada por O. Altimir en 1979²³, según la cual en los hogares pobres los aumentos de ingresos monetarios no son destinados en prioridad a la satisfacción de necesidades esenciales. Al respecto, C. Filgueira²⁴ establece que «las relaciones emergentes entre la difusión de bienes de carácter durable y los déficits en los niveles alimenticios y calóricos, muestran concluyentemente la presencia de una pobreza inducida por la “modernidad”».

Del recuento estadístico realizado no parece arbitrario concluir en una mayor «latinoamericanización» del perfil de Argentina, Chile y Uruguay a comienzos de la década de los 80 respecto de la situación a mediados de siglo. Esta tendencia parece común a los tres países, pero es en Chile donde ha sido más acentuada. En efecto, de los datos relativos a desocupación abierta, Programas de Empleo Mínimo y para jefes de hogar, y empleo

Los procesos de desmilitarización y de establecimiento de instituciones democráticas han tenido diferencias de ritmo y de naturaleza.

informal, es posible concluir que en 1984 más de un 40 % de la PEA se encuentra en Chile en condiciones de marginación total o parcial del mercado de trabajo²⁵.

Esta marginalización económica es reforzada por la segregación espacial, la disminución de los servicios sociales básicos y la desarticulación de las estructuras políticas y sociales de representación.

La evolución reciente: actores sociales, fuerzas políticas y concertación democrática

En la consideración de actores sociales y procesos políticos cabe un uso más extensivo de la noción de Cono Sur; ella nos permitirá abarcar aquí al conjunto de países que han vivido bajo regímenes militares en América del Sur durante la última década.

En todos ellos —pese a la diversidad de situaciones nacionales— un tema es común y prioritario: la democracia. Tema que designa simultáneamente un proceso histórico y una nueva cultura política.

Del mismo modo que los regímenes militares instaurados en los distintos países tuvieron modalidades institucionales y operativas diferenciadas, también los procesos de desmilitarización y de establecimiento de instituciones democráticas han tenido diferencias no sólo de ritmo sino además de naturaleza. Con todo, las similitudes existentes permiten no sólo establecer diferencias específicas del Cono Sur con otras subregiones del continente, sino además intentar una caracterización común de su evolución reciente y de sus desafíos.

¿Cuál es la herencia dejada por los regímenes militares? Lo peor en la actual situación sería subvalorar los efectos de largo plazo dejados por ellos. La democracia no hará milagros, ni siquiera el de su propia estabilidad. La continuidad de los procesos democráticos iniciados está lejos de haber sido garantizada. Nada es irre-

versible. La memoria colectiva ha sido traumatizada. La neurosis obsesional que repite una y otra vez los mismos errores, las mismas conductas desviadas, es en política una enfermedad corriente. La profunda desarticulación de sociedades y sistemas políticos producida durante los años de dictadura influirá negativamente en la capacidad de actores sociales y fuerzas políticas de representar intereses, negociar y concertarse. En un trabajo reciente —relativo a Chile, pero sugerente para el conjunto del Cono Sur— Guillermo Campero señala que «la tendencia de la estructura socio-ocupacional en este decenio hacia el abultamiento de la marginalidad ha limitado las dinámicas de constitución de actores sociales estables, precisamente por el carácter segmentado, hete-

rogéneo y atomizado de estos conglomerados o masas marginales. Al mismo tiempo, la persistente reducción e inestabilidad de las categorías

más formales como los obreros industriales, el proletariado agrícola, la burocracia pública media y otras, les ha hecho perder centralidad estructural y política, limitando su capacidad de acción colectiva. Estas últimas categorías sociales habían dado origen históricamente a los movimientos propiamente “clasistas”, es decir, aquellos que se correspondían con categorías centrales en la sociedad y que eran capaces —a partir de una identidad de clase— de interpelar el poder del Estado, disputando el control de sus orientaciones y las de la sociedad a otras clases. Así entonces, la evolución de la estructura social ha generado condiciones para un debilitamiento de estos actores “clasistas” al mismo tiempo que ha dado lugar a un amplio conjunto de masas relativamente inorgánicas, capaces, sin embargo, de producir luchas y movilizaciones intermitentes, pero con dificultades para constituirse más fluidamente como actores con una base de interrelaciones permanentes y dotados de una estrategia, así como de una clara comunalidad de intereses colectivos»²⁶.

Las dificultades son también a señalar a nivel del sistema político y del Estado.

La presencia de las Fuerzas Armadas en el gobierno de muchos Estados durante las décadas pasadas no es un simple accidente, un paréntesis en la vida republicana; ella tiene profundas raíces en la historia del continente. Desmilitarizar la política es un requisito mayor en la reedificación de la democracia y de los Estados nacionales, pero ello no significa sólo el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil; significa, en realidad, el abandono de una lógica de dominación política y exclusión social y el primado de una lógica de asociación, es decir, de consenso, de integración concertada de lo diverso.

Desmilitarizar la política es un requisito mayor en la reedificación de la democracia y de los Estados nacionales.

No será fácil liquidar las secuelas del

autoritarismo; es necesario no subvalorar los efectos de largo plazo que la presencia autoritaria dejará en la cultura política del continente, alimentada por las propias

tensiones sociales que la crisis ha agudizado.

El autoritarismo no es, sin embargo, toda la herencia. Durante la fase liberal-populista vivida por algunos países, se configura el llamado «Estado de compromiso» en que, junto a los «enclaves autoritarios» (Fuerzas Armadas, Magistratura, organismos de control), emerge un conjunto de aparatos estatales cuya función es responder a las demandas sociales de los nuevos sectores que se incorporan a la vida nacional (capas medias, proletariado industrial). El sector público así constituido es tan extenso como diversificado; crece agregando tantas funciones como demandas sociales recoge. De allí la debilidad e incoherencia de sus respuestas, es decir, de sus formas de intervención económica y social. En condiciones de un sistema político restringido, entendido como debilidad de la intermediación sociedad civil-Estado, se alcanza un bajo nivel de regulación de los conflictos sociales. Las demandas sociales permanecen, sin

embargo, y ejercen sobre el Estado presiones cruzadas. Así se conformarían, progresivamente, al interior del sector público diversos círculos de influencia, los «anillos burocráticos» de que han hablado F. H. Cardoso y E. Faletto, a través de los cuales no sólo se clienteliza la función pública sino que se configura, deformada, la esfera propia de la política. La debilidad del sistema político impide la formación y toma de decisiones por vía democrática. En estas condiciones el Estado se convierte en un botín que se reparten algunos sectores sociales mediante los «anillos burocráticos», tengan o no éstos forma de partido (Alain Rouquié ha hablado, incluso, de la formación de «partidos militares» en el interior de los regímenes autoritarios de Brasil y del Cono Sur).

Clientelización y autoritarismo expresan la ambivalencia básica de la institucionalidad estatal latinoamericana. Pues mientras clientelización no es, necesariamente, sistema político abierto ni participación social, autoritarismo es abandono nacional y desmantelamiento de las funciones económicas y sociales del Estado; disimulado tras la evidencia represiva, el autoritarismo es extrema debilidad estatal: el endeudamiento externo, el estancamiento económico y la regresión social padecidos por Argentina, Chile y Uruguay bajo sus respectivos regímenes militares están allí para ilustrarlo. Por el contrario, los países que han logrado una mayor estabilidad de sus instituciones democráticas y han hecho jugar un importante rol económico a sus Estados, son justamente aquéllos que dentro del deterioro general del continente presentan una mejor situación relativa: Colombia, Venezuela, Costa Rica, México, Panamá. La experiencia reciente permite, en consecuencia, afirmar que —en las actuales condiciones de América Latina— existe una estrecha correlación entre institucionalidad democrática estable y desarrollo económico.

La experiencia reciente permite afirmar que existe una estrecha correlación entre institucionalidad democrática estable y desarrollo económico.

El imperativo democrático nace de asumir una herencia y de enfrentar un escenario de crisis. La magnitud de los problemas que toda democracia deberá enfrentar hace pensar que su desafío mayor será menos el de su advenimiento que el de su estabilidad. Las experiencias recientes de Perú y Bolivia, por una parte, y de Argentina, Uruguay y Brasil, por otra, permiten pensarlo. Quizá la dificultad mayor no sea enfrentar a los enemigos de la democracia sino... saber poner de acuerdo a sus partidarios. Pues democracia es más que una institucionalidad capaz de procesar demandas sociales, de regular conflictos, de elaborar consensos nacionales y hacer gobernable un país. Democracia es también un tipo de sociedad a la que se aspira; sociedad que reduce crecientemente sus desigualdades sociales al mismo tiempo que constituye su diversidad, entendida ésta como pluralismo y no como consagración fáctica y jurídica de la injusticia social. Democracia es la plenitud de la soberanía popular haciendo patria y ciudadanía.

Si es efectivo que «la democracia se funda sobre el coraje del presente y no sobre el idealismo del futuro» (P. Rosanvallon-P. Viveret), entonces un hombre político, un ciudadano ejerciendo responsabilidades cívicas debe ser lo contrario del ideólogo de que ha hablado Octavio Paz; aquel hombre que «no conversa: demuestra, adoctrina, refuta, convence, condena» (*Hombres en su siglo*, 1984). De ser así, una cultura política nacional, entendida como «razón práctica colectiva», es lo contrario de una ideología. Afirmación de la que puede derivarse otra: que todo proceso de «inflación ideológica» (A. Hirschman) tiende a deteriorar los consensos básicos que permiten la existencia de una institucionalidad democrática; nacen así las culturas políticas iluministas, paradigmáticas, reñidas con el sentido común, engendrando —más allá del sectarismo— la pretensión tecnocrática y autoritaria de una política sin ciudadanos.

La cultura política que América Latina requiere para enfrentar sus desafíos de esta hora evoca el Uruguay de comienzos de siglo, «cuya confianza optimista en las

posibilidades nacionales pasó a ser algo más que una fe política y se transformó en un rasgo de la conciencia nacional» (T. Halperin Donghi). El advenimiento de esta nueva cultura política supone el abandono de una lógica de comportamiento autoreferida en actores sociales y fuerzas políticas; lógica que exacerba antagonismos y exclusiones y no considera el punto de vista de la totalidad social. En esta visión, el consenso social y la estabilidad política son entendidos como equilibrio estático e inestable al interior de un sistema cerrado con actores estructurados, donde el progreso de unos supone necesariamente pérdidas de otros (poder sumacero). Por el contrario, cabe imaginar el primado de otra lógica; lógica de integración, de asociación, de concertación, en que la dinámica social misma y la pertenencia de los actores a una totalidad configuran sus propias identidades, entendidas éstas como un producto histórico y no como una esencia, un antecedente inmutable. Según esta lógica, nadie sobra en nuestros países, todo es interior a la sociedad y al sistema político. Si política es el arte de dilatar las fronteras de lo posible, es este nuevo realismo —que no es sinónimo de prudencia— el que puede conciliar consenso y transformación.

Este «realismo político distinto» (A. Flisfisch) se hace operativo a través de la concertación democrática, práctica política fundante de los procesos de redemocratización actualmente en curso en Argentina, Uruguay y Brasil. La concertación democrática no es ni un pacto político ni un «proyecto histórico» (entendido como utopía racional), tampoco la formalización jurídica de espacios abiertos por la movilización social (la democracia entendida como «conquista» del movimiento popular). La concertación democrática

Democracia es el régimen político en que la enorme mayoría de un pueblo tiene la ocasión de hacerse cargo del mayor número de problemas.

basada en la no exclusión de actores sociales o fuerzas políticas, tiene necesariamente un carácter público generador de legitimidad, y tiende a su institucionalización

en el sistema político que ella misma contribuye a crear. Así, la concertación democrática es prácticas y espacios fundantes de una nueva cultura política.

El acrecentamiento de la integración social, de las identidades nacionales y de la ciudadanía social y política requerirán de un estilo de desarrollo capaz de combinar el máximo de equidad social con el máximo de diversidad cultural. Ello supone una cultura política del desarrollo menos paradigmática y más abierta a la experiencia y la creatividad social.

En estas condiciones parece razonable afirmar que «democracia es el régimen político en que la enorme mayoría de un pueblo tiene la ocasión de hacerse cargo del mayor número de problemas. Porque democracia es el derecho a los problemas, el tiempo de la responsabilidad, la edad madura de los pueblos» (S. Spoerer, 1984).

Así entendida la democracia, ella aparece ante todo como un problema de cultura política, es decir, de prácticas sociales y representaciones ideales organizadas en torno a una concepción operativa de las relaciones entre Estado, sistema político y sociedad civil, suerte de «tecnología política apropiada» que hace históricamente posibles los consensos que elabora una sociedad. Una cultura política no es un discurso ideológico ni un paradigma conceptual, por novedosos que éstos puedan ser. Ella es ideales compartidos históricamente realizables: cultura política es sentido común en acción. Sólo así la democracia dará fundamento histórico a nuestras tan a menudo desfiguradas repúblicas. Porque República es —según Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, recordado por A. Uslar Pietri— «una mejor

manera de vivir para toda la gente (...). Es la cosa de todos, el bien de todos, la sociedad realizada en toda su perfección».

¹ Salvo indicación contraria, toda la información estadística aquí utilizada proviene de la síntesis que, sobre el estado de la economía latinoamericana, elabora CEPAL anualmente.

² Programa Regional de Empleo para América Latina, dependiente de la Oficina Internacional del Trabajo.

³ Estas son, obviamente, cifras oficiales. Según el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, en septiembre de 1983 la desocupación abierta había sido en realidad de un 22,5 % e, incluyendo el PEM y el POJH, de un 35 %. Ver *Coyuntura Económica*, núm. 10, enero 1984 (PET, Academia de Humanismo Cristiano).

⁴ En la caracterización que aquí intentamos nos hemos servido especialmente de *Transición estructural y procesos político-sociales en América Latina (1950-1980)*. División de Desarrollo Social, CEPAL, 1984.

⁵ PIIE: *Las transformaciones educacionales bajo el régimen militar*, 1984.

⁶ J. J. Brunner: *Cultura y crisis de hegemonías*. FLACSO, 1983.

⁷ Filgueira, C., y Geneletti, C.: «Estratificación y movilidad ocupacional en América Latina», *Cuadernos de la CEPAL*, núm. 39, 1981.

⁸ O. Altimir: «La pobreza en América Latina», *Revista de la CEPAL*, núm. 13, abril 1981.

⁹ Sobre estas políticas, «Estabilización y liberalización económica en el Cono Sur», *Estudios e informes de la CEPAL*, núm. 38, 1984.

¹⁰ Dentro de los objetivos de este trabajo sólo cabe una síntesis de estos fenómenos y no una argumentación estadística de ellos. Además de las fuentes ya citadas, la información en base a la cual realizamos esta síntesis la hemos obtenido de Carlos Filgueira: *Transformaciones recientes en los países de la cuenca atlántica*, Mimeo, CEPAL, 1982; Javier Martínez: *Estratificación y cambio social en Chile en la década del setenta*, E/CEPAL/R 349, 1984; Francisco Delich: *Clase obrera, crisis industrial y recomposición social*, E/CEPAL/SEM.10 R 13, 1983; Héctor Apezechea: *Efectos de los modelos de estabi-*

lización sobre el empleo, CIESU, Montevideo, 1983; PREALC: *Mercado de trabajo en cifras, 1950-1980*, 1982; PREALC: *Movilidad ocupacional y mercados de trabajo*, 1983.

¹¹ Sergio Galilea: *Planificación de los asentamientos humanos en América Latina y el Caribe: teorías y metodologías*. E/CEPAL/L 288, 1983.

¹² Osvaldo Sunkel: *La dimensión ambiental en los estilos de desarrollo de América Latina*. E/CEPAL/G. 1143, 1981.

¹³ PREALC: «Sector informal, funcionamiento y políticas», 1978.

¹⁴ *Estabilización y liberalización económica en el Cono Sur*, op. cit., págs. 53-61.

¹⁵ Sergio Molina: «La pobreza, descripción y análisis de políticas para superarlas». *Revista de la CEPAL*, núm. 18, diciembre 1982, pág. 96.

¹⁶ Esta conclusión es sugerida por O. Altimir en «La pobreza en América Latina, un examen de conceptos y datos». *Revista de la CEPAL*, núm. 13, abril 1981.

¹⁷ *Transformaciones recientes*, op. cit., páginas 115-151.

¹⁸ Op. cit., págs. 168 y ss.

¹⁹ Op. cit., págs. 151 y ss.

²⁰ C. Filgueira, op. cit., pág. 171.

²¹ C. Filgueira: «Acerca del consumo en los nuevos modelos latinoamericanos». *Revista de la CEPAL*, núm. 15, diciembre 1981.

²² C. Filgueira (1981): Op. cit., págs. 100-101. Para el caso de Chile puede verse también N. Lechner: «Notas sobre la vida cotidiana I/2: habitar, trabajar, consumir». Material de discusión N; 54, marzo 1984, FLACSO, Santiago; E. Morales: «Algunos indicadores de niveles de vida en campamentos de las comunas del Gran Santiago». Documento de trabajo N178, FLACSO, Santiago, mayo 1983.

²³ *La dimensión de la pobreza en América Latina*. «Cuadernos de la CEPAL», 1979, págs. 42-46.

²⁴ *Transformaciones recientes...*, op. cit., páginas 174-176.

²⁵ Guillermo Campero: *Orientaciones de acción de las organizaciones populares urbanas y el proceso de redemocratización política en Chile: un estudio de las movilizaciones y luchas sociales en las zonas marginales de Santiago*. Mimeo, ILET, 1984.

²⁶ Guillermo Campero: *Luchas y movilizaciones sociales en la crisis: ¿se constituyen movimientos sociales en Chile?* ILET, Santiago, invierno 1985.

ALTIERO SPINELLI: 60 AÑOS DE LUCHA POR EUROPA

Carlos Bru y Francisco Aldecoa



El 22 de mayo pasado fallecía en Roma Altiero Spinelli, figura trascendental en la lucha por la construcción política de Europa. Su muerte, e incluso su vida, han pasado bastante desapercibidas en nuestros medios de comunicación social. Ello es un reflejo más de que todavía no participamos plenamente en las preocupaciones comunes de la sociedad europea.

Altiero Spinelli nació en Roma en 1907 y su biografía refleja lo que ha sido la construcción política europea en los últimos sesenta años. Una vida repleta de acontecimientos y dotada de un incansable espíritu de lucha (utilizamos esta expresión porque a él le gustaba expresarla, y no en vano una de sus obras se titula

La mia battaglia per una Europa diversa) ha estado dedicada en su casi total decurso a trabajar por la Europa federal. Incluso en circunstancias muy difíciles como la represión fascista. Al final de esa vida, a sabiendas que la misma se le iba como consecuencia de una enfermedad incurable, dio Spinelli un testimonio más

de ese ánimo batallador. Desde su posición como Presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo, y con la insatisfacción produci-

da por los magros resultados de la Conferencia intergubernamental para la Unidad Política, es decir, el texto del Acta Unica Europea, Spinelli dedicó los cinco últimos meses a superar este escollo, impulsando trabajos en torno al diseño de nuevas estrategias para su sempiterno objetivo: transformar la etérea idea de Europa en un proyecto concreto de Unión Política.

De otra parte, la vida de Spinelli es expresión de los diversos ámbitos desde los que se puede contribuir a la construcción europea. Cabe distinguir seis etapas, desde la lucha antifascista hasta la Presidencia de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo, pasando por el Movimiento Federalista, los años de profesor universitario, la etapa como asesor del ministro de Asuntos Exteriores de la República Italiana y el período de seis años en que desempeñó el cargo de Comisario para la política industrial en la Europa posible.

1.ª etapa (1925-1940). La concreción de la idea europea como conquista de libertades públicas

Desde sus años de estudiante universitario participó Altiero Spinelli en las actividades clandestinas antifascistas, por lo que tuvo que abandonar los estudios de Derecho. En 1927 —apenas tenía veinte años— es condenado por los tribunales especiales de Mussolini. Esta condena le supondrá diez años de cárcel y seis de confinamiento. En la prisión convivirá con otras importantes figuras de la Italia de entonces y de ahora, como Sandro Pertini. Y allí empezará su fructífera labor intelectual y de profundización en la idea europea.

Spinelli consideraba a las administraciones nacionales antieuropeas, en cuanto guardianes de una soberanía nacional sin cuyo sacrificio no hay forma de edificar Europa.

2.ª etapa (1940-1962). Europa como proyecto político

En plena guerra mundial, los movimientos europeístas contenían ya programas concretos de una Europa política. La primera manifestación en este sentido fue el *Manifiesto de Ventotene*, del cual Altiero Spinelli fue uno de sus principales redactores y que debe su nombre a la isla en que él y otros antifascistas estaban confinados. El *Manifiesto de Ventotene*, titulado «Por una Europa libre y unida», es el primer texto que aporta un programa realizable de Unión Europea. Su trascendencia nace de la conciencia de que el abismo y la abyección del momento en que se produce no son contrarrestables por la fórmula de democracias cimentadas sobre viejas divisiones nacionales, sino por la idea superadora de la Federación.

Dentro de esta etapa, pero en el felizmente contrario contexto de democracias ya restablecidas en Europa, Spinelli participa en el Congreso de La Haya organizado por los movimientos federalistas. De este Congreso nacería el Consejo de Europa, si bien Altiero se opuso a este resultado, porque inauguraba la vía gubernamental para construir Europa en vez de partir de la base misma de la voluntad popular unitariamente expresada.

Cuando se crea la Comunidad Europea de Defensa, cuya formulación originaria había sido realizada sobre el modelo de la CECA, sus limitaciones fueron rápidamente denunciadas por el movimiento federalista: el Ejército —se dice—, a diferencia de la industria del carbón y del acero, no es un sector independiente de la vida social. No es susceptible de ser puesto en común entre los gobiernos nacionales sin modificar sustancialmente la estructura de los Estados respectivos.

La contradicción que supondría la existencia de seis gobiernos sin ejército, o de un ejército europeo sin gobierno y sin un

Parlamento dotado de poderes de control, abrió el camino a una iniciativa constitucional, también protagonizada por Altiero Spinelli junto con el socialista Dehousse. Más allá del método funcionalista que había dado sus frutos con la CECA, el objetivo era encargar a una Asamblea Constituyente la elaboración de la Constitución de la Comunidad Política Europea.

La Asamblea de la CECA se inauguró el 10 de septiembre de 1952. El Consejo decidió no esperar a la ratificación de la CED y encargar a la Asamblea ampliada de la CECA (de forma que su composición se correspondiese con la de la Asamblea de la CED) la tarea de elaborar el proyecto de Tratado. Aunque al final se denominó Asamblea «ad hoc» y no Asamblea constituyente, el síntoma era alentador, pero todo se frustró en la Asamblea francesa. Pero al recordar esto conviene

no olvidar que Spinelli había anticipado su oposición a tres aspectos del artículo 38 de la CED: el procedimiento constitucional estaba subordinado a la ratificación

de la CED; a la Asamblea tan sólo le cabía estudiar el problema, para transmitir su dictamen a una Conferencia diplomática; y el mandato constitucional era en todo caso confuso. Los hechos posteriores dieron la razón a sus críticas.

3.ª etapa. Profesor universitario

En 1962 ocupa un puesto de profesor universitario en Bolonia y más tarde en una Universidad norteamericana. Posteriormente pasa a desempeñar el cargo de Director del Instituto de Asuntos Internacionales de Roma. En estos años ejerce una función crítica en relación con el proyecto europeísta (Europa no cae del cielo). En uno de sus múltiples trabajos —desconocido en España—, trae el ejemplo de la formación de los Estados Unidos de América en comparación a los esfuerzos europeos. Observa que la gran diferencia entre

la experiencia americana de hace 200 años y la experiencia actual europea radica en que la sociedad y la cultura política americanas eran jóvenes, audazmente vueltas hacia el futuro, mientras que la sociedad y la cultura políticas europeas son viejas, anquilosadas y vueltas hacia el pasado.

4.ª etapa. La lucha en el Ministerio de Asuntos Exteriores

En 1968 es nombrado asesor del ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Durante esta época se enfrenta duramente con los diplomáticos del Ministerio. Probablemente de esos años proviene su aversión a este cuerpo de la Administración de los Estados. En su artículo «*Nasciturus ridiculus mus?*», publicado en la prensa española en 1985, se refería al papel de las administraciones nacionales, y en particu-

El proyecto de Tratado de Unión Europea, aprobado en el Parlamento Europeo por abrumadora mayoría en 1984, pasará a la historia como Proyecto Spinelli.

lar de las diplomacias, para el autor antieuropeas en cuanto guardianes de una soberanía nacional sin cuyo sacrificio no hay forma de edificar Europa. Como ilustración a su tesis afirma que el «Quai d'Orsay» sabotea las propuestas de Mitterrand, el «Aussenmat» debilita las posturas de Kohl y Genscher, y la «Farnesina» intenta matizar el documento de Andreotti. Mientras que en Londres, Copenhague y Atenas no hace falta que las administraciones respectivas o las diplomacias pongan cortapisas ya que los respectivos gobiernos coinciden con aquéllas en su alergia a lo unionista. Así —concluye— el problema no está en general en los gobiernos, sino en sus administraciones, especialmente en los cuerpos diplomáticos.

5.ª etapa (1970-1976). Comisario para la política industrial en la Comisión Europea

Desde este cargo, que ocupa por espacio de seis años, se enfrenta al entramado burocrático de la Comunidad y puede conocer a fondo los entresijos de la vida

comunitaria y los problemas que se plantean en la gestión y ejecución de los instrumentos, así como las políticas ya consolidadas. Este puesto le permite, además, participar como ponente para la Comisión del Informe Tindemans, en el que se dibujaron algunas ideas para la reforma de la Comunidad Europea.

6.ª etapa. La actividad en el Parlamento Europeo

En 1979 es elegido diputado al Parlamento Europeo en las listas del PCI, como independiente. Allí Spinelli forma un grupo de diputados procedentes de distintos partidos que serán conocidos como el *Club del Cocodrilo*, animadores de una reforma de los Tratados de la Comunidad Europea. Con la creación de la Comisión de Asuntos Institucionales, de la que Spinelli forma parte y preside en los últimos años, se inicia un nuevo camino hacia la Unión Europea. Esta Comisión tiene por objetivo principal la reforma de los Tratados. Spinelli se convierte en el principal animador de la misma.

El *Proyecto de Tratado de la Unión Europea*, aprobado en la sesión del Parlamento Europeo de 14 de febrero de 1984 por abrumadora mayoría, pasará a la historia como Proyecto Spinelli. Tras el rechazo implícito al Proyecto Spinelli que venía a suponer la convocatoria de una Conferencia intergubernamental, tras la celebración de ésta y la concreción de las negociaciones en el *Acta Unica Europea*, Altiero Spinelli se siente defraudado. Su empeño, desde ese momento hasta casi su muerte, girará en torno a la búsqueda incansante de nuevas estrategias hacia la Unión Política en el marco de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo.

Habría que preguntarse, tras estudiar —como hemos hecho aquí, a grandes ras-

gos— biografías como la de Altiero Spinelli, dónde es más difícil «luchar» por Europa. En cuál de estos seis escenarios: cárcel; diversos foros no gubernamentales; Universidad; Ministerio de Asuntos Exteriores; Comisión de la Europa posible en medio de la pesada burocracia europea; en los escaños del Parlamento Europeo..., en cuál resulta más eficaz o más frustrante trabajar por la Unión Europea. Son preguntas de difícil respuesta. Lo único que podemos decir es que Altiero Spinelli actuó en esos seis escenarios con energía y sin desánimo durante más de sesenta años.

Spinelli nos deja una herencia, que es el ímpetu incansable y sin renuncias hacia la unidad política europea. Unica vía —en eso estamos de acuerdo todos, lo difícil o costoso es ponerlo en práctica— hacia la solución de los problemas económicos, sociales, estratégicos, en suma, políticos de la Comunidad y hacia una efectiva aportación de nuestro continente a la paz mundial a través de la justicia. Todos los europeístas deben hacer suyos ese ímpetu y esa perseverancia ejemplares.

Y Spinelli nos deja un legado más concreto, de mayor compromiso para quienes, como uno de los autores de este artículo, en la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlamento Europeo hemos trabajado con él, y lo hemos hecho grata y estimuladoramente, no sin algunas cordiales discrepancias de método: vamos a impulsar las reformas existentes, intentaremos extraer de ellas las máximas consecuencias unionistas.

Y, si para un límite temporal que puede situarse en las elecciones europeas de 1989, la insuficiencia fuere manifiesta, volver los ojos hacia esa ingente figura desaparecida y, conforme a su doctrina, intentar hacer del sufragio universal la gran palanca instituyente de una verdadera Unión Política Europea.

CRISIS DE LA CEE Y ALTERNATIVAS

Altiero Spinelli



10

Quisiera centrar esta intervención en las responsabilidades de la izquierda, pasadas, presentes y futuras, acerca del problema europeo, pues, al cabo, estamos en una convención de gente de izquierdas y vale la pena dedicar algunas reflexiones al asunto.

Entiendo por izquierda el lugar, esa categoría de lugar político, geométrico-político, en la que están las personas, los grupos políticos y grupos sociales que entienden que hay defectos en el mundo existente, que es necesario cambiar algunas cosas, con mayor o menor profundidad. Frente a éstos están los conservadores, quienes seguramente tienen el mismo convencimien-

to de que el mundo no marcha demasiado bien, pero no desean cambiarlo porque tienen privilegios, porque temen que los cambios conduzcan a un mundo peor que el que existe.

La izquierda, pues, es el lugar donde prevalece la actitud de juzgar las cosas que existen, de pretender cambiarlas. Aho-

ra bien, la izquierda se ha encontrado frente a un gran problema muy diferente de aquellos a los que estaba acostumbrada durante la primera mitad del siglo; se ha topado con un gran problema tras el final de la guerra y no ha sabido verlo o lo ha visto mal, y está esforzándose ahora en intentar definirlo. El problema es el siguiente: el sistema europeo, que se basaba en el concierto de Estados nacionales soberanos (los cuales mantenían un cierto equilibrio en Europa y en el mundo si lograban marchar de acuerdo o se embarcaban en guerras si no lo lograban), y en torno al cual se había construido todo el orden europeo tras dos guerras mundiales —dos crisis de dicho sistema—, se había derrumbado completamente y nos habíamos encontrado finalmente con una Europa totalmente destruida a cuya reconstrucción se procedió a través de tres directrices diferentes. Dos de ellas han sido las construcciones imperiales americana y soviética. Digo «imperiales» y no imperialistas porque el término imperialista tiene un sentido especial que, en mi opinión, poco tiene que ver con el problema que nos ocupa. Una estructura imperial es una estructura en la que, por un conjunto de razones o de circunstancias, un país más fuerte que los demás asume la responsabilidad de tutelar una considerable parte de los intereses de los países dependientes, y a causa de ello va creando una cierta unidad entre esos diversos países. Naturalmente, ve dichos intereses sobre todo desde su punto de vista. La Unión Soviética y los Estados Unidos de América no se propusieron crear un imperio, les vino a las manos tanto a uno como a otro; debido a que la guerra terminó en un determinado momento se encontraron a lo largo de una línea divisoria, a un lado las tropas soviéticas, a otro las americanas, y se produjo la división de Europa, para desgracia de Alemania; y digo para desgracia porque si la frontera hubiese estado un poco más acá o un poco más allá todo hubiera sido diferente. Ambos siste-

**La URSS y EE.UU.
no se propusieron crear un imperio,
les vino a las manos
tanto a uno
como a otro.**

mas mantienen en conjunto este sistema de modo diferente. No podemos entrar a analizarlo aquí, pues nos llevaría demasiado tiempo, pero tengamos presente que

uno de los sistemas de reorganización de Europa, en sustitución del sistema de alianzas europeas, consistió en establecer que algunas grandes responsabilidades de conjunto serían asumidas no ya por uno, sino por dos imperios, los cuales se convertían inevitablemente en rivales y han desarrollado toda la rivalidad que ahora conocemos.

Una segunda línea de reconstrucción ha consistido en reconstruir los antiguos Estados nacionales, con cambios de fronteras en algunos casos, pero, salvo en el caso de Alemania en que la división imperial partía el país por la mitad, reconstruyendo Estados nacionales soberanos, es decir, reconstruyendo lo viejo, con una ilusión muy extendida de que se retornaba a instituir el viejo sistema efectivamente. La reconstrucción nacional nos reconciliaba en buena medida con los dominios imperiales porque resolvía y sabía hacer frente a muchos problemas, los problemas ante los que se encontraban los ciudadanos; pero lo cierto es que en cuanto al verdadero gran problema de la organización del poder a nivel ahora ya continental, a nivel europeo, no daba respuesta alguna y continúa sin darla. Y continúa sin darla porque —como ha recordado el propio Ingrao— problemas económicos, problemas instrumentales, el hecho en que se ha convertido la defensa de hoy, problemas culturales, problemas tecnológicos, problemas ecológicos, etc., hacen que el marco «Estadonación» sea hoy tan anacrónico como lo eran en el 400 las pequeñas repúblicas italianas. Sin embargo, la forma superficial, la que en mayor medida ocupa la atención de todos, incluidos los políticos, es la que se refiere a la vida nacional; y partidos que en el fondo hubieran debido decir «detengámonos en el nivel de la nacionalización de nuestro espíritu», han dicho alegremente «hagámonos nacionales al

cien por cien» en un momento en que era necesario intentar dejar de serlo.

Si no hubiese habido más que estas dos líneas directrices habría surgido una tensión entre el poder dominante que tiende a unir y los poderes nacionales que tienden a aminorar su presión: en el sistema oriental, donde sólo hay estas dos alternativas, vemos que las cosas ruedan con esa tensión. En el sistema occidental, en cambio, se ha dado la posibilidad de afrontar una tercera vía de solución (que había madurado antes de que se crease esta situación, pero que respondía a un problema que ya entonces también existía), consistente en decir «queremos reconstruir una Europa unida formada de europeos, hecha por europeos», es decir, no de estructura imperial sino de estructura federal, para hablar en términos más correctos, lo que significa adhesiones libres de países que deciden poner en común algunas cosas y respetar las estructuras nacionales, que deben seguir siendo de competencia nacional.

Esta situación se ha desarrollado en la Europa occidental y no en la oriental por la sencilla razón de que el imperio americano, al menos en Europa, es un imperio liberal, un imperio que permite ser verificado, que permite que se planteen alternativas; en América hay, y había aún más al principio, una mala conciencia muy acusada por las responsabilidades que habían venido a asumir, por lo que existía la posibilidad de dar esa batalla por una solución alternativa al sistema de dominio americano.

El problema europeo ha consistido, desde el comienzo, en una solución alternativa a la solución de la unidad bajo dominio americano. Veamos si no los primeros actos fundacionales; por ejemplo, en el proyecto que Monnet sometió a Schumann se decía: «Estad bien seguros de que es absolutamente necesaria la completa utilización de los recursos alemanes, y

si no la hacemos nosotros con criterios europeos la harán los americanos, porque los americanos darán garantías a todos los demás: mirad, devolvemos la plena producción al carbón y al acero alemanes, pero ya no habrá barones del Ruhr». Y cuando surgió el problema del ejército alemán, el proyecto de ejército europeo era la alternativa al proyecto americano, que consistía sencillamente en: «rehaced el ejército alemán y yo, América, seré el garante de que el ejército alemán no volverá a ser el de Guillermo II o el de Hitler»; y del mismo modo, cuando se creó el Mercado Común la idea de fondo era que se necesitaba crear una estructura que permitiese a los europeos proceder a una liberalización sin convertirse en apéndices del sistema americano. Era la propia fuerza de las cosas la que empujaba en ese sentido, pero muy otra fue la conciencia que muchos tuvieron de ello.

El problema europeo ha consistido, desde el comienzo, en una solución alternativa a la solución de la unidad bajo dominio americano.

La izquierda pasó junto a estos problemas tomándolos por otra cosa, juzgándolos erróneamente, y a causa de ello no hizo sentir su peso. Pues cuando uno pasa

ante un problema y no se percata de que el problema existe, son otros los que lo encaran y resuelven. Una de las cosas que estamos pagando es que justamente las fuerzas que debían estar más interesadas en reformar, en tener esa pizca de audacia de pensar en cosas alternativas, lo criticaban, o lo ignoraban, o lo combatían. La posibilidad decisiva de escapar juntos del dominio americano y del sistema de soberanías nacionales fue la creación del ejército europeo; en el curso de las negociaciones se hizo evidente que era necesario crear también la comunidad política europea. Pero ésta se vino abajo por una poco afortunada alianza de la izquierda y todas las fuerzas nacionalistas de derechas en Francia, y ya sabemos que en otros países sucedió inevitablemente que la parte de Europa que se construyó provino de las ideas más moderadas existentes. Monnet no carecía de imaginación para

comprender que había que ir más allá, pero en base a la experiencia que había acumulado durante la primera y segunda guerra mundial en la cúpula de las agencias internacionales de los aliados, pensó: «tomemos un interés concreto, el carbón y el acero, la energía nuclear...»; luego, aprovechando también impulsos de otros «establezcamos la liberalización aduanera» y así sucesivamente: como decíamos, construir Europa construyendo «intereses concretos». Pues nunca se alcanzaba a ver la vía de conjunto, pero que se veían bien las cosas particulares. En base a esto, en todo caso, se levantó la parte de Europa que existe.

En el curso de este proceso las fuerzas de izquierdas comenzaron a comprender que había que tenerlo en cuenta, que era necesario trabajar en ello, y progresivamente hemos ido llegando a un alineamiento a través del cual una buena parte de la izquierda (por ejemplo, la socialdemocracia alemana), que inicialmente estaba en contra, se muestra ahora favorable; tal ha ocurrido con el partido comunista y el partido socialista italiano y otros partidos de diversos países; los socialistas franceses, que estaban divididos, continúan estándolo.

La izquierda se halla actualmente dividida respecto al tema de la unidad europea: hay una parte de la izquierda que continúa diciendo que eso es capitalismo, que eso es servir a los americanos, que esa no es la lucha que debe emprenderse, sino otra, y continúa empeñada en lo que un periódico inglés denominó «falsas batallas contra una sociedad que ya no existe». Ahora bien, hay, sin embargo, fuerzas que han hecho sentir su peso, fuerzas de izquierda que se han comprometido, y el marco político es hoy bastante diferente. Que el Partido Socialdemócrata Alemán y el Partido Comunista Italiano, dos grandes formaciones de izquierda, estén comprometidos en la construcción europea es

La posibilidad decisiva de escapar juntos del dominio americano y del sistema de soberanías nacionales fue la creación del ejército europeo.

un hecho importante, constituye una fuerza que, bien aplicada, puede pesar, contribuir a que las cosas tomen un rumbo u otro.

No olvidemos que hay que contar con una gran fuerza, la fuerza central hoy de apoyo a la construcción europea, que es el conjunto de las fuerzas católicas. Ello obedece a una razón profunda. Las fuerzas católicas que, lentamente, fueron entrando en el marco democrático, lo hicieron con una actitud bastante acusada (en comparación con otros) de reserva hacia el espíritu nacionalista, tenían una reserva religiosa fundamental, según la cual la lealtad última se debe a la Iglesia, al Papa, y no al propio Estado nacional; tanto es así que, en el fondo, los tres Estados más importantes —la Francia moderna, la Italia y Alemania unificada— habían sido erigidos en contra de los católicos. Los cuales no miraban con excesivo amor, tradicional, visceral, hacia esos Estados, y habían permanecido un poco en la retaguardia de todo el proceso de nacionalización de los espíritus, mucho más que la familia socialista, que era inicialmente internacionalista pero se dejó nacionalizar profundamente. Así pues, en un momento en que el problema de la unidad europea ha pasado a primer plano, un momento en que podemos decir que «la historia ha cambiado de rumbo y no se camina hacia el reforzamiento de los Estados nacionales, sino hacia su superación», han pasado de la retaguardia a la vanguardia en este tema, y todo cuanto se ha hecho ha sido prácticamente con su apoyo. Sin embargo, las fuerzas católicas políticamente organizadas son variopintas, y van desde una extrema derecha hasta una extrema izquierda bastante fuerte, pero en conjunto son fuerzas moderadas, son fuerzas que tienden precisamente a

cambiar las cosas lo menos posible, a mantenerlas, a administrar lo que está dado: no son, al menos en Europa, el núcleo de los esfuerzos de reforma de la humanidad.

En tales circunstancias es natural que lo que se ha hecho se haya hecho mal, y hoy nos encontramos frente a tal contradicción. Disponemos de un conjunto de

Construir Europa significa un equilibrio entre la liberación y planificación distinto al que existía y existe.

estructuras que son insuficientes para hacer frente a una creciente masa de problemas, problemas que tienen una dimensión europea, y a modo de instrumentos tenemos sólo estos «mecanismos» de la Comunidad: un Parlamento que carece de poderes, una Comisión que debería ser el Gobierno pero no lo es, un Consejo de Ministros que es a la vez omnipotente e impotente. Y en tal ambiente y tales circunstancias el primer Parlamento electo (porque había sido elegido y nadie tenía allí derecho a decir «yo represento a mi país», sino que había que decir «he sido mandado por mis ciudadanos para esforzarme junto a los demás en determinar cuáles son los grandes problemas europeos»), fue capaz de llegar, a través de un largo y profundo debate, a lo que se llamó «proyecto Spinelli» y no era sino el proyecto de Parlamento Europeo. Es el punto sobre el que se ha podido establecer un consenso político de los europeos medios —porque el Parlamento Europeo está formado por políticos europeos medios de cada país— en torno a una profunda reforma de las estructuras. No era un parlamento de revolucionarios, no había en él Mirabeaus, no había en él Crowells (por desgracia, yo hubiera querido verlos, pero no había). En suma, este parlamento de hombres medios fue capaz de tener una visión clara de lo que debía hacerse; Mitterrand, desde su observatorio, comprendió que había que marchar en esa dirección, hizo salir la iniciativa fuera del parlamento y con ella todo ese complejo proceso negociador por el que a finales de junio (es decir, en el Consejo Europeo de Milán) deberá decidirse si se quiere dar una respuesta seria al proyecto de P.F.

Si se reflexiona bien, estas cosas no son sólo características de la izquierda, sino de las fuerzas que quieren construir una

nueva Europa: las encontramos en la izquierda, las encontramos en la derecha, y no encontramos en ellas ni a toda la izquierda ni a toda la derecha. Debemos

tener presente que es éste el tipo de batalla política y de lucha de alineaciones políticas que hemos de hacer. Recordad cuando, durante la resistencia, era necesario acabar con el fascismo y construir la democracia; naturalmente, toda la izquierda pensaba «queremos construir la democracia para luego realizar tales y tales reformas»; los moderados pensaban de modo algo diferente, pero se mostraban fundamentalmente de acuerdo: «hemos de poner en pie las estructuras democráticas». Pues bien, hoy, «mutatis mutandis», se da el mismo problema, problema que es a su vez la premisa para poder dar la gran batalla. Gran batalla a la que, en mi opinión, debemos adherirnos, si bien veo que se va imponiendo este estado de ánimo. Si, en este nuevo terreno, sabemos formar visiones de conjunto, será mucho más fácil desarrollar esa renovación de las ideas, del capital político de los partidos de izquierdas. Porque construir Europa significa un equilibrio entre la liberalización y la planificación distinto al que existía y existe, y si no estamos atentos a ello nos encontramos con que a nivel europeo sólo contará una postura liberal del tipo «queremos un mercado cada vez más abierto, etcétera». Pero si se dice: el mercado debe existir para que estos pueblos vivan juntos en solidaridad, para que las economías sean convergentes, para que haya una armonización... entonces nuestros moderados comienzan a gritar «no», que el pobre siga siendo pobre y el rico rico; en suma: sí, pero aunque hagamos cosas comunes, no se trata de eso. Este es uno de los puntos en que se manifiesta el importante papel que puede tener y debería tener la izquierda en esta batalla.

Ahora bien, antes de nada hemos de decidir si creamos o no una estructura democrática europea que, aunque algo re-

forzada, siga siendo fundamentalmente como la actual, en la que pesa mucho la burocracia —la burocracia europea y las burocracias nacionales detrás de cada ministro— en la que todo lo que se hace en común se sustrae al control de los parlamentos nacionales, de los gobiernos nacionales, pero no pasa a un control democrático público, tendremos una enojosa Europa conservadora de la que nos sentiremos evidentemente extraños, y la culpa habrá sido nuestra. Pues bien, he de decir que en esta batalla el partido comunista, que había realizado un gran esfuerzo para llegar a esta posición, ha sabido conceder una cierta situación central a este problema en las elecciones europeas; los otros partidos, no. Los otros partidos de la izquierda no lo han hecho, y en muy poca medida los demás. ¿Por qué? Porque, afirmo, es mucho más fácil hablar de todo lo que puede hacerse que hablar de los instrumentos que se requieren para hacerlo.

El gran peligro que corremos en este momento, y quisiera que se prestara gran atención a esto, radica en que, aunque haya conciencia de que hay que dar un paso adelante, aunque se piense que otros países hacen también esfuerzos, se procede con demasiada prudencia, con demasiada lentitud, pensando que ciertas cosas basta con realizarlas a largo plazo. Pondré un ejemplo: Mitterrand, que tiene la responsabilidad central en todo este proceso, vino hace unos días a decir: «dentro de algunos meses habrá una sorpresa en materia de instituciones europeas». Nadie sabe qué sorpresa prepara, y por ello todos los partidarios de las posiciones europeas, los simples ciudadanos, las fuerzas políticas, no saben qué decir, no saben qué maldita cosa deben apoyar. Pero las fuerzas del *stablishment* del inmovilismo lo saben muy bien: hay que resistir, hay que conseguir que las cosas se hagan lo más lentamente posible, etc. He aquí ante lo que hemos de permanecer vigilantes. Ade-

más, quisiera decir al camarada Voigt que no se puede decir en este momento: «sí, ese proyecto va bien, aunque hay problemas, quizá vaya también bien el proyecto Dooge, veremos qué se hace, seguramente hay que seguir adelante». En mi opinión hay que hacer una formulación más rigurosa, hay que dar una batalla en estos meses; después, si se pierde, veremos cuál será la nueva, pero ésta hay que darla ahora, y darla para ganarla, no para perderla. Y ya se esté en el gobierno o en la oposición, ya se esté en Alemania o en Italia o en Francia, hay que reclamar: «queremos que en el mes de junio se tome la decisión de celebrar la Conferencia para el tratado de la unión europea». En segundo lugar debemos reclamar «esa Conferencia debe tener un orden del día concreto», y ese orden del día, en mi opinión, debe ser el proyecto de Parlamento. La Conferencia debe tomar el proyecto de Parlamento Europeo (que no es un proyecto de unas cuantas personas, no es el proyecto de un movimiento privado, es el proyecto del Parlamento Europeo elegido por ciudadanos europeos, que ha costado tres años de trabajos) y, respetando su espíritu y su método, debe ponerse a establecer —teniendo en cuenta también las recomendaciones del comité Dooge— qué puntos se quieren aceptar y cuáles no se quieren aceptar. Y, por último, debemos reclamar que el Parlamento sea asociado a la Conferencia: es decir, las propuestas que se hagan en la Conferencia deben ser nuevamente discutidas y aprobadas también por el Parlamento, y, por medio de los adecuados procedimientos de concertación, debe llegarse a un acuerdo entre Parlamento y Conferencia. ¿Por qué digo esto? Desde un punto de vista formal puede decirse: «este tratado es un acto jurídico internacional y, por lo tanto, debe ser negociado por los gobiernos que han de rati-

**Europa hay que construirla
con el consenso
de los ciudadanos
y el consenso
de los Estados.**

ficarlo»; desde un punto de vista sustancial, este tratado es la constitución de un cuerpo que ya existe, que tiene una asamblea representativa. Por eso es necesario

seguir ese doble sistema. Al hablar de este tema con cualquier jefe de gobierno, me han respondido siempre con típica reacción inmovilista: «¡Pero eso no se ha hecho nunca!». Y yo he respondido que tampoco Europa se ha hecho nunca. Si queremos hacerla, hemos de empezar a comprender que hay que construirla con el consenso de los ciudadanos y el consenso de los Estados, no simplemente con el consenso de las políticas diplomáticas que aconsejan los distintos gobiernos. Y haré aún una última observación: hay que afirmar «debemos comenzar aun cuando no estén todos». Y negar cuando oímos: «pero entonces destruyamos cuanto se ha hecho». No: esta Comunidad está ya en completa inmovilidad, no llega a hacer nada o casi nada. Si queremos volver a ponerla en movimiento, debe haber al menos un gru-

po que diga: «empecemos nosotros y pongamos a todos los demás ante su responsabilidad». Esto es algo, repito, para lo que hay que saber luchar y hablar con suma precisión. Como no es un conjunto de cosas que estén ya en la mente de todos y resulten evidentes, es muy fácil pasar a su lado sin reparar en ellas. Y, si llega a hacerse realidad, permitirá enfrentarse después a todos los problemas de que han hablado Ingrao y Voigt.

© *Democrazia e diritto*
Traducción: José M.^a Moreno

Intervención de Altiero Spinelli en el Seminario «Crisi della CEE, declino dell'Europa e ricerca di un nuovo europeismo. Analisi e prospettive della sinistra europea». Roma, marzo de 1985.

Z O
N A

Sociología
histórica

Ludolfo Paramio
Immanuel Wallerstein
Perry Anderson

La estética
del posmodernismo

Fredric Jameson

38

Zona Abierta 38

enero-marzo de 1986

LA DEFENSA DE EUROPA OCCIDENTAL

Angel Viñas



De nuevo los problemas sobre la paz y la seguridad en Europa se han convertido en uno de los ámbitos en los que con mayores intensidad y apasionamiento se ha dirimido en los últimos años la lucha política en muchas de nuestras sociedades. España, tanto tiempo al margen de aquéllos, no es una excepción.

El debate sobre la pertenencia a la Alianza Atlántica ha puesto de relieve hasta qué punto eran importantes las fisuras potenciales que podían generarse en la sociedad y en las fuerzas políticas españolas. En ocasiones, la escisión de estas últimas y la aparición de novedosos movimientos pacifistas han dado a la discu-

sión un regustillo de conflicto de fe, de guerra de religión.

Y, sin embargo, Europa, al Este y al Oeste, ha atravesado a lo largo de las cuatro últimas décadas uno de los más dilatados períodos de paz de su historia. Ni siquiera en el mundo abierto por el Con-

greso de Viena y que pareció hacer crisis con el estallido de la guerra de Crimea, otros cuarenta años más tarde, se registra un período tan pacífico: entonces estallaron revueltas, revoluciones populares e incluso guerras civiles (como, por ejemplo, en España).

Las razones que explican este largo período de paz no son difíciles de encontrar: sobre ellas han corrido innumerables ríos de tinta. Aquí destacaré tan sólo tres ¹:

En primer lugar, está el hecho —históricamente insólito— de que poco después de la segunda guerra mundial las dos superpotencias proyectaron su influencia y poder militares hasta en el corazón mismo del viejo continente.

En el Este la Unión Soviética se talló un imperio, no excesivamente cuarteado a pesar de numerosos análisis agoreros, y en el que los intentos nacionalistas por conseguir mayor autonomía (casos de la República Democrática Alemana, Hungría, Checoslovaquia y Polonia) fueron suprimidos y/o controlados, bien directamente o por delegación. Este «glacis» imperial no pone, hoy por hoy, en peligro la seguridad soviética: actúa como tampón, como zona de defensa avanzada y como vanguardia en la que se encuentran divisiones de entre las mejor equipadas y entrenadas con que cuenta el Kremlin.

En el Oeste los Estados Unidos se crearon su propia zona de influencia, no a la manera imperial clásica pero sí en la más moderna de una «comunidad de seguridad» (en la terminología de Karl W. Deutsch). Se da en ella un predominio político yanqui y en la misma fricciones intraeuropeas e intra-atlánticas, *pero la violencia o la amenaza de su empleo no constituyen ya una manifestación normal de la política, ni para los europeos ni para los norteamericanos.*

**Europa ha atravesado,
a lo largo de las cuatro últimas
décadas, uno de los más
dilatados períodos de paz
de su historia.**

En los años veinte los Estados Mayores británico y francés podían hacer «juegos de guerra» en los que la otra parte apareciese como adversario potencial. Entonces esto era bastante irrealista. Hoy sería simplemente grotesco.

Una segunda razón explicativa del largo período de paz estriba en que ésta se fundamenta en las armas. Existe una acumulación sin precedentes de capacidad destructiva a ambos lados de la frontera que separa el Este del Oeste. Millones de soldados en pie de guerra, dotados de armamentos de un potencial letal elevadísimo, constantemente renovados y modernizados, velan por el mantenimiento del *status quo* y garantizan que una eventual alteración de éste genere costes desproporcionados para el agresor. No era ésta la situación en 1914 o en 1939, si bien en ocasiones se han extraído paralelos poco afortunados.

La tercera razón es que la paz de Europa está basada en el terror, como ya predijo Churchill. Las armas nucleares, desplegadas a ambos lados de la divisoria o instaladas en el corazón de las superpotencias, pero con las que cabe asestar golpes mortales tanto a la zona europea adversaria como al otro gran antagonista, han elevado hasta cotas insospechadas el coste de oportunidad posible de la guerra, han creado un tabú sobre el empleo de la violencia directa entre los Estados Unidos y la Unión Soviética, han aconsejado un cuidado extremo en la gestión del conflicto político, económico e ideológico entre los dos grandes sistemas de organización de la convivencia social en Europa, y han obliterado la distinción —hasta ahora históricamente nítida— entre agresión y suicidio. El temor a las consecuencias de un cambio en el *status quo* territorial europeo, derivado de una agresión de la otra parte, es considerable, es real y a él no se escapa ningún país europeo (ya esté alineado en uno de los bandos o mantenga una neutralidad

armada o pactada). No escapan tampoco las superpotencias.

En consecuencia, Europa ha preservado la paz como si se tratara de un oasis de templanza en un mundo desgarrado por conflictos económicos, políticos y militares y en el que los vacíos de la descolonización han solido ser ocupados indirectamente, bien por las propias superpotencias, bien a través de regímenes de representación.

Esta paz no ha sido fácil de mantener. Se ha basado en arreglos organizativos complejos cuya función última estriba en administrar ese bien público supremo que es la disuasión mutua. Desde 1949 el Tratado del Atlántico Norte y su derivado, la estructura militar con el mando inte-

grado, han polarizado los esfuerzos occidentales por defender el *status quo*. Las divergencias de interés, a veces muy intensas, surgidas a ambos lados del Atlántico

no han oscurecido hasta ahora el hecho absolutamente central de que la Europa occidental sigue dependiendo, para su seguridad, del apoyo nuclear, convencional y logístico que desde entonces se comprometieron a prestarle los norteamericanos.

En el Este, una red tupida de acuerdos bilaterales entre la Unión Soviética y los países de su «glacis» ha sido el fundamento sobre el cual se levantó, como respuesta a la integración de la República Federal de Alemania en la Alianza Atlántica y al rearme alemán, la Organización del Pacto de Varsovia. Desde entonces, la unidad de doctrina, interoperabilidad, estandarización y estructuración de la cadena de equipamiento entre los miembros han avanzado enormemente.

Al Este y al Oeste la acumulación de medios disuasores mutuos se justifica por un diagnóstico acerca de las eventuales intenciones del adversario y se basa en una organización de la fuerza congruente con doctrinas extremadamente elaboradas.

No hay nada más cauteloso ni más conservador que un planificador militar que aspira a garantizar la seguridad en evitación de la probabilidad de ocurrencia del supuesto más desfavorable posible. Sin embargo, con el paso del tiempo la valoración militar ha pasado a determinar e incluso en ocasiones a sustituir la evolución política.

Aún así, se plantea siempre una pregunta fundamental: la equiparación entre capacidad e intenciones puede no ser realista. Queda, sin embargo, por explicar por qué las capacidades militares de una de las partes, en este caso la oriental, adoptan una determinada configuración y siguen un desarrollo continuado.

Está de moda, y es un ejercicio sano,

El temor a las consecuencias de un cambio en el «status quo» territorial europeo es considerable y real.

criticar los diagnósticos y las doctrinas sobre la que se basa la defensa no autónoma, armada y orientada por la amenaza del terror que hoy existe en Europa². In-

dudablemente la ortodoxia de la seguridad ha llevado a situaciones aberrantes tanto en el Oeste como en el Este.

Subsiste, sin embargo, un despliegue de fuerza militar, convencional y nuclear, de difícil modificación —como testimonia la experiencia de los numerosos esfuerzos fallidos en materia de control de armamentos— y que absorbe recursos de alto coste de oportunidad.

No se hace esto por capricho.

Desde el punto de vista de la ortodoxia occidental se afirma que la paz y la seguridad en Europa se ven amenazadas por el surgimiento de desequilibrios militares en favor de la Unión Soviética, y se recuerda a estos efectos que el Kremlin ha mantenido una política de forzamiento de la capacidad militar incluso en los momentos en que la distensión festejaba sus grandes triunfos.

Helmut Schmidt no tardó en argumen-

tar que por debajo del nivel estratégico global, en el que las superpotencias habían alcanzado en los años setenta una situación de paridad o de equivalencia aproximadas, la significación de los desequilibrios en el balance europeo adquiriría un carácter preocupante.

La superioridad convencional soviética (incluidas las armas químicas y bacteriológicas) podía, en efecto, inducir un proceso de erosión de la vinculación euro-norteamericana (ya debilitada por la neutralización de los arsenales estratégicos centrales) que el Kremlin estaría en condiciones de utilizar para aumentar las tendencias a un eventual desenganche entre los dos lados del Atlántico. Esto posibilitaría una creciente toma de influencia soviética sobre los destinos de la Europa occidental.

La reducción de los desequilibrios regionales, en condiciones absolutamente insólitas como las derivadas de la amplia vulnerabilidad de los territorios nacionales de las superpotencias a las eventuales agresiones de la otra, se convertiría así en un mecanismo esencial para paliar las consecuencias de una evolución al término de la cual se teme el chantaje político-militar a los países europeos occidentales.

En este sentido, el mantenimiento de la estrategia de la respuesta flexible, orientada por la necesidad de evitar un fallo en la disuasión, aparece como garantía de la paz. Dicha doctrina prevé la estrecha interacción entre los distintos medios disuasorios, la verosimilitud de respuesta al nivel escogido por el adversario, la incalculabilidad del riesgo al que éste se expone y una elevación del umbral nuclear, si bien nunca a cotas demasiado altas que hagan su traspaso absolutamente improbable. De esta suerte se piensa que el eventual agresor será disuadido de asumir el riesgo que conlleva una modificación del *status quo* territorial europeo porque las

ventajas que de ello extrajera no estarían en una relación razonable con los costes en que habría de incurrir para conseguirlo.

En esta perspectiva, el rechazo de la Alianza a no anular una opción de primer empleo de los arsenales nucleares para defenderse de una agresión convencional desde el Este aumenta tal incalculabilidad. En el mismo sentido apunta la acumulación de grandes arsenales de armas de segundo golpe que podrían ser utilizadas aún en el caso de las pérdidas subsiguientes a una eventual aventura nuclear a que se lanzara el adversario.

Esta argumentación ortodoxa se basa en ciertos supuestos: ante todo, en la consideración de la Unión Soviética como un adversario potencial peligroso cuyo sistema político-social tiende a la represión en el interior y a la expansión en el exterior. Esta última, por consiguiente, ha de ser cortocircuitada con medidas militares, único campo en el que el Kremlin ocupa una posición de superpotencia, tras la erosión de su credibilidad ideológica, económica y social.

En segundo lugar, en la noción de que la Unión Soviética ha acumulado capacidades militares contra la Europa occidental muy por encima de sus propias —y legítimas— necesidades de seguridad, aún cuando se reconozca que, por diversas razones, la ofensiva deba constituir la base de la estrategia soviética.

La experiencia de las dos guerras mundiales, el estar rodeada —fuera del «glacis»— de enemigos potenciales, incluida China, y no en último término la necesidad de disuadir un conflicto proyectándolo hacia territorios que no sean los de sus aliados, son los motivos más frecuentemente aludidos.

**Existe una acumulación
sin precedentes de capacidad
destruktiva a ambos lados de la
frontera que separa
el Este del Oeste.**

En tercer lugar, en la idea de que la aceptación de desequilibrios profundos en el ámbito militar puede llevar a la Unión Soviética a conclusiones equivocadas acerca

de la voluntad de resistencia de los países europeos occidentales. En tal sentido se afirma que en la carrera de armamentos es preciso mantener el paso porque de lo contrario el adversario potencial podría interpretar tal retracción como un signo de debilidad fundamental.

En cuarto lugar, en la creencia de que si bien la gestión de la disuasión se ha hecho altamente compleja, la efectividad de la estrategia disuasoria es tal que el riesgo de que pueda fallar es prácticamente nulo. La Alianza Atlántica, por ejemplo, sigue diariamente, a todas horas, las más pequeñas modificaciones que puedan ocurrir en el dispositivo de fuerzas del adversario de tal suerte que en todo momento pueden inferirse las intenciones de éste. Nada ha hecho pensar que el Kremlin esté dispuesto a lanzarse a una aventura, ni siquiera en los años 1983 y 1984 de fuerte elevación de la tensión Este-Oeste.

Finalmente, suele indicarse que la carrera armamentista no tiene una lógica inmanente de la misma que esté sustraída de la continua evaluación que de la situación de seguridad hacen las autoridades nacionales. Para los países europeos occidentales, la acumulación de medios militares es la consecuencia de las tensiones políticas y sociales entre los dos grandes sistemas. De aquí que la estrategia disuasoria deba complementarse con todo tipo de ofertas e intentos para intensificar la colaboración con el adversario potencial de tal manera que, aumentando la confianza entre los dos bandos, sea posible reducir los niveles de los arsenales.

Estos supuestos admiten multitud de interpretaciones y, ciertamente, en los últimos años las divergencias que sobre los mismos se han abierto entre europeos y norteamericanos han sido considerables. En la dialéctica entre equilibrio y distensión, entre fuerza y colaboración, no es infrecuente que se hayan enfatizado los

**La ortodoxia de la seguridad
ha llevado a situaciones
aberrantes
tanto en el Oeste
como en el Este.**

primeros términos de ambos binomios, en detrimento de los segundos. Así, puede darse el caso de que se otorgue prioridad absoluta a la búsqueda de superioridades

militares parciales en lugar de acentuar los esfuerzos de distensión y control de armamentos. La historia de los últimos tres o cuatro años sobre las pugnas en la Administración norteamericana quizá no haya sido escrita definitivamente, pero lo ya conocido ilustra con claridad lo dicho ³.

Cómo salir de esta situación constituye, sin duda, una de las cuestiones más importantes para las sociedades europeas.

Una primera reacción ha estribado en lanzar una crítica masiva a los fundamentos sobre los que se basa la ortodoxia occidental en materia de política de seguridad. Numerosos movimientos radicales, pacifistas y ecologistas, apoyados por *think-tanks* independientes en las universidades y en los centros de investigación sobre la paz, han puesto de relieve muchas de las incoherencias de la doctrina ortodoxa.

La lógica de la disuasión ha sido un blanco favorito: la defensa de los intereses propios la asegura, en efecto, con la amenaza del suicidio, asumiendo que el adversario será capaz en todo momento de actuar racionalmente y de sopesar los costes y beneficios de las acciones que puedan desestabilizar el *status quo*. Por lo demás, se señala que el sistema de la disuasión mutua genera continuas inestabilidades al considerar que los desequilibrios militares entrañan riesgos inaceptables para la seguridad propia. De aquí que no sea difícil desplegar, dada la velocidad del cambio tecnológico, nuevos sistemas de armas que crean a su vez nuevos desequilibrios que el adversario se ve obligado nuevamente a rellenar. El resultado es que ambos bandos aspiran no al equilibrio sino a un cierto grado de superioridad, lo que genera una dinámica productora de inseguridad e inestabilidad.

La crítica al pensamiento ortodoxo suele acentuar la peligrosidad de la actual situación en Europa. La lectura de la literatura producida en los años 1981 a 1983 por el movimiento pacifista alemán, que es con la que estoy más familiarizado, no da lugar a otra impresión. La acumulación de arsenales acrecienta el riesgo y hace más verosímil el estallido de un conflicto, bien sea por deslizamiento o por incapacidad de controlar los automatismos integrados en la cadena de control de las decisiones sobre el eventual empleo de las armas nucleares.

Esta crítica contiene el germen de una nueva ética que pueda servir de base a una política que imposibilite el estallido de un conflicto ⁴. El camino del desarme no apunta hacia nuevas rondas de rearmamento sino hacia la congelación de arsenales y hacia medidas decididas de reducción de éstos, aunque en un primer momento ello se haga de forma unilateral.

Sólo los países democráticos occidentales tienen la solidez suficiente, se afirma, para iniciar tales medidas, que en un principio no cabe esperar de la Unión Soviética, con una concepción paranoica de sus necesidades de seguridad.

La crítica se dirige, por lo demás, contra las dos superpotencias que practican una política exterior y de seguridad igualmente agresiva y expansiva, reduciendo el margen de maniobra de los demás países. El tema de la equiparación juega un papel muy importante en el movimiento pacifista, que divisa en el comportamiento de los soviéticos y de los norteamericanos numerosos paralelismos. Desde el punto de vista europeo se subraya que todos ellos ven en las respectivas zonas de influencia «glacis» más o menos imperiales en los cuales poder dirimir un conflicto armado si la situación se tensara hasta tal punto, con el fin de evitar la destrucción mutua de ambos territorios nacionales.

**Con el paso del tiempo
la valoración militar ha pasado
a determinar e, incluso,
a sustituir la evaluación
política.**

La conclusión es devastadora para la ortodoxia: dado que, además, la garantía nuclear norteamericana en favor de Europa ha perdido credibilidad, los intereses vitales de los países europeos occidentales no coinciden ya con los de los Estados Unidos. De aquí que unos se pronuncien en favor de una desvinculación con respecto a los esquemas de defensa común y otros subrayen la imperiosa necesidad de que Europa occidental fortalezca su propia postura en materia de seguridad.

Intimamente ligadas a la crítica del sistema de disuasión están las valoraciones —muy diversas— sobre la estrategia y amenaza del Este. Hay quienes, como Ericson, subrayan que en las declaraciones y literatura militares soviéticas parece predominar la noción de que la guerra nuclear (que podría resultar de un cambio en el *status quo* territorial de Europa) no es un instrumento racional de la política porque la relación entre fines y medios pierde toda posible significación cuando el costo de destruir al enemigo equivale a la propia autoinmolación. En este sentido, los soviéticos divisarían el papel de la fuerza militar en hacer ver al campo «imperialista» que los medios de tal carácter no pueden resolver la pugna histórica entre los dos grandes sistemas de organización socio-económica ⁵.

La política soviética trataría, básicamente, de minimizar los incentivos de pensar que un ataque contra el Este pudiera tener éxito. Se hace hincapié en la obvia necesidad de evitar todo estallido de las hostilidades, pero también aquí la aplicación de la lógica anticipatoria del peor caso entre los posibles lleva al Kremlin a desarrollar una capacidad de combate en condiciones de conflicto nuclear, garantizándose la posibilidad de poder asestar un segundo golpe, tras recibir uno previo más o menos aniquilador.

Para otros analistas, sobre todo norteamericanos, el crecimiento de la capaci-

dad de proyección del poder militar soviético a grandes distancias y la verosimilitud de una mayor inestabilidad en regiones del Tercer Mundo de la que el Kremlin pudiera extraer provecho, son razones que les han llevado a considerar que Europa no es ya el principal escenario de la posible agresión soviética. Surgirían otras amenazas, fuera incluso de la zona en que surte efectos el Tratado de Washington, y la postura occidental debiera orientarse por la necesidad de proteger las fuentes de materias primas y las rutas de comunicación marítima con el fin de negar al Kremlin toda interferencia con las mismas.

Stratmann ha recordado que el que la Unión Soviética continúe concediendo prioridad a la ampliación de su capacidad militar contra la OTAN no tiene un impacto profundo entre tales analistas debido a dos razones:

a) La situación militar en Europa se considera estable y un conflicto bélico escasamente probable.

b) El nivel de preparación de la Alianza ante una contingencia no es demasiado elevado, por lo que si ésta no ha ocurrido ya no es verosímil que ocurra en el futuro.

Numerosos estudios en Europa occidental contrarrestan la nueva opinión entre expertos norteamericanos y subrayan que el patrón de asignación de recursos militares soviéticos permite inferir un alto grado de continuidad. La modernización de fuerzas y los programas de revisión de las mismas siguen apuntando hacia las dos misiones estratégicas que, aparte de la competencia en el ámbito nuclear global, son las más importantes para el Kremlin: en Europa y el Noreste asiático.

También se afirma que desde el punto de vista de la congruencia entre esfuerzos y objetivos, la estrategia soviética para tiempos de paz y para tiempos de guerra son complementarias y se refuerzan mutuamente. El hincapié hecho en la moderni-

zación de las fuerzas del Pacto de Varsovia en Europa oriental se da la mano con la voluntad de erosionar la vinculación euronorteamericana.

De aquí se deduce que las prioridades soviéticas contra Europa occidental, en el supuesto de que fallara la disuasión, quedarían determinadas por dos objetivos básicos y fundamentales: en primer lugar, disuadir o, si esto no es posible, limitar los ataques nucleares norteamericanos contra el territorio soviético. En segundo lugar, dislocar la Alianza Atlántica por medio de una ofensiva rápida contra los países europeos occidentales, con el fin de romper la línea de defensa avanzada aliada y alcanzar el Rin y los puertos del Mar del Norte en el más corto período de tiempo posible.

**Una penetración soviética
que pudiera llegar
rápidamente al Rin o al Canal
de la Mancha no es
demasiado verosímil.**

En este sentido, los trabajos de la Alianza muestran que en la verosímil opinión soviética las fuerzas del Pacto de Varsovia deberían ser capaces de cubrir tales obje-

tivos ejecutando las necesarias operaciones en cualesquiera circunstancias, lo que incluye el empleo de armas nucleares y químicas. Desde luego, la capacidad del Pacto de Varsovia para llevar a cabo acciones combinadas con armas convencionales y nucleares ha aumentado extraordinariamente desde los años setenta y ha teñido de dudas la idea de la escalada nuclear deliberada por parte de la OTAN ⁶.

En los últimos años se han vertido ríos de tinta acerca de la posibilidad de convencionalizar más, a un costo razonable, la capacidad de resistencia de la OTAN frente a un eventual ataque del Este. En el otoño de 1984 la Alianza adoptó el concepto del FOFA (*Follow-on Forces Attack* o ataque a las fuerzas subsiguientes) como primer eslabón en la reelaboración de una estrategia más adecuada a la actual situación militar de Europa.

El FOFA trata de neutralizar una parte de las divisiones de refuerzo del Pacto de

Varsovia y de retrasar la progresión de las restantes. La decisión fue precedida de un debate intenso: se afirmaba que la prioridad esencial en toda innovación ha de otorgarse a la necesidad de contrarrestar las amenazas prioritarias. Si la ortodoxia de la OTAN divisa éstas en la capacidad de las fuerzas del primer escalón del Pacto de Varsovia por perforar la defensa avanzada de la Alianza, es decir, la situada lo más próxima posible a la frontera interalemana, los cambios habrían de concentrarse en ver cómo es posible, en efecto, reducir dicha capacidad. Tendría menor interés abarcar simultáneamente objetivos que sólo fuesen rentables desde el punto de vista de una guerra de desgaste, como son las fuerzas de los segundo y tercer escalones.

Por otro lado, si la amenaza más peligrosa es el eventual éxito de los denominados «grupos operativos de maniobra» soviéticos en la ruptura del frente, quizá hubiese sido más interesante invertir en el reforzamiento de unidades muy móviles que pudieran constituir una segunda línea de defensa, a manera de «fuerzas de interdicción de retaguardia».

Tres cuestiones, y una pregunta concreta, requieren una discusión abierta a la hora de apuntalar políticamente todo diagnóstico de la situación estratégico-militar en Europa.

Si es verdad, como afirma la ortodoxia, que los niveles de fuerza convencional de la OTAN son muy inferiores a los del Pacto de Varsovia, que la capacidad nuclear táctica de aquélla es altamente vulnerable y, en cualquier caso, de difícil uso, y que las fuerzas estratégicas nucleares (norteamericanas) desempeñan un papel limitado y estricto de represalia, ¿qué ha impedido a la Unión Soviética invadir el Oeste europeo?

Una posible respuesta, indica Kaufmann, es que el Kremlin, por lo menos desde la muerte de Stalin, no haya tenido en realidad la intención de atacar militarmente a

En el momento actual no les es posible a ningún bando anticipar con plena confianza cuál pudiera ser el resultado de una conflagración en Europa.

la OTAN. Otra es que, dado que para la Alianza la defensa de Europa occidental es mucho más vital que para el Pacto de Varsovia conquistarla, la mera probabilidad, por escasa que sea, de que en la protección de tal interés absolutamente básico pueda desencadenarse una respuesta nuclear sirva ya de suficiente mecanismo disuasorio para el Kremlin.

Y, por último, una tercera respuesta posible es que la valoración ortodoxa de las deficiencias en los niveles de defensa convencional de la OTAN sea, simplemente, incorrecta ⁷.

Que esta valoración sigue haciéndose hasta la fecha es algo de lo que no cabe duda. Que es discutible, forma parte también de la sabiduría esparcida por una larga serie de analistas independientes. El trabajo de Kaufmann constituye buena muestra de ello. En él se argumenta cómo la Alianza tiene una elevada probabilidad de alcanzar sus objetivos esenciales en la mar y cómo dista de verse afectada por una intensa debilidad frente al Pacto de Varsovia en términos de defensa convencional o de carecer de una defensa no nuclear creíble en la región de más peligro, que es la Europa central.

Ciertamente hay un riesgo. Sin embargo, una penetración soviética que pudiera llegar rápidamente al Rin o al Canal de la Mancha no es demasiado verosímil, aunque tal sea la intención estratégica del Kremlin. Las fuerzas de la Alianza podrían detener dicha penetración y no verse obligadas a recurrir de forma inmediata a los arsenales nucleares.

En definitiva, en el momento actual no le es posible a ningún bando anticipar con plena confianza cuál pudiera ser el resultado de una conflagración en Europa, incluso a nivel convencional, y ello sirve precisamente para disuadir un ataque, en ausencia de motivos poderosos extramili-

tares que así lo aconsejen. Las valoraciones anuales del International Institute for Strategic Studies londinense no emplean otro lenguaje. La más reciente continúa afirmando que el equilibrio convencional en Europa es tal que la posibilidad de una agresión militar sigue siendo una decisión altamente arriesgada para cada lado. Aún en el supuesto de victorias locales, no parece que ninguno de los dos bandos disponga de la suficiente potencia para garantizar la victoria. Las consecuencias para el agresor serían muy impredecibles y los riesgos, sobre todo de escalada nuclear, incalculables ⁸.

Es, pues, necesario dar todo el juego posible a la valoración política, en lo que debe surtir todos sus efectos una actuación menos orientada por el temor a la inminencia de un colapso militar.

En el ámbito nuclear la situación tampoco es excesivamente ambigua: a lo largo de los últimos años numerosos análisis han puesto de manifiesto que la instrumentación en Europa de la política de la Alianza adolece de innumerables defectos. Se ha afirmado hasta la saciedad, por ejemplo, que las armas nucleares de corto alcance (utilizables con fines tácticos en combate) son muy vulnerables a la destrucción preventiva que pueda ejecutar el Pacto de Varsovia, incluso por medios convencionales. También se ha indicado que la complejidad y lentitud de los procesos que deben seguirse, hasta que los jefes de las unidades militares de que dependen tales armas puedan hacer uso eventual de las mismas, conceden una superioridad al eventual agresor. La infraestructura que sirve de base a las operaciones nucleares de la Alianza está expuesta fácilmente a ataques preventivos y todo ello, ha dicho Steinbruner, viola uno de los principios esenciales de la planificación estratégica: «Unas fuerzas diseñadas para disuadir un conflicto, ya sea por la amenaza de represalias que produzcan un daño inaceptable

o por la promesa de una defensa eficaz, deben ser ampliamente invulnerables a ataques preventivos. De lo contrario, y en medio de una crisis, valen más para provocar un ataque que para evitarlo» ⁹.

Si esta interpretación es correcta, de ella se desprenden algunas medidas urgentes. La primera, y quizá más importante, es continuar el proceso de retirada de las armas nucleares tácticas desde sus emplazamientos actuales, muy avanzados y expuestos, a otros más atrasados en los que reciban por lo menos algún tipo de protección contra ataques convencionales. Además, la planificación de su eventual empleo debería separarse del planeamiento de las operaciones convencionales, lo que no será fácil. Todo ello suscitará numerosos elementos de discusión entre europeos y norteamericanos que no dejarán de gravitar, sin duda, sobre el debate político-militar de los próximos años. En cual-

**Desde que se dispone
de la fuerza destructiva del átomo
la guerra ha perdido totalmente
su función y papel
tradicionales.**

quier caso, queda margen para una reducción de arsenales, como es reconocido en las actuales negociaciones soviético-norteamericanas de Ginebra.

Este control de armamentos y la continuación de la política de distensión, tan poco floreciente en los últimos años, constituye en la actualidad el imperativo número uno para la configuración de un futuro europeo más seguro.

En opinión de Egon Bahr, «la europeización de la política de seguridad implica: reducir la importancia de lo militar y oponerse a las tendencias polarizantes. Quienes aprecien los intereses europeos de corazón deben continuar la política de distensión porque es esta distensión la que da a los países europeos un cierto grado de igualdad con las potencias nucleares» ¹⁰.

Se plantea, pues, si ambos procesos, el de la reducción de armamentos y el de la distensión, desembocarán o no en una situación de, por utilizar el término ya acuñado por Helmut Schmidt desde 1978

y Egon Bahr, «*security partnership*» entre el Este y el Oeste.

Para que la distensión pueda reanudarse en Europa no es condición indispensable

que también se relance a nivel global. Es verdad que, de producirse esto último, ello la facilitará en Europa. Pero una distensión específicamente centrada en el viejo continente puede contribuir a impulsar la general. Dada la peculiar situación europea, la distensión es particularmente necesaria entre nosotros, y de superar con éxito las pruebas del futuro sería difícil que ello no tuviese efectos dulcificadores sobre la tensión entre las superpotencias.

También será importante que los progresos que se realicen en el terreno de la limitación de armamentos se produzcan no sólo a nivel estratégico y en el ámbito nuclear sino, en particular, en el continente europeo.

En el próximo futuro la limitación de armamentos en Europa ha de recibir una mayor prioridad por razones fácilmente comprensibles: se han conseguido ya logros importantes en el terreno del acercamiento entre los países europeos, orientales y occidentales. Europa es el continente en donde las fuerzas de ambos bloques están en contacto directo. Por último, la evolución previsible en el campo tecnológico afectará de forma inmediata a los sistemas que puedan ser desplegados en el continente.

La *seguridad compartida* puede no ser un paso revolucionario, como el que desearían muchos miembros de los movimientos pacifistas, pero sus implicaciones son de gran alcance, considerando el actual estado de sobresaturación armamentística en Europa, de dudas sobre la garantía norteamericana, de peso excesivo de las superpotencias sobre los destinos de los países europeos y de las crecientes dificultades con que tropieza la política de seguridad ortodoxa.

Por primera vez en la historia la seguridad se ha convertido en la voluntad y capacidad de poder vivir con el adversario.

La noción de seguridad compartida no es una reliquia de la época pre-nuclear, como es el pensamiento que todavía domina la doctrina en que se basan los des-

pliegues de la Alianza. Traduce la constatación, obvia, de que en la era nuclear ya no es posible hablar en términos de victoria sobre el adversario, al menos en un sentido mínimamente significativo.

Desde que en las sociedades industriales modernas el hombre dispone, para eventuales usos bélicos, de la fuerza destructiva del átomo, la guerra ha perdido totalmente su función y papel tradicionales. El aforismo clásico *si vis pacem, para bellum* no refleja la realidad del presente.

La guerra no protege ya, en efecto, a la población, al territorio y a los bienes materiales e inmateriales frente a las amenazas de agresión externa, ya que un conflicto nuclear puede destruir todo aquello que importa salvaguardar.

En una palabra, en la época del *overkill* nuclear la violencia ha dejado de ser el medio adecuado para regular los conflictos que oponen a los Estados en el contexto del conflicto Este-Oeste.

Por primera vez en la historia de la humanidad la seguridad se ha convertido en la voluntad y capacidad de poder vivir con el adversario.

Ningún país puede, a largo plazo, alcanzar un nivel de seguridad razonable si sólo se basa en decisiones unilaterales sobre su propio despliegue militar. Y ello por la simple razón de que la seguridad depende también de las acciones y reacciones de los adversarios potenciales. La denominada Comisión Palme ya subrayó que los Estados no pueden buscar su seguridad a expensas de la de los otros. Sólo la obtendrán a través de arreglos cooperativos ¹¹.

La actual conferencia de Estocolmo puede suavizar muchos de los temores que gravitan sobre Europa gracias a una mayor transparencia, a la introducción de ciertos constreñimientos sobre las actividades militares en ambos lados de la divisoria, y a medidas declaratorias que ofrezcan confianza sobre la existencia de propósitos no agresivos.

A plazo más amplio se requieren otras ideas, otras doctrinas. La experiencia muestra que en el campo político-estratégico el cambio es lento. Nadie quiere exponerse a riesgos innecesarios. Pero cambio debería haber. Este es el reto y ésta es la aspiración común de un sinnúmero de propuestas, a veces poco realistas, a veces demasiado tímidas, que en el momento presente y en el próximo futuro definirán el debate más importante con que se enfrenta la vieja Europa.

Es satisfactorio comprobar cómo la vieja España, durante tanto tiempo cortada de la evolución de los problemas comunes europeos, participa en ese gran debate. El documento sobre paz y seguridad dado a conocer por el PSOE a finales de 1985 muestra cómo en nuestro país la fuerza política que sustenta al primer gobierno enteramente socialista de nuestra historia es sensible a la reflexión que se hace fuera de nuestras fronteras, participa en ella y está dispuesta a aportar su granito de arena a la misma.

Tras ello hay un serio esfuerzo de conceptualización de los problemas de seguridad en Europa, un análisis en profundi-

dad de las experiencias obtenidas con la participación española en la Alianza Atlántica y una voluntad declarada de, en la solidaridad con las restantes democracias europeas, contribuir en la medida de nuestras posibilidades a la construcción de una Europa cuya defensa sea más autónoma, más realista y más adaptada a las condiciones finales del siglo XX.

¹ Véase, para un análisis más detallado, Angel Viñas, «Convencionalización de la defensa militar en Europa: algunos problemas», *Estrategia* (Lisboa), n.º 1, enero-marzo de 1986.

² Véase, por ejemplo, la reciente colección de ensayos de Albrecht, Berg, Lodgaard, Lutz, Schlotter y Senghaas, *La seguridad europea a debate. Bloques, neutralismo, desvinculación*, Fontamara, Barcelona, 1985.

³ Strobe Talbott, *Deadly Gambits: The Reagan Administration and the Stalemate in Nuclear Arms Control*, Knopf, Nueva York, 1984.

⁴ El *best-seller* imbatido es, en este aspecto, Franz Alt, *Frieden ist möglich. Die Politik der Bergpredigt*, Piper, Munich, numerosas ediciones.

⁵ John Ericson, «The Soviet View of Deterrence: A General Survey», *Survival*, noviembre-diciembre de 1982.

⁶ K-Peter Stratmann, *Nato Doctrine and Operational Priorities: The Central Front and the Flanks*, ponencia presentada a la reunión anual del International Institute for Strategic Studies, Berlín, septiembre de 1985.

⁷ William W. Kaufmann, «Non-nuclear Deterrence», en John D. Steinbruner y Leon V. Sigal (eds.), *Alliance Security: NATO and the No-First-Use Question*, The Brookings Institution, Washington D.C., 1983.

⁸ *Military Balance, 1985-1986*, pág. 185.

⁹ «Alliance Security», en la obra de la nota 7.

¹⁰ Egon Bahr, «Gemeinsame Sicherheit - Voraussetzung für kollektive Sicherheit», *Vierteljahresschrift für Sicherheit und Frieden*, vol. 2, n.º 1, 1984.

¹¹ Véase sobre el tema en general SIPRI, *Policies for Common Security*, Taylor & Francis, Londres, 1985.

LETRA

INTERNACIONAL

NUMERO 3 (OTOÑO 1986)

- Carlos Piera:** Estados/cultura/Unidos.
Tom Engelhardt: La televisión y los niños.
Klaus Haefner: El reto de la informática.
Fernando Savater: Nuestro tiempo y el otro.
Miguel Martínez-Lage: El caleidoscopio de la identidad: Viernes y Robinson.
Martin Filler: La construcción y la nada. Miel van der Rohe.
Alberto Ruy Sánchez: Melancolía de la verdad: Gide regresa de Rusia.
Rossana Rossanda: Rosa L.
Danilo Kis: Simón El Mago.
Gianni Vattimo: El futuro pasado.
Vittorio Strada: El futuro del futuro.
Horst Bienek: El ciego en la biblioteca. Jorge Luis Borges.
Eduardo Goligorsky: Cortázar y la política.
André Gorz: El que no trabaje comerá.
Ralf Dahrendorf: El nuevo sub-proletariado.
Max Frisch: Excepto la amistad.
Anthony Burgess: El lenguaje bajo el disfraz de la literatura.

Suscripción anual: 1.600 ptas.

Forma de pago: Talón bancario o giro postal.

Redacción y Administración: Monte Esquinza, 30, 2.º - 28010-Madrid.

CONTINUIDAD Y CAMBIO EN LA POLITICA GRIEGA

Nicos Mouzelis



12

Una forma de comprender los cambios políticos que el partido socialista panhelénico (PASOK) de Andreas Papandreou ha aportado a Grecia en el período posdictatorial consiste en compararlos con los cambios introducidos por el partido liberal de Venizelos 75 años antes.

La comparación entre los dos movimientos resulta evidente si se considera que ambos han cambiado de forma fundamental el sistema político, no sólo en cuanto a la renovación de la clase política sino también en cuanto a la reorganización fundamental de las estructuras políticas.

Cambios en la clase política

El cambio político más evidente introducido por la rápida ascensión del PASOK en la vida política de Grecia consiste en la radical reestructuración de la clase política de la posguerra. Esta transformación

fundamental se asemeja mucho a los cambios aportados por el partido liberal de Venizelos en la clase política y en la dirección de su país durante el primer cuarto

del siglo XIX. Del mismo modo que el venizelismo rompió con el control oligárquico que un reducido número de familias de notables (los famosos *tzakia*) ejercía sobre el gobierno del país desde el siglo XIX¹, la llegada al gobierno del PASOK derrocó el poder que las élites parlamentarias del período anterior a la dictadura (compuestas esencialmente por políticos adeptos a los dos grandes partidos burgueses: la Unión Radical y la Unión del Centro) ejercían sobre la política griega. En ambos casos, la llegada al poder de «hombres nuevos» en el escenario político significaba una renovación de la clase política. Esto se explica no tanto porque los nuevos dirigentes eran de un origen social diferente, sino más bien porque, durante el *antiguo régimen*, los hombres que ejercían el poder sólo estaban implicados en el juego político de una forma marginal.

Claro está, en ambos casos, que la ruptura con el pasado ha sido radical, pero no total. En efecto, Venizelos no neutralizó totalmente a las familias de la oligarquía del siglo XIX, que consiguieron mantenerse y desempeñar un papel importante, no sólo dentro del grupo antivenizelista, sino también en el seno mismo del partido liberal². Del mismo modo, incluso en el seno del PASOK no se ha reemplazado totalmente a los políticos adeptos al período predictatorial. Sin embargo, es importante observar que, en ambos casos, las antiguas élites políticas han perdido su predominio y se han visto obligadas a compartir el poder con «advenedizos» políticos, que no se limitaron a introducirse en las vías del poder sino que, además —y esto es más importante todavía—, cambiaron de forma fundamental la naturaleza de la organización y el estilo del discurso político.

Más concretamente, si se examina el

La llegada al gobierno del PASOK derrocó el poder que las élites parlamentarias anteriores a la dictadura ejercían sobre la política griega.

grupo parlamentario del PASOK resulta fácil establecer su continuidad con los políticos de la Unión del Centro del período anterior a la dictadura. Según un estudio realizado en 1981, el 15 % de los parlamentarios del PASOK eran miembros de la Unión del Centro antes de la dictadura, mientras que el 31 % habían pertenecido a EDIN (organización de las juventudes de la Unión del Centro)³. No obstante, si se considera que los miembros de EDIN no pertenecían a la clase dirigente del partido durante el período anterior a la dictadura, se puede sostener que la gran mayoría de los parlamentarios del PASOK son totalmente neófitos en la política, o bien que ocupaban una posición muy marginal en el sistema político anterior a la dictadura. Esta imagen de renovación radical aparece de forma más evidente si se examina el pasado político de los miembros del Comité Central del PASOK. A este nivel, las relaciones con las organizaciones y los partidos políticos del período anterior a la dictadura son todavía más débiles. La gran mayoría de los miembros del Comité Central no han tenido ningún vínculo con las organizaciones políticas predictatoriales⁴.

Esta diferencia en lo que concierne al pasado político está también vinculada a una diferencia de clase. Los industriales y los grandes empresarios no son los únicos que están ausentes en la dirección del PASOK, también se registra una disminución en la participación de algunos sectores profesionales, como los médicos y los abogados que, debido a su capacidad «natural» para hacerse con clientes políticos, desempeñaban un papel más importante en la vida política antes de la dictadura. Los médicos y los abogados tienen aún una participación importante en el grupo parlamentario del PASOK, pero en los comités centrales y provinciales han sido reemplazados por ingenieros, profesores, y, sobre todo, por empleados de oficina y trabajadores asalariados⁵. Por otro lado,

como las nuevas élites políticas son, en término medio, más jóvenes que las anteriores, han contribuido a renovar de forma radical las características gerontocráticas del sistema político griego.

Numerosos observadores han considerado que la importancia relativa de los recién llegados a la política y la preponderancia de elementos de la pequeña burguesía en las escalas superiores de la organización política del PASOK, constituyen la prueba de los cambios fundamentales de las estructuras de clase en Grecia. Estos cambios están asociados a la rápida y desigual industrialización de la posguerra, a la marcada concentración de la población en unos cuantos centros urbanos, a la transferencia de mano de obra agrícola hacia los sectores de servicios, etc. Según esta teoría, todos estos elementos han dado lugar al ascenso de nuevas capas medias que han apoyado al PASOK, y que, en la actualidad, constituyen su principal base social.

Aunque no cabe duda de que se pueden establecer vínculos entre el rápido cambio de las estructuras de clase y la ascensión del PASOK, la relación que establece esta interpretación es demasiado directa y no explica de forma satisfactoria las modificaciones en cuanto a la clase política, a las que ya nos hemos referido. Para poder comprender estas últimas sería importante centrarse, en primer lugar, en las transformaciones en el ámbito político propiamente dicho, como son las modificaciones en la organización de los partidos, que requieren cuadros con nuevas competencias y cualificaciones políticas.

Cambios en la organización política

Parece indicado analizar los cambios que la llegada del PASOK al poder ha producido en la organización política, y que, a largo plazo, van a transformar el sistema político griego tan profundamente co-

mo lo hiciera la llegada al poder del «venizelismo» hace más de medio siglo.

En efecto, durante el período «prevenizelista», las fuerzas políticas consistían esencialmente en «clubs políticos» que agrupaban a personalidades que disponían de una red personal de adeptos. De esta forma, a nivel nacional, la organización política era rudimentaria o inexistente, y los dirigentes nacionales tuvieron grandes dificultades para conservar su autoridad sobre los notables locales. Estos últimos disfrutaban de una autonomía tal frente a las direcciones nacionales de los partidos que, a menudo, podían pasar de uno a otro sin perder los votos de sus adeptos. En una situación así, el conflicto parlamentario estaba menos relacionado con cuestiones derivadas de diferencias de clase que con luchas personales por la distribución de los «beneficios» políticos. Si la ascensión de los liberales después de 1909 ⁶

Los cambios que el PASOK ha producido en la organización política van a transformar profundamente el sistema político griego.

no eliminó todas las prácticas clientelistas del *antiguo régimen*, sí que introdujo cambios fundamentales en la organización de los partidos y en el estilo de los debates

parlamentarios.

En primer lugar, la llegada de nuevos elementos sociales al mundo político, y la decadencia de las familias de *tzakia*, dieron lugar al reforzamiento de las organizaciones centrales de los partidos. Consecuentemente, el clientelismo tradicional tuvo que ceder ante formas de gestión más centralizadas por parte del partido y del Estado. Al ver reducida su autonomía los notables locales se vieron obligados, desde ese momento, a compartir las funciones de gobierno a nivel local con los nuevos «patronos»: abogados, médicos, funcionarios, etc. ⁷.

A nivel nacional, el paso de formas tradicionales a formas de políticas clientelistas más centralizadas tuvo como consecuencia que el jefe del partido adquirió, en mayor medida que bajo el *antiguo ré-*

gimen, una multitud de adeptos (especialmente en los centros urbanos) que no formaban parte directamente de las redes clientelistas.

Dentro de este contexto, en el debate político hubo mayor cabida para las cuestiones sociales. A pesar de la ausencia de estructuras no personalizadas en el seno de los partidos burgueses, el desarrollo del Estado, de las comunicaciones y de los mercados nacionales favoreció, entre otras cosas, el surgimiento de una «opinión pública» que, por encima de cualquier consideración clientelista, tuvo pronto un importante impacto en la formulación de las cuestiones políticas ⁸.

A pesar de todo esto se puede afirmar, sin lugar a dudas, que los dos grandes partidos burgueses (la Unión del Centro, heredera del partido venizelista en el período entre las dos guerras mundiales, y la Unión Radical) conservaron sus características clientelistas no sólo durante el período entre las dos guerras, sino hasta el establecimiento del régimen militar en 1967. El núcleo de sus estructuras de organización estaba compuesto, en efecto, por dos grandes redes de gestión, controladas por importantes figuras políticas que no dependían totalmente de un jefe, ni estaban obligadas a seguir los reglamentos y las estructuras burocráticas del partido.

Por supuesto, ni la Unión Radical ni la Unión del Centro estaban enteramente fundadas sobre la base de redes clientelistas. Otro componente importante de sus estructuras consistía en lo que Legg ha denominado el aspecto «personal-frágil» de la organización del partido, designando de esta forma a los diputados que, por un motivo u otro ⁹, no tenían seguidores personales y debían su elección al jefe del partido. Este aspecto «frágil-personal» de la organización del partido, que durante el período anterior a la dictadura no era

La llegada de Papandreou ha supuesto la decadencia rápida de las estructuras clientelistas que caracterizaban a los partidos no comunistas antes de la Junta.

todavía muy apreciable, se convertirá en una característica fundamental del sistema político con la llegada al poder del PASOK. En efecto, si en términos de organización política la llegada de Venizelos supuso el paso de un clientelismo oligárquico y descentralizado a un clientelismo menos restrictivo pero más centralizado, la llegada de Papandreou llevó, si no a la desaparición, al menos a la decadencia rápida de las estructuras clientelistas que caracterizaban a los partidos no comunistas antes de la junta.

La primera diferencia evidente entre éstos y el PASOK reside en la organización de base. Debido a su penetración en las áreas rurales, a su afiliación masiva y a sus tácticas de movilización, el PASOK es un auténtico partido de masas. Por otro lado, la organización de masas del PASOK no sólo ha debilitado el sistema tradicional de gestión local, sino que también ha obligado al partido conservador a adoptar en poco tiempo sistemas de organización y de movilización popular similares. En este sentido, el PASOK ha contribuido de forma decisiva a una cierta modernización del sistema político griego.

Esto no quiere decir, sin embargo, que el PASOK se esté transformando forzosamente en un partido de masas no personalizado, como los que se pueden encontrar en la mayoría de los países de Europa occidental. Como ya se ha subrayado, el PASOK se asemeja más a los movimientos populistas de América Latina que a los partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental ¹⁰. Los elementos populistas del PASOK pueden analizarse no sólo en el plano del discurso ideológico, sino también en el plano de la organización y de la estructura.

Contrariamente a los partidos de masas de Europa occidental, el factor fundamental que garantiza la cohesión del movimiento reside, en mayor medida, en el carisma personal del jefe que en la organización

del partido. A pesar del constante debate sobre los principios de organización democrática y de la compleja reglamentación destinada a asegurar el funcionamiento

El PASOK se asemeja más a los movimientos populistas de América Latina que a los partidos socialistas o socialdemócratas de Europa occidental.

democrático del partido, está claro, para aquellos que han seguido de cerca el desarrollo histórico del PASOK, que estos reglamentos y principios no obstaculizan seriamente el liderazgo fuertemente personalizado de Papandreou. Si bien las reglas democráticas existen y funcionan en cierta medida a nivel local, se aplican menos en las altas esferas del partido. Como subrayó Robert Mitchels hace algunos años, se puede afirmar, sin lugar a dudas, que todo partido de masas complejo tiende a desarrollar estructuras de autoridad oligárquica ¹¹. Sin embargo, en los partidos de Europa occidental los procedimientos institucionalizados y los órganos de dirección y asambleas del partido limitan seriamente el poder del jefe de partido. No es el caso del PASOK, en donde los comités centrales y provinciales, si bien tienen cierta influencia, no están en condiciones de poner trabas al poder de decisión del jefe ¹². Esto aparece de forma muy clara al observar la relación que mantiene Papandreou con los diputados del partido. Si el líder del PASOK no está especialmente sujeto a las estructuras administrativas burocráticas fuertes que se encuentran en los partidos de masas de Europa occidental, tampoco está limitado por la existencia de los tradicionales patronos clientelistas, que disponen de una base autónoma a nivel local. Una vez más, esto se pone de manifiesto al comparar el PASOK de Papandreou con el partido liberal de Venizelos.

A pesar de su gran carisma, Venizelos se veía fuertemente obstaculizado en sus acciones por las facciones clientelistas de su partido. Es cierto, claro está, que el partido liberal no se basaba únicamente en la existencia de patronos clientelistas. Del mismo modo, tampoco es menos cierto que, en el período entre las dos guerras mundiales, los patronos políticos rurales

no disfrutaban de la misma autonomía que sus homólogos del siglo XIX. Una vez reconocido este hecho, hay que decir que disponían, a pesar de todo, de un poder considerable que no emanaba directamente de la organización del partido o del carisma del jefe, sino que se derivaba del control personal que éstos ejercían sobre los votos locales. Debido a ello, los cuadros de Venizelos no eran «empleados» del partido, sino «subcontratistas» o «empresarios políticos» que negociaban con la dirección nacional una posición de autonomía relativa.

Un ejemplo concreto podría ilustrar con más claridad el tipo de relaciones jefe-cuadro que existían con Venizelos. En efecto, Elefterios Venizelos siempre deseó prescindir de los partidos de notables existentes y crear un partido burgués moderno, basado en principios burocráticos de reclutamiento y de funcionamiento. Esto se puso de manifiesto especialmente en las elecciones de noviembre de 1910, cuando varios candidatos liberales fueron designados de modo no clientelista por numerosos grupos de intereses ¹³. Esta práctica, que en último término habría podido conducir a una organización de partido no clientelista, se abandonó muy rápidamente y, en definitiva, la designación de candidatos se hizo mediante negociaciones informales entre el jefe del partido y las poderosas facciones clientelistas locales. A raíz de este primer fracaso, Venizelos se esforzó, en repetidas ocasiones, por crear estructuras de partido moderno, pero, enfrentado a la oposición intransigente de los dirigentes locales, tuvo que renunciar a sus tentativas de reforma. Este ejemplo pone de manifiesto que las facciones clientelistas eran mucho más fuertes en el partido de Venizelos que en el partido de Papandreou. Como lo han demostrado las diferentes purgas efectuadas en el PASOK, los miembros excluidos han perdido su influencia rápidamente y han dejado de desempeñar un papel político importante ¹⁴.

Esto significa que, si con Venizelos la organización nacional del partido había alcanzado un grado considerable de centralización, debido al debilitamiento del poder local de las familias de notables, con Papandreou la centralización ha alcanzado una etapa superior, al apartar de forma más radical la gestión local. Pero esta mayor centralización no ha llevado a la pérdida de personalismo y a la autonomía de las estructuras burocráticas del partido. El efecto que ha tenido ha sido más bien el de reforzar los poderes personales de Papandreou. La tendencia fundamental de la política griega no consiste, por lo tanto, en un movimiento de estructuras clientelistas hacia estructuras burocráticas autónomas, sino más bien en el paso de un personalismo descentralizado (típico del partido clientelista) a un personalismo altamente centralizado (típico del partido populista). Empleando una terminología en cierto

modo diferente, se podría decir que este cambio que se observa en la política griega desde el siglo XIX puede concebirse como una transición de un tipo de «feuda-

lismo político» —en donde los «barones» locales a la cabeza de sus propios feudos electorales podían limitar seriamente el poder del jefe nacional del partido— a una situación de «patrimonialismo político» —en donde el jefe del partido no se ve obstaculizado ni por «libertades feudales» ni por estructuras burocráticas de partido¹⁵.

Sobre el funcionamiento del Estado democrático

Habría que preguntarse qué significan actualmente para el funcionamiento de las instituciones democráticas en Grecia los cambios que ya hemos analizado en el personal y en la organización política del partido. Antes de contestar a esta pregunta es importante examinar la relación existente entre Estado y sociedad civil en el seno de la sociedad griega, y la pertinencia

de esta relación en cuanto a cuestiones de control y de representación democráticas. Muy brevemente, y teniendo en cuenta el legado patrimonial otomano, la expansión precoz del Estado y el hecho de que la industrialización a gran escala haya tenido lugar después, y no antes, de la desaparición del parlamentarismo oligárquico (*paleokommatismos*) en Grecia, las clases populares se incorporaron al escenario político de un modo vertical-dependiente. Dicho de otro modo, sus organizaciones, así como los otros intereses procedentes de la sociedad civil, no han llegado a constituirse en centros de poder autónomos y capaces de imponer un control decisivo sobre las tendencias corporativas-paternalistas del Estado. Ya sea en el siglo XIX, en el período entre las dos guerras mundiales, o en la posguerra civil, los que han controlado los aparatos del Estado siempre se han mostrado hostiles al establecimiento

La tendencia fundamental de la política griega consiste en el paso de un personalismo descentralizado a un personalismo altamente centralizado.

de grupos de intereses con autonomía respecto al Estado. Del mismo modo que los dirigentes otomanos se han opuesto constantemente a que existieran entre ellos y

sus sujetos «cuerpos intermediarios» constituidos de forma independiente, los políticos que han dirigido Grecia después de la independencia han tratado de forma sistemática lo siguiente: a) acabar con la «neutralidad» relativa de la Administración pública, asegurándose de que sus amigos políticos «favoritos» controlaran los puestos claves; b) incorporar de forma vertical-dependiente a grupos importantes o instituciones, como los sindicatos, la Iglesia, la universidad, los medios de comunicación, etc.

La intensidad y la forma de esta incorporación-cooptación ha variado de un período histórico a otro¹⁶. No obstante, ha seguido siendo un parámetro importante de la vida política griega. En cuanto a la relación entre Estado y sociedad civil, el PASOK ha seguido más o menos las tácticas típicas de incorporación vertical, empleadas habitualmente por los partidos en

el poder en Grecia. Al igual que sus antecesores, el PASOK ha adoptado criterios partidistas, más que meritorios, para el nombramiento de funcionarios, intentando sistemáticamente colocar a sus «amigos», no sólo en las altas esferas, sino también en todas las escalas de la administración pública. La gran diferencia que lo distingue de los gobiernos posteriores a la junta es que, debido a la organización superior del PASOK, la discriminación que normalmente acompaña la llegada de un partido nuevo al poder se ha podido operar de un modo más metódico. Antes del PASOK, con los partidos burgueses, no era fácil (sobre todo en las escalas administrativas inferiores) distinguir con precisión a los amigos y enemigos políticos. Las fronteras de apoyos políticos eran fluidas e imprecisas. Gracias a la extraordinaria extensión de las ramas locales y de las *kladikes* (organizaciones de partido fundadas en los oficios y profesiones), el partido puede identificar con bastante facilidad a los partidarios de la oposición o los indiferentes. Sin embargo, por otro lado, es necesario subrayar que en el período posdictatorial, y en especial tras la llegada al poder del PASOK, ha cesado la exclusión sistemática de los comunistas y sus simpatizantes de los puestos de la administración pública.

Si examinamos ahora la actitud del PASOK frente a los sindicatos, podemos encontrar en este ámbito elementos positivos y elementos negativos en lo que se refiere a la cuestión Estado-sociedad civil. Por un lado, el PASOK ha fomentado la expansión del movimiento sindical, adoptando medidas como el reforzamiento de organizaciones sindicales a nivel de fábrica, la protección de los sindicalistas contra los despidos injustos, el debilitamiento de los «sindicatos de fachada» creados y manipulados por la derecha con el fin de controlar el movimiento sindical, etc. Por otro lado, el modo en el que el PASOK ha reemplazado la di-

rección sindical existente (por decisión del Tribunal) demuestra la persistencia de prácticas de incorporación vertical. Además, la subsiguiente introducción de una ley que reduce seriamente el derecho a la huelga de los trabajadores de las empresas públicas constituye, indudablemente, una medida que debilita a la sociedad civil y refuerza las tendencias autoritarias del Estado. Incluso si las empresas públicas están actualmente «socializadas» (en el sentido en que los representantes de los empleados y de los trabajadores participan en el consejo de administración), este hecho no justifica la seria restricción de un derecho político tan fundamental.

Un último ejemplo que ilustra bien el impacto de los cambios intervenidos después de la junta en la relación entre Estado y sociedad civil se referirá a la política cultural del PASOK. Como cualquier partido en el poder, el PASOK ha intentado utilizar los medios de comunicación (en particular la radio y la televisión, que están bajo su control directo), los considerables recursos asignados a la promoción de la «cultura» y, de forma indirecta, el sistema educativo, con el fin de fomentar valores y actitudes políticas que serían políticamente favorables al gobierno. Naturalmente, teniendo en cuenta su orientación de izquierdas, su estilo de intervención en el ámbito cultural es bastante diferente al de sus antecesores de derechas. Mientras estos últimos han intentado, en general, fomentar la indiferencia y la apatía frente a la resistencia y a la guerra civil por ejemplo, el PASOK se ha esforzado por volver a incluir estos puntos en el «orden del día» del discurso político. Sin embargo, el modo en que lo ha hecho favorece menos el desarrollo de una conciencia política inteligente y crítica que una orientación partidista que perpetúa (de una forma diferente hoy en día) el modo típicamente maniqueo y mistificador en el que se tratan estos temas en Grecia. Así, la tendencia general en este ámbito va de un

Con el PASOK ha cesado la exclusión sistemática de los comunistas y sus simpatizantes de los puestos de la administración pública.

ma diferente hoy en día) el modo típicamente maniqueo y mistificador en el que se tratan estos temas en Grecia. Así, la tendencia general en este ámbito va de un

«silencio politizado», fomentado por los gobiernos conservadores posteriores a la junta, a un cierto activismo político que, en los jóvenes en particular, favorece menos el sentido crítico que la disposición a adoptar de forma mecánica las «líneas» del partido.

En cuanto a los aspectos positivos hay que subrayar, sin embargo, que los esfuerzos del PASOK por realizar una descentralización mínima mediante la transferencia de cantidades importantes a las autoridades locales, y mediante la organización masiva de actividades culturales a nivel provincial, han dado un impulso nuevo y un gran dinamismo a la vida rural griega. A pesar de su carácter partidista, estos esfuerzos han contribuido a frenar el desconcierto y el abandono que han caracterizado a los pueblos griegos tras el

éxodo rural masivo de los años sesenta y setenta ¹⁷. La estrategia descentralizadora del PASOK, asociada a la relativa prosperidad actual del campo y a la mejora de

ciertos servicios sociales, ha proporcionado a los campesinos griegos, que tradicionalmente constituyen la categoría social menos privilegiada de la población, una nueva esperanza y una gran confianza.

Conclusión

Desde luego, todos estos desarrollos no justifican a los propagandistas de derechas que predicen, de forma alarmante, la instauración en Grecia de un sistema de partido único. Esto es muy poco probable, no sólo porque las circunstancias externas (la participación de Grecia en la CEE, por ejemplo) hacen extremadamente difícil la imposición de un sistema tal, sino también porque ni Papandreou ni sus colaboradores cercanos tienen ambiciones dictatoriales. Por supuesto, es posible que en el seno del PASOK se puedan encontrar facciones que consideran que la democracia «burguesa» es un obstáculo

para la transformación socialista de Grecia. Pero, si se tiene en cuenta el enorme poder que Andreas Papandreou ejerce sobre su partido, y el estado de ánimo actual de la intelectualidad de izquierdas (que no menosprecia tanto como antes las «libertades burguesas»), la posibilidad misma de una tentativa destinada a imponer un partido único parece muy poco verosímil.

Lo que sí parece más probable, a menos que se tomen medidas enérgicas y sistemáticas para impedirlo, es el reforzamiento de los controles para la incorporación vertical de la sociedad civil por parte del Estado. Este reforzamiento no se deberá al hecho de que el PASOK tenga una orientación más autoritaria que los regímenes anteriores (después de todo no hay que olvidar que el modelo de «democracia guiada» de la posguerra civil fue impuesto

**Papandreou se ve limitado
en su voluntad de llevar a cabo
una política exterior
independiente de la OTAN
y EE.UU.**

por los que hoy en día protestan contra el autoritarismo del PASOK). Dicho reforzamiento será más bien consecuencia de la organización superior del PASOK,

que quiere procurarse los medios para perdurar de una forma más eficaz que con las prácticas partidistas del pasado ¹⁸.

No obstante, si la fuerza de organización del PASOK no está exenta de riesgos en el ámbito de las relaciones entre Estado y sociedad civil, también es cierto que crea las posibilidades para un afianzamiento de las instituciones democráticas. Esto es debido a que Papandreou tiene la posibilidad de utilizar los poderes de que dispone de manera a: a) institucionalizar, en el seno del PASOK, procedimientos más democráticos, asegurando de este modo la supervivencia del partido después de su eventual salida del escenario político; b) inaugurar un estilo de política que, sin favorecer el «apoliticismo», reduciría la capacidad de los partidos de manipular a la sociedad civil con fines estrictamente partidistas.

Evidentemente, si se tiene en cuenta el

pasado y las actuales estructuras sociopolíticas, el PASOK no puede, de un día para otro, transformar el Estado griego en un modelo de parlamentarismo britá-

Papandreou está en condiciones de contribuir de forma decisiva a la democratización de la vida política en Grecia.

nico. No obstante, ciertas medidas de fácil realización pueden conducir a una considerable democratización de la vida política —con tal de que la voluntad política de romper de forma decisiva con las prácticas autoritarias del pasado se preste a ello—.

Pongamos un ejemplo concreto: si Papandreou decidiera conceder una verdadera autonomía a las dos cadenas de televisión griegas, esta decisión no estaría exenta de riesgos para su partido. Por otro lado, una medida así supondría mucho más que el afianzamiento del proceso democrático. Debido a la larga tradición parlamentaria y a la inteligencia política del pueblo griego, dicha medida contribuiría igualmente a realzar la popularidad del PASOK.

Finalmente, hay que subrayar que los obstáculos a un cambio democrático radical del sistema político son menos serios que las barreras que se interponen en

otros ámbitos. Debido a la situación internacional, y en especial a las relaciones entre Grecia y Turquía, Papandreou se ve limitado en su voluntad de llevar a cabo

una política exterior independiente de la OTAN y de los Estados Unidos. Además, si se tiene en cuenta la crisis económica mundial y la situación actual del país, el PASOK, a pesar de sus serias tentativas por reducir las desigualdades sociales, se encuentra con grandes dificultades en su esfuerzo por aportar una solución socialista, o incluso socialdemócrata, a los problemas económicos y sociales del país. En cuanto al sistema político, sin embargo, la posibilidad de introducir reformas es mayor. De hecho Papandreou, con su extraordinario carisma y los recursos organizativos de que dispone, está en condiciones de contribuir de forma decisiva a la democratización de la vida política en Grecia. En este momento crítico, el reforzamiento de la sociedad civil y la institucionalización de los procedimientos democráticos constituyen un desafío histórico al que deben enfrentarse el PASOK y su líder.

© *Les Temps Modernes*

Traducción: Paloma Valenciano

Querría agradecer a Vasilis Kapetanyianis, a Vasilis Tsecourases y a Kostas Vergopoulos sus observaciones sobre el conjunto de este ensayo, que me han sido de gran utilidad.

¹ Para los cambios en la clase política introducidos con la llegada al poder del venizelismo, véase D. Kitsikis, «Evolución de la élite política griega» en M. B. Kiray (ed), *Social Stratification and Development in the Mediterranean Basin*, París, 1973. Véase también K. Legg, *Politics in Modern Greece*, Stanford, California, 1969, capítulo V.

² Véase G. Mavrogordatos, *Stillborn Republic: Social Coalitions and Party Strategies in Greece, 1922-1936*, Berkeley, 1983, capítulos III, VI, VII.

³ Véase Ch. Lyrantzis, *Between Socialism and Populism: the Rise of the Pan-Hellenic Socialist Movement*, PhD, London School of Economics, 1984, capítulo VI.

⁴ *Ibid.*, pág. 301.

⁵ *Ibid.*, págs. 271 y ss.

⁶ En 1909, un golpe de Estado militar dio lugar a una serie de acontecimientos que llevaron a la creación del partido liberal de Venizelos y a su rápida subida al poder. A este respecto, véase S. V. Papacosmas, *The Military in Greek Politics: the 1909 Coup d'Etat*, Kent University Press, 1977.

⁷ Para más información sobre estos cambios, véase N. Mouzelis, «Capitalism and the Development of the Greek State», en R. Scase (ed.), *The State in Western Europe*, Londres, 1938, págs. 248 y ss.

⁸ Véase N. Mouzelis, «Class and Clientelistic Politics: the Case of Greece», *Sociological Review*, noviembre 1978.

⁹ Por ejemplo, los nuevos diputados que no habían tenido tiempo de consolidar su posición en sus circunscripciones; cf. Legg, *op. cit.*, pág. 137.

¹⁰ Para más información véase A. Elephantis, «PASOK: ¿Populismo o socialismo?» en *Politics*, octubre 1977 (en griego), y N. Mouzelis, «On the

Greek Elections», *New Left Review*, marzo-abril 1978.

¹¹ R. Michels, *Political Parties*, Nueva York, 1962.

¹² Véase Lyrintzis, *op. cit.*, capítulo IV.

¹³ Véase Mavrogordatos, *op. cit.*, pág. 82.

¹⁴ *Ibid.*, págs. 86-87.

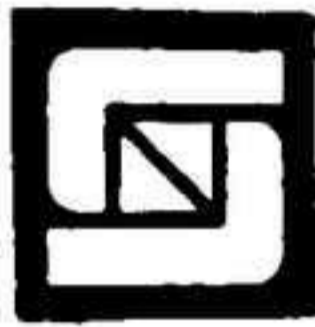
¹⁵ Este fue el caso, por ejemplo, de «Defensa democrática», un importante grupo de intelectuales que desempeñó un papel fundamental durante la resistencia contra la junta. «Defensa democrática» se unió al PASOK tras la caída de la junta. Sus miembros fueron expulsados en masa de este partido, en

1975, tras un desacuerdo en cuanto al poder del que podía disponer el líder del PASOK sobre el partido.

¹⁶ Para el concepto de patrimonialismo y su relación con el feudalismo, véase M. Weber, *Economy and Society*, editado por G. Roth y C. Wittick, Los Angeles, 1978, vol. II, capítulos XII y XIII.

¹⁷ Para ampliar estas explicaciones véase: N. Mouzelis, *Politics in the Semi-Periphery: Early Parliamentarism and Late Industrialisation in the Balkans and Latin America*, Londres, Macmillan, 1985.

¹⁸ Los controles verticales eran, por ejemplo, más fuertes después de la guerra civil que al principio de los años sesenta o durante el período posterior a la junta.



NUEVA SOCIEDAD

MARZO/ABRIL 1986

Nº 82

Director: Alberto Koschuetzke

Jefe de Redacción: Daniel González V.

COYUNTURA: Guillermo Molina Chocano: Honduras: ¿elecciones sin ganador?; Paulo Cannabrava: Brasil: la oligarquía otra vez; Adolfo Gilly: México: crisis y modernización del capitalismo; Oscar R. González: Argentina: la transición alfonsinista.

ENTREVISTA: Diálogo con Frei Betto: "En búsqueda de una alternativa popular".

POSICIONES: Michael Manley: Jamaica y EEUU: intervención o cooperación; SELA: Declaración de Caracas.

ANALISIS: Suzy Castor: Haití: de la ruptura a la transición; Alberto Bastías-Leopoldo Benavides: La rebeldía primitiva de los hambrientos; Alois Möller: Las ciencias económicas y las alternativas de desarrollo; Héctor Apezechea: Uruguay científico.

TEMA CENTRAL: RELIGION, CREENCIAS Y SOCIEDAD: Enrique Correa: Cristianismo de izquierda e Iglesia popular; Abraham Pimstein: Cristianismo y lucha de clases; Emilio Fermín Mignone: Iglesia y dictadura; Felipe Carrera Damas: Sexo, religión y creencias; Clodomiro Almeyda: La democracia cristiana en América Latina; Iván Auger: Estados Unidos: "La nación conforme a Dios"; Gustavo Martín: Magia, religión y poder: los cultos afroamericanos; Rogelio García Lupo: El poder de las tinieblas: la secta Moon; Andrés Serbin: Los rastafari: entre mesianismo y revolución.

SUSCRIPCIONES (incluye flete aéreo)	ANUAL (6 números)	BIENAL (12 números)
América Latina	US\$ 20	US\$ 35
Resto del Mundo	US\$ 30	US\$ 50
Venezuela	Bs. 150	Bs. 250

PAGOS: Cheque en dólares a nombre de NUEVA SOCIEDAD. Dirección: Apartado 61.712-Chacao-Caracas 1060-A - Venezuela. Rogamos no efectuar transferencias bancarias para cancelar suscripciones.

LA MAYOR LIBERTAD POSIBLE

Debate de Peter Glotz y Tilman Fichter con André Gorz

análisis y debate



Secretario General del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD) desde 1981, *Peter Glotz*, nacido en 1939, es el principal teórico alemán de la renovación de la izquierda europea. Antiguo universitario, redactor en jefe de *Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte*, que es la revista teórica del SPD al mismo tiempo que una tribuna de debates abierta hacia el exterior, Peter Glotz publicó recientemente *Manifiesto por una nueva izquierda europea* (Siedler Verlag, Berlín 1985) en el que aboga por un modelo social específicamente europeo e insiste en la necesidad de «arrancar a la tecnología una nueva utopía».

Tilman Fichter, surgido de la izquierda estudiantil alemana (SDS), es responsable de la formación política en la dirección del SPD y redactor de *Neue Gesellschaft/Frankfurter Hefte*, que publicó este debate con André Gorz en su número de mayo de 1986.

André Gorz, filósofo y escritor francés nacido en 1924, ejerce desde hace veinte años una influencia determinante en los debates teóricos de la izquierda europea. Su obra *Estrategia obrera y neocapitalismo*, escrita en 1963, tuvo una importancia decisiva dentro de las Juventudes socialistas alemanas (JUSO), ante todo por la formulación de una «estrategia de reformas anticapitalistas». *Reforma y revolución* (1969) y *Crítica de la división del trabajo* (1974), suscitaron igualmente gran interés. Controversias apasionadas entre adversarios vehementes y partidarios entusiastas fueron provocadas por *Adiós al proletariado* (1981) y *Los caminos del paraíso* (1983), en las que Gorz elabora la visión de una sociedad en la cual, gracias a las posibilidades de descentralización ofrecidas por las nuevas tecnologías, las actividades autónomas ganarían por la mano al trabajo heterónomo.

Emancipación en el trabajo y emancipación del trabajo

Peter Glotz: André Gorz, en 1964 publicó usted un libro de título prometedo: *Estrategia obrera y neocapitalismo*¹. Su intención era presentar una teoría coherente para la acción sindical en las empresas. Ese libro tuvo un impacto considerable en la izquierda alemana, especialmente en las Juventudes Socialistas del SPD. He aquí una breve cita: «Toda lucha por reformas no es necesariamente reformista... Es reformista una reforma que subordina sus objetivos a los criterios de racionalidad y de posibilidad del sistema existente... No es necesariamente reformista, por el contrario, una reforma reivindicada no ya en función de lo que es posible en el marco de un sistema dado, sino de lo que debe ser hecho posible en función de las necesidades y las exigencias humanas». Pero apenas quince años más tarde publica usted un libro que lleva por título *Adiós al proletariado*². ¿Qué es, pues, lo que, según usted, ha cambiado tan profundamente en Europa occidental para que sienta la necesidad de enterrar sin rodeos su antigua concepción de una política de reformas anticapitalistas?

André Gorz: Buena pregunta; pero contiene dos malentendidos. Para empezar, no he enterrado en absoluto la política de reformas no-reformistas, sino al contrario. Además, *Estrategia obrera...* no era, para mí, un libro directamente político.

P. Glotz: ¿Cómo, no era un libro político?

A. Gorz: No. Lo político, para mí, rara vez es la preocupación primordial. Lo que viene primero es la pregunta: ¿cuál es el potencial de liberación que contienen los desarrollos presentes? ¿Cómo reprime el orden social dominante esta liberación que, al mismo tiempo, él hace posible?

Al comienzo de los años 60, la respuesta a estas cuestiones me parecía ser que la eliminación de la pobreza y de la escasez se había vuelto materialmente posible, pero que el modelo de crecimiento capitalista las perpetuaba de forma casi estructural. Las necesidades insatisfechas y la miseria no se debían ya a una penuria de recursos y de fuerzas productivas, sino al modelo capitalista de consumo y desarrollo. Por consiguiente, las posibilidades de liberación no dependían ya de un crecimiento constante de la producción de mercancías, sino de una transformación de la sociedad, de las políticas de desarrollo e incluso del modo de vida. Para destruir la hegemonía del capital no era posible, por lo tanto, seguir contando únicamente con las reivindicaciones salariales, cuantitativas. Es preciso que

las reivindicaciones materiales se vinculen indisolublemente a una concepción de la «positividad proletaria» —expresión forjada en 1961 por Lucio Magri—, es decir, con una concepción no capitalista de la cultura y de la vida, en la que el consumo individual y las relaciones comerciales ya no serían dominantes.

Se trataba, pues, de superar la «sociedad de consumo», sus desperdicios, su «siempre más» y lo que Bahro llamaría las «necesidades de compensación»; y eso suponía evidentemente que se atacaran las necesidades de compensación en su raíz. Y la raíz era y sigue siendo la parcelación del trabajo que mutila y embrutece a las personas, destruye su sentido de autonomía y las vuelve manipulables en tanto que individuos atomizados: en tanto que consumidores. Como escribía Bruno Trentin en 1962, «el consumidor alienado es el individuo que refleja en sus necesidades de consumo su enajenación como agente de la producción».

Buena parte de los temas que, más tarde, serían los del movimiento ecologista estaba ya contenida en la crítica que yo desarrollaba entonces del modelo de crecimiento capitalista, de su tendencia a la maximización, de su destrucción del medio de vida, de la desposesión de las personas por expertos que pretendían conocer mejor que nosotros mismos nuestras «verdaderas» necesidades. La alternativa socialista, como la llamábamos entonces, debía apoyarse en el desarrollo de los equipos y de los servicios colectivos, de las asociaciones cooperativas de ayuda mutua y de autoproducción. Por lo demás, ahí están los más clásicos objetivos del movimiento socialista.

Lo que me impresionaba más particularmente en los sindicalistas italianos era su forma de vincular las reivindicaciones económicas con la lucha por la autodeterminación en los centros de trabajo y por la transformación del modelo de desarrollo y de consumo. Era una estrategia soberbia que finalmente tuvo que ser abandonada hacia 1980 y que ha perdido su validez en las condiciones actuales.

P. Glotz: ¿Acaso esta línea no fue otra cosa que un objetivo puramente intelectual de ciertos dirigentes de la CGIL y de la CFDT? ¿Es que la orientación del movimiento sindical francés e italiano ha cambiado hasta el punto que se pueda hablar de un cambio de estrategia? A finales de los años 60 usted esperaba todavía que al menos una parte del proletariado europeo lograría transformar ese capitalismo. Actualmente, por el contrario, habla usted de «adiós al proletariado».

A. Gorz: No ha habido cambio de estrategia sino derrota estratégica. Sin ser siempre la de toda la CGIL y de toda la CFDT, la estrategia de la que hablamos era por lo menos la de la FIOM (Federación de asalariados de la metalúrgica, afiliada a la CGIL), luego de la FLM, de ese sindicato unificado de los metalúrgicos que Trentin y Carbiti construyeron y que fue política y sindicalmente hegemónico durante los años 1960 y 1970. No se trataba ya de un sindicato clásico, sino de un movimiento político de masas, capaz de negociar no sólo con la patronal sino también con el gobierno y con los partidos. No estaba implantado únicamente en las industrias sino también en los barrios y las comunas. No representaba solamente los intereses de los trabajadores en cuanto tales, sino también sus intereses y sus necesidades en cuanto habitantes de un barrio, en cuanto portadores de una cultura, en cuanto personas que quieren algo más que televisión durante su tiempo libre, etc. Los convenios colectivos desembocan así, entre otras cosas, en la política de desarrollo y las inversiones en el Mezzogiorno, la implantación de empresas en las regiones de alta tasa de desempleo, el manejo de las condiciones y de los puestos de trabajo, la política de reclutamiento, etc. Hasta el repentino hundi-

miento de la FIAT desfilaron en Turín para protestar contra una huelga organizada por el sindicato para impedir el despido de catorce mil obreros. Para mí, el que una estrategia sea victoriosa o no, no es lo que cuenta en primer lugar. Yo no funciono de esta manera.

P. Glotz: Pero nosotros estamos muy obligados a funcionar así.

Reducir la duración del trabajo

A. Gorz: Quiero decir: no podemos conformarnos con objetivos realizables a corto plazo; sin esto no superaremos jamás el horizonte de las condiciones existentes. Es preciso más bien partir de objetivos a largo plazo capaces de traducir en liberación efectiva las potencialidades de liberación que implica un desarrollo ya en curso. Ahora bien, los objetivos perseguidos hasta entonces por el movimiento sindical italiano se convirtieron repentinamente en puntos muertos. Resulta tanto más significativo el que ese movimiento hubiera logrado obtener todo lo que un movimiento sindical puede soñar con obtener: la escala móvil, la garantía de empleo, los delegados de taller y de cadena, un derecho laboral envidiable, permisos culturales, poderes de control obrero y de negociación muy amplios, etc. Hizo todo lo preciso, en suma, para revalorizar el trabajo obrero y hacer aceptable la condición obrera. Y fue eso, finalmente, lo que condujo a su derrota.

Inicialmente, en efecto, tanto en Italia como en Francia los temas impulsores de las luchas obreras en los años 70 tenían dos componentes: la liberación *en* el trabajo —es lo que se llamaba, en Francia, la reivindicación autogestionaria— y la liberación *del* trabajo. La dialéctica de estos dos temas era más compleja de lo que se pensaba. Cuando los obreros exigían la liberación *del* trabajo, no era simplemente porque el trabajo no fuese bastante libre, bastante «autogestionado». *Al contrario:* allí donde habían conquistado poderes de «autogestión», de autodeterminación en el trabajo era donde, muy pronto, tenían tendencia a dar un paso más en el sentido de la radicalización, por el «rechazo al trabajo». Los más radicales eran los jóvenes obreros de la primera generación que habían crecido en un medio rural de artesanos y campesinos libres: jóvenes emigrados meridionales, en Italia; obreros del Mans, de Caen, de Saint-Brieur, en Francia. No podían soportar ser mandados, hacer siempre lo mismo, a horas fijas, y la apropiación obrera de los medios de producción, la autogestión de la fábrica les parecía, cuando la encaraban prácticamente, como un nuevo peligro: iban a convertirse en autogestionarios de su prisión, de su enrolamiento. Esta es una de las cosas que quise mostrar en *Adiós...*; a menos que se dé una redefinición completa del aparato de producción, de la división del trabajo, de las formas de cooperación productiva, la autogestión del proceso de producción es tan imposible como la apropiación del ejército por parte de los soldados: eso no puede ser más que una añagaza. Mientras que la liberación *del* trabajo pertenece al dominio de la experiencia vivida.

Ahora bien, el sindicato, en aquella época, no supo adueñarse de esta dimensión para mediatizarla, traducirla en objetivos de acción. Abandonó ese terreno a los grupos izquierdistas que hacían del «rechazo al trabajo» una consigna inmediata. El sindicato se concentró en lo que es negociable —la liberación *en* el trabajo— y prefirió ignorar lo que consideraba como una demanda no negocia-

ble, primitivista: la liberación *del* trabajo: Descubriría su error, en Italia, pero demasiado tarde.

La patronal, en efecto, reacciona al establecimiento de un poder sindical sin precedentes con una especie de retirada elástica: hace el vacío en torno a los centros de poder obrero, de las grandes fábricas. Estas no contratan más, dejan de envejecer y consumir sus efectivos, impulsan la creación de millares de pequeñísimas unidades periféricas, descentralizadas, que hacen trabajar a una mano de obra esencialmente joven, precaria, mal pagada y sin contratos, con horarios del siglo XIX. Ahí tenemos muy rápidamente una segmentación, una dualización del mercado de trabajo, con, de un lado, los trabajadores estables, sindicalizados, protegidos por las grandes unidades, y por otra parte la masa creciente por los precarios, los parados, los jóvenes en busca de pequeñas chapuzas. Los sindicatos de industria, centrados en las grandes unidades, se convierten así objetivamente, con el aumento del desempleo, en organizaciones casi corporativistas que no representan más que una fracción privilegiada y decreciente de trabajadores de edad madura.

Esta segmentación de las clases asalariadas —mucho más compleja todavía en Italia— es la que acaba por volverse contra el sindicato, especialmente en el verano de 1970 en la FIAT, donde una minoría importante de obreros se conducen como *propietarios* de un empleo y, unidos a una mayoría de oficinistas, aceptan el despido de 14.000 camaradas suyos, en la esperanza de que esta purga garantizará los empleos que quedan. Y así encontramos, en el referéndum realizado algunos años más tarde, una mayoría de votos contra el mantenimiento de la escala móvil que, finalmente, protege sólo a la capa privilegiada de los trabajadores estables de las grandes empresas y no impide la sobreexplotación, en los talleres de subcontratación, de una masa de precarios, ni el aumento del paro.

Resumiendo, el sindicato, en tanto organización de defensa *del trabajo* y de los trabajadores, ha alcanzado sus límites a la vez políticos, económicos e ideológicos. En presencia de una revolución técnica que reduce masivamente la cantidad de trabajo necesario, la liberación *en* el trabajo es un callejón sin salida si no va conjugada con una liberación *del* trabajo, es decir, con una política ambiciosa de reducciones generales y planificadas de la duración del trabajo.

P. Glotz: Ese era el sentido de la lucha emprendida, en 1984, por la IG Metall, por la semana de 35 horas.

A. Gorz: Sí, esa fue una lucha ejemplar. Actualmente, lo que me interesa en la reivindicación de una reducción sustancial de la duración del trabajo es el aspecto siguiente; esta reivindicación, que es estratégica y políticamente decisiva, supone que las personas no se identifiquen totalmente con su empleo, que tengan otros centros de interés distintos a su oficio, que posean una cierta autonomía existencial. Ahora bien, en las condiciones actuales la mayoría no puede adquirir esta autonomía o experimentarla sino fuera de su trabajo asalariado: bien sea antes de su ingreso en la vida activa, bien por actividades voluntarias en el marco de asociaciones, de grupos, de iglesias, de organizaciones sindicales o políticas, de cooperativas, etc. Y esto me trae a un punto que Kern y Schumann, en su obra³, manifiestamente no quieren admitir: a saber, que solamente las personas que ya han tenido la experiencia de su autonomía posible están dispuestas a luchar por su liberación *en* el trabajo tanto como *del* trabajo asalariado.

Se trata de un punto importante, puesto que determina nuestra elección de prioridades. Si, a la manera de Kern y Schumann, postulamos que la autonomía existencial *presupone* una mayor autonomía en el trabajo, entonces, a mi juicio, no llegaremos nunca a nada. Pues para transformar las condiciones y las relaciones de trabajo en el sentido de una mayor autonomía de los asalariados hacen falta meses y años de luchas «articuladas», como dicen los italianos, decididas y conducidas por la base, de luchas que exigen mucha perspicacia, imaginación y autodisciplina y que, por lo tanto, no pueden ser asumidas más que por personas que ya han tenido una experiencia de su autonomía.

¿Dónde pueden haberla adquirido? Casi siempre en su vida fuera del trabajo. Por eso es que, a mi parecer, hay que invertir las prioridades de Kern y Schumann: la lucha por una mayor autonomía en el trabajo supone una mayor autonomía existencial y ésta depende en primer lugar —pero no únicamente— de una reducción de la jornada laboral. Las luchas para obtener esta reducción son relativamente más fáciles de organizar y además pueden ser favorecidas o incluso precedidas por decisiones del gobierno o de las administraciones y servicios públicos.

El éxito de una reducción sustancial (evidentemente sin pérdida del poder adquisitivo) de la duración del trabajo y su esfuerzo liberador dependen en gran parte de las posibilidades que los sindicatos, pero también las comunas, las asociaciones, las iglesias, etc., ofrecen a sus miembros para permitirles organizar por sí mismos su estilo de vida y la forma como desean satisfacer sus necesidades individuales y colectivas. Dicho de otra forma, la lucha sindical no podría limitarse ya a los centros de trabajo; la izquierda, el movimiento obrero, deben reflejar la totalidad de las aspiraciones e intereses humanos, en particular en el terreno cultural, social y no simplemente los intereses materiales. Oskar Negt tuvo razón al subrayarlo ⁴.

Solidarizar trabajadores y no trabajadores

P. Glotz: Quisiera intentar regresar a los problemas estratégicos que son de la mayor importancia para nosotros los hombres políticos, aunque admito que usted mismo, en cuanto observador y filósofo, no desee ver las cosas con los anteojos del funcionario.

A. Gorz: No me gustan muchos los funcionarios.

P. Glotz: Pero yo soy uno de ellos.

A. Gorz: En absoluto. Usted es un «intelectual orgánico».

P. Glotz: Cuando, en vez de basarse en las transformaciones graduales que podrían obtenerse dentro del mundo del trabajo, en y por el trabajo, y también con la ayuda de los cuadros sindicales, se cuenta con la aparición de un no-proletariado que, engendrado por las modernas técnicas, no será ya anestesiado por ningún trabajo; entonces yo temo que esta especie de dualización conduzca a un antagonismo de clase espantoso, tanto psicológico como político, entre quienes tienen un trabajo y aquellos otros que de alguna manera estén dispensados de él por anticipado. Esto provocará enfrentamientos políticos terribles en el seno mismo de las capas social y económicamente marginadas, y yo temo mucho que

las capas que detentan el poder económico puedan aliarse entonces con los trabajadores organizados y disciplinados por su trabajo para formar un frente común contra las nuevas capas de los excluidos del trabajo. A menudo, cuando hablo con obreros, constato que sobre todo los más calificados cultivan prejuicios del tipo: «Los parados son inútiles que no quieren trabajar». El prejuicio contra quienes viven de modo diferente está profundamente arraigado hasta en la clase obrera organizada. Y por eso me pregunto si no necesitaríamos organizar un movimiento general que, por etapas sucesivas, imponga la semana de 38 horas, de 35 horas, quizá de 32 horas para todo el mundo. Solamente un movimiento continuo de luchas de este tipo puede restablecer la solidaridad e impedir los espantosos enfrentamientos de clase en el seno de la clase obrera.

A. Gorz: Estoy totalmente de acuerdo con su análisis. Yo solamente me pregunto por qué usted me atribuye una tesis que no es mía. Es precisamente para evitar una dualización de la sociedad que tenga de un lado una élite del trabajo, y del otro lado una masa de parados y de semiparados dedicados a «pequeñas chapuzas», que hace falta, a mi juicio, una reducción tan sustancial de la jornada laboral que las actividades asalariadas dejen progresivamente de ser el centro de nuestra vida y el único camino de integración social. Esos a quienes llamo una «no-clase de no-trabajadores» no son marginales ni parados, sino personas para quienes su trabajo *asalariado* no es ya la fuente de su identidad ni de su sentimiento de pertenencia social. Si observa usted esos famosos sondeos sobre la evolución de la actitud frente al trabajo ⁵, comprobará que esas personas son ya la mayoría: quieren que el trabajo se ajuste a la manera como ellos eligen vivir, y no a la inversa. Pues, para decirlo en el lenguaje de Habermas, gran parte del trabajo no sirve a los objetivos definidos por un consenso, sino las exigencias sistemáticas de la máquina económica, exigencias que no pueden ser interiorizadas por los trabajadores como su tarea propia y cargada de sentido. Todos esos ideólogos de la empresa que glorifican a éstas como un lugar de desarrollo individual y de creación cultural, hacen como si la sociedad no tuviera necesidad más que de individuos autónomos con competencias personalizadas, como si en los bancos, las administraciones, los servicios postales, las centrales eléctricas, los centros de asistencia, las industrias —incluidas las industrias de la microelectrónica— no hubiera una mayoría de personas agotadas y que se aburren mortalmente aunque con frecuencia su trabajo sea calificado.

En cuanto a los efectos de la reducción de la duración del trabajo, hay interesantes monografías francesas que confirman lo que usted escribe en su *Manifiesto para una nueva izquierda europea*: a saber, que «el trabajador que no está ya embrutecido por el trabajo exige su emancipación completa». Pienso especialmente en los escritos de un obrero de la industria del calzado, Charly Boyadjian ⁶, que relata lo siguiente: «Mientras las personas trabajaban 48 horas por semana, no había ni vida familiar ni vida sindical ni comunicación entre los obreros. Todo estaba centrado en el consumo. Pero a medida que la jornada laboral se redujo a 32 horas, la vida de familia o amorosa recuperó su importancia, la sección sindical se volvió activa, los obreros se encontraban fuera del trabajo, descubrían que podían vivir mejor incluso gastando menos y se preguntaban cómo podrían hacer su trabajo más soportable».

En la actualidad no hay que creer que la duración del trabajo no deba ser reducida más que para las tareas poco calificadas y sin gran interés. Semejante enfoque no contrarrestaría la tendencia a la dualización: estarían, de un lado, las élites profesionales que monopolizarían las posiciones de poder políticas, sindi-

cales y económicas; y del otro lado los trabajadores de tiempo parcial, periféricos, de empleos precarios, marginados por los primeros. Si tantas personas como sea posible deben tener acceso a las tareas interesantes, creativas, es preciso que la jornada laboral se reduzca tanto como las demás actividades. No son los talentos, las capacidades ni las posibilidades de formación lo que falta en nuestro país. El problema es puramente político. Como escribió usted en su *Manifiesto*⁷, se trata de crear una alianza en la cual los «fuertes» —especialmente la capa protegida de los trabajadores calificados— se encuentren unidos por lazos de solidaridad con los «débiles», es decir, con los parados, los jóvenes y los trabajadores precarios. Esta alianza va evidentemente contra el interés inmediato de las élites profesionales y de la aristocracia obrera, pero eso no tiene nada de nuevo: entre las diversas capas obreras jamás ha podido existir unidad más que superando los intereses inmediatos de unos y otros mediante un proyecto político, de sociedad, hacia aquello que no tememos llamar un «ideal común», a saber: la liberación de todos y el desarrollo de cada uno. Tenemos una urgente necesidad de esta clase de visión. Creo que estamos de acuerdo en esto.

P. Glotz: En nuestro sindicato se comienza también a reflexionar sobre la mejor manera de organizar a los parados de larga duración. Algunos sindicatos, por ejemplo, han modificado sus estatutos de forma que los parados puedan, después de su despido, seguir militando en su organización y que incluso los jóvenes parados que todavía no han trabajado nunca puedan afiliarse al sindicato. Hay ahí un esfuerzo evidente para traspasar al plano político los intereses corporativos de los detentadores de un empleo. Jóvenes dirigentes sindicales como Franz Steinkühler⁸ son conscientes del problema y tratan de hacer adoptar un nuevo enfoque. Así pues, hay un trabajo de reflexión en el seno de la DGB.

Tilman Fichter: Sin embargo, a pesar de la amplitud del paro, la DGB muestra una falta asombrosa de imaginación práctica frente al problema del paro de los jóvenes. Vivimos con este problema desde hace más de diez años. Sin embargo, no existe prácticamente ningún programa para organizar el trabajo sindical fuera de las empresas.

A. Gorz: ¿Estamos, pues, de acuerdo en que el sindicato debe salir de la empresa? ¿Qué debe estar presente allí donde las personas viven y habitan?

Progreso de la productividad y perspectiva de empleo

P. Glotz: Eso es absolutamente exacto. Debe penetrar en el dominio de la reproducción. Pero también debe ocuparse de otros temas: por ejemplo de la paz, de la ecología y de la cultura. No debe ocuparse todo el tiempo únicamente de las cuestiones del salario. Hay ahí una batalla que se está planteando actualmente en la República Federal de Alemania. Yo estoy profundamente convencido de que personas como Franz Steinkühler y Monika Wulf-Mathis⁹ son perfectamente sensibles a este aspecto.

A. Gorz: Así pues, usted no se horroriza cuando digo que la empresa ya no es el único terreno de lucha.

P. Glotz: Es completamente evidente pero se trata también de una cuestión que sigue siendo vivamente discutida en el seno del SPD. Incluso se hicieron algunas tentativas para completar nuestras secciones sindicales con secciones de em-

presas. Esta forma de organización era tradicionalmente la del Partido Comunista Alemán. Pero este modelo de organización no logró imponerse en el SPD; esto es comprensible, porque la experiencia nos muestra que la empresa, la vida cotidiana en la empresa, pierde cada vez más claramente su influencia sobre la personalidad de los trabajadores. Hay ahí una evolución que inquieta mucho a cierto número de nuestros camaradas, puesto que implica con toda evidencia un debilitamiento o una pérdida de poder.

Ahora me gustaría preguntarle a André Gorz, en tanto que analista del cambio técnico y de las luchas obreras, cuáles son a su juicio las perspectivas prácticas. ¿Cuánto tiempo hará falta —teniendo en cuenta las evoluciones de la informática, de la microelectrónica, de las nuevas tecnologías— para que las grandes naciones industriales de Europa puedan considerar el paso a la semana de 32 horas, por ejemplo? Puesto que cuando estemos próximos a las 30 horas semanales, eso que usted llama la autonomía existencial será una posibilidad mucho más real que mientras trabajemos cuarenta o cincuenta horas. ¿Cuántas décadas de luchas sindicales y de desarrollos técnicos se necesitarán, según usted, para que lleguemos a ese punto?

A. Gorz: Creo que se trata de una cuestión esencialmente política. El incremento anual de la productividad, para la economía francesa en su conjunto, es del 3,7 %, en promedio, desde 1977...

P. Glotz: En la República Federal apenas del 3 %.

A. Gorz: ...y eso aunque los bancos y las aseguradoras, por ejemplo, conservan un efectivo excedente de aproximadamente 15 %. El crecimiento económico, en Francia, no alcanza ni siquiera el 1,5 % anual. Tenemos, pues, una productividad disponible de aproximadamente el 2,5 % por año, lo cual significa que, teóricamente, podríamos reducir la duración del trabajo un 2,5 % cada año sin por ello reducir el paro. Según un cálculo del INSEE, la generalización de la semana de 30 horas en 1994 dejaría subsistir todavía una tasa de desempleo del 8,4 %. Desde un punto de vista puramente técnico podríamos adoptar el objetivo de la semana de 20 horas —o mejor aún: del año de 1.000 horas— para el año 2000 ó 2005.

Las condiciones para alcanzar este objetivo son esencialmente políticas: hace falta una política cultural y de formación, una política del tiempo, una política económica. La política cultural y educativa deberían tener una doble finalidad. Por una parte, deberían dotar a los individuos de una autonomía cultural suficiente para que posean en sí mismos la fuerza y los medios para evolucionar, plantearse sus propios fines, elegir sus actividades, asumir tareas colectivas en cooperación voluntaria con los otros, en resumen, para que su socialización y su identidad ya no dependan del trabajo que se les prescribe o por el que se les paga. Esto supone especialmente una reforma pedagógica sobre la cual la reflexión y la experimentación están mucho más avanzadas entre ustedes que en Francia. Por otra parte, la política educativa y de formación debería conducir a que una proporción de personas mucho más elevada que hoy asuma tareas muy calificadas, incluyendo funciones dirigentes. Me parece absolutamente necesario, políticamente, que todo el mundo —incluyendo los administradores, los investigadores, las profesiones llamadas liberales— trabaje menos pero mejor y que la reducción de su jornada de trabajo vuelva esas actividades interesantes y apasionantes accesibles a muchas más personas. Como ya dije antes, no son las vocaciones ni las

capacidades lo que falta sino los empleos en donde esas capacidades puedan desplegarse.

Si no reducimos la jornada de trabajo más que para las tareas poco calificadas, y los profesionales de todo tipo siguen trabajando cuarenta horas o más, jamás podremos superar la tendencia a la dualización de la sociedad: el poder de aquellos y aquellas que acaparan las tareas interesantes y de responsabilidad seguirá creciendo y el poder de todos los demás seguirá disminuyendo. También por eso es que no estoy de acuerdo con usted cuando, en su *Manifiesto*, propone una diferenciación de las jornadas de trabajo. Eso vendría a segmentar el mercado del trabajo. Lo que necesitamos, a mi parecer, es una transferencia continua de personas activas desde los sectores en donde la productividad crece rápidamente hacia aquellos en donde crece lentamente o no crece en absoluto. Todas las grandes firmas poseen en materia de productividad sus previsiones y sus planes a mediano plazo. Pero casi siempre se trata de secretos de empresa celosamente guardados. La planificación económica consiste precisamente en transformar todas esas previsiones privadas y todos esos programas en planes que sean su resultado, sector por sector, incluyendo las administraciones y los servicios públicos, en un plan económico general. Así se tendrá la base para negociar acuerdos-marco y convenios colectivos, políticas del tiempo, de la formación, del empleo, etc. Hay cosas ahí que no solamente se hacen en la RDA; eso se hizo durante largo tiempo en Francia, con la participación de representantes del Estado, de los sindicatos y de los usuarios, y eso se practica en ciertos aspectos en las grandes firmas norteamericanas, en Japón, en Corea del Sur, etc.

Para que la reducción general y sustancial de la jornada de trabajo no implique una reducción del poder de compra es necesario, a mi juicio, no aumentar continuamente el precio de la hora de trabajo —eso volvería muchos servicios e incluso productos alimentarios prohibitivamente caros— sino compensar la disminución del salario directo con el pago de una renta social, asegurando la caja que ese pago sea alimentado por tasas diferenciadas según el tipo de producto. Ya he explicado esto repetidas veces ¹⁰, por lo que no me extenderé más.

En cuanto a los trabajos que no pueden ser eliminados aunque sean espantosamente aburridos o desagradables, lo mejor será repartirlos entre todo el mundo. Por ejemplo, la clasificación o el mercado electrónico del correo, la limpieza de talleres y oficinas, etc., pueden ser realizados por todo el personal. Diez minutos diarios bastarán si todo el mundo participa, y ya no hará falta el trabajo nocturno de los parias sobreexplotados que actualmente realizan esas tareas. Lo mismo puede decirse de trabajos como la recolección de verduras: repartidos entre todo el mundo, tomarían al máximo dos o tres días por año. Ese tipo de servicio no sería muy diferente de los «cursos de repetición» para los que cada suizo da al menos una semana anual al ejército.

En resumen, considero la semana de 20 horas o el año de 1.000 horas una posibilidad realizable a condición de que no falte la voluntad política.

Enajenación y humanización del trabajo

P. Glotz: Estoy de acuerdo con usted en que la introducción de una jornada de trabajo reducida es una decisión política. Pero difícilmente puedo compartir su idea futurista y antielitista sobre la participación de los administradores en la

recolección de verduras. Y esto especialmente porque sería como tirar piedras a mi tejado. Si soy partidario de una diferenciación de las jornadas de trabajo es porque es extraordinariamente difícil hacer adoptar una sola y misma estrategia a los sindicatos de la metalurgia, de la química o de los servicios públicos. Recuerde usted, por ejemplo, cómo el movimiento sindical se dividió recientemente en partidarios de una reducción de la duración hebdomadaria del trabajo y partidarios de un adelantamiento de la edad de jubilación. La dirección de la DGB tenía evidentemente que evitar una lucha abierta entre los diferentes sindicatos. Por lo tanto, tuvo que elaborar una estrategia que tiene en cuenta la diversidad de intereses. Evidentemente, todo esto no debe impedirnos reflexionar en los objetivos a más largo plazo.

Estoy expresamente de acuerdo con usted en que la cuestión de saber si los sindicatos y la izquierda deben empeñarse del todo en la reducción de la jornada de trabajo brota de una decisión política. Igual que se precisa una decisión política para acompañar esta política de la duración de la jornada con una nueva política educativa y cultural. Sólo gracias a ella los hombres y mujeres conquistarán su autonomía existencial. Ante todo, el socialismo fue, en sus comienzos, una especie de movimiento cultural. En Alemania, por ejemplo, todo comenzó con asociaciones de cultura obrera. Con el tiempo el movimiento obrero se ha alejado mucho de esas prácticas iniciales y aparece a menudo actualmente como una gran máquina que organiza las reivindicaciones salariales y hace prevalecer intereses materiales bien determinados. Las cuestiones culturales son frecuentemente desdénadas en la cima de los sindicatos y de los partidos. Y los mismos trabajadores forman parte de nuestro problema. En primer lugar habría que atraerlos a esta especie de estrategia. Pues cuando se discute la cuestión, en las empresas, de si hay que exigir más dinero o menos trabajo, muchos camaradas optan por un aumento de los salarios.

A. Gorz: Es completamente normal que cerca de la mitad de las personas interrogadas se pronuncien todavía en ese sentido. Eso no cambiará sino cuando seamos capaces de ilustrar lo que significa no trabajar más que mil horas al año sin dejar de tener un ingreso real al menos igual al actual y disponiendo de equipos colectivos, en especial en los barrios, gracias a los cuales uno mismo pueda hacer, individualmente o en cooperación, muchas cosas que actualmente uno está obligado a comprar a terceros. El valor de uso del tiempo de trabajo podrá entonces ser mucho más elevado que su valor de cambio, es decir, que el poder de compra de lo que se podría ganar trabajando más horas, sin hablar del placer de hacer las cosas uno mismo, de cooperar voluntariamente con otros, de ayudarse mutuamente. No superaremos la preponderancia de las categorías económicas en la forma de pensar, la monetarización de todos los valores, más que si podemos «ilustrar positivamente otra forma de vivir y de trabajar». Fue Rainer Wagner¹¹ quien escribió eso en su revista, añadiendo que tenemos una urgente necesidad de «concepciones e ilustraciones» alternativas si queremos evitar una sociedad dividida en dos, en la cual un tercio de los ciudadanos estarán marginados.

Esta es también la razón por la cual encuentro nefasta la insistencia de personas como Kern y Schumann sobre el valor del trabajo *asalariado* en cuanto fuente única de identidad personal y de integración social. Parece que esas personas han olvidado que, en la mayor parte de los casos, el trabajo asalariado ya no puede ser comprendido por el sujeto como su actividad propia y como una realización suya. El hecho de que el trabajo exige bastante inteligencia e iniciativa, y que la división del trabajo dentro de la empresa está parcialmente abolida, no cambia

fundamentalmente su carácter abstracto y alienado. Pues la división del trabajo subsiste a la escala de la sociedad y el asalariado, por más absorbente que sea su tarea, por lo general desconoce su finalidad y su sentido. El trabajo puede ser humanizado, la enajenación en relación a los medios de producción puede ser suprimida en gran medida, la enajenación del producto y del sentido del trabajo no por ello se elimina. Si, en vez de desplazar la socialización del individuo, su identidad personal hacia la esfera cada vez más importante de las actividades no económicas y no comerciales —lo que actualmente debería ser la gran tarea cultural de una nueva izquierda— nosotros seguimos insistiendo en la identidad que cada uno y cada una deben derivar de su trabajo asalariado, entonces no debemos asombrarnos de que los sindicalistas defiendan sus fábricas ultrapolucionantes contra los ecologistas, que los *hard hats* —los obreros de la construcción— neoyorkinos se manifiesten contra los neopacifistas o que los obreros de los arsenales hagan huelga (eso se ha visto también en Francia) contra la reducción de los programas militares. Si nosotros no ofrecemos una perspectiva que relativice a los asalariados y los oficios determinados por la división social del trabajo, entonces no debemos extrañarnos si muchas personas acaban por aceptar un día la economía de guerra o un Estado nacionalsocialista que, después de todo, aseguró a millones de ingenieros, técnicos, investigadores y obreros calificados la posibilidad de ejercer su oficio, cosa que ellos —si puede decirse sin ironía— llevaron a cabo muy concienzudamente.

T. Fichter: ¿No encuentras que hay ahí un argumento francamente exagerado? A mi parecer, todo obrero que no fabrica abiertamente una máquina de guerra, sino por ejemplo tranvías, tiene derecho a exigir que los sociólogos tomen en cuenta igualmente los aspectos de su identidad personal que resulten de la construcción de coches de tranvía. Después de todo, esos medios de transporte son el producto de su trabajo. Y ese trabajo, además de ser útil, ocupa gran parte de su vida. Yo encuentro fascinante que un teórico del trabajo de formación marxista condene tan sumariamente el trabajo.

A. Gorz: Pero olvidas que la cuestión que se nos plantea es: ¿qué haremos cuando la construcción de un tranvía exija la mitad de trabajo que ahora? ¿Cuál será entonces nuestra fuente de identidad? Por otra parte, tú no quieres ver más que el taller donde se montan los vagones de los tranvías y encuentras el trabajo que ahí se hace cargado de un sentido inteligible. Pero la fabricación de las piezas que se montan en el taller de montaje representa el 90 % de todas las horas de trabajo que exige la construcción de un vagón. Y esas piezas —fundición, chapa, aluminio, cristales, motores eléctricos, sistemas de frenos, rodamientos, etc.— salen al menos de una docena de industrias. Para las personas que fabrican todo eso el sentido de su trabajo es por lo menos oscuro. Y eso porque nuestra civilización —ahí está la fuente de nuestra riqueza— consigue conjugar conocimientos de los que los detentadores no comprenden gran cosa a los conocimientos de otros. Una simple bicicleta contiene más conocimiento de los que un individuo, o incluso mil individuos reunidos, pueden dominar. De ahí una necesaria división social del trabajo que impide a la mayor parte de los obreros comprender el sentido y el propósito de lo que hacen. Se puede reducir esta opacidad pero no es posible eliminarla. Lo que yo llamaría «heteronomía» y que Habermas llama «sistema» y «conducta funcional» no puede nunca desaparecer completamente. Para reducir la esfera de las actividades heterónomas, funcionales, a fin de que no dominen nuestra vida, es preciso que sepamos retroceder críticamente con respecto a ellas. Si, en vez de esto, insistimos por el contrario en la dignidad de nuestra especialización funcional, eso vuelve a reivindicar, en nombre del valor intrínseco del oficio, el derecho a un profesionalismo limitado e irresponsable.

T. Fichter: Hace apenas una hora tú hablabas aún de las tradiciones artesanales en el sur de Italia para demostrar cuán importantes fueron, a fines de los años 1960, para los italianos meridionales que trabajaban en las industrias del norte. Eso también forma parte de la cultura obrera. La cultura de los obreros profesionales tiene su fundamento en un saber artesanal.

A. Gorz: Tú no puedes, sin embargo, confundir la cultura del trabajo en actividades artesanales, en donde uno mismo determina su producto, y un trabajo determinado por la división del trabajo a escala de toda la sociedad.

¿Volver a los objetivos originales del movimiento obrero?

P. Glotz: Nuestra vida es limitada. Las cuestiones que usted plantea pueden parecerme legítimas en tanto que orientaciones, pero de todos modos me hace falta una perspectiva práctica sobre la cual yo pueda organizar una lucha que imponga la semana de treinta horas en los diez, quince o veinte años por venir. La enajenación del trabajo no dejará de subsistir. Aunque el obrero no pase más que treinta horas por semana ante una máquina de control numérico, la alienación subsiste, él no puede hallar en su trabajo su plena realización. La semana de treinta horas no deja de ser un objetivo sindical realista y, mientras perseguimos este objetivo, debemos hacer de manera que el obrero pueda, fuera de sus treinta horas de trabajo, vivir en el seno de la sociedad de una manera conforme a la idea de autonomía existencial.

Como la abolición completa del trabajo no constituye, en nuestros días, una posibilidad real, la condena sumaria del trabajo tiene como efecto eliminar todo recurso a los objetivos de lucha sindical de los que hablábamos. Horst Kern y Michael Schumann se plantean, como consecuencia, orientaciones a mucho más corto plazo. Dicen: luchemos en las grandes empresas para que la introducción de máquinas electrónicas vaya a la par con condiciones y relaciones de trabajo aceptables. Hay ahí, a mi juicio, un objetivo intermedio razonable, a condición de añadir enseguida que el trabajo que quede no permitirá todavía el desarrollo de todas las facultades humanas. ¿O me equivoco?

A. Gorz: No, eso está bien dicho. Estoy de acuerdo con su forma de presentar las cosas. Debemos avanzar en dos frentes a la vez: de un lado humanizar el trabajo —es decir, organizarlo de manera que no sea embrutecedor y permita comunicación y autodeterminación— y por otra parte tomar con relación a él la distancia que permite la liberación del tiempo y que hace esta liberación deseable. El objetivo no puede ser nunca más que «la expansión integral de la individualidad» —esta es la expresión empleada por Marx, por más que actualmente tenga una resonancia típicamente cristiana— lo que supone que cada uno tenga la posibilidad de ser activo en varios planos a la vez y, por consiguiente, que la duración de la jornada de trabajo se reduzca en beneficio de actividades que, según la fórmula de Marx, «son ellas mismas su propio fin». Ahora bien, no pueden ser ellas mismas su propio fin más que si no son necesarias a la subsistencia, ni utilitarias, ni comerciales, es decir de finalidad lucrativa. Se trata pues de actividades culturales y artísticas de todo tipo, de actividades de relación, de todas las formas de servicio —del medio de vida, del paisaje, de los niños, etc.— cosas todas ellas que no tienen nada que ver con la racionalidad económica y en las que se puede hallar placer a condición de no ser obligado y de poder tomarse el tiempo necesario. La preponderancia de actividades no económicas en relación al trabajo económica-

mente necesario ha sido en todos los tiempos, tanto en Platón como en Marx —y no solamente en las civilizaciones occidentales—, el objetivo de la humanidad. Pero no ha sido sino hasta nuestros días que la técnica hace ese objetivo potencialmente realizable.

P. Glotz: Hay ahí una perspectiva en la que estoy de acuerdo con usted; y creo también que la utopía del mismo liberado que usted desarrolla en *Los caminos del paraíso*¹² ofrece a las luchas sindicales una perspectiva mucho más amplia que el debate sobre una mejor repartición del trabajo entre parados y detentadores de un empleo.

Si examinamos desde esta perspectiva la sociedad francesa, alemana, italiana, ¿qué esperanzas o qué dudas le inspiran los sindicatos o los movimientos políticos existentes? ¿Cuenta usted sobre todo con los movimientos ecologistas como los «Verdes»? ¿O piensa usted que sus concepciones pueden arraigar en aquellas organizaciones obreras clásicas que están en vías de transformación? ¿Pero tal vez son éstas, para usted, cuestiones prácticas sin interés que deja a los funcionarios Peter Glotz o Bruno Trentin y acerca de las que recusa toda competencia?

A. Gorz: Yo no me siento en absoluto competente, pero el hecho de que Peter Glotz y yo lleguemos a entendernos en no pocas cosas me parece bastante estimulante. Lo que usted llama mi utopía no es en el fondo más que una versión actualizada de los objetivos originales del movimiento obrero —no simplemente de los utópicos como Fourier u Owen, o de los anarquistas rusos, sino muy particularmente de Marx. Marx previó que la técnica, y no ya el trabajo vivo, se convertiría en la fuente principal de la riqueza, la fuerza productiva principal, y que por consiguiente el tiempo de trabajo deberá dejar de ser la medida de la riqueza producida. Los criterios capitalistas, económicos, pierden entonces su racionalidad y su legitimidad. Ahí es donde hemos llegado ahora. El sentido y el fin de la producción no pueden derivarse ya de las exigencias vitales y de las necesidades, tenemos que elegir esos objetivos y decidir por nosotros mismos lo que queremos; si no, seremos arrastrados a nuestra perdición por el funcionamiento insensato de un aparato de producción autonomizado.

Por lo tanto, a mi juicio, es necesario que dentro del movimiento obrero, dentro de los partidos de izquierda, nos pongamos a reflexionar en formas de sociedad no capitalistas y no productivistas. En Francia todavía no hemos llegado a ese punto, pero en Italia, en España y particularmente en Alemania Federal la situación es mucho más prometedora. La creación de vuestra revista y el nivel de los debates que conducís, pero también el hecho de que se acepte en los sindicatos discutir de perspectivas «utópicas», todo esto es muy estimulante. El SPD es un viejo partido que dispone de un enorme capital teórico y humano, con personas como Erhard Eppler, Iring Fetscher, Peter Glotz, Johano Strasser, Klaus Traube¹³, etc. Cito, evidentemente, a aquellos de quienes me siento más próximo y naturalmente no soy tan ingenuo como para creer que el SPD, si llega al poder, gobernará conforme a las orientaciones que definen, por ejemplo, los textos de la Comisión de los Valores Fundamentales. Y también estoy convencido de que, sin el éxito y la influencia de los «Verdes» y de los nuevos movimientos sociales, el SPD no se habría abierto a una nueva temática o no se habría abierto sino mucho más lentamente. Por eso es que también espero que los «Verdes» no estarán ausentes del próximo Bundestag y que tampoco se convertirán en una especie de apéndice del SPD o de los funcionarios verdosos. No podrán conservar la influencia que han ejercido hasta ahora sobre las organizaciones tradicionales más

que si se mantienen como un movimiento autónomo, un laboratorio de ideas nuevas, y no se convierten simplemente en uno más de los componentes de la mayoría política. Encuentro muy lamentable que los «Verdes» vengan desde hace algún tiempo gastando sus mejores energías en luchas por el control de su aparato.

T. Fichter: ¿Crees que los sindicatos y la socialdemocracia podrían por su parte tener una influencia positiva sobre los «Verdes»? ¿Especialmente por lo que respecta a la consecuencia en las ideas y en la elaboración de una línea? Mientras todas las decisiones importantes corran peligro de ser cuestionadas de nuevo al cabo de veinticuatro horas por la misma instancia que las tomó, la falta de solidez política se hará sentir cruelmente. Dicho de otra manera: ¿no existe en los sindicatos y en la socialdemocracia un capital de experiencias políticas del que los nuevos movimientos sociales podrían aprovecharse?

A. Gorz: La colaboración orgánica con organizaciones de tanto peso como la DGB o el SPD ciertamente tendría un efecto estabilizador sobre los «Verdes» en cuanto a partido. Pero todavía no estoy convencido de que sea deseable que los «Verdes» se conviertan en un partido como los demás. Eso no facilitaría un relanzamiento ulterior del movimiento.

¿Qué política con el Este?

P. Glotz: Quisiera discutir aún otro tema. La cultura política de los franceses y la de los alemanes son visiblemente muy diferentes. Esta diferencia se manifiesta especialmente cuando tratamos de analizar los recientes cambios en la «intelligentsia» francesa. Es cierto que, a pesar del modernismo de los medios, las comunicaciones entre países a menudo son muy defectuosas. Estoy convencido, por ejemplo, de que André Glucksmann, que alcanza tiradas impresionantes en Alemania Federal, no tiene en Francia la importancia que le atribuyen entre nosotros muchos conservadores. Para ser franco, diría que eso me tranquiliza.

Para ilustrar mi argumento, quisiera recordar la controversia franco-alemana que siguió a la proclamación del estado de guerra en Polonia, en diciembre de 1941. Entonces se reprochó vivamente a la política de los socialdemócratas hacia el Este de favorecer demasiado las relaciones de Estado a Estado y de no tener suficientemente en cuenta la represión de los movimientos de resistencia y de las libertades fundamentales en la Europa del Este. Usted mismo declaró en una entrevista en *Spiegel*, en enero de 1982, que a todo lo largo de su historia les ha faltado a los alemanes una referencia cultural a la libertad. Los socialdemócratas alemanes, que concibieron la política con el Este, que la han impuesto y que actualmente elaboran una segunda etapa de la misma, ven evidentemente en esta clase de afirmación una crítica que les concierne directamente. Por eso desearía preguntarle si usted sigue todavía manteniendo esta afirmación: «No hay, en la historia alemana, referencia cultural a la libertad».

A. Gorz: Sí, en la historia de la nación alemana, pero evidentemente no en la de los pueblos de lengua alemana, la causa de la nación no ha estado nunca íntimamente ligada a la causa de la libertad. De una parte estaba más bien la causa de la nación, de otra parte la causa de la libertad. Mientras que para naciones como los Estados Unidos, Noruega, Checoslovaquia, Polonia, la causa nacional y la causa de la libertad eran una sola y misma cosa. En la entrevista con *Spiegel* declaré además a mi amigo Gustave Stern que la socialdemocracia alemana, pre-

cisamente en la medida en que se identificaba con la causa de la libertad, jamás tuvo una línea nacionalista sino muy frecuentemente internacionalista.

Dije todas esas cosas porque estaba impresionado por el desprecio con que la cuestión polaca era tratada en Alemania Federal. No me refiero aquí más que al clima intelectual que prevalecía entonces. Ya sé que, en el plano práctico, es mucho lo que se ha hecho entre ustedes para ayudar a los polacos y a Solidaridad. Pero en el debate intelectual —si exceptuamos a personas como Ursula Schmiederer, Martin Jander o Hinrich Oetjen¹⁴— se reprocha a los polacos, especialmente en los medios de comunicación, de ser lo bastante tontos como para arrojarse a ciegas contra el obstáculo. No es extraño, dicen, que el resultado fuera catastrófico.

P. Glotz: Yo no siento ninguna simpatía por aquellos que, confortablemente instalados en un país occidental, reprochan a los resistentes como Adam Michnik o a los opositores checos de la *Carta 77* por carecer de realismo o de prudencia. Pero, por otra parte, me opongo enérgicamente a los renegados o derechistas como Ludek Pachmann que, desde su refugio occidental, tratan de desestabilizar a la República Popular de Polonia o a la CSSR.

Si el general Jaruzelski no hubiera dado su golpe militar, no hubiera sido Lech Walesa, sino Brejnev, quien hubiera tomado el poder. Dicho de otro modo: el aparato soviético. He ahí la alternativa que hay que esforzarse por conservar presente. Una vez más yo me guardaré mucho de hacer recomendaciones a los movimientos opositores del Este. Pero, por otra parte, si sigo una política exterior responsable no puedo permanecer indiferente a la manera como un movimiento se desarrolla por allá. Voy a poner un ejemplo. Recientemente tuve una larga conversación con el portavoz del movimiento de oposición de un país del Pacto de Varsovia. Este me dijo: «Entre nosotros hay tres grupos: los reformadores comunistas como yo; algunos católicos que se oponen a la ideología comunista por razones religiosas, y luego están los que desean que una guerra nuclear estalle lo más pronto posible y haga saltar por el aire al conjunto de los dirigentes comunistas». Casi no hace falta decir que no quiero tener nada que ver con ese tercer grupo, ya que un enfrentamiento de esa clase no solamente haría saltar por los aires a las camarillas que dominan a este o aquel Estado de Europa oriental sino también a los millones de personas de Europa central. Por eso la exaltación de la libertad tiene sus límites en la política que, prácticamente, todos nosotros estamos obligados a llevar.

A. Gorz: Yo puedo entenderme con usted...

P. Glotz: Pero se supone que usted tiene que discutir conmigo...

Una segunda fase para la política con el Este

A. Gorz: Eso es lo que voy a hacer preguntándole para empezar por qué, en Checoslovaquia, ustedes privilegian a ese tercer grupo que no nació sino de la desesperación provocada por la invasión rusa. Es como si detrás de los movimientos democráticos filipinos o surcoreanos no quisiéramos ver más que a comunistas teledirigidos desde Moscú. A este propósito quisiera citar un pasaje del artículo de Horst Ehmke¹⁵ aparecido en el número de noviembre pasado de vuestra revista. En ese artículo Ehmke dice muchas cosas acertadas, pero afirma también

lo siguiente: «Muchos no comunistas de los países del Este convienen en que no puede haber seguridad para sus países más que si pueden apoyarse en la Unión Soviética». Perfecto. Tenemos pues en los países llamados comunistas de Europa una opinión pública que, aunque no fuera más que por razones puramente nacionales, no desea romper sus lazos con la Unión Soviética, aunque sí desee desembarazarse de su Estado policíaco. Igual que nosotros mismos deseamos poder seguir apoyándonos en los Estados Unidos, aunque deseemos desembarazarnos de los Pershing-2 y de la tutela norteamericana.

Ehmke prosigue: «Lo que importa a las poblaciones de Europa oriental es la cuestión de los derechos del hombre, es la libertad individual y política. Los disidentes la reclaman para ahora mismo y no ya para sus hijos, y la reclaman casi siempre incondicionalmente: “La libertad es indivisible” se decía ya durante la Primavera de Praga. Semejante exigencia de “todo o nada” es imposible de satisfacer para los regímenes comunistas. Equivaldría a su autoliquidación y a la liquidación del “glacis” soviético en Europa oriental».

Así, Ehmke dice, por una parte, que esos pueblos seguirían apoyándose en la Unión Soviética con tal de que pudieran desembarazarse de las camarillas en el poder; y por otra parte afirma que la URSS sacrificaría su «glacis» y su seguridad si hiciera concesiones. Ese tipo de afirmaciones contradictorias no refleja, a mi juicio, más que una voluntad de complacencia con respecto a los regímenes existentes. Simplemente, es falso afirmar que la URSS no puede proteger su seguridad más que negando las libertades fundamentales a esos pueblos. Pues eso significaría que solamente los pueblos soviéticos por la fuerza son susceptibles de entenderse con la Unión Soviética y tener en cuenta sus intereses legítimos. De hecho, esos intereses estarían mejor protegidos con una política de reformas interiores en Europa central. La viabilidad de esta política depende evidentemente también de las naciones occidentales. Estas pueden facilitarla o incluso ponerla en movimiento proponiendo a la URSS un reglamento general que ligue indisolublemente la realización por etapas de los tres planes siguientes: primero el desarrollo por etapas de la cooperación económica; en segundo lugar la democratización por etapas y el establecimiento de las libertades fundamentales en los países de Europa central-oriental; y en tercer lugar el establecimiento por etapas de un sistema de seguridad colectiva del que la «defensa defensiva» preconizada por Horst y Eckart Afheld ¹⁶ me parece un elemento particularmente importante. Ya describí en el número 7 de *Lettre internationale* (número 1 de *Letra Internacional*, edición española) cómo el progreso en cada uno de estos tres planes puede ir vinculado, en cada etapa, al progreso en los otros dos. Podemos hacer de manera que una política de reformas en Europa central-oriental presente para la Unión Soviética un interés tanto económico como militar.

Simplemente no veo por qué las reformas de la Primavera de Praga, que Ehmke cita expresamente, hubieran debido conducir a la autoliquidación de un régimen dispuesto a cooperar con la Unión Soviética. Dubcek era comunista, el partido comunista y el pueblo entero apoyaban el programa, los checos son tradicionalmente pro-rusos y el Kremlin podía preservar sus intereses estratégicos por otros medios que no fueran la eliminación, la destitución y el encarcelamiento de los reformadores comunistas.

P. Glotz: Estoy de acuerdo con usted sólo en parte. Hacia el final de su exposición, usted explica de alguna manera las razones de la segunda fase de nuestra política con el Este. Yo pienso, en efecto, que una política con el Este que desa-

rolla los intercambios comerciales y culturales, entre otras cosas, que tiende a la seguridad colectiva y al desarme, pone alguna cosa en movimiento en el bloque oriental. Pero no estoy de acuerdo con su análisis del dubcekismo. La Primavera de Praga engendró una dinámica que —si la Unión Soviética y los otros países del Pacto de Varsovia no hubiera intervenido— hubiera arrasado con el comunismo. Por otra parte, no hay que olvidar que el Partido Comunista de Checoslovaquia contenía también otros grupos. No hay que olvidar que la dinámica de las reformas puso en marcha un proceso que habría amenazado numerosos privilegios y posiciones de poder del Partido Comunista de Checoslovaquia. Los detentadores de esas posiciones de poder se defenderán siempre con todas sus fuerzas —incluyendo, como ya vimos, la apelación a la Unión Soviética— contra su desposesión. Ese tipo de enfrentamiento no conduce a un proceso de reformas graduales del comunismo por el estilo del que se desarrolla lenta y silenciosamente —al menos en algunos terrenos— en Hungría.

En Checoslovaquia el proceso había tomado un giro tan explosivo que el enfrentamiento resultaba casi inevitable. Yo no criticaría, sin embargo, a los reformadores comunistas de la Primavera de Praga. Pero por otra parte considero que deberíamos evitar darles consejos. Pues a fin de cuentas, fueron ellos quienes tuvieron que soportar las consecuencias de su política. Yo reflexionaría siempre dos veces antes de aconsejar cualquier cosa, porque si las cosas salen mal son ellos quienes irán a la cárcel, no yo.

T. Fichter: Pero tú acabas precisamente de darles un consejo reprochando a la mayoría del Partido Comunista de Checoslovaquia no haber apreciado correctamente la dialéctica del proceso de reformas. En tu crítica llegas incluso a justificar, desde el ángulo de la filosofía de la historia, a la minoría staliniana que solicitó la intervención de la Unión Soviética. Tu análisis implica una intervención enérgica en los asuntos internos checoslovacos.

P. Glotz: En ningún caso justifico a los stalinistas. Pero es verdad que, a diferencia de muchos otros, yo presento los hechos en toda su brutalidad. Así es como, desde 1975, analizando la política de Salvador Allende en Chile, demostré que ésta era propiamente aventurerista, lo que no me impedía aprobar plenamente sus objetivos. Analizando esta política desde el ángulo de los costos y las ventajas se observa claramente, en efecto, que es imposible derrotar de esa manera a un poder capitalista en plena posesión de sus medios. De la misma manera sostendría que no se puede derribar a un poder comunista comportándose como intentaron hacerlo Dubcek y su grupo. Cuando se lucha por la libertad, no basta denunciar el poderío del capitalismo o del marxismo soviético, o «sovietismo»; hay que tener en cuenta que ellos disponen de tanques, de ametralladoras y de soldados. Y cuando uno quiere derrotar a gentes que disponen de tanques, de ametralladoras y de soldados, hay que actuar de forma muy reflexiva y circunspecta, porque si no uno acaba en prisión o en la cámara de tortura.

Tender a objetivos realizables

A. Gorz: Ese es un realismo político que yo no acepto. Pues si todo el mundo fuese tan reflexivo y circunspecto como usted desea, no habría jamás y en ninguna parte movimientos sociales, movimientos populares; la camarilla de Duvalier estaría aún en el poder en Haití y la camarilla de Marcos en Filipinas. Quizá tampoco tendríamos nosotros todavía sindicatos obreros, pues después de todo el

movimiento obrero empezó con personas que en 1830 proclamaban «mejor morir de pie que vivir de rodillas», y a principios de este siglo todavía se ametrallaba a los huelguistas. Hay en alguna parte una frontera ante la que es preciso decir: «eso no puedo aceptarlo, aunque me lleven a un campo de concentración, a un gulag o a las cámaras de tortura o me liquiden de un tiro en la nuca, porque si lo acepto ya no seguiría siendo un ser humano». Esta frontera no es la misma para todas las culturas, pero todos los movimientos de liberación son impulsados por hombres y mujeres que sienten y actúan de esa manera; nosotros les debemos mucho, todos. Claro está que hacen falta hombres políticos perspicaces y reflexivos para orientar la dinámica de esos movimientos hacia objetivos realizables y encadenar cambios realizables. Pero lo realizable depende también de la naturaleza del movimiento, de su dinámica. La KGB tiene aparentemente un miedo mayor a los movimientos populares que la CIA. Pues los checos, por ejemplo, no estaban completamente locos, no más locos que los filipinos. Su movimiento de reformas probablemente hubiera desembocado en una especie de socialdemocracia de izquierda, siempre con una planificación económica pero también con auténticos sindicatos obreros.

P. Glotz: Como socialdemócrata, tengo que señalar que la Unión Soviética no podría estar segura de un Estado socialdemócrata dentro de su bloque.

A. Gorz: Pero podría asegurarse la lealtad de semejante Estado sin tratarle como su presa, su colonia o su vasallo. Tarde o temprano habrá que llegar ahí. Después de todo, la seguridad de la Unión Soviética está claramente mejor asegurada en Finlandia y en Austria que en Polonia y en Checoslovaquia, sin hablar del hecho de que aún tiene que alimentar y subvencionar a estos dos últimos países.

T. Fichter: A mi juicio, la política de coexistencia no puede lograrse duraderamente en Europa más que si es sostenida por los pueblos de ambos lados de la cortina de hierro. No hay que creer que podamos practicar indefinidamente con la Unión Soviética una política común de distensión contra los intereses de los polacos, los checos o los eslovacos. Más bien necesitamos un pueblo polaco y un pueblo checo y eslovaco que apoyen desde el interior esta segunda fase de la política de coexistencia. Por eso tenemos que decirles a los soviéticos: «Recuerden ustedes, por favor, sus propias raíces humanistas que, además, existían también en los bolcheviques antes de Stalin. Dejen de una vez de pisotear los derechos del hombre». Semejante humanización de la política en Europa oriental es una condición necesaria para el éxito de la política de coexistencia. Si no, corremos el riesgo de que los pueblos de allá nos tiren un día de espaldas haciendo una revolución.

P. Glotz: Es evidente que hay que recordar continuamente a los dirigentes del otro lado los acuerdos de Helsinki y los derechos del hombre. Evidentemente yo me sentiría muy feliz si una serie de Estados de Europa oriental se volvieran socialdemócratas. El único problema es que, en la política exterior que nosotros llevamos concretamente, debo tener en cuenta el hecho de que —como André Gorz observa acertadamente— la Unión Soviética teme a tal revolución como el diablo al agua bendita. Por eso, dado que los movimientos populares en Europa oriental siempre amenazan con precipitar una intervención militar soviética, hay que esforzarse por evitar ese tipo de encadenamiento. Pues la consecuencia de cada nueva intervención es una nueva caída en prácticas dogmáticas y stalinistas. En el plano de esos objetivos estratégicos hay pues desacuerdos evidentes entre la so-

cialdemocracia alemana y una serie de oponentes que combaten radicalmente los regímenes de aquel lado. Me siento también muy escéptico cuando la prensa del grupo Springer presenta a esos defensores de los derechos humanos como a héroes, pues los objetivos políticos de la prensa del grupo Springer no pueden siempre ser los míos, así como tampoco los de la *Carta 77* o de Solidaridad.

A. Gorz: Ahí exagera usted. Ni siquiera la prensa de Springer puede hacer de Walesa un reaccionario. Solidaridad no ha combatido radicalmente al régimen sino que ha creído poder reformarlo. Es verdad que una política de reformas resultará imposible mientras una Nomenklatura corrompida concentre todos los poderes en sus manos. Ante todo es preciso hacer saltar la Nomenklatura. Pero no es necesario, sin embargo, reemplazarla con políticos reaccionarios o pro-occidentales.

P. Glotz: Yo me pongo a analizar un proceso y me digo: una Nomenklatura temerosa de hundirse se defenderá con uñas y dientes y todas sus ametralladoras. Y un enfrentamiento interno en un Estado comunista conduce muy rápidamente, ya lo sabemos, a la intervención del «internacionalismo proletario»: es decir, de los tanques. Esto es lo que hay que analizar, sin por ello aceptarlo, para de ahí sacar las consecuencias en política exterior.

¹ Obra recogida junto con otros ensayos en Editions du Seuil, Points/Politique, 1969.

² Ediciones 2001, 1982.

³ En *Das Ende der Arbeitsteilung?* («¿Hacia el fin de la división del trabajo?»), publicado por C. H. Beck, Munich 1984, los sociólogos del trabajo Horst Kern y Michel Schumann analizan las posibilidades de recalificación del trabajo que la automatización y la robótica ofrecen en las diferentes industrias. El trabajo industrial podría convertirse, según ellos, en una actividad autónoma y gratificante.

⁴ Antiguo dirigente de la izquierda estudiantil (SDS), profesor en la Universidad de Hannover, Oskar Negt es uno de los teóricos más influyentes de una política de reducción de la jornada laboral y de extensión hacia los planos político y cultural del mandato de los sindicatos. Véase *Lehendige Arbeit, enteignete Zeit* («Trabajo vivo, tiempo alienado»), Campus, Frankfurt/Main 1984.

⁵ Diferentes institutos alemanes proceden regularmente a sondeos para medir el apego o el rechazo de los asalariados con respecto a su trabajo y sus preferencias entre las diferentes maneras de reducir su duración.

⁶ Charly Boyadjian: *La Nuit des machines*, Les Presses d'Aujourd'hui, París, 1978.

⁷ Peter Glotz: *Manifest für eine Neue Europäische Linke*, Siedler Verlag, Berlín, 1985.

⁸ Franz Steinkühler es secretario general adjunto del sindicato de la metalurgia (IG Metall) que, con dos millones y medio de afiliados, es la federación más importante de la Confederación de Sindicatos Alemanes (DGB).

⁹ Monika Wulf-Mathis.

¹⁰ Véase especialmente *Lettre internationale*, núm. 8 (marzo 1986); *Autogestions*, núm. 19 (1985); *Partage*, núm. 22 (junio-julio 1985), núm. 27 (marzo-abril 1986) y núm. 24 (noviembre-diciembre 1985).

¹¹ Rainer Wagner es Director del gabinete de Peter Glotz.

¹² Publicado en Francia en la éditions Galilée, París, 1983.

¹³ Antiguo ministro de Cooperación, abogado de una política eco-socialista desde principios de los años 1970, Erhard Eppler es actualmente presidente de la Comisión encargada de la redacción de un nuevo programa del SPD. Filósofo, autor de obras de filosofía marxista, Iring Fetscher es miembro de la comisión revista político-cultural (*L'80*), teórico de una reestructuración del Estado providencia, Johano Strasser es igualmente miembro de la comisión del programa.—Klaus Traube, antiguo responsable del programa del supergenerador alemán, se unió muy pronto a la oposición contra la nuclear y otras tecnologías pesadas por razones políticas, económicas y ecológicas expuestas en numerosas obras, como *Die Zukunft des Fortschritts* («El futuro del progreso»), Bonn, 1981, escrita en colaboración con Johano Strasser.

¹⁴ Ursula Schmiederer, antigua responsable del SDS, profesora en la Universidad de Osnabrück, colabora en la revista mensual *Links*. Hinrich Oetjen y Martin Jander son respectivamente director y colaborador del Centro federal para la formación de jóvenes de la DGB (DGC-Bundesjugendschule, Hattingen).

¹⁵ Horst Ehmke es uno de los principales portavoces del SPD para la política exterior. (Se hace referencia al artículo que, en España, apareció en el número 20 de la revista *Leviatán*, verano de 1985).

¹⁶ Horst y Eckart Afheldt, respectivamente investigador en el Instituto Max Planck en Goettingen y general de la Bundeswehr, han precisado la organización de una defensa convencional en profundidad que, basada en la renuncia a toda capacidad ofensiva o punitiva, quita, sin embargo, al invasor la «prima a la agresión». Véase Horst Afheldt, *Pour une défense non suicidaire de l'Europe*, La Découverte, 1983.



Leviatán

Revista de hechos e ideas

NUMERO 16 (Verano 1984)

Fernando Morán: La política exterior española. Joaquín Leguina: Las autonomías: dos puntos de vista. Pilar Brabo, Carmen Ortiz: Las elecciones autonómicas en Cataluña. Ignacio Sotelo: Poder institucional y hegemonía social. Miguel Angel Martínez: Occidente y América Central. Angel Viñas: Este-Oeste, Norte-Sur y Europa Occidental. Giancarlo Pasquini: Italia: la democracia bloqueada. Perry Anderson: Modernidad y revolución. Marshall Berman: Las señales en la calle. Ludolfo Paramio: La izquierda y la crisis económica. Angel Merino: «Leviatán»: la búsqueda de una teoría. Entrevista con Mario Camus. Felipe Hernández Cava: El tebeo, el «cómic» y Dios dirá.

NUMERO 17 (Otoño 1984)

Angel Viñas: Coordenadas de la política de seguridad española. José Miguel Bueno: Política de seguridad española. Enrique Panés: OTAN: de entrada no, no. Antonio Santesmases: PSOE y OTAN. Carlos Bru: España entre dos tratados. S. Juliá. L. Paramio y M. Satrustegui: Dos años de gobierno del PSOE. Didac Fábregas: Un partido para construir y dirigir el cambio. Entrevista con Gabriel Jackson. Santos Juliá: Continuidad y ruptura en el socialismo. Fernando Savater: Perplejidad y responsabilidad del intelectual. Carlos Moya: 1984, señas de Leviatán. Roger Bartra: El 1984 de la izquierda latinoamericana. Enrique Gomáriz: La reconversión de la izquierda.

NUMERO 18 (Invierno 1984)

Jordi Borja: La izquierda: nuevas formas, nuevas ideas. Manuel Escudero: El Estado de las autonomías. Carlos de la Serna: ¿Alternativas a los bloques? Helga Montag: Televisión pública y televisión comercial. Anna Balletbó: La mujer y los medios de comunicación social. Entrevista con Gonzalo Torrente Ballester. Fernando Claudín: Conversación con Agnes Heller. Luciano Pellicani: El futuro del socialismo. M. A. Quintanilla y R. Vargas-Machuca: Ideas para el socialismo del futuro. Juan Miguel Lamet: Sobre algunos tópicos del cine español. J. L. Guereña: Situación apasionada de Vicente Aleixandre.

NUMERO 19 (Primavera 1985)

Alfonso Guerra: Europa en el mundo. Rafael Dezcállar: Las conversaciones de Ginebra. Agnes Heller y Ferenc Feher: La sombra de un nuevo Rapallo. Joaquín Leguina: Viejas y nuevas ideas de la izquierda. Josep M. Triguñer: Modelo cultural o proyecto político. A. Chazarra y J. García: Una reflexión sobre el socialismo español hoy. Entrevista con Andrei Siniavski. Carlos Moya: Signos del tiempo: moderno y posmoderno. Antonio Monclús: El problema del poder: ámbito y disolución. Gumersindo Ruiz: Orwell visto por un economista. J. M. García Rey: El lenguaje alejado de la verdad.

NUMERO 20 (Verano 1985)

Horst Ehmke: Berlinguer y la izquierda europea. Giorgio Napolitano: Hacia nuevas perspectivas. Lluís M. de Puig: La izquierda y Europa. Lluís Planas: España y la unión europea. Rafael Dezcállar: Las armas espaciales. Angel Viñas: La política industrial española de defensa. Entrevista con Marvin Harris. Victoria Camps: La ética en una cultura posfilosófica. Eduardo Subirats: Transformaciones de la cultura moderna. Carlos Thiebaut: Paradojas y narraciones. Valeriano Bozal: De rótulos y pinturas. Manuel Pérez Ledesma: Iglesias, Morato y otros socialistas. Fernando de Valenzuela: Nota del traductor. Entrevista con Augusto Roa Bastos.

NUMERO 21 (Otoño 1985)

José M.ª Benegas: Europa como proyecto socialista. Angel Viñas: Soberanía nacional y pactos militares. Augusto Roa Bastos: La larga noche trágica del Paraguay. Domingo del Pino: España y el Sahara: 1976-1986. Mario Onaindía: La transición democrática en Euskadi. M.ª Dolores Renau: Sobre la seguridad ciudadana. Adolfo Sánchez Vázquez: Reexamen de la idea de socialismo. Ludolfo Paramio: Del socialismo científico al socialismo factible. Norbert Lechner: De la revolución a la democracia. Fernando Claudín: Europa en la encrucijada. Luciano Pellicani: Ortega, sociólogo de la modernidad. M.ª Dolores Castriello: Sobre estética y posmodernidad. Entrevista con Gore Vidal.

NUMERO 22 (Invierno 1985)

Félix Pons: Europa: Estados y regiones. Martin Carnoy: La economía americana y la crisis económica mundial. Enrique Gomáriz: El pensamiento estratégico de Olof Palme. Ramón Casilda-Miguel Pérez: La deuda externa en América Latina. Entrevista a Jürgen Habermas. Manuel Azcárate: El papel internacional de la izquierda europea. Ludolfo Paramio: La cultura política durante la transición. Santos Juliá: Sindicatos, partidos y frente popular. Fernando Savater: Paradojas éticas de la salud.

Suscripción anual: 1.400 ptas.

Forma de pago: Talón bancario o giro postal.

Redacción y Administración:

C/. Monte Esquinza, 30. 28010-Madrid.

REFORMISMO, SOCIALISMO E IGUALDAD

Norberto Bobbio

análisis y debate



2

Quiero aprovechar la oportunidad que me han dado de presentar la ponencia introductoria al congreso para hacer una exposición analítica y no una propuesta, es decir, de presentar un análisis conceptual y de esclarecimiento del contexto en el que se inscribe el concepto de reformismo, más que hacer una propuesta política.

Antes de responder a la pregunta que se me ha planteado, «¿por qué somos reformistas?», creo que debo contestar otra pregunta previa: en qué sentido de reformismo podemos llamarnos reformistas. Esta pregunta previa nace ante todo de la observación de que también el «reformismo», como todos los «ismos» políticos (y filosóficos), es un término de múltiples significados; y nace en segundo lugar, y sobre todo, de la constatación de que incluso en el ámbito de la misma tradición, que es la del pensamiento y la praxis socialista, el reformismo del que hablamos hoy probablemente no es el mismo del que hablaban nuestros padres.

Naturalmente me refiero al reformismo socialista, que es el que nos interesa. Cada siglo ha tenido sus reformadores religiosos, políticos, económicos. El concepto de reforma entró con fuerza en la historia europea en su dimensión religiosa antes de tener un sentido político. Los príncipes reformadores del siglo XVIII fueron autores de reformas políticas, pero eran reformas que venían impuestas desde arriba. Cuando nosotros hablamos de reformismo nos estamos refiriendo a reformas políticas, económicas o sociales, no ya religiosas, y damos por supuesto que se trata de reformas que proceden de abajo.

El reformismo socialista emprendió su camino y tomó su propio significado histórico de la contraposición con la tradición revolucionaria del movimiento obrero. Para que quedase clara esta contraposición era preciso que penetrase en la conciencia europea la idea de revolución, entendida como ruptura violenta y benéfica de un orden precedente, idea que no había brotado con claridad antes de la revolución francesa. La tradición revolucionaria del movimiento obrero se identificó en gran parte, aunque no exclusivamente, con la historia del marxismo; o por lo menos con la interpretación más difundida y quizá más consecuente del pensamiento de Marx, en un primer momento, y con el leninismo en un segundo momento. He dicho «no exclusivamente» porque hubo también un marxismo reformista, aunque hay que reconocer que la apertura de la vía reformista ha tenido muchas veces como consecuencia el abandono gradual de las premisas marxistas. De todos modos, si es lícito hablar de un marxismo reformista, leninismo y reformismo son dos términos incompatibles; hablar de leninismo reformista sería como hablar de un círculo cuadrado. El que piense que el leninismo es la consecuencia natural del marxismo —a nivel práctico, no sólo teórico— está totalmente fuera de la lógica y de la práctica del reformismo.

Entre todas las distinciones de doctrinas o de corrientes y de prácticas que se pueden hacer dentro de la historia del movimiento obrero, la más incisiva y la más resolutiva históricamente, la que engloba a todas las demás, es precisamente la distinción entre el ala reformista y el ala revolucionaria; si bien la distinción en concreto no es muy nítida, porque los revolucionarios muchas veces, aunque sólo fuese como fase preliminar, han aceptado la fase de las reformas, y los reformistas nunca han excluido del todo la salida revolucionaria en última instancia. La razón por la cual se puede conjugar sin contradecirse el concepto de reforma con el de revolución depende del hecho de que por «revolución», tanto en el lenguaje común como en aquel más técnico de las ciencias sociales, se entienden dos cosas distintas. Se entiende tanto la causa, la ruptura violenta de un orden establecido, como el efecto, la transformación radical de un determinado eje social. No es cierto que la revolución como causa suponga la revolución como efecto. Pero tampoco es cierto que la revolución como efecto esté producida por una revolución como causa. Los reformadores han tenido siempre el convencimiento (o la ilusión) de que un proceso prolongado de reformas era capaz de evitar la revolución; dicho de otro modo: siempre han creído que se podía lograr la revolución como efecto sin recurrir a la revolución como causa.

La diferencia entre el ala reformista y el ala revolucionaria del movimiento obrero fue sin duda muy importante en la historia pasada. Pero, ¿es igualmente importante hoy? El criterio de distinción entre reformistas y revolucionarios hay que buscarlo, como ya se sabe, no tanto en los contenidos o en los programas, y menos aún en los fines últimos (también los reformistas han sostenido siempre que el fin último del movimiento era el socialismo, o sea una forma de sociedad radicalmente distinta de la dominada por el sistema económico capitalista), sino

en la estrategia. Con respecto a la estrategia estas dos alas han representado siempre una auténtica alternativa, que puede resumirse en estas dos antítesis: legalidad/violencia y gradualidad/globalidad ¹.

Ahora bien, esta alternativa no existe en los partidos de la izquierda europea. No es seguro que haya desaparecido del todo, pero las líneas revolucionarias en los países democráticos son cada vez más grupos marginales, con tan escasa relevancia política que no pueden considerarse como una auténtica alternativa. Hoy la extrema izquierda se ha refugiado en el terrorismo, que es la expresión de un revolucionarismo exasperado y desesperado, y, al menos hasta el presente, improductivo; o bien en su contrario, el pacifismo, igualmente improductivo políticamente hasta ahora. Y en el ecologismo —en parte contrarrevolucionario— de los verdes. Desaparecida, o reducida al mínimo, la contraposición entre reformadores y revolucionarios, el reformismo no puede definirse por oposición al contrario. Pero si no se puede definir por oposición al contrario, porque su contrario ha desaparecido, habrá que redefinirlo y comprenderlo, si se quiere, de otro modo. ¿Cuál? Esa es la primera pregunta que hay que plantearse en un discurso analítico, para evitar llegar a la conclusión de que, habiendo perdido valor uno de los dos términos de la antítesis, tiene que perderlo también el otro.

En cuanto a la caída de la tradicional alternativa en los regímenes democráticos consolidados —y yo quiero pensar que el nuestro pertenece a esa categoría— habrá que dedicarle algunas líneas, sobre todo para sustentar con datos reales la misma afirmación; y, en segundo lugar, para tratar de entender por qué se ha ampliado el arco de las ideas y de la práctica reformista y, por el contrario, cada vez más se ha ido restringiendo el campo de las ideas y de la praxis revolucionaria.

Por lo que se refiere a los datos reales se impone una primera constatación: la referencia al leninismo, que era obligatoria mientras el nombre oficial de la doctrina de los partidos comunistas fue «marxismo-leninismo», ha desaparecido de las declaraciones del partido comunista italiano y de los discursos de sus dirigentes. Por el contrario, en estos últimos años han aumentado las profesiones de fe democrática y, por consiguiente, reformista de esos mismos dirigentes. En una entrevista en *L'Espresso* del 16 de diciembre, Lama explica su propia adhesión pura y simplemente a una política socialdemócrata, afirmando entre otras cosas: «Si se quiere afirmar el propio papel de fuerza reformista —sí, reformista— hay que incluir en el propio programa los contenidos de la reforma y dar la batalla». En un debate en *MondOperaio* titulado (casualmente) «¿Qué reformismo?», publicado en el núm. 3 del año pasado, Napolitano afirma que «la vieja contraposición entre reformistas y revolucionarios actualmente ya no tiene sentido en la izquierda italiana, si miramos a los dos partidos históricos». Aun más recientemente, en una entrevista del *Corriere della Sera*, del 11 de febrero, afirma que el fin de trayecto del PCI es el gran reformismo europeo. Tengo en mis manos una conferencia mecanografiada de Gianfranco Pasquino, titulada «Dificultad y oportunidad: las nuevas tareas de un partido reformador» ². El partido reformador al que el autor se refiere es, naturalmente, el PCI. Reformador no significa reformista, de acuerdo. Pero no juguemos con las palabras, aunque las palabras en el lenguaje político no son piedras, sino muchas veces pompas de jabón.

Si, por encima de estas pruebas de hecho, se quiere tomar en consideración la razón por la cual hubo un tiempo en que el reformismo tenía en general una mala imagen entre la izquierda, y se le comparaba con el oportunismo, y ahora en

nuestros países tiene mala imagen el revolucionarismo, tachado de extremismo, de veleidad, irreal, catastrófica e inútil, es precisamente desde la naturaleza y las mismas condiciones de desarrollo de la democracia, y de las condiciones intrínsecas en una sociedad democrática, donde debemos partir. Naturalmente, antes hemos de ponernos de acuerdo sobre el significado que vamos a dar al término «democracia». Pero, a diferencia de lo que sucedía hace no muchos años, cuando la palabra «democracia» era un vaso vacío que cada uno llenaba como podía, creo que en el debate actual existe un cierto consenso —sea implícito o explícito— sobre aquella que yo he llamado la definición mínima de democracia: la democracia entendida como un conjunto de reglas de juego, una concepción procedimental de democracia (no una concepción sustancial) ³. No voy a decir que me deja del todo tranquilo este reconocimiento. Me dan qué pensar algunas polémicas recientes, como aquella candente, dentro del frente comunista, entre Tronti y Veca; aunque una polémica de este tipo habría sido impensable hace unos años. Me da qué pensar una salida como la de Asor Rosa en *Repubblica*, cuando habla de la «idiotez» del contractualismo. ¡Ay, ay! La idea del contrato social, es decir, la idea de que el derecho a mandar y a hacerse obedecer sólo es legítimo cuando está fundamentado en una delegación por parte de los destinatarios del mandato, es el *abc* de la democracia moderna. Si el contractualismo es una idiotez, la democracia es el régimen más idiota del mundo. (El considerar el contractualismo como una idiotez corre parejo con el famoso «cretinismo parlamentario», que tuvo funestas consecuencias también en el modo de pensar y de actuar de la izquierda.)

Debemos partir de la democracia porque, incluso en su más mínimo significado (mínimo, pero no por ello pobre), ésta no se puede aceptar sin una concepción muy precisa de la sociedad y de la historia, que es absolutamente incompatible con cualquier proyecto de transformación radical de la sociedad y con cualquier visión finalista y totalizadora del curso de la historia, proyecto y visiones que son propias del revolucionario. El pensamiento revolucionario está intrínsecamente ligado a la idea de una era de larga e imparable decadencia que no puede ser rescatada más que por un giro total en la dirección del curso de la historia. (Desde este punto de vista el revolucionario y el contrarrevolucionario tienen la misma concepción, y por eso muchas veces los extremos se tocan; con la diferencia de que para el contrarrevolucionario el cambio consiste en el gran retorno, mientras que para el revolucionario consiste en un salto hacia el futuro, desconocido pero seguro.) Por el contrario, la democracia moderna, que ha nacido del proceso de emancipación de la sociedad civil del Estado como sistema dominante, y que ha sido guiada siempre por aquella convicción de fondo según la cual —por utilizar la famosa expresión de Thomas Paine— la sociedad es buena y el Estado es malo, y por lo tanto hay que dejar libre a la sociedad y que se distienda, y el Estado tiene el papel limitado —aunque esencial— de regular su movimiento. Aceptar la democracia, pues, significa: a) el pluralismo de los grupos, considerando al Estado como uno más de los grupos, cuyo papel es el de mediar en los conflictos parciales, de constituirse en árbitro entre ellos, y quizá en una parte o contraparte en los acuerdos entre grupos; b) el conflicto entre individuos y grupos no sólo como inevitable, sino incluso como factor de progreso y, como tal, beneficioso; c) a través de la pluralidad de los grupos y de su permanente conflicto, la extensión de la demanda social a la que el gobierno debe dar respuesta bajo la forma de decisiones colectivas vinculantes. Admitir estas características de la sociedad democrática significa admitir que esta sociedad está en continua transformación, incluso con independencia —por encima o por debajo— del sistema político. La democracia es dinámica; el despotismo es estático. Esto es tan cierto que en 40 años de democracia real, a pesar de ser tan imperfecta, nuestro país ha conocido y sigue conociendo la más grande transformación de su historia. Una trans-

formación que, entre otras cosas, se ha producido durante la hegemonía de un partido que nunca escribió en su puerta el lema «reformismo», y sin un proceso revolucionario (entiendo aquí «revolución» como causa), sino a través del respeto más o menos constante, con algún patinazo, pero que no ha llegado a ser mortal hasta ahora, de las reglas fundamentales de la democracia liberal.

Una segunda razón de la disminución del atractivo de la revolución está en esta doble constatación: por una parte las grandes revoluciones (aquí tomo la revolución como efecto) que han transformado profundamente la sociedad moderna y que nos empujan, querámoslo o no, hacia una nueva fase de desarrollo histórico que ya ha recibido el nombre sugestivo —aunque totalmente vanal— de posmoderno, desde la revolución industrial a la tecnología actual, no ha habido revoluciones políticas en el sentido propio de la palabra; por otra parte, la gran revolución política de nuestro tiempo, la revolución rusa, sí que transformó profundamente un inmenso país y lo hizo convertirse en la otra gran potencia de la que depende, para bien y para mal, nuestro destino de pigmeos en tierra de gigantes, pero ha dado origen a un sistema político y social que nadie de este lado del telón de acero está dispuesto a aceptar como modelo (y creo que tampoco desde el otro lado); por no hablar de la revolución china, que está atravesando un período de revisión de los propios principios inspiradores (un auténtico Termidor), casi hasta el punto de demostrar que allí donde el paso de una sociedad de una fase a otra se ha dado a través de un proceso que por sí mismo es un proceso acelerado, se bloquea y no permite el normal funcionamiento de los mecanismos de desarrollo de la sociedad que sostiene al Estado. El ideal de la revolución permanente, que ha inspirado siempre a los grandes revolucionarios, ha sido desmentido por la historia de las revoluciones, bien en el sentido del cambio de la clase dirigente que se ha devorado a sí misma y ha perpetuado el propio dominio, o bien en el sentido de un proceso de cambio continuo (una revolución tras otra). La reforma permanente es un ideal razonable. La revolución permanente, no lo es. Mirándolo bien, la gran mayoría de aquellos que han sido llamados revolucionarios en nuestro tiempo han estado acompañados y condicionados por guerras de liberación nacional. Son, en otras palabras, revoluciones que se han resuelto en guerras de independencia, fenómeno bien distinto, tanto por su significado histórico como por sus efectos, de las revoluciones políticas. (La Resistencia en Italia, vista en su conjunto, fue al mismo tiempo una guerra de independencia nacional y un movimiento político de restauración del eje constitucional anterior, más que una revolución.)

Llegados a este punto, y una vez hecha la constatación de que la democracia entendida como un conjunto de reglas del juego que han de servir para resolver pacíficamente los conflictos excluye la ruptura revolucionaria, y que por lo tanto ha derrotado a uno de los enemigos tradicionales del reformismo sin necesidad de combatirlo, nos encontramos frente a otra pregunta: si una sociedad democrática en constante transformación, aunque sea gradual, por efecto de la libertad de la que gozan sus sujetos principales, los individuos y los grupos de interés, muchas veces a pesar del poder político, no pondrá en aprietos una política reformadora tal como ha sido entendida por el reformismo tradicional (sea el que propugna las reformas de Estado, o el que las plantea desde abajo). El reformismo socialista ha compartido con el movimiento revolucionario una cierta sobrevaloración del elemento político por encima del social, la convicción de que la acción política es el máximo factor del cambio social. ¿Estamos todavía seguros de que acción política y cambio social están estrechamente unidos el uno con el otro, y que el segundo depende exclusivamente del primero?

Una pregunta de este género, que a mí me parece oportuna, amplía nuestro debate hasta un campo hasta ahora poco explorado, y con respecto al tema del congreso, todavía más previo del que he recorrido hasta ahora. Se trata, en otras palabras, de saber si el reformismo es ya no solamente indefinible, desde el momento en que ha perdido valor su antítesis histórica, sino si es posible, al menos en el sentido en que siempre fue entendido en el seno de la izquierda, como reformismo político, como acción o conjunto de acciones que se prolongan en el tiempo dirigidas al cambio en base a los proyectos a largo o medio plazo (es decir, en base a un programa máximo o a un programa mínimo). Me parece difícil negar que en Italia todos los proyectos a largo, medio y corto plazo han fallado miserablemente. ¿Cuántos son los proyectos elaborados por la izquierda histórica, comunistas y socialistas, que se han quedado en letra muerta después de haber sido objeto de tratamiento intelectual en congresos, seminarios, mesas redondas, debates en revistas y periódicos, etc.? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. No puedo olvidar que en el seno del partido socialista mismo, no hace muchos años, se había constituido una asociación para el proyecto socialista, a la cual pertencí (y de la que incluso durante un tiempo fui indignamente nombrado presidente), y esta asociación murió de inanición o de consunción sin que nadie le diese el tiro de gracia. El intelectual propone y el político dispone; y dispone no porque desprecie el trabajo del intelectual, sino muchas veces porque no sabe qué hacer, consciente como es de que su papel es fundamentalmente el de tapar agujeros para evitar ir a pique, más que el de pilotar la nave hacia metas maravillosas. Creo que el buen político ya ha aprendido que la nave que él dirige en una sociedad democrática, con todas las servidumbres que las reglas democráticas le imponen, es un barquito de pequeño cabotaje que si se aventurase en alta mar correría el peligro de ser destrozado por la primera tormenta.

Con esto no quiero decir que no sea posible una política reformadora. Digo que no se la puede dar por descontado. Lo cual, entre otras cosas, aumenta el interés y la responsabilidad de quien se considera reformista y se plantea correctamente el problema: ¿qué reformismo? Tampoco quiero decir que en Italia no se hayan hecho reformas mediante la acción política; desde la reforma de la escuela única hasta la reforma del derecho de familia, desde la institución del divorcio hasta la despenalización del aborto. Pero todas ellas son reformas que fueron propuestas y puestas en práctica a retazos, de vez en cuando, sin un plan general, sin que podamos decir que hayan sido el producto de un partido del reformismo. Paradójicamente ha habido reformas sin reformismo; quiero decir, sin un proyecto reformador. Y si ha habido proyectos reformadores, éstos no han producido reformas.

Reflexionando sobre la historia de nuestro tiempo en general, sin limitarnos a las notas al margen o a pie de página, en torno a los acontecimientos que aparecen ante nuestros ojos de cronistas (que es lo que nos vemos obligados a ser, frente al asalto cotidiano de los empresarios de los medios de comunicación de masas y de sus agentes), tenemos que observar que hay al menos dos causas del cambio social que no dependen directamente del poder político. Son, ante todo, el cambio en las costumbres producido por el empuje del cambio de ideas, de las condiciones económicas, de las reglas del comportamiento social y moral. Y, en segundo lugar, el progreso técnico. Se trata de dos cambios que indudablemente están conectados entre sí, aunque no está muy clara su interdependencia. En cuanto al cambio de las costumbres, basta pensar en las profundas transformaciones surgidas en los países económicamente desarrollados, y en las clases que han sacado la mayor ventaja de este desarrollo, en las relaciones entre uno y otro sexo. Más de

una vez he dicho que la única revolución de nuestro tiempo (revolución como efecto), al menos en los países económicamente más desarrollados, ha sido la revolución feminista. Pero ha sido una revolución que vino desde el exterior de la esfera de influencia del poder político, el cual se ha limitado, en la hipótesis más favorable, a ratificar y legalizar una serie de cambios ocurridos en las relaciones familiares, como consecuencia del cambio de las normas éticas y, por supuesto, de las condiciones de trabajo, que a su vez son el resultado de otros cambios ocurridos en la esfera de las técnicas de producción. No es necesario subrayar, por su evidencia, la enorme influencia que han tenido el descubrimiento y la difusión de los anticonceptivos sobre las relaciones sexuales.

El cambio más impresionante frente al que nos encontramos hoy es sin duda el producido por el progreso técnico; es decir, la aparición de máquinas cada vez más perfectas que sustituyen el trabajo humano. Antiguamente para justificar la esclavitud, o incluso la reducción del hombre a la categoría de instrumento, de máquina, se recurría al capcioso argumento de que existen hombres que son esclavos por naturaleza. En el fondo, lo que ellos tendrían que explicar es por qué un trabajo brutal, como el de una máquina, había de ser hecho por un hombre (que según la clásica definición aristotélica es un animal racional, y como tal, distinto de todos los demás animales). Ahora el trabajo de los hombres-máquina es cada día más asumible por las auténticas máquinas. Después de la reducción del hombre a la situación de máquina, el progreso técnico de estos últimos años nos hace asistir al proceso inverso de la elevación de la máquina a la categoría de hombre. Todo esto sucede independientemente —al margen, repito— del poder político. Fueron Saint-Simon y los saint-simonianos los primeros en afirmar que la auténtica transformación de la sociedad ocurrida a finales del siglo XVIII fue no ya el producto de una revolución política, como lo fue la revolución francesa, sino el producto de la revolución industrial, cuyos creadores habían sido los científicos y no los políticos. La gran transformación que está cambiando nuestra sociedad actual, y que prepara la llamada sociedad posindustrial, no es el efecto de reformas políticas, sino de descubrimientos científicos y de increíbles aplicaciones técnicas. A finales del siglo pasado el mismo Marx creía que la humanidad había entrado en la era de las grandes revoluciones sociales y políticas, y que tras la revolución burguesa, una nueva revolución haría pasar a la humanidad del reino de la necesidad al reino de la libertad.

Observando después lo que ha cambiado desde el último siglo pasado hasta hoy, hay que observar también que desde finales del XVIII hasta el estallido de la primera guerra mundial la filosofía de la historia estaba orientada por la idea de que la humanidad era perfectible, y que este proceso hacia la perfección, o mejor, hacia el perfeccionamiento, era algo imparable e irreversible. En otras palabras, estaba dominada por una concepción progresiva de la historia, por la idea de que la humanidad estaba «en constante progreso hacia lo mejor» —usando palabras de Kant— (subrayando lo de constante). El mito del progreso ha caído: me remito al reciente libro de Gennaro Sasso, *El tramonto de un mito*, que lo documenta empezando por Nietzsche y Spengler. Hoy ya no existe una filosofía de la historia, si por filosofía de la historia entendemos una respuesta positiva a la pregunta de si la historia tiene un sentido y cuál puede ser éste. Para que se pueda dar un sentido a la historia hay que aceptar que la historia tenga una meta preestablecida y que ésta sea, en caso de que la tenga, alcanzable. Ha caído —quizá definitivamente— toda concepción teológica de la historia. La historia va hacia... ¿hacia dónde? ¿Hacia la paz universal, o hacia la guerra omnidestructiva? ¿Hacia la secularización integral o hacia el renacimiento del espíritu religio-

so? (¿Dios ha muerto, o quizá está más vivo que nunca?) ¿La libertad de todos o la esclavitud universal bajo nuevas formas desconocidas de despotismo, como lo imaginaba Orwell?

En fin, ¿está la historia en constante progreso hacia lo mejor? ¿Y si, por el contrario, fuese en constante retroceso hacia lo peor? Es indudable que el reformismo del siglo pasado estaba íntimamente ligado a una concepción progresiva de la historia. Una visión como la que tiene el hombre de hoy, más problemática, menos segura de sí mismo, no digo que lo desvalore, pero sí que lo hace menos atrevido. Sin contar que la idea del progreso siempre ha ido unida a un concepto eurocéntrico de la historia; la crisis de la idea del progreso marcha al mismo paso que la crisis del eurocentrismo. En la idea del progreso el reformismo ha tenido uno de sus aliados. Caído el mito, la ilusión del progreso, por usar la expresión de Sorel (aunque Sorel era un revolucionario, o al menos creía serlo), también el reformismo se encuentra frente a una tarea más difícil y además de resultados inciertos. El progresismo y el reformismo tenían en común la idea de lo positivo del cambio; el cambio como tal no es ni bueno ni malo, pero si la historia camina siempre hacia lo mejor, entonces el cambio siempre es de signo positivo. La idea de que el cambio fuese algo bueno y la inmovilidad algo malo entró con fuerza en la visión de la historia de la edad moderna. En la antigüedad consideraban por lo general que el cambio era malo; tenían una visión regresiva de la historia. Cuando Licurgo dio sus leyes a Esparta se fue de su ciudad, y recomendó a sus ciudadanos que no cambiasen nada hasta que él volviese, y no volvió nunca.

Basándose en este concepto positivo del cambio se hizo siempre la distinción entre el partido de los progresistas y el partido de los conservadores. Los conservadores son los que juzgan negativo el cambio, o al menos aceptan el cambio sólo si éste se justifica con buenos argumentos. Pero, hoy en día, ¿quiénes son los mayores partidarios del cambio? ¿No son precisamente los conservadores, que consideran la presente situación de la relación entre economía y política en la mayor parte de los países democráticos, en los que ha aparecido una progresiva extensión de las tareas del Estado, como un mal a corregir, y proponen un retorno a la situación anterior a la formación del Estado social? Me parece indudable que hoy los mayores cambios son los pedidos, y en gran parte ya realizados en algunos países, por los neoliberales que demandan el desmantelamiento del Estado de los servicios. Son éstos los que, pidiendo un cambio de rumbo, se presentan como auténticos promotores del cambio. Frente a este cambio de rumbo, ¿no corren el riesgo de aparecer como enemigos del cambio los que en otro tiempo eran precisamente reformadores?

Perdonadme si insisto en este punto. Pero es que es exactamente aquí donde asoma con mayor evidencia la crisis de la izquierda. Y se comprende: la izquierda siempre ha sido o revolucionaria o reformista. Después de haber renunciado a la revolución se refugió en el reformismo. Ahora empieza a sospechar que si por reformismo se entiende el partido del cambio, entonces los reformistas son los otros. Es inútil negarlo: estamos asistiendo a un auténtico giro de la política a la que la izquierda en todas sus formas había sido siempre fiel, y que siempre tuvo como resultado un crecimiento de la esfera pública frente a la esfera privada. ¿Es que se puede negar que el proceso de democratización conducido por la izquierda siempre caminó a la par, más o menos intencionadamente, con una ampliación de las competencias del Estado? Hoy la consigna de los conservadores puede resumirse en estas dos pequeñas palabras: menos Estado. ¿Se puede negar que la política de la izquierda haya tenido como efecto, siempre y en todas partes, «más Estado»?

Con esto no quiero decir que no haya espacio para un reformismo de izquierdas. Quiero decir solamente que el criterio para distinguir a los reformadores de los conservadores ya no puede ser aquel tan simplista —o que al menos hoy nos parecería simplista— de los partidos socialistas del siglo pasado, que se definían como partidos del cambio y del progreso. Vuelvo a repetir: progreso, ¿en qué sentido? ¿En qué dirección? ¿En nombre de qué?

Soy consciente de que en esta reflexión preliminar que yo he concebido únicamente como un análisis conceptual, más que como una propuesta, tenemos que dar todavía un paso adelante. Hay reformas y reformas. Y por lo tanto, hay reformismos y reformismos. Donde todos son reformistas, nadie es reformista. Y entonces el problema se traslada a la pregunta verdaderamente crucial: ¿qué reformas? ¿Estamos muy seguros de saber las reformas que queremos y las que no queremos? ¿Las que distinguen a un partido socialista y las que no lo distinguen, sino que lo contradicen? La respuesta a estas preguntas es bastante más difícil porque me parece que no se ha reflexionado suficientemente sobre el concepto mismo de reforma. ¿Estamos seguros de saber qué se entiende exactamente por reforma? Cuando hablamos de reforma, ¿estamos seguros de hacerlo todos en el mismo sentido? ¿Estamos seguros de poseer un criterio concreto para poder definir como reformador un proyecto y para distinguirlo de otro no reformador? Y puesto que hay reformas y reformas, ¿estamos bien seguros de poseer un criterio orientativo para distinguir una reforma de izquierdas de una reforma de derechas?

Más que una respuesta a esta pregunta, que no estoy seguro de poder dar (¿quién podría estarlo?), yo propongo un estudio. Examinemos durante un período de tiempo —por ejemplo, los últimos 30 años desde el comienzo del centro-izquierda, que inauguró en nuestro país este período de las reformas, al que contribuyó también el partido socialista— qué leyes se han hecho (y se han cumplido) que de común acuerdo podamos considerar como leyes de reforma. Se trata de un estudio con los pies en la tierra, totalmente empírico, para empezar. Pero hay que empezar con datos reales que todos podamos tener ante la vista y sobre los que podamos apoyar un razonamiento que no se quede por los aires. Pongo algunos ejemplos: la institución de la enseñanza media única y la extensión a ocho años de la enseñanza obligatoria (dentro de poco se aumentarán todavía otros dos); el estatuto de los trabajadores; la reforma del derecho de familia; la introducción del divorcio y el reconocimiento de la legalidad del aborto bajo ciertas condiciones; el cierre de los manicomios; la liberalización del acceso a la universidad; las elecciones escolares; el fin del monopolio estatal de la radio y la televisión. Naturalmente esta lista se puede alargar o corregir en el grupo de estudio. Se me podrá objetar que una lista de este tipo presupone ya un criterio de distinción, y por lo tanto una idea de lo que se deba entender por reforma. Yo contestaría que un concepto de reforma no se puede dar «a priori», y para no caer en un círculo vicioso o en un proceso al infinito hay que partir del sentido común, y sólo en un segundo momento la idea del sentido común podrá ser convenientemente modificada en base a los resultados de la investigación.

Una vez completada la lista, con todas las precauciones del caso, habrá que plantearse una primera pregunta: todas estas actuaciones, ¿tienen un común denominador?, y si lo tienen, ¿cuál es? Es evidente que únicamente desde la respuesta a esta cuestión podremos llegar a contestar a la pregunta de en qué consiste una reforma, si queremos seguir hablando de reformismo. ¿Qué os parece? ¿Somos reformistas y no sabemos ponernos de acuerdo sobre el significado de re-

forma? Bien, yo creo que en una primera observación todas las actuaciones que he citado más arriba tienen una característica común: son actuaciones que ensanchan los espacios de libertad de los individuos y de los grupos, y que en la medida en que ensanchan estos espacios restringen o limitan el espacio político. Son reformas democráticas, entendiendo por democracia lo opuesto a autocracia, como aquella forma de gobierno o régimen que realiza su propia naturaleza en tanto en cuanto amplía la libertad de los gobernados y restringe el poder de los gobernantes, frente a un régimen autocrático que se caracteriza por la tendencia opuesta. Pero una reforma liberal, una reforma democrática, ¿es también necesariamente una reforma socialista? Los ejemplos que he puesto son todos de reformas propuestas o apoyadas por el partido socialista, por eso es pertinente la pregunta.

Veamos, la respuesta a esta pregunta depende de otra cuestión preliminar: ¿libertad de quién? Cuando se plantea un problema de libertad hay que plantearse previamente dos preguntas: quién es libre y de qué es libre. En ningún lugar existe la libertad de todos y para todo. Cualquier libertad es siempre relativa; si aumenta la libertad de uno, sea un grupo, un individuo, una categoría o una clase, disminuye la libertad de otro, sea grupo, individuo, categoría o clase. La liberación de los esclavos ha hecho disminuir la libertad de los amos de los esclavos. Pongamos un ejemplo límite: la libertad de la tortura ha disminuido la libertad de los torturadores. Pero el ideal socialista ¿no ha sido siempre el de la libertad, el de la igualdad? Pues bien: el principio de igualdad es aquel que sirve para distinguir la libertad liberal de la libertad socialista, del socialismo liberal, entendámonos, que es el que nos interesa (porque existe también un socialismo solamente igualitario, pero no liberal). ¿En qué sentido? Yo considero libertad socialista por excelencia aquella que liberando iguala, e iguala en cuanto elimina una discriminación; una libertad que no sólo es compatible con la igualdad, sino que es la condición de aquélla. Volvamos a tomar nuestros ejemplos: los locos que se liberaron de las instituciones de internamiento no sólo quedaron libres, sino que al mismo tiempo quedaron más iguales a los demás de lo que ya eran antes; una reforma del derecho de familia que elimina la potestad marital hace más libre a la mujer, y liberándola la hace igual al marido; la liberalización de los accesos a la universidad para los jóvenes que habían superado la segunda enseñanza ha eliminado una limitación (los ha liberado) y una discriminación (los ha igualado). (Permitidme aún otro pequeñísimo ejemplo, muy significativo, que hace poco me sugirió un amigo: el letrero que se pone en ciertas escaleras para permitir el paso a los minusválidos con sus carritos, ¿qué es sino un medio para liberarlos de una barrera y a la vez para hacerlos iguales, o quizá sólo un poco menos distintos de las personas normales?)

Este intento de escoger las reformas que son al mismo tiempo liberadoras e igualatorias deriva de la constatación de que hay reformas liberadoras que no son igualatorias, como lo sería cualquier reforma de tipo neoliberal, que da paso libre a los empresarios para desembarazarse de los vínculos que proceden de la existencia de sindicatos y comités de empresa, pero al mismo tiempo está destinada a aumentar la distancia entre ricos y pobres; y por otra parte existen reformas igualadoras que no son liberadoras, como por ejemplo toda reforma que introduce una obligación escolar y somete a todos los niños a ir a la escuela, poniendo a todos, ricos y pobres, en el mismo plano, pero a través de una disminución de libertad.

Reclamo vuestra atención sobre el tema de la igualdad porque a pesar de todo aquello que hoy se dice sobre el exceso de igualitarismo en la sociedad de masas,

y por poner un ejemplo concreto, que nos atañe a todos, en la nivelación de salarios conseguida por los sindicatos en los últimos años, nuestro país es todavía un país profundamente desigualitario. No excluyo que ciertas formas exasperadas de igualitarismo de salarios haya que corregirlas, porque una cosa es el ideal de la igualdad y otra cosa es el igualitarismo. Pero es indudable que una de las grandes batallas de la acción social en todos los tiempos y en todas las sociedades es la conciencia del tratamiento desigual, de la discriminación, en una palabra (porque no sabría cómo llamarla) de la injusticia. Como también es indudable que en un país como el nuestro el camino hacia una mayor igualdad es todavía largo, empezando por la más obvia y elemental de las igualdades, la igualdad frente a la ley⁴, para pasar por la igualdad fiscal y terminar en la igualdad de oportunidades.

Todo lo que he dicho hasta aquí me lleva ineludiblemente a la conclusión de que el problema frente al que nos encontramos es dar una respuesta ya no tanto a la pregunta «¿qué reformismo?», sino a la pregunta en la que se juega realmente la identidad y el destino de la izquierda: «¿qué socialismo?». Estoy convencido, y no es cosa de hoy, que lo que está en cuestión en estos últimos años después de la degeneración del Estado nacido de la primera revolución de la historia conducida en nombre del socialismo, y tras el ataque a las políticas socialdemócratas por parte de las corrientes neoliberales, no sea tanto el reformismo (ya dije que nunca ha habido tantos reformistas como hay ahora) cuanto el socialismo. Y está en cuestión porque —permitidme terminar con esta perorata, abandonando por un momento el estilo analítico seguido hasta ahora— zarandeados por el viento impetuoso de la crisis de las ideologías hemos perdido la brújula. No, la estrella polar del socialismo sigue existiendo; existe hoy más que nunca, sobre todo si se miran no sólo ya los problemas internos de los países desarrollados, sino también las relaciones entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, o los totalmente subdesarrollados, entre el Norte y el Sur del planeta: esta estrella polar se llama justicia social. Eso quiere decir que un criterio, aunque sea muy general, que hay que determinar de vez en cuando, para distinguir el reformismo socialista de otras formas de reformismo, existe, aunque hoy se habla mucho, y ha hablado también Claudio Martelli, de equidad más que de justicia o de igualdad.

Existe al menos un criterio mientras haya —y no podemos negar que los hay—, en Italia y en el mundo, opresores y oprimidos, prepotentes e impotentes, los demasiado fuertes y los demasiado débiles, los que tienen y los que no tienen, los distintos y los «más iguales» a los demás, los discriminadores y los discriminados, los causantes del hambre y los hambrientos, los armados hasta los dientes y los inermes, los causantes de terror (que no son sólo los terroristas) y los aterrozados.

Un partido socialista para sobrevivir y para mirar al futuro con confianza, necesita grandes ideales. Pero no hay que inventar nada nuevo. Solamente hace falta seguir siendo fiel a la propia historia.

POST SCRIPTUM: En la conferencia de clausura del congreso, Martelli ha respondido ampliamente a mi petición de clarificación. Cito del *Avanti!* del 3-4 de marzo. Después de haber puesto ejemplos de medidas igualitarias que han producido efectos desigualitarios, termina hablando de las «paradojas del igualitarismo». Entonces explica que «la equidad no es una suavización de la igualdad. Es un concepto distinto. El concepto de equidad está mucho más cercano al concepto de justicia, a la idea de una balanza, de un esfuerzo de equilibrio que, por

lo tanto, tiene en cuenta las condiciones concretas, las diferencias individuales de mérito, la diversidad, la compleja anatomía social en la que hoy vivimos. El concepto de equidad está mucho más cercano al concepto de justicia social que al concepto de igualdad. La equidad supone una balanza. La igualdad recuerda la idea de una nivelación, una especie de nivelación de méritos y de necesidades. Ahora bien, esta nivelación ya no es útil ni es justa». Continuando más adelante la crítica al igualitarismo, dice: «La igualdad, no como valor —absoluto en sí mismo— sino en su versión conocida en términos de estatalismo, asistencialismo, igualitarismo, se ha convertido en una fuente de iniquidad que castiga ante todo a la pobre gente que realmente está peor. De acuerdo pues con la estrella polar de la justicia social, pero atención a su traducción regresiva en términos igualitaristas que hoy serían muy mal vistos especialmente por sus hipotéticos beneficiarios y destinatarios sociales».

He reproducido párrafos textuales del discurso de Martelli para demostrar que nuestra discrepancia es sólo aparente, porque el blanco de Martelli es el igualitarismo, es decir, el ideal de la igualdad absoluta, y no la justicia social (o equidad) de la que *solamente yo* he hablado, poniendo ejemplos de medidas que han introducido una igualdad relativa entre desiguales, y no una igualdad absoluta. He tenido oportunidad de volver más veces sobre este tema. Permitidme citarme: «Eguaglianza ed equalitarismo», en *Rivista internazionale di filosofia del diritto*, LIII, 1976, págs. 321-330; la voz «Eguaglianza», en la *Enciclopedia del Novecento*, vol. II, 1977, págs. 355-364; «Quale eguaglianza?», en *1999. Italia*, revista trimestral del Club dei Club, I, núm. 2, 1983, págs. 9-12. En todos estos escritos he insistido en el hecho de que el término «igualdad» considerado en sí mismo no significa nada si no se especifica en cada caso igualdad entre quiénes y respecto a qué. Por poner un ejemplo, la extensión del sufragio universal a las mujeres no significa igualar a las mujeres mayores de edad con los hombres (entre quiénes) en el derecho al voto (respecto a qué). Teniendo en cuenta estos dos criterios, se podrá definir el igualitarismo como el ideal de la igualdad absoluta, como la doctrina que se propone establecer la igualdad de todos y en todo (ideal claramente vano), que en la gran mayoría de los movimientos socialistas (y mucho menos Marx), ni yo tampoco, hemos sostenido nunca. Por regla o norma igualitaria, de la que posiblemente ha nacido el equívoco, se entiende generalmente una norma o regla que eliminando una discriminación introduce una relación de igualdad allí donde antes había una relación de desigualdad. Pero introducir una igualdad allí donde había antes una desigualdad no significa perseguir de hecho el ideal abstracto del igualitarismo, sino únicamente hacer una obra de justicia (o de equidad), si en aquel determinado momento histórico y en aquella sociedad concreta aquella determinada desigualdad se entendía como odiosa, y se percibía odiosa porque el criterio que consentía la desigualdad (por ejemplo, el hecho de ser mujer frente al derecho al voto) ha pasado de relevante a irrelevante. (Para un análisis de lo que se entiende por norma igualitaria, me remito a F. E. Oppenheim, *Concetti politici*, «Il Mulino», Bolonia 1985, págs. 127-161).

© Mondoperaio
Traducción: Sol Gavira

¹ Me permito remitir a mi escrito «Riforme e rivoluzione», en *Il Mondo Contemporaneo*. Vol. IX, *Politica e società*, tomo II. La Nova Italia. Florencia, 1979, págs. 744-759.

² Del mismo Pasquino he tenido también presente «Varianti del riformismo», publicado en *Materiali di ricerca dell'Istituto Cattaneo*. Núm. 7. Bolonia, 1984.

³ Me refiero concretamente al librito *Il futuro della democrazia*, Einaudi. Turín, 1984, páginas 4-7.

⁴ Sobre este tema, generalmente poco discutido, porque se da por resuelto, llama la atención la obra de A. A. Cappelletto, «Per essere tutti davvero eguali», en *Avanti*, 26 de febrero de 1985. Suplemento págs. I-IV.

SOBRE EL PACIFISMO

Agnes Heller y Ferenc Feher

POCAS cuestiones tan polémicas en Europa occidental como los movimientos pacifistas y antinucleares. Heller y Feher han adoptado frente a ellos una postura difícil y atrevida: identificándose con sus fines últimos y respaldando su contenido radical —la idea de que las cuestiones de defensa y de sobrevivencia no pueden quedar exclusivamente en manos de los expertos—, los autores toman, sin embargo, una posición crítica respecto al significado político inmediato de dichos movimientos, en el que ven una disociación entre la defensa de la vida y la defensa de la libertad. Sin una apuesta por la emancipación, por el ideal de una sociedad libre, el viejo sueño ilustrado de la **buena vida** se vería sacrificado a la defensa cuasi zoológica de la **mera vida**: la inseguridad emocional de un Occidente en crisis podría llevar a los pacifistas a olvidar los problemas políticos de la construcción de una sociedad libre y segura.

SOBRE EL PACIFISMO
Agnes Heller y Ferenc Feher
Editorial Pablo Iglesias
184 págs.; 900 ptas.

PEDIDOS:
EDITORIAL PABLO IGLESIAS
Monte Esquinza, 30 - 28010-Madrid
Tels.: 410 46 96 y 410 47 98

EL REFORMISMO COMO GRAMATICA DE LA IZQUIERDA

Massimo L. Salvadori

análisis y debate



3

Benedetto Croce explicó un día en qué sentido y por qué los hombres de bien tendrían todos que llamarse cristianos. Hoy estamos aquí para decir cómo y por qué se debe ser reformista. ¿Acaso la cultura del reformismo no se ha convertido en la cultura política dominante de la izquierda en Italia y en Europa? Lo que ocurre es que el verdadero problema de los cristianos consiste en cómo serlo, y la cuestión que se plantea a la izquierda europea es, precisamente, cómo ser reformista en la sociedad de hoy.

Fijémonos en la esencia de la cuestión. A primera vista, la cultura política del reformismo ha conseguido una estrepitosa victoria. Si se considera que los pilares del reformismo socialista eran esencialmente dos, la idea de llevar gradualmente adelante el proceso de transformación social, y la idea de la democracia como medio de la misma transformación; y si consideramos también que las ideas fundamentales del anti-reformismo eran de un lado la necesidad del «salto cualitati-

vo», y por tanto de la insuficiencia orgánica del gradualismo, y de otro la idea de la dictadura como instrumento indispensable para realizar ese salto cualitativo, podemos y debemos concluir que, con la aparición del eurocomunismo (cualesquiera que sean y hayan sido sus límites), y con el agotamiento de los movimientos extremistas con raíces en el 68, en la izquierda de la Europa occidental el reformismo ha obtenido una victoria completa o casi completa. El término «reformismo» sigue sin gustarle mucho a los comunistas; ellos prefieren hablar de «proceso reformador», pero cambiando las palabras no se cambia el contenido.

Mirándolo bien, es difícil no ver una paradoja. Y la paradoja es la siguiente: en el momento en que la cultura del reformismo aparece dominante y en que las perspectivas del cambio revolucionario de raíz marxista-leninista están en fase de casi total desaparición —sea por la consabida puesta en discusión de aquel patrimonio político de parte de las fuerzas que habían sido sus portavoces, sea por incapacidad de seguir dándoles algún significado activo—, el reformismo corre el riesgo de agotarse también. Yo diría que se ha convertido en una gramática, por llamarlo de alguna manera, indispensable y necesaria, pero que no consigue convertirse en sintaxis, es decir, en una fuerza generadora de ideas y de prácticas que incidan adecuadamente sobre la realidad. En resumen, aparece como un presupuesto tan necesario como insuficiente. De manera que el gran peligro que corre la cultura del reformismo socialista es reducirse a un residuo histórico, por una parte, y por otra a una contra-cultura ideológica; quedarse en la contra-cultura de la cultura de la revolución y de la cultura de la conservación.

En suma, podemos decir que la cultura del reformismo, una vez conseguido su mayor triunfo en el momento en que logró imponer a la casi totalidad de la izquierda europea el reformismo como método, muestra hoy toda su debilidad por el hecho de que en la presente situación ya no consigue generar una praxis reformadora —como se la suele llamar— a la altura de los tiempos. Y está claro que una cultura del reformismo que no consiga traducirse en práctica eficaz corre el riesgo de convertirse ella misma en una «ideología», en el sentido marxista de «falsa conciencia».

Tengo la impresión de que la cultura del reformismo socialista que podríamos llamar «histórica» en el fondo se está «manejando» (permítaseme esta palabra tan horrible pero significativa) de una forma no muy distinta a la cultura de la revolución. Naturalmente no es preciso recalcar que la idea de reforma no es un producto del socialismo, puesto que históricamente nació independiente de éste. Pero desde luego yo me limitaré a hablar del reformismo socialista.

Ahora bien, el nexo entre reformismo y socialismo nunca ha estado muy claro y nunca ha sido resuelto. Se resolvió más en el plano de las síntesis ideológicas que en la historia concreta. La fórmula ideológica fundamental con la que los socialistas de diversas corrientes han resuelto la cuestión durante todo un período histórico, hasta el momento, ha sido ésta: las reformas democráticas y las reformas sociales nos acercan a la consecución del fin socialista. El mismo Bernstein, que llegó a utilizar polémicamente la fórmula según la cual el movimiento lo era todo y el fin no era nada, en realidad tenía una concepción muy particular de los contenidos y de los fines del socialismo. Y lo mismo le ocurría a Filippo Turati, por citar a alguien bien conocido entre nosotros.

La ruptura histórica entre reformistas (o reformadores) y anti-reformistas en el movimiento obrero socialista no se produjo tanto por los fines

del socialismo, sino por el modo de llegar a conseguirlos. En la fase que va desde el *Bernsteindebatte* hasta la Guerra Mundial y la revolución de Octubre, los reformistas mantenían la idea de que, a través de las reformas que debían obtenerse en el marco de la democracia, se podía preparar e incluso lograr el socialismo. En una segunda fase, la siguiente a Octubre, los reformistas sustituyeron el concepto de gradualismo por una idea según la cual el proyecto de la dictadura del proletariado —e insistían en ello con toda su fuerza— debía abonarse, conservándolo únicamente como una simple metáfora que sirviese para aludir a aquel período de aceleración de las reformas. Estando ahora los socialistas al frente del poder, ya realizan el paso a la sociedad socialista con los instrumentos y en el marco de la legalidad y de la democracia. Pero lo que me interesa subrayar es que los reformistas fueron así los «anti» del comunismo, pero no los «anti» en la superación del capitalismo —al menos en el terreno ideológico.

No podemos dejar de ver hoy en día en qué consiste la jugada. Si en Occidente el comunismo de la Tercera Internacional fracasó en su proyecto revolucionario, el socialismo reformista también ha tenido un fallo sustancial. Porque en la medida en que las reformas promovidas por los socialistas reformistas han demostrado ser eficaces, éstas han sido un componente válido de la reforma democrática del capitalismo, y no de la actuación del socialismo, tanto si éste lo hubiese entendido como socialismo democrático cooperativista (o socialismo estatalista), o como socialismo autogestionario.

Actualmente la situación es la siguiente en líneas generales: si se considera como nota central del socialismo la abolición de las relaciones de propiedad privada y del modo de producción capitalista, el socialismo se ha conseguido allí donde ha actuado contra el reformismo y contra la democracia. En cambio, allí donde el reformismo se ha opuesto a un socialismo logrado sin la democracia y contra el gradualismo, se ha conseguido la democracia y se han hecho importantes reformas sociales, pero no el socialismo. En definitiva: unir a la vez reformas, democracia y socialismo no ha sido posible históricamente. El socialismo no ha ido de acuerdo con la democracia, ni el reformismo con el fin socialista.

Y hasta ahora todos los intentos de conciliar los dos términos —que han sido muchos, tomando por ejemplo el «reformismo revolucionario»— se han quedado en simples fórmulas de agitación ideológica. Frente a esto hay dos caminos opuestos; por una parte, el decir: hay que mantenerse en la postura de conciliar el reformismo, la democracia y la consecución del fin socialista. Esta es la postura de aquellos que hoy teorizan sobre la «tercera vía». Por otra parte tenemos el camino que lleva a proponerse fines globales, proyectos de sistema, cuyos contenidos concretos no se llegan nunca a definir.

El primer camino, aunque en apariencia se presente en términos de afirmación de un fin «positivo», en realidad es un camino negativo: llega a descubrir lo que no quiere (el socialismo real de tipo soviético, falto de democracia, la socialdemocracia que no cambia el sistema capitalista), pero no llega a identificar el contenido de lo que dice querer. El segundo camino, para lograr fines posibles ha de renunciar a proyectos de sistemas globales, contruidos con los materiales de la ideología imaginada. Me parece cada vez más evidente que todos los proyectos de socialismo codificados en un sistema, aunque puedan constituir materia de ciencias sociales, son los hijos de la última generación de las ciudades utópicas de Moro, Bacon o Campanella. Válidos como crítica ética e ideológica de todo lo existente, como negación, pero absolutamente inadecuados para afrontar sociedades complejas que, en cuanto tales, no pueden ser interpretadas ni reducidas a esquemas apriorísticos de ingeniería social.

¿Hemos de concluir, por tanto, que la cultura del reformismo y el socialismo son términos irreconciliables? Yo respondería que si el socialismo se entiende como un proyecto «global», y por lo tanto utópico, como quiera que se conciba, yo diría que sí. En realidad el reformismo, en cuanto praxis, no puede menos de ser antiutópico. Lo cual no significa que se haya venido abajo de repente la relación entre reformismo y socialismo. Al contrario, considero necesario que entre los dos términos se establezca una estrecha relación y que sobre esta relación pueda diferenciarse el reformismo socialista de otros tipos de reformismo.

Pero si el socialismo como proyecto es un modelo global e inservible (aunque sólo sea porque hoy nadie tiene un proyecto creíble en este sentido), ¿en qué sentido la relación entre socialismo y reformismo puede mantener un significado sustancial?

La respuesta la encuentro fundamentalmente en la historia. Y me refiero a la historia europea. Ha sido sobre todo históricamente, a través de la presencia y la acción del socialismo en sus varios componentes, como la cultura política democrática y reformista europea ha conquistado una frontera política y ética que podríamos llamar de los «derechos sociales». Estos derechos sociales se han acercado así a la realidad del capitalismo europeo y a los «derechos de propiedad», hasta el punto de originar aquel sistema de derechos mixtos que constituyen el «Estado de bienestar», el Estado social democrático.

Ahora bien, creo que la acción reformadora desarrollada en torno a la idea y a la realidad del Estado del bienestar ha tenido una gran importancia en cuanto que ha contribuido de forma determinante a desviar la atención de los partidos socialistas, e incluso de los partidos comunistas —más o menos involuntariamente para estos últimos—, del nivel de los proyectos utópico-abstractos al de la cultura concretamente reformista.

Dicho esto, el panorama aparece cada vez más oscuro. Por una parte no existen de hecho (nos guste o no) modelos creíbles de socialismo tanto de corte radical como de corte moderado. El único socialismo «real» existente solamente le gusta a quien lo domina; y por parte de la gran mayoría de la izquierda europea se acepta como una realidad pero se niega como socialismo aceptable. Por otra parte, estamos al mismo tiempo en plena crisis de eficacia reformista en Europa, en plena crisis de las estructuras del Estado de bienestar, y en plena ofensiva neoconservadora o «neoliberal». El viento del Oeste reaganiano puede más que el viento del progresismo reformista.

En realidad ahí está la llaga donde hay que meter el dedo. ¿Cuáles pueden ser los contenidos de una cultura del reformismo «hic et nunc», es decir, en la Europa de hoy en general, y en concreto en la Italia de hoy?

Creo que la eficacia de una cultura del reformismo en Europa tendrá que hacer una autocrítica en cuanto a su capacidad de responder a un interrogante fundamental: ¿el socialismo europeo está preparado para aceptar el reto que le plantea el neoconservadurismo? Es decir: ¿está preparado para dar un giro copernicano (hoy se habla de ello a todos los niveles, o sea que también lo diremos nosotros) que consiste en cambiar el reformismo de ser una praxis enfocada primordialmente a mejorar los mecanismos de distribución de la riqueza a ser una praxis dirigida a mejorar ante todo los mecanismos de producción de riqueza?

No se trata de un problema de cambio del centro de gravedad dictado por razones genéricas, fuera del tiempo. El hecho es que nosotros los italianos, los europeos, nos encontramos atenazados; por una parte el auténtico proceso de retraso de la innovación tecnológica e industrial, la crisis de las instituciones del Estado del bienestar y el límite extremo de su degeneración en forma de garantismo parasitario; y por otra parte, la ofensiva terriblemente dinámica de la innovación productiva realizada en los Estados Unidos y en el Japón, arropada en fórmulas de «neoliberalismo» conservador. Una tenaza que corre el riesgo de reducir los sistemas socio-económicos europeos a un «segundo mundo», frente al «primer mundo» representado por las dos superpotencias económicas de Asia y América.

El riesgo que corremos cada vez más es que, con relación a su débil capacidad de innovación económica, los sistemas europeos se conviertan en auténticos sistemas de la antirreforma frente al viento impetuoso del reformismo neoconservador. Y perdónenme por el juego de palabras que significa el combinado de estas dos palabras —sólo aparentemente paradójico—: reformismo/neoconservadurismo.

En mi opinión, para salir del «impasse» en Europa, hay que buscar el modo de encontrar un nuevo punto de equilibrio entre los «derechos sociales» y las exigencias de la innovación tecnológica y económica. Es necesario que el sistema de los primeros quede liberado de todas aquellas adherencias que en gran parte lo han convertido en un sistema de protecciones que alimentan una realidad de «rigidez» incompatibles con la movilidad indispensable en un período de transformación de los mismos mecanismos productivos. Al mismo tiempo, por grande que sea la crisis y la degeneración, la izquierda europea debe defender el núcleo positivo de las instituciones del Estado del bienestar y el sistema de los derechos sociales por dos motivos: un motivo que yo llamaría ético y un motivo de realismo. Porque para poner en práctica un eficaz proceso de transformación de signo no neoconservador se necesita el consenso de las masas trabajadoras. El nudo de la cuestión, pues, es encontrar aquéllo que he llamado punto de equilibrio entre los principios de la innovación y de la eficacia, y los principios de la defensa de los intereses de los estratos más débiles, trabajadores o parados. Si no se consigue encontrar este punto de equilibrio no hace falta ser profeta para comprender que, o bien las razones de la innovación prevalecerán sobre los derechos sociales en clave neoconservadora, incluso en la Europa continental, o Europa está destinada a caer en un proceso de rigidez, malfuncionamiento y sometimiento cada vez mayores.

Pero, si están así las cosas —y yo creo que efectivamente sí lo están—, una cultura europea del reformismo ha de identificar urgentemente su ámbito de actuación efectiva.

Creo que se deben tener en consideración dos ejes fundamentales: uno vertical y otro horizontal. El primero se refiere a las situaciones existentes en cada uno de los países europeos, a sus mecanismos institucionales, políticos, sociales y económicos; y el segundo a la situación conjunta de Europa occidental.

En cuanto a la primera dimensión, me limitaré a decir que todos los países de Europa occidental se encuentran ante la exigencia de aumentar la movilidad social, de reducir el peso del centralismo estatal y de los lazos burocráticos, de potenciar la autonomía y la vitalidad de la sociedad civil. Este es un reto decisivo, puesto que la industria tradicional basada en la primacía de la gran empresa me-

cánica —y no sólo mecánica— en un amplio marco que potenciaba el sistema mixto de propiedad privado-estatal no podía hacer otra cosa que acrecentar el papel del dirigismo estatal centralista y burocrático; la transformación en actos en la dirección de un tejido productivo más articulado y basado cada vez más en la informática y en los servicios exige que la sociedad civil sea más autónoma, más ágil, menos sometida a ataduras externas. El haber captado esta realidad constituye el núcleo de la racionalidad y de la verdad del neoliberalismo. Y en semejante escenario, el papel del poder público debe volverse menos constrictivo, menos rígido, más transparente, más profesional, más dúctil. La consigna debería ser «reconquistar la sociedad civil».

En cuanto a este marco de problemas, las dificultades del sistema italiano en concreto afloran totalmente. Ante un mastodóntico sistema burocrático, poco eficaz y poco cualificado, sectores importantes de la innovación productiva han conseguido ya hace años un carácter que programáticamente escapa a los vínculos centrales; el sector estatal de la economía está marcado por el doble efecto negativo del expolio en relación con la dirección de las empresas, y de las rigideces provocadas por los mecanismos que tienden a premiar el inmovilismo, a defender el empleo en menoscabo de las innovaciones, y por tanto, en menoscabo de la formación de un nuevo empleo con bases industrialmente más sanas. Además, sobre nuestro sistema pesa el hecho de que el enorme aparato burocrático estatal funciona por un lado a bajo rendimiento, y por otro padece la debilidad crónica de gobiernos que duran poco y que, mientras gobiernan, se hallan divididos por conflictos casi continuos dentro de las coaliciones en el poder. Por último, las relaciones entre empresarios y sindicatos están demasiado dañadas por la recíproca incapacidad de pasar de un régimen de desconfianza y de conflictividad a otro de asunción de las responsabilidades colectivas, el único que puede acelerar el proceso indispensable de transformación. Pero hay que decir que se van dibujando signos positivos en este sentido, si bien con una lentitud que crea una peligrosa descompensación entre las exigencias de la transformación y el ritmo de su realización.

Creo, pues, que los puntos principales de una iniciativa reformista en Italia son cuatro: una recualificación de la burocracia; una reforma de las instituciones para aumentar la gobernabilidad; la abolición de mecanismos que obstaculizan la movilidad de la mano de obra y la innovación productiva; y el replanteamiento de mecanismos con los que por una parte se procuró garantizar los «derechos sociales» de los trabajadores, que en casos extremos han asumido un carácter abiertamente degenerativo y parasitario, y con los que por otra se han protegido de modo anormal una serie de privilegios, ante todo fiscales, de los trabajadores no asalariados y de las clases medias altas y clases altas.

Pero hay otro aspecto crucial, otro componente decisivo de la cultura del reformismo, sobre todo en Italia, y es su capacidad de lograr el consenso. Se trata de su prestigio no ya político-ideológico, sino de su prestigio ético. Una cultura del reformismo que sea incapaz de hundir las propias raíces en la conciencia civil y ética del pueblo es una cultura destinada a la derrota. La innovación, la reforma social, pueden exigirla quienes tengan los papeles en regla, los que mantengan una imagen limpia, ante todo los que no son ambiciosos del poder político. Sobre esto no hace falta extenderse demasiado.

Y hablo ahora de la que yo he llamado dimensión horizontal. La nuestra es una época en la que la geografía de la innovación productiva es una geografía de

grandes dimensiones. En este sentido el Japón, territorialmente tan pequeño, es el epicentro del área de la transformación, intensísima en su punto de origen y amplísima en cuanto a su proyección internacional. El problema que se le plantea a Europa occidental es el de insertarse al flanco del continente norteamericano y al del imperio japonés.

Una cultura del reformismo europeo que no defina su ámbito de posición está hoy destinada al fracaso. Y este ámbito está más allá y por encima de los confines de cada uno de los Estados europeos. La innovación tecnológica y productiva a nivel americano y japonés requiere grandes concentraciones financieras, coordinación en la investigación científica, rapidez de aplicación de los descubrimientos científicos y técnicos, capacidad por parte de los órganos del poder público de intervención y control coordinado y completado, todo lo cual está hoy muy por encima de los recursos de cualquier Estado europeo individualmente. Es cierto que existe la Comunidad Europea y el Parlamento Europeo. Pero no confundamos la apariencia con la realidad. Los mecanismos de la Comunidad están todavía demasiado subordinados a los intereses de cada Estado, demasiado dominados por sus exigencias de utilizar los recursos comunes para proteger los propios canales individuales; en resumen: son todavía un sistema para repartir los recursos, en un mundo cuyo principal problema consiste en invertir el proceso con vistas a la creación de esos recursos. En efecto, la Comunidad es más bien el espejo de las situaciones y de los intereses existentes en el interior de cada Estado, antes que un instrumento para cambiar las reglas del particularismo. En cuanto al Parlamento Europeo, no hace falta ser un lince para ver que, si bien constituye en sí mismo una conquista de gran importancia, hasta el momento conserva más el aspecto de un salón político internacional que de un órgano de poder europeo.

Mi conclusión es que hoy en día una cultura del reformismo o es una cultura europeísta, enfocada por tanto a la creación de una Europa políticamente unida, o se quedará en un mero ejercicio cada vez más pobre de contenidos reales.

Finalmente, yo creo que hay otro elemento de gran significado en una moderna cultura del reformismo, y es aquel que se refiere al sistema del poder y al sistema de las relaciones internacionales.

Cuarenta años después de la segunda guerra mundial el mundo ha cambiado profundamente, como era de esperar. Plantearse la perspectiva de la unidad europea significa plantearse también el problema de un nuevo papel de Europa occidental ante el mundo.

La crisis del orden bipolar hace ya tiempo que es una realidad, aunque en parte esté encubierta por el mantenimiento de la gigantesca supremacía militar de las dos superpotencias de Oriente y de Occidente. Lo que en otro tiempo fue el terreno unificado socialista hoy está en profunda crisis. China ha reconquistado su plena soberanía como gran Estado; las relaciones entre la Unión Soviética y los países sometidos en el Este europeo están minadas por profundas contradicciones. Pero incluso en el ámbito que se llama «occidental», más por motivos ideológicos y políticos que por razones geográficas, obviamente ha habido una alteración cualitativa, en primer lugar, por el nacimiento de una nueva superpotencia económica, el Japón, que puede competir con los Estados Unidos por la primacía mundial que éstos mantenían; en segundo lugar, por la existencia de una creciente desarticulación sobre todo en las relaciones económicas entre Europa occidental y los Estados Unidos.

¿Cuál sería la respuesta de Europa occidental? A mi entender las directrices deben ser esencialmente las siguientes: el proceso acelerado hacia la unidad europea; la recuperación de la autonomía de Europa en el campo de las relaciones internacionales (que en mi opinión, quede claro, no puede y no debe significar en modo alguno ceder a tentaciones de neutralidad o de equidistancia entre los Estados Unidos y la URSS); en vistas a recuperar, por lo tanto, la fuerza contractual tanto frente a los Estados Unidos como frente a la Unión Soviética para superar la herencia de 1945.

Demasiadas cosas, ya ven. Ciertamente, hay mucho que hacer. Pero estoy seguro de que ante esta observación no hay otra respuesta posible más que aquel viejo dicho latino: «Hic Rhodus, hic salta».

© Mondoperaio.
Traducción: Sol Gavira.

SISTEMA

COLECCION DE CIENCIAS SOCIALES

NOVEDADES

PAUL PRESTON
LAS DERECHAS ESPAÑOLAS
EN EL SIGLO XX:
AUTORITARISMO, FASCISMO
Y GOLPISMO

RAMON GARCIA COTARELO
LOS PARTIDOS POLITICOS

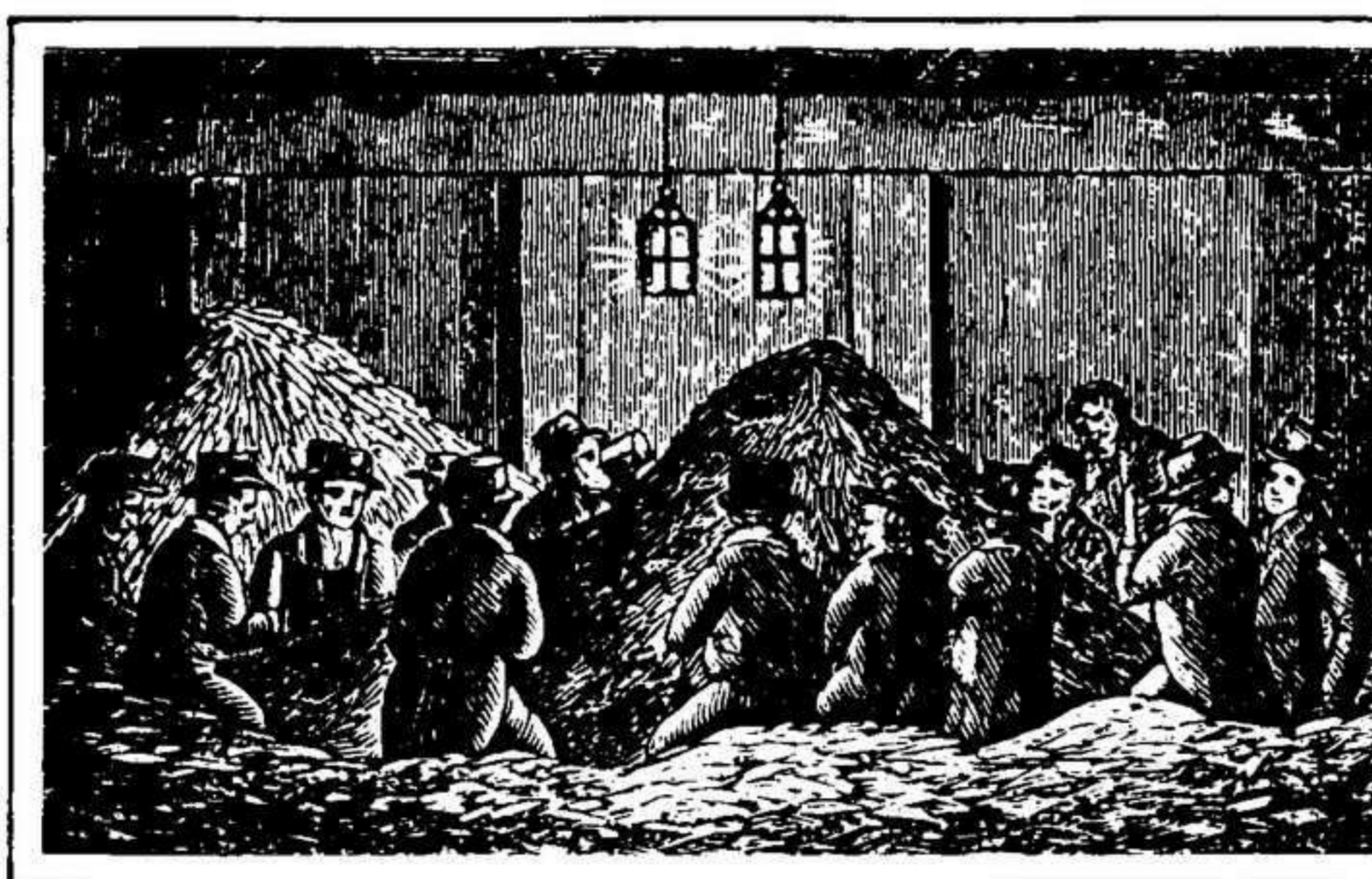
ALFONSO GUERRA
A. DE BLAS-V. ZAPATERO
M. ESCUDERO-J. F. TEZANOS
R. G. COTARELO
E. MENENDEZ-F. LAPORTA
EL FUTURO
DEL SOCIALISMO

EDITORIAL SISTEMA
Editorial Sistema. c/. Fuencarral, 127 - 19
TEL. 448 73 19 Madrid 28010.

LA DEMOCRATIZACION EN UNA CULTURA POSMODERNA

Norbert Lechner

análisis y debate



4

Crear una cultura política democrática

La lucha política es siempre también una lucha por definir la concepción predominante de lo que se entiende por política. ¿Qué significa hacer política? ¿Cuál es el campo de la política? Las preguntas nos remiten a la cultura política. Este tema, de por sí difícil de estudiar, plantea dificultades aún mayores en los procesos de democratización. Aquí no se trata solamente de analizar la(s) cultura(s) política(s) existentes, sino de *crear* una cultura política democrática. Por poco que profundicemos los procesos de democratización, constatamos que la génesis de una cultura política democrática es uno de los aspectos centrales. Me quiero referir a un momento habitualmente no considerado: el contexto internacional.

La importancia del ambiente ideológico-cultural internacional en las luchas políticas de cada país es particularmente notoria en el caso de las sociedades lati-

noamericanas, cuya organización y pensamiento políticos se desarrollan, desde la época colonial, bajo la influencia de la tradición ibérica y anglosajona. Al respecto contamos con importantes estudios históricos. Pero la influencia del pensamiento político occidental no se debe sólo a una tradición intelectual, propia al «mestizaje cultural» de nuestras sociedades. Estas se han «capitalizado» tan extensiva e intensivamente que no podríamos interpretar la realidad nacional sin recurrir a las categorías explicativas del capitalismo. Tanto el marco externo como la dinámica interna de América Latina están condicionados por la «lógica» capitalista. Sin embargo, cualquiera que se haya referido al Estado y la burguesía, al individuo o la racionalidad, sabe el carácter «sui generis» de la realidad latinoamericana. Ahora bien, si toda teoría ilumina algunas cuestiones y escamotea otras, en el caso de América Latina las dificultades son todavía mayores. Las concepciones y prácticas políticas que elaboramos en nuestros países no pueden prescindir del debate político-ideológico en los centros metropolitanos; pero estos esquemas interpretativos, a su vez, tienden a distorsionar nuestros planteos de los problemas que enfrentamos.

Me permito recordar esta dificultad bien sabida para prevenir contra análisis demasiado lineales. No le faltan buenas razones a quienes parten de una «definición mínima» de la democracia para investigar los factores que favorecen u obstaculizan, aceleran o frenan el desarrollo de un régimen democrático. En efecto, los estudios funcionalistas suelen ser más claros y acotados. Más fructífero, sin embargo, me parece un enfoque dialéctico que aborde en conjunto las formas de democratización y los problemas históricos de determinada sociedad. Con ello aludo a las transformaciones ocurridas en las sociedades bajo la dictadura; independientemente de cómo califiquemos tales transformaciones, el hecho es que la sociedad es otra. La dictadura no es un mero paréntesis y, en consecuencia, no podemos repetir formas anteriores. Pero no se trata sólo ni principalmente de considerar las nuevas condiciones sociales. Junto con las experiencias de ruptura, hay líneas de continuidad; nuestros países arrastran problemas históricos —basta citar la cuestión nacional o la cuestión social— que incluso fueron agravados por el régimen militar. Bajo este punto de vista, el autoritarismo pertenece a un ciclo pasado y expresa su crisis. De ahí la demanda por nuevas formas de concebir y hacer política.

La búsqueda de nuevas formas de hacer política, la elaboración de nuevas concepciones de la política, se insertan en un contexto internacional que podríamos denominar cultura posmoderna. La pregunta es: *¿en qué medida, 1) la cultura posmoderna contribuye a generar una cultura política democrática que 2) sea capaz de responder a los problemas históricos de nuestras sociedades?*

Sin entrar en el debate acerca de la «posmodernidad» quiero señalar dos elementos del actual «clima cultural». *Por un lado, expresa un proceso de desencanto*, particularmente el desencanto de las izquierdas. Estas ya no creen en el socialismo como meta predeterminada ni en la clase obrera como sujeto revolucionario y aborrecen de una visión onmicomprensiva de la realidad. Intelectualmente, ello conlleva una crítica de aspectos centrales del marxismo y, más general, de toda una tradición política: crítica a una filosofía de la historia, a la idea de sujeto, al concepto de totalidad. Es una crítica que toma distancia, sin pretender elaborar un paradigma alternativo. Este carácter más bien expresivo de la cultura posmoderna se muestra, *por otro lado, en el surgimiento de una nueva sensibilidad*. Me llaman la atención dos rasgos: el desvanecimiento de los afectos, un enfriamiento de las emociones y, por otra parte, una erosión de la distancia histórica-

crítica, aplanando la vida social a un *collage* sin relieves. Aunque sean rasgos propios de una sensibilidad principalmente estética, contrarrestados por otras tendencias (el énfasis en la subjetividad y, en particular, en la autenticidad e intimidad o el papel del fundamentalismo político-moral), hay que tener en cuenta este «estado de ánimo», primordialmente juvenil, al repensar el significado actual de la política.

Dicho en términos muy generales y tentativos, creo ver en la cultura posmoderna la expresión de una *crisis de identidad*. Ella refleja la falta o erosión de una articulación de los distintos aspectos de la vida social que permita afirmar la experiencia de un mundo vital común. Pues bien, ¿no es la desarticulación o, para usar una expresión habitual, la «heterogeneidad estructural» uno de los grandes problemas históricos de la sociedad latinoamericana? ¿No es precisamente la fragmentación del tejido social uno de los efectos más graves del autoritarismo? Aún cuando el problema de identidad sea ciertamente una cuestión fundamental en la constitución del orden en América Latina y sea posiblemente una de las causas de la convulsión en los países de Europa y América del Norte, no se trata del mismo fenómeno. No es la ocasión para explorar y contrastar las raíces históricas, el marco social y las interpretaciones teóricas en uno y otro caso. No obstante, aunque se trata de fenómenos de desarticulación diferentes, estas experiencias diferentes remiten a un problema político compartido: la elaboración de un marco de referencia colectivo.

Aunque las sociedades latinoamericanas tengan que elaborarse una identidad social razonable por encima de todo a partir de su propia —heterogénea— modernidad, el clima posmoderno no les es ajeno. El debate que se desarrolla en Europa y Estados Unidos sobre la posmodernidad contribuye, creo yo, a reflexionar precisamente la articulación de un orden colectivo por medio de una cultura política democrática. En particular, dirige nuestra atención sobre dos dificultades básicas. Por una parte, la indeterminación del espacio de la política. Una vez que el espacio político deja de ser visto como un ámbito natural y/o inmutable, surge la pregunta por los límites que distinguen lo político de lo no-político. Es interrogarnos acerca de qué pertenece a la política y también qué cabe esperar de la política. Según sean trazados esos límites, se establece cuáles aspectos de la vida social pueden ser articulados en una identidad política. Por otra parte, llama la atención sobre la precariedad del tiempo. Lo políticamente posible depende del tiempo disponible, de nuestra disposición sobre el tiempo. Si no logramos producir continuidades temporales, tampoco logramos constituir identidades colectivas.

La indeterminación del espacio de la política

Desde la década de los 30 y especialmente después de 1945 las sociedades latinoamericanas viven un proceso de modernización de efectos contradictorios¹. Las dinámicas de secularización y de marginalización social cuestionan los fundamentos del orden establecido, incluso en aquellos países que parecían haber resuelto la cuestión nacional y la cuestión social. En este marco veo la «inflación ideológica» de los 60. Respondiendo a una amenaza de disolución y atomización social, nace la búsqueda de una visión totalizadora capaz de unificar el proceso social. Aún bajo signos políticos distintos o antagónicos, esa búsqueda de identidad sigue una pauta similar. Me parecen característicos tres rasgos.

1. La sacralización de los principios políticos como verdad absoluta. Ello conlleva un doble efecto: hacia dentro, fomenta y consolida fuertes identidades colectivas, propias de comunidades religiosas. El precio de la cohesión interna es, hacia fuera, la rigidez en la distinción, una intransigencia en las negociaciones. La pureza teme la contaminación; mayor es la consistencia ideológica de un grupo y más tiende a la demonización del adversario.

2. La sacralización de los principios constitutivos de las identidades se vincula estrechamente con una resignificación de la utopía. Esta es visualizada como una meta factible, de la cual se desprendería determinada «necesidad histórica». Al identificar la utopía con un futuro posible se logra una gran movilidad social para procurar aquellos «cambios irreversibles» que hagan realidad el orden prometido. Se trata de una política instrumental, referida a un objetivo predeterminado y, por tanto, ciega a la producción y selección de diferentes opciones. La percepción del presente como «transición» motiva una conducta abnegada y de sacrificio, pero que desprecia con facilidad las conquistas del pasado.

3. La fuerza utópica descansa en una noción de totalidad, no como instancia articuladora, sino como identidad plenamente realizada. No sólo los límites divisorios entre clase o grupos, también los límites distintivos entre lo público y lo privado, entre teoría y práctica, entre trabajo manual e intelectual, entre cultura y política, aparecen entonces como fronteras obsoletas. El resultado es un sugerente cuestionamiento de los espacios establecidos, pero también con inseguridad acerca del ordenamiento social. En lugar de elaborar un nuevo sistema de distinciones, se tiende a extender determinada racionalidad, propia de un espacio, a toda la vida social: la búsqueda de una visión totalizadora desemboca en una posición sectaria/totalitaria.

Para completar y, a la vez, resumir el cuadro esbozado sólo me queda resaltar la carga religiosa que conlleva este tipo de política. Toda política implica una dimensión religiosa y teológica. Pero en estos casos, para compensar las experiencias de exclusión y desamparo radical, se acentúa el momento religioso de tal modo que la política asume, al menos implícitamente, la redención del alma. Ello otorga a la política revolucionaria su mística y, por otro lado, hace del autoritarismo (a pesar del aséptico lenguaje neoliberal) una «cruzada de salvación». Pero no se trata de un fenómeno específico de América Latina. Si consideramos el auge del fundamentalismo en Estados Unidos, vislumbramos la importancia de la motivación religiosa (sea como «religión civil») para contrarrestar el sentimiento de incertidumbre. De ser la incertidumbre una característica constitutiva de la democracia, como sostienen algunos, la demanda de certidumbre debiera ocupar un lugar privilegiado en los estudios de democratización.

Sobre este trasfondo se perfilan los cambios que caracterizan el actual clima democrático en América del Sur (hablo de «clima» porque sabemos poco del arraigo efectivo de las convicciones y conductas democráticas). En la construcción de un sistema político democrático sobresalen, bajo el punto de vista que nos interesa, dos tendencias. Observamos, en primer lugar, una fuerte revalorización de la secularización. Por oposición al mesianismo introducido por la perspectiva revolucionaria de los 60 y exacerbado por el autoritarismo, la secularización tiene hoy una connotación exclusivamente positiva, sin mayor reflexión sobre su potencial desestabilizador. Para la consolidación democrática aparece imperioso desvincular la legitimidad de la verdad y restablecer el ámbito de la política como espacio de negociación. Para instaurar un clima de transacción sería in-

dispensable aliviar la política de los compromisos ético-religiosos, origen de la anterior intransigencia, y de expectativas desmesuradas. Se trata en resumidas cuentas de «descargar» una política sobrecargada. Ello exige no sólo desmontar la búsqueda de redención y plenitud, sino también cierto des-compromiso en los valores, motivaciones y afectos involucrados. En la misma dirección apunta también la segunda tendencia: *el llamado al realismo*. Reaccionando contra una posición «principista», contra una visión heroica de la vida y un enfoque mesiánico del futuro, se replantea la política como «arte de lo posible». La pregunta por lo políticamente posible desplaza el anterior énfasis en lo necesario («necesidad histórica»), a la vez que se opone a lo imposible: no repetir un pasado que se mostró inviable ni pretender realizar una utopía no factible. Aparte de sus intenciones críticas, la invocación del realismo es un llamado a la construcción colectiva del orden. El orden no es una realidad objetivamente dada; es una producción social y ésta no puede ser obra unilateral de un actor, sino tiene que ser emprendida colectivamente. De ahí, la revalorización de las instituciones y los procedimientos, o sea, de las formas de hacer política por encima de los contenidos materiales.

Ambas tendencias buscan restringir el anterior espacio de la política, considerado desmesurado. ¿Cuáles serían los límites adecuados del espacio político? Al hablar de «adecuado» me refiero a límites reconocidos por todos, pero también a una delimitación que permita articular identidades colectivas. Este conflicto, más larvado que explícito, acerca de los límites del espacio de la política, me parece que es uno de los terrenos privilegiados en la génesis de una nueva cultura política. Por ahora, no han cristalizado marcas claras. Un primer paso ha sido tomar conciencia del anterior «complejo de omnipotencia» política y, por tanto, de la especificidad de los distintos campos sociales. Se percibe la tensión entre política y moral, política y cultura, Estado y política, etc. Estas tensiones son asumidas, pero no elaboradas (ni siquiera casuísticamente) a falta de criterios. ¿Qué nos aporta la cultura posmoderna al respecto?

Quiero señalar dos fenómenos que insinúan cierta contemporaneidad entre el clima democrático en América Latina y el contexto cultural internacional; ambos fenómenos iluminan las dificultades de la democracia moderna.

El llamado a una secularización de la política puede apoyarse en la cultura posmoderna en tanto ésta implica cierto desvanecimiento de los afectos, propiciando una conducta *cool* e irónica. En este sentido, la «moda» internacional contribuye a enfriar la carga emocional de la política, disminuyendo las presiones y, por tanto, permite al ámbito político adquirir mayor autonomía. Tales tendencias probablemente favorezcan una consolidación democrática en nuestros países. Pero no por eso entramos en la «posmodernidad». La cultura posmoderna no orienta un proceso de secularización; es un producto. Más exacto, es la expresión de una hipersecularización. Quizá debamos entenderla como una racionalización «ex post» de un desencanto; pero una racionalización mimética, no reflexiva. Dicho en términos políticos: la cultura posmoderna asume la hipersecularización en su tendencia a escindir las estructuras sociales de las estructuras valorativas, motivacionales, emocionales. Es decir, acepta la visión liberal de la política como «mercado»: un intercambio de bienes. ¿Y qué pasa con los bienes no transables? Me refiero a los derechos humanos, a necesidades psicosociales como el arraigo social y la pertenencia colectiva, a la necesidad de referentes trascendentales, pero también a los temores y el deseo de certidumbre. No veo en la cultura posmoderna una reflexión al respecto. Al contrario; su crítica a la noción de suje-

to (en parte, sin duda, justificada) tiende a socavar las bases para repensar la política. Al identificar la lógica política con el mercado y el intercambio no puede plantearse el problema de identidad. Este, sin embargo, es precisamente una de las tareas que enfrenta la cultura política democrática.

También el llamado al realismo tiene, a primera vista, una afinidad con la cultura posmoderna. Ambos rechazan las grandes gestas, son sensibles a lo nuevo, a los «signos de la calle», exploran lo político en la vida cotidiana. Ante todo, desdramatizan la política. Visto así, la cultura posmoderna alimenta un realismo político en tanto prepara una nueva sensibilidad acerca de lo posible; sensibilidad que podría ayudar a reducir la distancia entre los programas políticos y las experiencias cotidianas de la gente. En cambio, no veo que la cultura posmoderna reflexione sobre el problema principal del realismo: los criterios de selección. Una vez descubiertas y formuladas las posibilidades, ¿qué opción seleccionamos como la mejor posible? El debate acerca de lo posible remite a lo deseable. Necesitamos este criterio no sólo para jerarquizar las posibilidades, sino igualmente para evaluar lo eficiente y lo exitoso de una gestión política. Quiero decir: el realismo no mira solamente lo que es, sino también lo que podría y debería ser. Exige pues una anticipación del futuro; justamente lo que está ausente en la cultura posmoderna. Volveré más adelante sobre la falta de futuro, pero adelanto un aspecto fundamental —la renuncia a una idea de emancipación. Junto con criticar al determinismo y la visión teleológica de la historia se abandona toda referencia a la emancipación (cualquiera sea su formulación). Este abandono me parece problemático. Aparentemente la cultura posmoderna se libera de ilusiones iluministas; en realidad, sin embargo, pierde noción de la historia y, por encima de todo, pierde capacidad para elaborar un horizonte de sentido. Ahora bien, ¿no enfrentan los procesos de democratización precisamente la tarea de producir un nuevo «sentido de orden»? De ahí la importancia de la cultura política. Si no lográramos desarrollar un nuevo horizonte de sentidos la institucionalidad democrática quedaría sin arraigo: una cáscara vacía.

En resumen, creo que el ambiente posmoderno nos ayuda a desmitificar el mesianismo y el carácter religioso de una «cultura de militancia», a relativizar la centralidad del Estado y del partido y de la misma política; por otro lado, introduce a la actividad política una socialibilidad menos rígida y un goce lúdico. En este sentido, contribuye a replantear los límites de la política, aunque no aporte criterios para acotar el campo. Por el contrario, incrementa la indeterminación de los límites y, por consiguiente, el conflicto en torno a ellos. Ello dará a los procesos de democratización su dinámica, pero también una inestabilidad.

La precariedad del tiempo

Hoy es casi un lugar común hablar de una «crisis de proyectos». Después de los años sesenta y setenta, volcados al futuro y, por tanto, con una perspectiva optimista no sólo acerca de la sociedad por hacer, sino y por encima de todo, acerca de la capacidad misma de construir un nuevo orden, después de dos décadas de fracasos aquella época nos resuena hoy como el apogeo final, retrasado, de la idea de progreso. En ningún país el fracaso de la visión heroica, casi prometeica, del desarrollo está tan a la vista como en Chile. Ni las políticas desarrollistas de Frei, ni las reformas socialistas de Allende, ni las medidas neoliberales de Pinochet cristalizaron en un proceso de transformación social sostenido y estable. No es que no hubiese habido cambios; los hubo y muchos de ellos radicales.

Pero eran —para usar términos historiográficos— más eventos que procesos. Vivimos hasta hoy y de modo cada vez más dramático el tiempo como una secuencia de acontecimientos, de coyunturas, que no alcanzan a cristalizar en una «duración», es decir, un período estructurado de pasado, presente, futuro. Vivimos un *presente continuo*.

Aunque menos brusca, la experiencia de los otros países de la región no es muy diferente. Ni el supuesto «milagro económico» de los militares brasileños o las reformas populistas de los militares peruanos, ni siquiera los recursos extraordinarios que en su momento ofreció el petróleo a los gobiernos de México y Venezuela, se tradujeron en un «estilo» consolidado. No me refiero sólo a la ya proverbial inestabilidad política del continente. El problema de fondo es que ninguna experiencia logra crearse, más allá de la retórica del momento, un horizonte de futuro. Incluso países con un orden social relativamente estable se enfrentan a una ausencia de futuro. Hay proyecciones, pero no proyecto. En cuanto el presente se restringe a una repetición recurrente, el futuro a su vez se restringe a un «más allá»: el mesianismo es la otra cara del ensimismamiento.

Tal vez la crisis de proyectos en América Latina sea hoy más notoria pues se inserta en un contexto internacional que potencia el presente como único tiempo disponible. El hecho es lamentado por unos y festejado por otros. Hay quienes critican la falta de una perspectiva y, por ende, de criterios que nos permitan elegir deliberadamente nuestro futuro; otros, en cambio, elogian la liberación de una previsión omnipresente y un destino ineludible que no dejaba espacio a la experimentación, la aventura, el acto gratuito. El hecho es que nos encontramos cara a un tiempo sin horizonte, sea que hablemos de un futuro radicalmente abierto donde «todo es posible», sea que nos sentimos atrapados recurrentemente por el pasado.

«La modernidad —decía Baudelaire— es lo transitorio, lo fugaz, lo contingente, la mitad del arte, siendo la otra lo eterno y lo inmutable»². En esta ansiedad casi histérica por lo nuevo, lo efímero, la moda, se expresa una rebelión contra las funciones normalizadoras de la tradición, pero sin perder la referencia al pasado. Sólo en relación al pasado es concebible la modernidad; el descubrimiento de lo que es moderno se nutre de la memoria. Esta tensión se quiebra en la posmodernidad. Se borra el pasado y, en consecuencia, la distancia histórica que daba relieve a la actualidad. Condensando el tiempo en un solo presente, la vida social deviene una superficie plana, un *collage*. Eliminada la perspectiva, la mirada en profundidad, todo vale —*everything goes*. Y, precisamente porque todo es posible, cada posibilidad es efímera, consumida al instante.

En este aceleramiento del tiempo ya nada se afirma; incluso *la identidad sucumbe al vértigo*. En este sentido me referí a la cultura posmoderna como expresión de una crisis de identidad. En realidad, ¿cómo afirmar una identidad en un presente recurrente? No es casual que se evoque al esquizofrénico como figura emblemática. La pérdida de identidad que caracteriza a la esquizofrenia puede ser entendida como el resultado de una experiencia desarticulada en que los diferentes elementos aislados, desconectados, discontinuos no se estructuran en una secuencia coherente. El esquizofrénico no conoce un «yo» porque «carece de nuestra experiencia de la continuidad temporal y está condenado a vivir en un presente perpetuo con el que los diversos momentos de su pasado tienen escasa conexión y para el que no hay futuro concebible en el horizonte»³. En ausencia de un sentimiento de identidad que persista a lo largo del tiempo, el esquizofrénico

co no sólo es nadie, sino que tampoco hace nada. Para ello tendría que tener un proyecto y ello implica comprometerse a una cierta continuidad. Al romperse las continuidades temporales mediante las cuales nosotros seleccionamos y ordenamos los distintos aspectos de la vida, la visión del mundo deviene indiferenciada: una sumatoria ilimitada de elementos yuxtapuestos. El esquizofrénico no «filtra» el presente, por lo que tendrá una experiencia mucho más intensa, pero finalmente abrumadora. Vive intensamente el instante, pero al precio de petrificarlo. A falta de ponerle límite al presente, de dimensionarlo, se ahoga en una inmediatez sin fondo.

La creatividad de la cultura política

¿Qué se desprende de lo anterior para la elaboración de una cultura política democrática en nuestra región? Hemos visto, por un lado, las dificultades por determinar qué abarca una política democrática, cuál es su espacio. No se acepta ya la identificación de la política con el Estado o el partido ni una identificación del espacio político con la esfera pública. Se rechaza el enclaustramiento de la política, pero tampoco se acepta que todo sea política. La vida social ha quedado descentrada; sin embargo, requiere estructuración. No sólo exige normas que distingan lo bueno de lo malo, lo lícito de lo prohibido; igualmente importante son los criterios para definir lo posible y lo deseable, lo legítimo y lo racional, lo normal y lo eficiente. De la elaboración de tales criterios depende —en forma y contenido— qué política hacemos. Pues bien, creo que estos criterios no están determinados, incluso en aquellos países en que existe un acuerdo sobre las «reglas de juego» constitucionales. Estas son necesarias, pero no suficientes para acotar el campo de lo políticamente decible/decidible.

Por otro lado, hemos visto la precariedad del tiempo. No disponemos de un concepto fuerte de tiempo, capaz de estructurar pasado, presente, futuro en tanto «desarrollo» histórico, ni siquiera compartimos horizontes de temporalidad conmensurables. Nuestra conciencia del tiempo se muestra sumamente volátil, resultando difícil acordar plazos y sincronizar expectativas. En resumen, nuestras capacidades de calcular y controlar el tiempo son muy débiles.

La incertidumbre acerca del espacio y del tiempo deja traslucir las *crecientes dudas sobre nuestro poder de disposición efectivo*. ¿Qué grado de incidencia real, de control racional y efectivo sobre los procesos sociales tienen los hombres y mujeres hoy en día? Quedan lejanos los días en que la humanidad se sentía llamada a «transformar el mundo». El sentimiento de omnipotencia que reinaba en los 60 ha cedido el lugar a un sentimiento de impotencia. No hay que llegar al extremo del neoliberalismo, pero su ofensiva ya no solamente contra la intervención estatal, sino contra la idea misma de la soberanía popular, es un signo de la época. Al cuestionar la construcción deliberada de la sociedad por sí misma no se cuestiona sólo a la democracia; se cuestiona toda la política moderna. La fe que depositáramos antaño en la fuerza de la voluntad política se ha diluido. Pero no sólo desaparece el voluntarismo; se tiende a restar importancia a toda acción política. La sociedad latinoamericana ya sería demasiado compleja, demasiado entramada en un contexto internacional demasiado rígido, como para que pudieran introducirse cambios mayores. Incluso un gobierno de reformas tendría que contentarse finalmente con algunos «cambios simbólicos». Que esa imagen de improductividad surja de la cultura posmoderna no deja de ser una paradoja. Justamente aquella cultura que desmonta el determinismo y se abre radicalmente a

explorar el campo de lo posible, desemboca en una visión de lo existente como lo necesario.

Probablemente los fenómenos esbozados no sean elementos constitutivos de una «onda larga», sino síndrome de un compás de espera. Pero mientras tanto, también los procesos de democratización se encuentran en un «compás de espera».

¹ Germani Gino: «Democracia y autoritarismo en la sociedad moderna», en Germani y otros: *Los límites de la democracia*, CLACSO, Buenos Aires, 1985, tomo I.

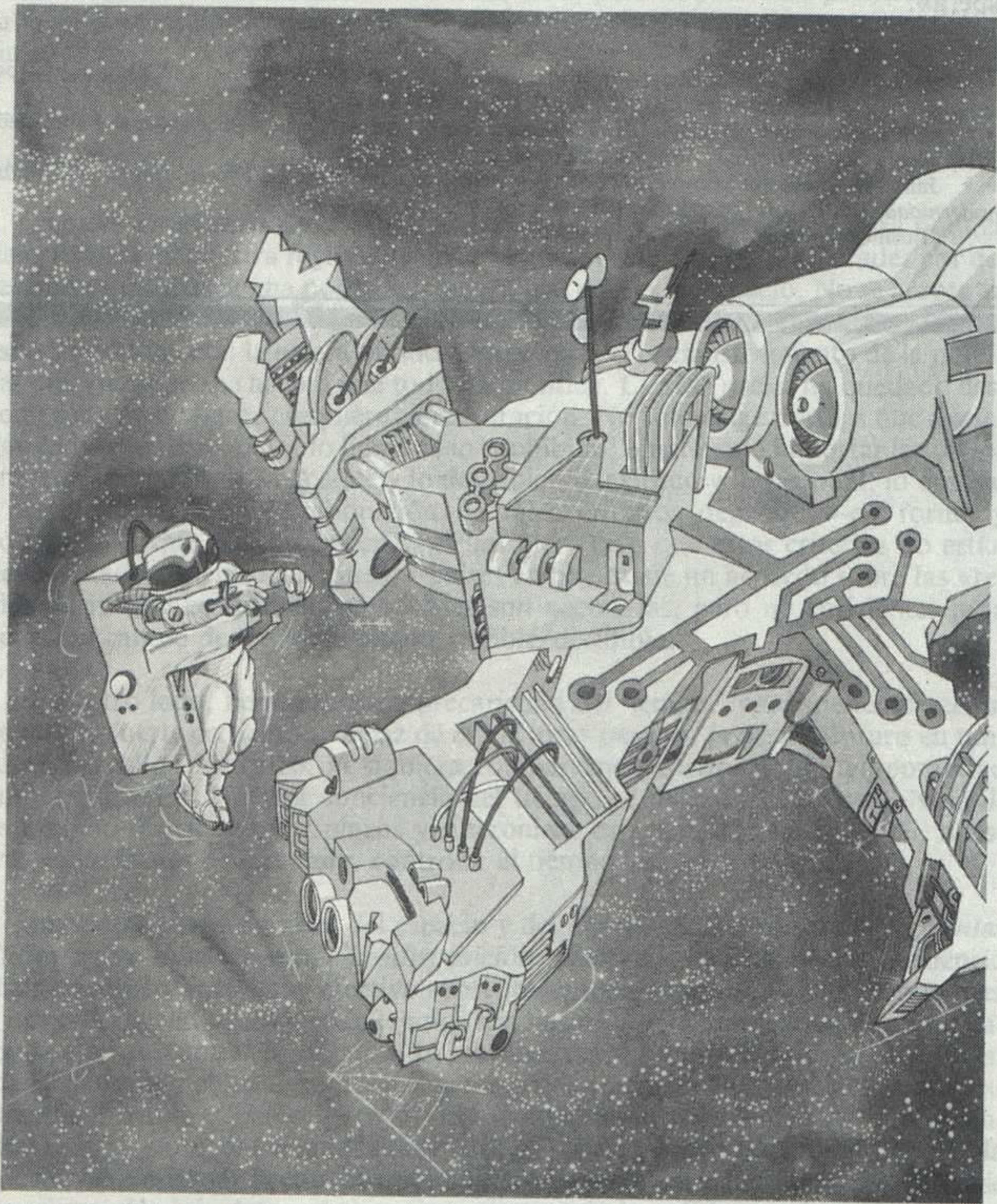
² Citado por Frisby, David: «Georg Simmels Theorie der Moderne», en Dahme & Rammstedt (eds.): *Georg Simmel und die Moderne*, Suhrkamp Frankfurt, 1984.

³ Jameson, Frederic: «Posmodernismo y sociedad de consumo», en Foster, Hal (ed.): *La posmodernidad*, Ed. Kairos. Barcelona, 1985.

«Posmodernismo: Lógica cultural del capitalismo tardío». *Zona Abierta*, núm. 38.

movimiento europeo

N.º 13 - Primavera 1986 - 300 p'as.



EL ACTA UNICA EUROPEA (texto íntegro)

EUREKA: EL PROYECTO Y EL FUTURO

LA EUROPA DE LOS CIUDADANOS

ENRIQUE TIERNO: UNA LUZ EN EL TUNEL

Antonio García Santesmases

análisis y debate



5

El fallecimiento de Enrique Tierno Galván exige hacer una reflexión sobre la producción ideológico-política de uno de los más importantes representantes del socialismo español posterior a la guerra civil. La figura de Tierno no era simple ni unívoca, y por ello su legado ha suscitado y suscitará consideraciones diversas acerca del catedrático, del ensayista, del intelectual, del agnóstico, del político partidario de la monarquía parlamentaria como salida a la dictadura, o del Alcalde anti-otanista. La interrogante que quisiera desvelar en estas páginas remite al Tierno teórico del socialismo. ¿Qué papel jugaba en su concepción el marxismo? ¿Cuál era para Tierno la tarea de la izquierda en este final de siglo?

Elías Díaz ha distinguido tres etapas fundamentales en la obra de Tierno: neo-tacitismo, funcionalismo y socialismo democrático. Me voy a centrar en este artículo en la tercera de ellas. Una etapa que, personalmente, tengo asociada a uno de los primeros textos que leí de Tierno. Me refiero a su participación en las famosas conversaciones que Salvador Paniker publicó a finales de los años sesenta. En aquella entrevista¹ Tierno se define como un socialista-marxista, deseoso

de romper con el academicismo y vincularse, a través de la praxis, a la lucha de los trabajadores. Estamos ante un Tierno agnóstico que afirma que «la muerte le suena a música celestial», y que recomienda a Paniker que si va a entrevistar a Zubiri le pregunte cómo es posible que un filósofo no tenga preocupaciones sociales.

En aquellas conversaciones, en las que también participan Aranguren, Ruiz-Jiménez y González Ruiz, sobresale un Tierno agnóstico, materialista, que no confunde, sin embargo, materialismo con pragmatismo y que se indigna cuando Paniker le insinúa que quizá al obrero actual sólo le preocupe el bienestar material. Tierno contesta rotundamente: «Me niego a aceptar esa hipótesis; hay que desmitificar el bienestar. No existe ni existirá bienestar en tanto no exista una igualdad práctica ni una libertad práctica... los países capitalistas tratan de mantener un sistema de clases amparándose en tópicos como ese de la igualdad de oportunidades. ¿Pero dónde existe esa igualdad de oportunidades? Hay que hablar claro... hay que buscar la diferencia de clases, la realidad social como diferencia de clases, para encontrar un sentido a la propia vida y a las propias ideas. Un sentido moral también». Estamos ante un Tierno enormemente optimista que llega a afirmar: «La vocación revolucionaria del país es mayor que nunca, España es el país de Europa donde hay más hambre y sed de ideales... en España ha habido más asimilación revolucionaria en los últimos diez años que en los últimos siglos»².

Este Tierno de 1969 contrasta vivamente, a primera vista, con el Tierno de septiembre de 1985, que declara en una de sus últimas entrevistas: «Está sucediendo en muchos españoles, y desde luego no excluyo a los socialistas, una pérdida de ideales, un escepticismo y una irresponsabilidad... para darse a un ocio de puro bienestar... Nunca los españoles han estado tan vacíos de entusiasmo ideológico. Hoy somos un pueblo de indiferentes... El pueblo no quiere saber nada de luchas políticas, ni de contenidos ideológicos en los programas: quiere administradores eficaces que le garanticen bienestar. No le interesa el para qué vivir sino el buen vivir. Las elecciones las ganan los buenos administradores, no los buenos ideólogos. Y estamos en el túnel. Espero que salgamos pronto. Pero las ideas hoy están en crisis. Nadie se hace ya preguntas finalistas»³.

¿Qué ha ocurrido en estos quince años? El Tierno de los últimos tiempos percibe una disyuntiva que piensa que tendrá que plantearse algún día: «o se abandona el socialismo y nos convertimos en pragmáticos administradores, o volvemos a ser socialistas y defendemos los enunciados desde la práctica política. O se resuelve ese dilema o el PSOE se queda vacío de contenido»⁴.

Convendría antes de nada, volver la vista atrás y recordar el tipo de socialismo que defendía Enrique Tierno en los años finales del franquismo y al comienzo de la transición democrática.

El socialismo de izquierda. Utopía y pragmatismo

En innumerables artículos y conferencias a lo largo, fundamentalmente, de los años 1976 y 1977, Tierno va diferenciando nítidamente socialismo de socialdemocracia. Socialdemócrata es el partidario de una mayor justicia social, una mejor distribución de la riqueza y una disminución de la diferencia entre las clases sociales. Socialista es el que busca cambios sustanciales en la organización

político-social y en la estructura económica. Las aspiraciones socialdemócratas se cifran en colaborar con las instituciones burguesas, sin pretender sustituirlas. El socialdemócrata cree que el propio proceso del capitalismo implica su superación. El socialista de izquierda piensa que «...no basta con acelerar las propias contradicciones del sistema capitalista, sino que hay que enfrentarse a él con programas y con respuestas que sean realmente contradictorias con respecto al capitalismo»⁵. El socialismo de izquierda defiende la revolución cultural. La única revolución cultural que puede realizarse en Europa ha de partir de una concepción materialista del mundo. El marxismo y el socialismo tienen los tres grandes soportes que hacen que una concepción del mundo sea plena: una ontología que explica lo que es, lo que existe; una teoría de la ciencia que explica los supuestos, el porvenir y los condicionamientos de la ciencia; y una filosofía de la finitud que da al hombre una trascendencia, no la trascendencia de una tercera sustancia ajena al mundo, sino una trascendencia histórica en el propio mundo⁶.

El socialismo democrático parte de una concepción marxista del mundo y pretende lograr una revolución cultural en la que el hombre alcance la identidad consigo mismo, en que llegue a ser un hombre en libertad, y no un hombre encadenado y enajenado. El socialismo defiende un porvenir cualitativo y no cuantitativo. Este porvenir cualitativo choca, sin embargo, con una cultura que homogeniza y reduce. Las antiguas circunstancias de la lucha de clases se han transformado, se ha producido un aumento del nivel de vida que ha provocado que los estratos medios y el proletariado se hayan aproximado, pero la pregunta que un socialista tiene que hacerse es: ¿hemos conseguido una libertad real y una igualdad real? ¿Una independencia real, una justicia real? ¿O por el contrario el capitalismo avanzado lo que está haciendo es conducirnos a una destrucción de los aspectos profundos y de los valores superiores? La contestación de Tierno a todos estos interrogantes no puede ser más inequívoca:

«Simplemente porque ha escamoteado la antigua lucha de clases y porque ha disminuido el número de hambrientos y ampliado la seguridad social, nos pide a cambio que seamos esclavos contentos y que aceptemos la vida misérrima que nos ofrece, como si ya no existiese la causa sagrada de la revolución, que es a fin de cuentas la causa sagrada de la especie»⁷. Los grandes temas del socialismo, para Tierno, siguen en pie: es necesario transformar la estructura económica, o se cambian las relaciones de producción, se socializa la propiedad y se hace al hombre libre, director, administrador, distribuidor y en última instancia, controlador del consumo y de la producción, o el capitalismo acabará con todo.

El socialismo de izquierda que Tierno defiende no abandona los postulados revolucionarios, pero es consciente de que «...sería totalmente irreal pretender que en la sociedad europea actual se podrían producir cambios súbitos, repentinos, que llevasen la democracia burguesa a una democracia socialista. Esto es una quimera que no tiene sentido... hemos de ir gradualmente y en la medida en que la propia convivencia democrática lo tolere. Pero entiendo que ir gradualmente implica una permanente y constante oposición al sistema capitalista, aprovechando cualquier resquicio...»⁸.

Probablemente el rasgo más característico del pensamiento de Tierno en todo este período es el establecer la vinculación entre una defensa de los principios revolucionarios y una práctica política dominada por la prudencia, la moderación y la sensatez. La política socialista es y debe ser consecuencia de la utopía, debe estar dinamizada por un motor utópico, pero la práctica del pragmatismo es ne-

cesaria para que la utopía pueda ser posible. La política es por un lado utopía, por otro negociación. En los trabajos de estos años encontraremos, por ello, tanto críticas radicales al desdibujamiento ideológico de los socialdemócratas europeos y a su actitud sumisa ante el capital, como continuas advertencias en contra de las exageraciones demagógicas y los maximalismos.

En pocos acontecimientos de aquella época se ven tan claramente reflejada esta dualidad del pensamiento de Tierno como en su análisis de lo ocurrido en Chile en la época de la Unidad Popular. Meses antes del derrocamiento del gobierno de Salvador Allende, Tierno había escrito: «Desde que Marx y Engels defendieron la necesidad inexcusable de una dictadura de clase para que pudiera producirse la transición a una sociedad socialista, no ha habido ningún intento práctico y muy pocas especulaciones teóricas que reflejasen con claridad, en el orden de los hechos, la posibilidad de una transición pacífica al socialismo. La tesis general que asume la violencia como uno de los elementos imprescindibles para que pueda producirse una revolución con profundidad suficiente para que las instituciones capitalistas sean abolidas, tanto al nivel de la estructura económica, como en el de la superestructura social e ideológica, parece que se oscurece, o por lo menos pierde su carácter de solución única y exclusiva ante el caso de Chile»⁹. El reto fundamental en Chile era hacer una verdadera revolución sin salirse de la legalidad.

Años después dirá Tierno: «La lección de Chile fue una lección inolvidable, fue una lección muy amarga que nos hizo retroceder a todos en cuanto a nuestras aspiraciones al radicalismo. La fuerza de esta ley de los pronunciamientos militares: dejemos que llegue al caos, porque el caos justifica siempre la intervención para imponer el orden, ha estado siempre en mi conciencia y de ahí nace el continuo consejo de que evitemos como sea y haciendo las concesiones que sean el caos o algo parecido al caos, porque en caso contrario el orden se impondrá después por las bayonetas, cuando ya se carece de fuerza para restringirlas. Todo ello sin mengua de sostener los principios e incluso con rigor, porque el rigor sólo es perverso cuando se practica a destiempo en la práctica»¹⁰.

Tierno predica la moderación, la sensatez y la prudencia a lo largo de toda la transición: «Se puede acelerar la negociación hacia la utopía cuando las circunstancias lo permiten, pero hoy no ocurre así. Hoy acelerar la historia es difícil, sobre todo en un país circunscrito por los intereses atlánticos, lo que todavía hace más difícil el proceso... Debemos mirarnos en Portugal, un buen ejemplo de excesiva aceleración que constituyó, sin duda, un error, que puede desembocar en la destrucción de las propias posibilidades de acelerar. No podemos correr el mismo riesgo... en la izquierda los acontecimientos de Portugal han contribuido positivamente a aumentar las cautelas...»¹¹.

Tierno tenía una conciencia clara del peligro de un pronunciamiento militar contra la democracia española que se estaba construyendo; por ello afirmaba: «...Estábamos convencidos que la destrucción del conato de Estado democrático, que aquella larva, germen o inicial preñadura, perecería en cuanto hiciéramos algo más de lo tolerado». Y remachaba, en inequívoco castellano: «...quedó claro que no era posible la ruptura social ni mucho menos la económica con las viejas estructuras capitalistas. Ni estaba el horno para bollos, ni se podían pedir peras al olmo»¹².

Tierno pretendió articular políticamente el socialismo de izquierda a través del Partido Socialista Popular. El PSP era un partido, si atendemos al análisis de

Raúl Morodo, bifronte. Para unos tenía que ocupar un espacio intermedio entre el PSOE y la UCD, constituyendo una especie de neoazañismo progresista (Morodo afirma que eran la minoría del partido). Para otros (la mayoría), su destino estaba en articular un socialismo autogestionario como partido a la izquierda del PSOE ¹³.

El hecho es que los resultados electorales del 15 de junio de 1977 generan, según el análisis de Tierno, una frustración en los cuadros dirigentes del partido, y una mala situación económica con muchas deudas. Tierno ha relatado, con total sinceridad, su interpretación de aquellos momentos: «En mi mente no entraron razones de patriotismo, porque no me parecía que fuera mejor ni más patriótico ni más conveniente, para el bien de todos, que se fusionasen ambos partidos. Creía entonces, y creo ahora, que un partido como el PSP hubiera podido mantenerse como partido y ejercer una función equilibradora que hacía falta. No quiero iluminarme con el brillo de la púrpura de las buenas y generales intenciones que cualifican el patriotismo» ¹⁴.

A partir de aquel momento la figura de Tierno como líder del socialismo español no difumina. La hipótesis contraria a la unidad se basaba, para Tierno, en lo que denominaba la larga marcha por el desierto, es decir, la supervivencia del PSP como un partido de denuncia, de testimonio y de resistencia al sistema capitalista. Muchos autores se han preguntado qué hubiera hecho Tierno en el caso de haber ejercido el liderazgo dentro del socialismo español, si la opción del PSP hubiera sido la opción socialista mayoritaria en junio de 1977. La constante apelación a la prudencia, a la sensatez y a la moderación, pueden hacer pensar que su práctica política no hubiera sido muy distinta a la que posteriormente llevó a cabo.

La interrogante más importante que podemos hacernos es, sin embargo, la contraria: ¿si el PSP se hubiera mantenido como partido de denuncia, en el ámbito del socialismo de izquierda, hubiera podido el PSOE evolucionar tan velozmente hacia posiciones socialdemócratas?

Pienso que no hubiera sido posible. La postulación constante de principios utópicos alternativos hubiera chocado bruscamente con la defensa posterior de la economía de mercado o de la permanencia en la OTAN por parte del PSOE. El hecho es que aquella unidad que para Tierno supuso una mutilación, hizo imposible verificar esa hipótesis.

Tras los avatares del 28 Congreso socialista su reclusión en la alcaldía le alejará de las polémicas intrasocialistas. Su figura, sin embargo, seguirá siendo un referente importante para la cultura de izquierda. Sus gestos serán siempre observados, aplaudidos o criticados: desde la negativa a recibir a Reagan hasta el apoyo a Nicaragua, cualquier palabra o insinuación acaparará inmediatamente la atención de todos.

El Tierno alcalde, consciente de su impotencia para poder influir en las relaciones de poder, defenderá sus principios e ideales desde la razón municipal como una razón contrapuesta a la razón de Estado. La ciudad aparecerá definida como una reserva pacífica frente al estatalismo belicista ¹⁵.

El agnosticismo. Finitud y trascendencia histórica

El agnóstico vive perfectamente en la finitud y no necesita más. El agnosticismo no es «existencial» y permite integrarse al agnóstico en la finitud de toda perfección. Ser agnóstico es no echar de menos a Dios. Para el agnóstico finitud es una situación en sí misma satisfactoria o que se satisface a sí misma. El agnóstico no entiende la necesidad de una realidad trascendente; en este sentido el agnóstico está perfecto en la finitud, en cuanto que no concibe que haya nada fuera de ella y no lo echa de menos.

Estas afirmaciones contenidas en uno de los libros más interesantes de Enrique Tierno, *Qué es ser agnóstico*, adquieren quizá hoy mayor interés que en el momento en que fueron escritas. En nuestro contexto cultural se dan dos rasgos que hacen que la posición de Tierno sea peculiar. En primer lugar, al haber reducido el socialismo únicamente a una doctrina política ha prescindido de toda concepción del mundo que tenga que servir de base al proyecto socialista. Tierno, por el contrario, insiste en esta obra en la necesidad de apoyar el socialismo democrático en una concepción agnóstica, materialista, del mundo. En segundo lugar, hoy se acostumbra a confundir el materialismo con un puro pragmatismo que olvida todo componente utópico y que hace del agnóstico un hombre «liso», perfectamente instalado no en la finitud, sino en la actual sociedad. Es por ello frecuente que se acostumbre a no hacer referencia al viejo contencioso filosófico entre cristianismo y marxismo, reduciendo la religión a un asunto puramente privado en el que la razón política ni puede ni debe entrar. Tierno, con un respeto exquisito hacia las creencias ajenas, intentó, sin embargo, ahondar críticamente en este contencioso.

Para Tierno el agnóstico no es un hombre «liso». No sufrir la inquietud ni gozar las satisfacciones que supone la idea y la vivencia de lo trascendente, por estar perfectamente instalado en la finitud, no quiere decir que no se sufran las inquietudes y se gocen las satisfacciones que la idea y la vivencia de la finitud tienen en cuanto algo que se agota en sí mismo. El agnóstico vive tranquilo en la finitud. Lo cual no quiere decir que no le alcancen todos los problemas que tienen sentido y significado en lo finito. Las posibilidades de conocer se agotan en lo finito, pero el agnóstico, aunque es un hombre que no tiene fe, no por ello está negado a lo inefable. Puede vivir lo inefable, como ocurre con la vivencia erótica, pero continúa siendo agnóstico, es decir, no deja de estar perfectamente instalado en la finitud.

El agnóstico asentado en la finitud con la firmeza de quien no admite el conocimiento de otra realidad aparece como el hombre sin tragedia teológica, es decir, sin vivir la contradicción entre la vida como destino en el mundo y la vida como destino fuera del mundo. Todo es mundo, es decir, finitud. De aquí la serenidad del agnóstico y su actitud ante la muerte. La serenidad vital viene de aceptar los acontecimientos como hechos que se dan sin ninguna causación ni dirección exterior al mundo. El agnóstico se reconcilia con los sucesos del mundo y su arbitrariedad; al mundo hay que cogerlo como es, pues para el agnóstico «hay lo que hay» y nada ajeno a la realidad finita puede admitirse como existente. El agnóstico instalado en la finitud con su «ajuar existencial» completo no echa nada de menos, tampoco a Dios.

El agnóstico no tiene la ambición intelectual de sobrepasar la vida más allá de las fronteras del mundo, porque el mundo no tiene fronteras, todo es finitud. La

insatisfacción del mundo nunca es insatisfacción que proceda del mundo en cuanto finitud, sino del mundo en cuanto resultado de la manipulación por parte de esa realidad del mundo que llamamos hombre. Estar perfectamente instalados en la finitud no significa darse «buena vida». Los revolucionarios viven la satisfacción de la finitud como sacrificio y esfuerzo, porque el mundo es imperfecto para ellos. Satisfacción quiere decir que es bastante o suficiente, no que lo finito sea de suyo placentero. Pero los revolucionarios saben que cualquier alternativa del mundo se agota en el propio mundo.

El ser agnóstico es, para Tierno, el testimonio de la madurez de la secularización. Una secularización que en Tierno no conduce ni a un inmanentismo panteísta ni a una dimisión ética de cualquier responsabilidad con la especie. El agnóstico debe ser consciente del período histórico que vivimos. Un período de fraccionamiento y de consumo que exige cada día más cosas, pero que a su vez muestra que cuantas más cosas hay, y más se fracciona el mundo, más hondas son las heridas de la tierra y más urgente la protesta, la alarma, ante la amenaza que sufre la propia especie. La finitud, dirá Tierno, reclama un estado de alerta que es casi un estado de alarma. El agnóstico cree en la utopía del mundo, confía en que el conocimiento completo de la finitud lleve a una instalación del hombre en el mundo que coincida absolutamente con las exigencias de la especie. El perfecto estar instalado no implica velar las contradicciones que hacen imperfecto lo finito, aquí y ahora, sino el perfecto estar instalado sólo coincidirá con la perfección objetiva de la finitud, es decir, con la perfección de los hombres. No es posible, por ello, una instalación perfecta en lo finito si se reduce la finitud a un sector de lo finito. Estar de modo perfecto en lo finito significa asumir la finitud global.

Tras este largo resumen que he realizado de algunas de las ideas más importantes de este libro de Tierno, es imprescindible situar su pensamiento en relación con otras producciones de la época. Al menos con dos de las tradiciones que Tierno combate: una, las producciones teológicas de la época; otra, la que denomina Comtismo ingenuo, que no es sino el discurso de los defensores de la ingeniería social.

Vayamos con los primeros. Tierno se sorprendió, probablemente con razón, de que su obra no hubiera encontrado mayor eco crítico en círculos teológicos, pero más aún de que algunos sectores cristianos afirmasen que su posición era muy cercana a la expuesta por Tierno. Para Tierno la coincidencia entre marxistas y cristianos en su común denuncia de los defectos del capitalismo y en la política práctica a desarrollar no admitía duda. Donde Tierno encontraba mayor dificultad era en la coincidencia en el plano de los principios. Tierno pensaba que si lo divino y lo finito se confunden, es decir, si se niega la trascendencia, nadie puede llamarse cristiano, ya que cuando lo inmanente sustituye a lo trascendente, la teología se convierte en un simple decir sobre el mundo. La «admiración» del agnóstico ante el hombre de fe está vinculada a la trascendencia, ya que de las creencias en los componentes de la finitud no hay motivo ni razones para asombrarse.

Algunos de los teólogos críticos con Tierno le reprochaban que siguiese operando con un esquema filosófico muy tradicional, donde la trascendencia aparecía como una tercera sustancia ajena al transcurso del mundo. Era la época en que era frecuente oír hablar de una teología de la esperanza, del mundo de la historia, y por ende de un Dios liberador de la servidumbre humana, como futuro absoluto para el hombre. Tierno criticará agudamente esta concepción al afirmar:

«Si el mundo se perfecciona según transcurre la historia, en cuanto admitimos que Dios está fuera de la historia, como creador del tiempo y de la historia, vincular a El la idea de progreso es acusarle de cruel. Sólo un Dios cruel permitiría el sufrimiento y la muerte impiadosa de seres para que se consiga la perfección a través del tiempo histórico, que sería buena para gozar del no tiempo de la perfección, pero nociva para los condenados a nacer cuando la perfección no se ha alcanzado»¹⁶.

Como vemos, esta posición de Tierno es justamente la contraria de aquéllos que han defendido una «memoria pasionis», como memoria de los vencidos y de las víctimas, a las que ninguna revolución futura podrá redimir y que sólo encontrarán salvación de manos de un Dios trascendente. Tierno insiste, con lucidez, que ello lleva a plantear una vez más el viejo tema de la compaginación entre la miseria humana y la justicia divina. La gran diferencia entre el agnóstico y el creyente está en que el agnóstico sabe que aceptar el mundo supone admitir sus contradicciones, proyectando las esperanzas en la vida. La finitud no es lo divino, lo perfecto en el sentido tradicional. Tierno no defiende ningún tipo de inmanentismo sino que es consciente que la finitud es vulnerable, en un mundo vulnerable, pero no acepta tampoco superponer a las contradicciones inexplicables e insufribles del mundo un Dios que nos permita proyectar la esperanza fuera de la vida.

Fiel a estos principios dirá Tierno, años después, cercana ya su propia muerte: es cierto que el dolorido, el que está sufriendo el dolor, busca el camino de la esperanza que va a dar a un ser superior que organiza el mundo. El dolor parece invitar a la oración como vehículo para encontrar una esperanza, para hallar el gran salvador, el que ha de resolver. Tierno ante esta situación afirmará: «Para el agnóstico que no quiera incurrir en deslealtades es muy claro que incluso el dolor hace más problemática la justicia divina»¹⁷.

Una tercera y última consideración sobre las producciones teológicas de la época remite a la insistencia en subrayar la especificidad cristiana frente al mundo griego y a la experiencia oriental. Esta insistencia en el carácter salvífico del mensaje cristiano será comentada de la siguiente forma por Tierno: «...El retraso histórico en la aparición del cristianismo es difícil de explicar, cuando antes tantas gentes habían sufrido y necesitaban también de consuelo... no se sabe por qué se eligió ese tiempo y por qué se favoreció a esas gentes... como es muy difícil de explicar el hambre desde el punto de vista de la justicia divina...»¹⁸.

La posición de Tierno es, como decía, sumamente interesante porque, siendo profundamente materialista, ello no implica sucumbir a la pura trivialización. El que Tierno no participase de las preocupaciones de un Horkheimer por lo «totalmente otro», o de un Benjamin por la memoria de los vencidos, no implica que quedase apesadado por la finitud parcial. Ni que olvidase los problemas del conjunto de la especie. Consciente hasta el final de que no podía confiar en ningún tipo de Dios tapa-agujeros, ni siquiera en los momentos de mayor dolor, cuando la muerte ya no era música celestial (como afirmaba en aquella conversación de 1969) sino realidad bien próxima, su preocupación, hasta el final, estará en evitar que el agnosticismo se disuelva en un escepticismo radical. Su inquietud se cifrará en constatar que la crisis de las iglesias ha conducido a una situación en que hay pocas instituciones que conserven el espíritu, y despierten en la gente la conciencia de la contradicción.

El agnosticismo de Tierno, que no piensa que el vacío de nuestra cultura se puede llenar con otro Dios, sino con otros hombres, porque sólo otros hombres pueden hacer otro mundo, topa con una situación al final de su vida en que ya nadie se hace preguntas finalistas, con un túnel en el que las ideas están en crisis.

Tierno y la cultura de izquierda

Si el primer interlocutor del agnosticismo, del materialismo, del marxismo de Tierno es el cristianismo, el segundo es el comtismo ingenuo, la ingeniería social. Javier Muguerza ha recordado la definición que Tierno daba de sí mismo como hombre utópico y pragmático. «Tierno era un hombre de principios y esto quiere decir no tanto un hombre que es fiel a rajatabla a esos principios y practica a machamartillo su observancia —lo que en política por suerte o por desgracia no siempre es hacedero—, cuanto un hombre que en la tesitura de tener que ponerlos eventualmente entre paréntesis, no por ello deja de rendirles culto...», en una situación, como define Muguerza, en la que «...el culto a los principios ha cedido el paso en nuestros días, dentro de cualesquiera organizaciones políticas, al simple imperativo de ganar elecciones sin otra finalidad aparente que la instalación en la maquinaria administrativa, como si su dominio constituyese un bien en sí»¹⁹.

El culto de Tierno a los principios sobresale en una cultura de izquierda donde la mala secularización, la Ilustración trivial, amenaza con reducir la política a un asunto de negocios. Para Tierno la identificación con el sentido del mundo, la necesidad de perfección histórica, parte de que el mundo es nuestra salvación en cuanto es nuestro único posible hogar. La finitud es nuestra casa, dirá, es nuestra casa para siempre, pero repitámoslo: no la finitud parcial, escindida, del hombre enajenado, sino la finitud global, de una Especie que logra rectificar en su relación con el medio.

El marxismo en cuanto concepción del mundo ofrece, para Tierno, esencialmente tres cosas: un método para interpretar las estructuras sociales, una ética que está en el fondo de cualquier problema político y un motor utópico que permite dar un sentido práctico a la vida²⁰.

Es importante subrayar el papel de la ética. «Hay que rehacer la célebre frase diciendo que para el marxismo, detrás de cualquier problema social o político, hay un problema ético. Es cierto que las relaciones de producción condicionan la moral, pero es igualmente cierto que las aspiraciones morales, la ética como perfección de la convivencia, define a su vez la protesta frente a las relaciones de producción»²¹.

La ética como protesta frente a las relaciones de producción, como estado de alerta, de alarma, evita que la finitud genere un hombre liso, sin entusiasmo. Tierno insistirá, repetidamente, en la necesidad de contar con una tabla de valores con la que uno pueda identificarse. En esta misma Revista, en un artículo escrito en 1981, «Socialismo y Revolución»²², señalará que en los países europeos occidentales la elevación del bienestar ha eliminado la conciencia de clase explotada, destruyendo cualquier contenido mesiánico. Los partidos socialistas se han convertido en partidos pequeño-burgueses, en partidos socialdemócratas, en partidos reformistas, para ellos no tiene sentido practicar ni defender la revolución. Dentro de las zonas más desarrolladas del planeta sólo caben reformas lentas y pacíficas que conduzcan a una mayor igualdad. ¿Cómo se puede en estas condi-

ciones ser revolucionario? La defensa de la ética marxista, dirá Tierno, es el camino que queda para mantener los principios revolucionarios.

Como veíamos en la primera parte de este artículo, el socialismo de izquierda de Tierno combinaba el utopismo con el pragmatismo, el culto a los principios con la conciencia nítida del peligro de cualquier aceleración del proceso histórico. Quizá ello explique que el pensamiento de Tierno tenga hoy más actualidad que en el momento de ser formulado. Hace diez años no cabe duda que las esperanzas de la izquierda, en el proceso del socialismo del Sur de Europa y en la aparición del eurocomunismo, hacían que se viviese la expectativa de una quiebra de la política de bloques como algo deseable y factible en nuestro país.

En ese contexto la lectura que Tierno hacía, por ejemplo, de los sucesos chilenos, no era particularmente atractiva para muchos sectores de izquierda. Su insistencia en evitar, al precio que fuese, la ley de los pronunciamientos militares, sonaba a abdicación de los objetivos socialistas. Su revolución, sin violencia, era un híbrido utópico-pragmático de difícil digestión. Eran momentos en que el reformismo revolucionario estaba a la orden del día y nadie se recataba, en los textos, en hablar de álgidos e inexorables momentos de polarización social si se quería real y efectivamente dar la batalla final al capitalismo y al imperialismo, batalla que pasaba, indeclinablemente, por una lucha en el interior de los propios aparatos coercitivos. ¿Qué socialismo revolucionario era el que quería huir de esos momentos inexorables, haciendo concesiones al enemigo de clase? La crítica a las posiciones no violentas de Tierno hacía que su «revolución cultural» fuera simplemente enjuiciada como cosa de poca monta.

¿Qué pensar hoy, cuando aquel socialismo autogestionario y neutralista ha quedado olvidado en la noche de los tiempos, y nos encontramos en plena hegemonía neoliberal y atlantista? La respuesta me parece que es evidente. Hoy cualquiera que vuelva a leer a Tierno descubrirá que fueron sus palabras extraordinariamente premonitorias:

«Vine a señalar al PSOE como un partido socialdemócrata... se trataba simplemente de dejar claro un hecho que a mi juicio estaba necesariamente vinculado al PSOE en su nueva etapa. En efecto, el tiempo ha demostrado que era y es así, quizá porque la sociedad española no admite otra cosa, quizá porque la clase dirigente no permite que la sociedad española tenga otra cosa, en cualquier caso en Europa ocurre lo mismo.» «...El socialismo revolucionario y beligerante en el seno de la sociedad capitalista significa una contradicción que de modo casi inexorable se resuelve por la violencia. Criterio que hoy no es ejercitable ni moralmente elogiabile, salvo como reserva utópica para un momento mejor»²³.

Hoy aquella revolución cultural, esa reserva frente al sistema capitalista de Tierno adquiere una inequívoca actualidad por su carácter excepcional. Tierno no quiso, como hemos visto, mantener contra viento y marea una organización socialista minoritaria que defendiera principios antitéticos con el actual sistema dominante. Al renunciar a lo que denominó la travesía del desierto, su capacidad para influir en las relaciones de poder, o en la elaboración doctrinal del socialismo español, quedó sensiblemente amortiguada. Ello no le impidió, sin embargo, aparecer como alguien que mantenía cierta austeridad, cierta sobriedad, que sabía guardar distancia. Tierno, en medio del túnel, aparecía como una luz que de vez en cuando iluminaba.

Su defensa de una educación de los instintos, por ejemplo su reivindicación de la ascética en aquellos setenta, sonaba a lenguaje clerical, hasta el punto que Goytisolo escribió un artículo mordaz sobre las tribulaciones de «Fray Tierno». En la época del deslumbramiento por la alta sociedad de tantos dirigentes socialistas, aquella austeridad que sustentaba su ascética figura recibiría, por el contrario, el aplauso generalizado de la cultura de izquierda. Efectivamente, nunca fue hombre que defendiera la promiscuidad valorativa, lo cual en momentos de travestismo ideológico como el actual no es poco.

El último Tierno, el Tierno alcalde, gusta de distanciarse del poder establecido: «Yo no estoy en el poder. Mi poder es el de un alcalde que administra los bienes y servicios de sus vecinos, luchando por la igualdad material entre los distintos sectores sociales, los distintos barrios, pero estoy al margen del poder, no me gusta ni el poder ni el mando, prefiero tener autoridad, crédito moral»²⁴. Su eficacia municipal indudable, verificada constantemente por el gran cariño del pueblo de Madrid hacia su figura, no le impedirá iluminar desde el túnel, manteniendo vivas sus antiguas preocupaciones y rindiendo culto, como decía Muguerza, a sus principios. En estas preocupaciones últimas por despertar la conciencia ciudadana sobresale, en el último Tierno, su gran preocupación por el problema de la paz en el mundo actual. En uno de sus últimos escritos dirá: «...el hecho es que la sociedad está hirviendo y una gran parte de este hervor se traduce en fervores, en fervores pacifistas y fervores ecologistas que son nobilísimos y que no tendrían que estar marginados por los partidos políticos. Hay que despertar la conciencia de la gente respecto de la contradicción que significa, por poner un ejemplo, el científico, muy frecuente en Norteamérica —yo lo he visto— que sale de su casa, besa al niño, dice adiós al jardinero, besa a su mujer, ha dejado la segadora hace unos momentos, por la mañana temprano, en un jardín cuidado... en fin, ese científico que es un hombre de paz, pero que se va al laboratorio a trabajar en una bomba atómica. Hay que poner al descubierto esas contradicciones. Trabajar por la bomba atómica, trabajar por la destrucción universal, es imperdonable»²⁵.

Este Tierno último no olvida, sin embargo, que esa protesta ética, ese despertar la conciencia, tan necesario en una época en que aparecen debilitadas las instituciones que se ocupan del espíritu, no puede circunscribir el trabajo por la paz a movimientos ciudadanos, sino que tiene que realizar una lucha en el ámbito internacional y en el ámbito de las instituciones. Las instituciones a las que corresponde decidir o no sobre la paz son los altos poderes, son los Estados. Estados que hoy son un peligro para los hombres. Son un peligro porque hoy los Estados violan las normas internacionales, se introducen en la soberanía de otros Estados, bombardean en una expedición de castigo. ¿Cómo se ha llegado a esta situación? La respuesta de Tierno no puede ser más clarificadora: «...el mantener cada día más activa una industria, que es una industria de guerra, que está haciéndose la dueña de los recursos naturales de los países, ha llevado a los grandes Estados, concretísimamente a los Estados Unidos, a no poder defender la paz sino a tener que sostener la guerra o la amenaza de la guerra como un pretexto para que continúe la gran producción. Esa enorme cantidad, esos millones de americanos que viven de la maquinaria bélica y que producen continuamente armas destructoras que se venden a otros países. Quiere esto decir que el problema de la guerra en sentido colectivo, y por tanto la consecución de la paz, radica en un cambio del sistema»²⁶. Mientras el sistema sea el sistema, la paz estará siempre en peligro.

Acontecimientos como el bombardeo norteamericano sobre Libia, la financiación de los «contra» en Nicaragua, o el caso omiso que ha hecho la Administración Reagan de la condena del Tribunal de La Haya, no hacen sino reflejar que, desgraciadamente, las palabras de Tierno también en este punto fueron premonitorias: o se cambia el sistema o la paz estará siempre en peligro. Para esa lucha por cambiar el sistema ya no podremos contar, sin embargo, con la palabra y la acción de Enrique Tierno. Nuestra condición finita, y por tanto vulnerable, hace que el perecimiento sea una característica de nuestro ser, pero ello no evita que desde entonces nos encontremos todos un poco más solos en el túnel.

- ¹ La entrevista con S. Paniker fue recogida en una recopilación sobre artículos y entrevistas con Tierno denominada *España y el socialismo*, Túcar ediciones, Madrid, 1976, págs. 168 a 189.
- ² Entrevista citada en la nota anterior, págs. 178-179.
- ³ Entrevista con P. Urbano en la revista *Epoca*, semana del 2-8 de septiembre de 1985, pág. 19.
- ⁴ Entrevista citada en la nota anterior, pág. 20.
- ⁵ E. Tierno Galván: «El socialismo de izquierda», en el volumen *Democracia, Socialismo y Libertad*, Ediciones Paulinas, 1977, pág. 187.
- ⁶ E. Tierno Galván: Conferencia sobre la revolución cultural en el Ateneo de Madrid en octubre de 1976, incluida en el libro *Carta a un amigo sobre don Enrique Tierno Galván*, de Antonio Gómez Rufo, Ediciones Antonio Machado, Madrid, 1986. El texto de la conferencia abarca las páginas 107 a 129. La definición sobre el marxismo como concepción del mundo está en la página 110.
- ⁷ Discurso de Enrique Tierno Galván en el «III Congreso del PSP». Túcar ediciones, Madrid, 1976, pág. 13.
- ⁸ E. Tierno Galván: «El socialismo de izquierda», en *Democracia, Socialismo y Libertad*, páginas 191-192.
- ⁹ E. Tierno Galván: «La legalidad como alternativa», en la revista *Triunfo*, 3 de marzo de 1973.
- ¹⁰ E. Tierno Galván: *Cabos Suelto*s. Editorial Bruguera, Barcelona, mayo de 1981, págs. 466 y 467.
- ¹¹ E. Tierno Galván: *Democracia, Socialismo y Libertad*, pág. 68.
- ¹² E. Tierno Galván: *Cabos Suelto*s, pág. 524.
- ¹³ R. Morodo: *Por una sociedad democrática y progresista*. Ediciones Turner, Madrid, 1982. «Sobre el PSP: partido aglutinante y partido puente en la oposición democrática», págs. 169 a 199.
- ¹⁴ E. Tierno Galván: *Cabos Suelto*s, págs. 686 y 687.
- ¹⁵ Se pueden consultar los artículos de M. Ortuño, «La dimensión internacional del municipio», y de M. Mella, «Ciudad y Estado en el pensamiento del profesor Tierno», en el núm. 71/72 de la revista *Sistema* dedicado a Tierno.
- ¹⁶ E. Tierno Galván: *Qué es ser agnóstico*. Tecnos, tercera edición, Madrid, 1982, pág. 99.
- ¹⁷ E. Tierno Galván: *Yo no soy ateo*, Editorial Alandar, Madrid, 1986, pág. 16.
- ¹⁸ E. Tierno Galván: *Yo no soy ateo*, pág. 6.
- ¹⁹ J. Muguerza: «Mis encuentros con Tierno», núm. 71/72 de la revista *Sistema*, pág. 204.
- ²⁰ E. Tierno Galván: «Reflexiones sobre el proceso de mi evolución intelectual». Revista *Sistema*, núm. 3, pág. 13.
- ²¹ Artículo citado en la nota anterior, pág. 13.
- ²² E. Tierno Galván: «Socialismo y revolución», en *LEVIATAN*, núm. 3, octubre de 1981, págs. 97 a 105.
- ²³ E. Tierno Galván: *Cabos Suelto*s, pág. 645.
- ²⁴ Conversación en la revista *Epoca*, 2-8 de septiembre de 1985, pág. 16.
- ²⁵ *Yo no soy ateo*, pág. 16.
- ²⁶ La conferencia pronunciada en el Centro Cultural Conde Duque, con motivo del año internacional de la paz, ha sido reproducida por Gómez Rufo en su libro *Carta a un amigo sobre don Enrique Tierno Galván*, Ediciones Antonio Machado, Madrid, 1986, págs. 38 a 46.

REFLEXION SOBRE LA GUERRA CIVIL

Juan Marichal

análisis y debate



6

«La historia es la ciencia de lo que sólo acontece una vez», solía reiterar un historiador francés, hoy casi injustamente olvidado, Charles Seignobos (1854-1942). Se oponía así, no sin ironía, a la expansión de la sociología por los campos de las ciencias históricas, y a todo lo que representarían sus propios alumnos, los jóvenes historiadores del grupo fundador de la famosa revista *Les Annales*. Uno de ellos, el recientemente fallecido Fernand Braudel, recalca a su vez que «no hay ciencia sino de lo general», en tajante respuesta a Seignobos. Estas dos concepciones de la historia, aunque aparentemente incansables, pueden conjugarse para el estudio de la mal llamada guerra civil española de 1936-1939. Porque ese magno suceso histórico fue «algo que sólo ocurre una vez» (para repetir palabras de Seignobos), ya que no puede ser equiparada a las guerras internas del siglo XIX —las guerras de constitucionales y carlistas— ni es tampoco concebible que se produzca un conflicto semejante en el futuro de España. De ahí que sea imperativo —en este año aniversario— prestar cuidadosa atención a todas las característi-

cas específicas, absolutamente irrepetibles, de aquella gran tragedia ibérica y episodio histórico universal: y las jornadas que ahora concluyen han sido un ejemplo del nuevo temple de los historiadores españoles que prestan a la guerra de 1936-1939 la atención aludida.

Mas también ha de situársela —como predicaba Braudel— dentro de un vasto contexto histórico, mostrando su pertenencia al movimiento, casi geológico, que se inicia con la revolución francesa de 1789 y culmina con la primera guerra mundial y sus dos más visibles consecuencias, la revolución rusa de 1917 y el predominio nazi, desde 1933, en los países germánicos. Tanto en un caso como en el otro —métodos de Seignobos y de Braudel— quedaría considerablemente atenuado todo lo que se refiere al supuesto «carácter español», como factor verdaderamente importante entre las dizque «causas» de la catástrofe de 1936. Aunque esta atenuación sería resistida, sin duda, tanto por algunos historiadores españoles como por los foráneos dedicados a la historia española.

Con lo cual no propongo que se elimine enteramente el factor «racial» (como lo llamaba el presidente Azaña) al considerar la guerra española de 1936-1939, dado que, como decía mi maestro Américo Castro, «el pueblo español es el más engarabitado de Europa». O para ponerlo en términos menos castizos y más precisos, podemos recordar los que empleó Metternich: «el pueblo más singularmente constituido de toda Europa». De ahí que los instrumentos intelectuales requeridos por la investigación histórica de tan magno y complejo suceso español sean más numerosos —y, sobre todo, más delicados— que en otros episodios análogos de otros países. Y es oportuno indicar, aquí, que veo en España un considerable impedimento para el trabajo de los historiadores españoles sobre su patria, y en particular sobre la guerra que aquí nos ha congregado: me refiero a la ausencia, en España, de investigadores dedicados a la historia de otros países europeos, y de otras partes del mundo. El gran Alexis de Tocqueville insistía en que el historiador francés que no traspusiera, intelectualmente, las fronteras de su país, no podría entender, ni por supuesto explicar, la Gran Revolución de 1789. Precepto que el mismo Tocqueville cumplió, al iniciar sus trabajos, con su famoso estudio de 1835 sobre la joven democracia norteamericana.

Para lo cual no bastaría, claro está, familiarizarse mediante la lectura con la historia de la Europa transpirenaica y la de otros continentes. Deberían emprenderse en España las investigaciones de dichas historias, cuya carencia ha sido lamentada, al menos desde hace setenta años, por Américo Castro y otros pensadores españoles. Porque sólo cuando en España haya historiadores verdaderos de Francia o Inglaterra, Rusia o Alemania —cuyos nombres figuren en las bibliografías internacionales— podrá acometerse, en este país, una historia de la guerra de 1936-1939 que esté a la altura intelectual exigida por la magnitud de aquella inmensa tragedia.

Es manifiesto, sin embargo, que los jóvenes historiadores españoles han aportado en los últimos años trabajos sobre la guerra española de patente categoría internacional. En suma, someto a ustedes que conviene tener presente —para el estudio de la guerra española por españoles— aquel precepto de Unamuno que podríamos formular así ahora: «sólo podrán descubrir España los españoles europeizados».

Tengamos presente, además, que la guerra de 1936-1939 es uno de los asuntos históricos españoles con mayor bibliografía internacional, superada solamente

por los escritos sobre Colón y sus descubrimientos, o por la Inquisición. Así he tenido con frecuencia dos sentimientos contrapuestos, en la gran biblioteca universitaria de Harvard, al recorrer la sección dedicada a la guerra española: la alegría de comprobar, visualmente, la atención universal generada por la guerra, la melancolía de no poder leer yo, en sus lenguas originales, multitud de libros y artículos que, probablemente, no serán nunca traducidos al español. Esto es, la guerra española ha sido contemplada —y en verdad, *vivida*— desde múltiples perspectivas planetarias, y puede así un lector español conocer aspectos que no serían los usuales de la bibliografía en español. Se han traducido, como todos sabemos, libros de autores de lengua inglesa o francesa —cuya contribución al estudio de la guerra española es indispensable conocer— pero escasean notablemente las traducciones del ruso, del alemán, del italiano y de muchas más lenguas. Con lo cual se pierden —para el lector e incluso para el estudioso español— las perspectivas singulares aludidas.

Falta, sin embargo, en la generalidad de los autores foráneos el *tono* que es más propio del historiador de su propio país, aunque no abunde todavía mucho entre españoles: me refiero al sentimiento de humildad intelectual y emocional ante la inmensidad de la tragedia española. Es casi normal, diríase, que un eminente historiador francés —en un libro reciente sobre la guerra española— sentencie que sus orígenes fueron exclusivamente españoles y, sobre todo, que se sienta muy satisfecho de haber explicado, con marcada seguridad casi pontifical, lo sucedido en España entre la proclamación de la Segunda República y el final de la contienda bélica en 1939. Pero para los nacidos en este país es imposible adoptar un tono análogo al del aludido historiador francés, pues la enormidad de la tragedia española impide tal sentimiento de seguridad intelectual. Además, ¿cómo podría hoy un historiador creer que se puede explicar rotundamente el episodio más trágico de toda la historia de España?

De ahí que sea tan necesaria la humildad —al menos entre españoles— al considerar la guerra de 1936-1939, la humildad que reconoce la imposibilidad de *explicar* todo lo sucedido en esta península hace medio siglo. Se me objetará, indudablemente, que el historiador debe aspirar a formular explicaciones racionales, a fijar precisamente los hechos, sus causas y consecuencias. Y, por supuesto, esa labor investigadora es indispensable para la reconstrucción del pasado español: pero la guerra de 1936-1939 podría verse como una tragedia antigua en la cual las voluntades individuales cuentan muy poco ante *la fuerza del sino* (para decirlo con los términos del poeta romántico). Fue algo semejante a una explosión volcánica que a todos envolvió: que como tal no puede nunca decirse que tuviera su exclusivo origen en tierra española. Juan Ramón Jiménez llamó a la guerra de 1936 una «guerra forastera», y acertaba el gran poeta andaluz al apuntar el carácter extraño, casi ajeno, del conflicto español. Y el presidente Azaña —en *La velada en Benicarló*— afirmó: «el estallido atroz que despedaza a España y sus ejemplos de crueldad son fruto del contagio venido de fuera». Señalaba así Azaña con razón que la guerra española debería verse como una consecuencia más del clima de violencia transpirenaico generado por la primera guerra mundial y sus prolongados y variados efectos.

El ver así la guerra española como una fractura sísmica cuyo epicentro (si se me permite la analogía geológica) estaba más allá de las fronteras nacionales, tendría una beneficiosa consecuencia para los españoles: dejarían de verse como un pueblo que tiende a autoinmolarse, con regularidad, en contiendas fratricidas, y en cuyo carácter nacional está arraigada la violencia. Y llevaría también a

los historiadores jóvenes a seguir el consejo dado por Tocqueville ya mencionado antes. Un joven español que hiciera hoy trabajos sobre la Alemania de la República de Weimar y el ascenso del nazismo podría luego relacionar lo sucedido en Alemania con la catástrofe de 1936 en su patria. Al hacerlo —al trasponer las fronteras lingüísticas e intelectuales de España— los jóvenes historiadores españoles contribuirían, también, a lo que podría llamarse «desactivación emocional» del estudio de la guerra española. Y me permitiré proponer ahora que vendría reducir las conmemoraciones públicas de la guerra, sin, por ello, dejar de seguir estudiándola en pequeños congresos de estudiosos como el que ahora concluye. Porque, en verdad, el recordar la guerra no es, necesariamente, el mejor modo de enseñar el amor a la libertad que deben aprender los españoles más jóvenes. Es oportuno, aquí, recordar lo que dijo un gran argentino del siglo pasado, Juan Bautista Alberdi, a su rival, el presidente Sarmiento, a propósito del libro de éste sobre el tiranuelo Facundo Quiroga: «al hacer la biografía de un tirano no ha enseñado usted a amar la libertad». Palabras que me parecen particularmente pertinentes para la hora actual de España.

Por supuesto, alguien podría recordarme la tan utilizada cita del que fuera, a principios de este siglo, una de las tres magnas estrellas de la Universidad de Harvard entonces, el español Jorge Ruiz de Santayana, conocido en la historia literaria y filosófica de lengua inglesa como George Santayana. La cita es: «los que no conocen la historia están condenados a repetirla». Expondré mis dudas sobre la certeza del aforismo de Santayana, acudiendo a una máxima del gran cómico mexicano «Cantinflas», que me parece más verdadera: «la falta de ignorancia». (Dicho sea de paso, es más que probable que «Cantinflas», o el autor de sus textos filmicos, haya simplemente recogido de la tradición popular tal máxima ejemplar: «la falta de ignorancia».) Que en estos días ha venido otra vez a mi pluma, al volver a mi memoria algo que viví aquí, hace medio siglo, y no muy lejos de este lugar: me permitiré retrotraerme brevemente a aquellos días de mayo de 1936, posteriores a la elección de don Manuel Azaña a la Presidencia de la Segunda República. Residía yo aquí, en casa de mi tío Domingo Pérez Trujillo, fundador, en 1920, de la primera Agrupación Socialista de Canarias, la del Puerto de la Cruz, y diputado en las Constituyentes republicanas. Aunque apartado entonces (como otros «prietistas») de la actividad política de su partido, era visitado, frecuentemente, por políticos tinerfeños que acudían a Madrid para pedir ayudas gubernamentales en materias insulares. Desde fines de mayo hasta mediados de junio de 1936, la mayor parte de aquellas visitas tenían un solo y común objetivo: conseguir que el gobierno de Casares Quiroga, y, muy especialmente, el presidente Azaña, comprendieran que la presencia, en Canarias, del general Franco era harto peligrosa para la República. Recuerdo, en particular, a un destacado miembro de Izquierda Republicana en Tenerife, el doctor Feliciano Jerez Vaquero, que acudió a ver a mi tío, tras una audiencia con don Manuel Azaña. Al exponerle el doctor Jerez los temores de los republicanos tinerfeños, respecto a lo que observaban de las actividades del general Franco, el presidente le contestó, casi sarcásticamente, que seguramente los canarios eran dados a fantasías tropicales o quizá, más sencillamente, el miedo les hacía ver «visiones». Y aquí se aplicaría la máxima del gran «Cantinflas», «la falta de ignorancia». Porque cuando Azaña —tras la victoria electoral de febrero de 1936— tomó el poder e hizo destinar al general Franco a Tenerife, actuó en tal decisión su prodigioso conocimiento de la historia española del siglo XIX: a los generales potencialmente levantiscos se les *confinaba*, por así decir, en el mando de tropas en Canarias y quedaban inutilizados. Pero si Azaña conocía muy bien la historia española, no tenía apenas noción —como sucedía a la inmensa mayoría de los españoles peninsulares entonces— de lo que eran las Islas Canarias, que estaban mucho *más en el mun-*

do (digamos así) en 1936 que esta misma capital. Recordemos que había comunicación aérea frecuente con Alemania. Y, dicho «a lo Cantinflas», quizá un tantito de ignorancia histórica hubiera sido más beneficioso para el presidente Azaña y para España.

Me apresuro, sin embargo, a señalar cuán vano, y cuán falso, sería el acusar a una figura como Azaña (o a cualquier figura histórica) por haber tomado tal decisión, o tal otra. Y conviene aquí, también, repetir lo que mi maestro de la Universidad de México, el historiador Edmundo O’Gorman, solía decirnos a sus alumnos: «No hay que regañar a los muertos». Y con su fino humor mexicano, añadía: «porque no pueden contestar». Aunque, por supuesto, lo que O’Gorman apuntaba era análogo a lo que había indicado el gran pensador e historiador italiano, Benedetto Croce, cuando consideraba cuán vanamente fantasiosos son los reproches a los protagonistas del pasado. Esto es, Croce critica a los historiadores que practican lo que más tarde Ramón Gómez de la Serna llamaría «novelas superhistóricas», las novelas del *si* hipotético. Así, Croce da el siguiente ejemplo: «si en julio de 1914 los gobernantes alemanes y de otros países hubieran sabido dominar sus nervios, la primera guerra mundial no se habría desencadenado». Croce no desdeña, por supuesto, el tener en cuenta el estado de ánimo de los gobernantes europeos en el verano de 1914, ya que, sin duda, tienen importancia los factores personales en una gran crisis histórica. Mas, al prestarse a la elucubración del hipotético *si*, el historiador (apunta Croce) hace, entonces, lo que sucede en las vidas individuales cuando los seres humanos repasan sus vidas: «*si* yo no hubiera conocido a una determinada persona, o *si* no hubiera cometido un cierto error, el curso de mi vida habría sido diferente». Y Croce observa que al hablarlos, así, a nosotros mismos, estamos persuadidos de que nuestra personalidad ha sido una entidad constantemente idéntica a sí misma. Escribía Croce:

«No parece comprender entonces que la persona que somos, en el momento que hacemos el juego biográfico aludido, es la persona que, justamente, conoció a determinada persona, cometió *aquel* error, y todo ello se sumó a otras experiencias, a otros sentimientos y a diversas fantasías que están ahora en el *si* retrospectivo.»

Ese juego es aún más absurdo, observa Croce, en la historia de una colectividad humana, refiriéndose al disparatado libro de un distinguido filósofo francés —*Ucronía*, de Renouvier— que se propuso narrar el desarrollo de la civilización europea, «no como ha sido sino como hubiera podido ser». Y tal gratuita fantasía histórica muestra también, según Croce, cuán falso es el concepto de *causa* en la historia humana: «no me cansaré de señalar que el concepto de *causa* es ajeno a la historia porque es un concepto de las ciencias naturales y sólo en éstas debe emplearse». Ningún historiador, hasta ahora, mantenía Croce, ha podido enlazar causas y efectos, aun para un pequeño episodio histórico, en grado equivalente al de los fenómenos físicos o biológicos.

Todo lo señalado por Croce es particularmente aplicable a la historia de la guerra española, y concuerda con lo que antes apuntamos sobre la utilidad de la concepción histórica de Braudel: que han de situarse, siempre, los protagonistas y sucesos históricos, en un vasto contexto. Se debe aspirar, en suma, a ver la guerra española sin sentimientos de culpabilidad colectiva —y sin reproches a la supuesta culpabilidad de algunos protagonistas principales. Con lo cual no se pretende hacer una especie de «borrón y cuenta nueva», que exoneraría a figuras obviamente condenables por los principios humanitarios de nuestra civilización. Y en esta cuestión es muy pertinente —para el estudio de la guerra española— el

pensamiento del gran historiador católico inglés, Lord Acton. «La historia no puede ser genuinamente científica y objetiva a menos de ser esencialmente ética», escribía Lord Acton, para oponerse a la que él llamaba «la canonización del pretérito histórico». Es más, para Lord Acton, un historiador que justificara implícitamente un crimen —explicándolo en relación a las circunstancias de lugar y tiempo— lo perpetuaría a través de la historia, e incluso lo estaría cometiendo él mismo en el papel.

Precisaba Lord Acton:

«Cometer un crimen es algo que sucede en un momento, es algo excepcional. Defenderlo con una explicación histórica es algo perenne y revela una conciencia más perversa que la del criminal.»

Hay, sobre todo, para Lord Acton, un principio ético fundamental que los historiadores deben tener constantemente presente, el absoluto respeto a la vida humana. Así, escribía Lord Acton:

«La vida humana es lo archisanto. Al que vierte sangre humana es fácil caracterizarle y condenarlo. Es lo que resuelve, tajantemente, cualquier cuestión... Cuando el historiador tiene entre manos a un patente asesino —sea Dantón o Robespierre— puede estar seguro de sí: el juicio es inmediato.»

¿No cabría decir —a propósito de la guerra española— que convendría evitar la que Lord Acton llamaba «canonización del pretérito», y sentar así que debe condenarse, tajantemente, a los más destacados asesinos?

Mas la guerra de 1936-1939 es ya un episodio que podríamos llamar *cerrado* de la historia universal. En la Universidad de Harvard, por ejemplo, se empezará a ofrecer este próximo otoño un curso sobre la guerra española en el programa obligatorio de historia universal moderna sobre grandes sucesos tales como la Reforma Protestante, la Guerra de los Treinta Años, la Revolución Francesa, la Revolución Rusa. Y se ha incluido la guerra española porque la bibliografía sobre ella es lo suficientemente cuantiosa para poder permitir a los estudiantes el trabajar sobre múltiples cuestiones concretas de orden universal, consideradas en sí mismas y no solamente como «cuestiones españolas». Recordemos también que en los Estados Unidos —donde la comunidad intelectual se identificó con la defensa de la Segunda República— los *días de mayo* de 1937 produjeron una marcada hostilidad entre importantes escritores norteamericanos que nunca se atenuó. Un libro como el *Homenaje a Cataluña*, de Orwell es, así, un texto clave en la historia intelectual de los Estados Unidos, historia en la cual la guerra española representa un capítulo significativo del siglo XX. Del mismo modo que, en un grado equivalente, la novela de Malraux, *La esperanza*, y otras obras de diversos autores franceses, muestran la importancia en la historia intelectual francesa de la guerra española. Resumiéndolo brevemente: la guerra española es un episodio ineludible en la historia intelectual (y política, por supuesto) de muchos países.

Este interés universal en la guerra española produce casi indignación entre algunos españoles, como he tenido ocasión de observar en días recientes. Un eminente catedrático (y muy querido amigo) me decía, no hace mucho, que ese interés era semejante al generado por la llamada «España de Carmen», por la imagen de España vista como la tierra de la violencia y de las costumbres un tanto pintorescas. Añadía mi buen amigo que no se presentaba, en cambio, atención sufi-

ciente fuera de España a la década de la transición, y suponía que tal falta de interés se debía al carácter «normal» de la España democrática. Tras señalarle que, en verdad, la transición española ha sido estudiada en un número ya apreciable de libros periodísticos, de tesis doctorales y otros trabajos análogos, apunté lo que antes he indicado: que la guerra española *está ya* en la historia universal, y que aunque esto desagrade a muchos españoles, también deberían adoptar una actitud semejante a la de los estudiosos foráneos. Había quizá también en mi amigo una actitud semejante a la que manifestaba el gran escritor alemán-suizo Hermann Hesse, cuando contrastaba las épocas con intensa historia universal y las épocas (las mejores, humanamente hablando) en «que menos se advierte la historia del mundo». Refiriéndose a la última Gran Guerra, escribía Hesse:

«Nuevamente nos hemos acostumbrado a vivir durante algunos años, no una vida corriente y privada, no una época humana y una existencia humana, sino *la historia del mundo*, y, nuevamente, como en todos los llamados grandes tiempos, hemos sentido, ante la historia del mundo, un gran horror y repugnancia.»

Mas que la historia mundial irrumpiera en España en el verano de 1936 tan violentamente —y tan dolorosamente para la mayoría de los españoles— ha de verse también como una consecuencia de la situación periférica de España, en la historia europea, desde finales del siglo XVIII, pese al considerable esfuerzo realizado por muchos españoles para incorporar a su patria a la cultura universal entre 1898 y 1936.

Y aquí entramos en un aspecto muy singular de la guerra española, en cuanto cercenadora del extraordinario esplendor cultural de la España del período mencionado que constituye su segunda «Edad de Oro». Porque no hay duda de que, en 1936, la cultura española estaba en el punto *más alto* de toda su historia: desde la matemática a la física, desde la filología a la filosofía, desde la música a la arquitectura, España había alcanzado niveles de creación original equiparables a los transpirenaicos. De ahí también que la guerra española tuviera, tan pronto, una excepcional resonancia en la comunidad universitaria internacional. Dos ejemplos de sucesos muy conocidos ilustran el contraste entre las guerras locales españolas del siglo XIX y la guerra de 1936-1939: las muertes de Larra y García Lorca. El suicidio de Larra, en 1837, sin duda, fue vivido por sus coetáneos españoles como uno de los efectos del conflicto bélico interno, motivado por la sublevación carlista. Mas su muerte no tuvo significación alguna fuera de las fronteras de España o de la lengua castellana. Muy al contrario, la víctima sacrificial que fue Federico García Lorca se convirtió de inmediato en uno de los símbolos trágicos de la cultura universal del siglo XX. Pero sucedió así porque Federico García Lorca era, antes de su muerte, uno de los principales poetas de su tiempo, mientras que Larra y los demás escritores españoles de la generación de 1937 no habían alcanzado la universalidad que tenían los románticos franceses o alemanes. En suma, España no era, en 1936, culturalmente hablando, un país atrasado, y esto dio al conflicto bélico iniciado aquel año uno de sus rasgos más específicos.

Hace algunas semanas un reseñador de un libro colectivo sobre la guerra española aludió, negativamente, a la pretensión de uno de los colaboradores de mantener que en la España de 1936-1939 la cultura se hallaba sólo en una zona, la republicana. Mas, ¿puede negarse lo muy patente? Ciertamente es que una parte significativa de los intelectuales españoles se expatrió ya en 1936, constituyendo en Francia e Inglaterra lo que se llamó «Tercera España». Para la comunidad intelectual internacional no había, sin embargo, dudas sobre el contraste entre una zona bélica regida por militares golpistas y la otra representada simbólicamente

por un gran escritor, el presidente Azaña, y, más tarde, también por un catedrático de fisiología, el doctor Negrín. Fue así, en 1936-1939, mucho más verdadero que en la época de Larra, lo que él llamó «el conflicto entre el sable y la palabra». Mas el representante de la palabra no era, tampoco, un escritor convencional: porque quizá haya sido el presidente Azaña uno de los jefes de Estado más singularmente representativos de la tragedia padecida por su patria. Y, sobre todo, no es aventurado afirmar que ningún Jefe de Estado ha escrito, durante un conflicto bélico interno, un libro como *La velada en Benicarló*.

Me permitiré, ahora, hacer un breve inciso de orden personal, porque revela (creo) el cambio de muchos lectores españoles de Azaña desde 1939. Leí *La velada en Benicarló* —en su excelente traducción francesa— en París, pocos días después de aparecer en las librerías, hacia mediados de septiembre de 1939, ya empezada la guerra, entonces sólo europea. Y debo confesarles que el muchachito español, interno en el Liceo «Michelet» de París, se sintió tristemente defraudado por el texto del presidente Azaña. Aquellas páginas melancólicas correspondían más bien al triste otoño naciente de 1939 que al recuerdo de la combatiente España republicana que guardaba, con fervor, aquel estudiante de bachillerato. Es más, sentía que el presidente Azaña había hecho un flaco servicio, con su libro, a todos los españoles que soñaban en tierra extranjera con un futuro renacer de la democracia en su patria. Impresión (puedo añadir) que vi luego corroborada en conversaciones con personas mayores de la comunidad republicana residente entonces en París. Mas al iniciar mis trabajos de recopilación de las obras completas del presidente Azaña —hace ahora un cuarto de siglo—, y leer nuevamente *La velada en Benicarló*, la vi como un extraordinariamente singular testimonio histórico, que debería considerarse como un valioso legado de los españoles que padecieron enorme tragedia colectiva. Y está de más decir cuál fue mi emoción al ver representada en el otoño de 1980 —el año centenario del presidente Azaña— *La velada en Benicarló* en la versión teatral de José Luis Gómez y José Gabriel y Galán. (Me permitiré indicar de paso que, según José Luis Gómez, el efecto del fallido golpe del 23 de febrero de 1981 fue muy visible para la obra de Azaña: el público que colmaba, hasta entonces, cada noche el Teatro de Bellas Artes, empezó casi inmediatamente a disminuir.) *La velada* no es, sin embargo, una obra militante, como todos ustedes saben.

Recordemos que Azaña consideró prácticamente concluida su función política al iniciarse el conflicto bélico en el verano de 1936. Y es sabido que estuvo a punto de dimitir en agosto de 1936 —tras los asesinatos de la cárcel Modelo— y abandonó Madrid a fines de septiembre, trasladándose a Barcelona, donde permaneció hasta mayo de 1937, en una especie de torre-vigía, por no decir de refugio melancólico. Y allí, en Barcelona, escribió, en unas dos semanas, *La velada en Benicarló* que concluyó en los llamados «días de mayo» de 1937, cuando la residencia presidencial estaba asediada por anarquistas y grupos afines. En el prólogo escrito en Francia, en mayo de 1939, Azaña justificaba su libro en nombre del ejemplo de independencia de espíritu que él representó, durante las que llamaba «jornadas frenéticas». Y definía lo que, según él, la República había representado: «La República no tenía por qué embargar la totalidad del alma de cada español, ni siquiera la mayor parte de ella, para los fines de la vida nacional y del Estado». Muy al contrario, prosigue Azaña, «había que desembargar muchas partes de la vida intelectual y moral, indebidamente embargadas, y oponerse a otros embargos de igual índole, pedidos con ahínco por los banderizos». Concluyendo Azaña que la finalidad de la República era adelantar la civilización en España. La guerra marcó, manifiestamente, un retroceso de la civilización en Espa-

ña: o mejor dicho, el comienzo brutal de un largo retroceso. Mas los españoles que dieron sus vidas en defensa de la República constituyeron un ejemplo para los demás europeos, cuando tuvieron finalmente que enfrentarse a la barbarie nazi. Y con aquellos españoles la Europa democrática tiene todavía pendiente una deuda de reconocimiento a su trágico heroísmo.

Octavio Paz ha dicho (en el *Laberinto de la soledad*) que él no podrá olvidar nunca las caras de los españoles humildes que él vio en la España republicana de 1937. Tampoco podré olvidar yo al campesino extremeño que un día de 1937 me dijo —estudiaba yo entonces el quinto de bachillerato en un instituto valenciano cuyos locales habían sido transformados parcialmente en hospital militar—: «Sabes, nosotros luchamos por la libertad del mundo». Podría observarse, por supuesto, que aquel campesino estaba repitiendo lo que su comisario político o la radio (era analfabeto) le habrían dicho. También podría decirse que el campesino extremeño era el español mesiánico de siempre. Pero había en él algo enteramente nuevo: el ánimo de entrega generosa, la profunda conciencia de su dignidad individual. Y debo confesar que recuerdo a aquel campesino —herido grave— en aquella mañana valenciana de 1939, cuando oigo a españoles hablar de la guerra con una especie de masoquismo que se complace en acentuar la brutalidad del ser humano.

Raymond Aron recordaba un pensamiento común a Nietzsche y a Paul Valéry: «Para las comunidades humanas, como para los individuos, el olvido no es menos esencial que la memoria». Quizá sea mejor para la España actual olvidarse de la guerra: lo cual no quiere decir, por supuesto, que deben los jóvenes historiadores dejar de investigar y reconstruir la historia de aquella tragedia. Pero, de manera general, me sigue pareciendo, como apunté antes, que es necesario sobre todo enseñar el amor a la libertad. No creo, por otra parte, concebible que pueda haber una nueva guerra civil en España, del mismo modo que es inconcebible una guerra entre Francia y Alemania: la Europa de nuestro tiempo es una realidad muy distante de todos los nacionalismos destructores del pasado y más aún de todas las «guerras de religión o de ideología». Por eso, en gran medida, todo lo sucedido en España, desde 1975, ha relegado crecientemente la guerra de 1936-1939 a su lugar verdadero, al de la historia universal.

Benedetto Croce señalaba que, con frecuencia, en un rincón del mundo se ve más claramente el drama histórico de una época, por ofrecer ese lugar menos complejidades que una zona central. Quizá la España de 1936-1939 fue ese «rincón» iluminador de una época —de su drama fundamental: y también podría decirse que, en la vida como en la literatura, un héroe trágico lo es, *no* por haber fracasado o triunfado, sino por haber representado, encarnado, todas las tensiones interiores de un mundo humano. La España de 1936-1939 fue ese héroe trágico que pide, sobre todo, que los españoles se consideren libres del terrible orgullo de creerse marcados para siempre por un sino fratricida. Convendría recordar, ahora, las palabras del general De Gaulle —tras haberse negado a visitar el Alcázar de Toledo:

«Todas las *guerras* son malas porque significan el fracaso de toda política. Pero las guerras civiles son imperdonables, porque la paz no nace cuando la guerra termina.»

Estas palabras se aplican particularmente a la guerra española, ya que, en efecto, los vencedores no quisieron dar a España la paz tan anhelada por la mayoría de los españoles.

Uno de los conceptos más universalmente valiosos del pensamiento de mi maestro, Américo Castro, en sus largos años de exilio, fue el de *lo historiable*. Que podría cifrarse en lo que subsiste en la vida de un pueblo como una constante incitación a adelantar en el proceso de humanización de la vida humana. Y así podríamos preguntarnos sobre la guerra española: ¿no convendría acentuar en la historia del conflicto de 1936-1939 todo lo que lleve a desarrollar en los jóvenes la fe en el futuro pacífico de su patria? En conclusión, nada podrá nunca quitar a los españoles el dolorido sentir dejado por aquella magna catástrofe, mas puede atenuarlo el tener presente que los españoles que actuaron siguiendo las normas de la civilización humanitaria sobrepasaron, con creces, a los entregados al odio, la violencia y la crueldad.

Este texto fue presentado al Seminario «Reflexiones sobre la guerra civil», organizado por la Fundación Pablo Iglesias en el mes de mayo, y que formará parte de un libro colectivo con el resto de ponencias y contribuciones al Seminario.

¿QUIEN TEME AL SOCIALISMO?

Entrevista con Alec Nove

Alec Nove. Se diría el nombre de un *baronet* inglés, pero se trata en realidad de la forma anglizada de Aleksander Novokovski, profesor de economía en la Universidad de Glasgow, Escocia. Judío ruso, hijo de mencheviques emigrados a Inglaterra, Alec Nove se formó en la London School of Economics, Universidad de orígenes «fabianos» de la que es profesor honorario. Conocedor profundo de la realidad soviética, Nove ha dedicado una larga serie de libros a este tema, desde *The Soviet Economy* y *Economic History of USSR*, escrita en colaboración con Nuti, hasta el reciente *Political Economy and Soviet Socialism* (1980). En su última obra, *The Economics of Feasible Socialism*, intenta dibujar, con contornos precisos, una postura socialista en sentido estricto, basada en una combinación «eficaz» de planificación, mercado y democracia política. Una «tercera vía» que tiene el mérito de la claridad, no ya como alternativa al modelo socialdemócrata —«que mantiene», según Nove, «su validez»— sino como una opción política legítima y «posible».

—*En su libro hay cuatro capítulos dedicados a la crítica de las economías socialistas. La parte constructiva, en la que propone usted un proyecto de socialismo posible, se reduce a unas pocas páginas, si bien Włodzimierz Brus reconoce que se trata de un núcleo de socialismo concreto. ¿A qué obedece esta desproporción entre crítica y proyecto en la composición de su libro?*

—Hay que aclarar dos puntos: en primer lugar, no se trata de un análisis comparativo de sistemas. Si mi libro se refiriese a la economía, y sobre todo a la teoría económica occidental ortodoxa, cabrían perfectamente las críticas que ha formulado usted. Sin embargo, como señalo en el prólogo, mi libro no es un ataque contra el socialismo comparado con el capitalismo moderno, dado que también este último padece males de todos conocidos. Es cierto que la crítica del socialismo real abarca dos tercios de la extensión de mi libro, que dedica la parte restante tanto a la crítica del marxismo tradicional, en lo que concierne al socialismo, como a la búsqueda de una alternativa. Pero para buscar una alternativa es neces-

rio extraer conclusiones de la experiencia de los diversos países que se dicen socialistas. En segundo lugar, mi libro parte de las teorías marxistas ortodoxas. Por un lado está el sistema soviético; por otro está lo que han afirmado Marx y, tras él, algunos marxistas. Lo que Marx ha afirmado no constituye una base sólida para la crítica del socialismo existente.

—*Del que existen multitud de variantes. En su libro, por ejemplo, apenas se habla de China.*

—Si saliese una segunda edición dedicaría un capítulo entero a China, donde han sucedido en estos dos últimos años muchas cosas que requerirían un amplio tratamiento.

Pero más allá de las variantes —la autogestión yugoslava, la experiencia húngara, el modelo soviético, etc.— se dan aspectos comunes de los que es posible extraer ciertas lecciones válidas para cualquier tipo de socialismo. Y algunas de ellas son negativas: no hay que proceder a una colectivización forzada de la agricultura, se corren serios peligros de dominio de la sociedad por parte de una jerarquía político-económica poderosa, de un partido único, etc. Pero la situación ideal no existe. Como dice uno de los mejores economistas húngaros, Kornai, todo cuanto se hace provoca efectos ventajosos e inconvenientes. Se trata, pues, de reducir las desventajas, pero no existe un sistema carente de ellas. Se abole el mercado: ahí están los peligros de la jerarquización, la burocracia, la rigidez administrativa, etc. Se mantiene el mercado, y aparecen todos los riesgos de distorsiones posibles e incluso previsibles. Se trata, pues, de evitar en lo posible ambos peligros, sin pensar en soluciones perfectas que la vida real no admite.

—*¿En qué medida han realizado el proyecto marxiano las revoluciones socialistas?*

—En mi opinión, aquel proyecto no era realizable. Al ejecutarlo en algunos aspectos se han creado contradicciones con otros aspectos del propio proyecto. En Marx, el proyecto socialista prevé que la planificación sustituya a la economía de mercado, la moneda, el libre cambio. Los partidos socialistas han probado a realizarlo. Pero el mismo proyecto marxiano postula la eliminación de la burocracia, del dominio de los dirigentes sobre los dirigidos, etc. Así, para superar las consecuencias de la ausencia de mercado y del libre cambio, se ha creado una poderosa jerarquía, con la pretensión de imponer una planificación consciente de la actividad económica. Las consecuencias de todo ello, sobre todo con Stalin, le habrían parecido nefastas al propio Marx.

—*Entonces, podemos afirmar que algunas consecuencias negativas son inherentes al propio modelo marxiano.*

—Sí y no. El modelo, como hemos visto, es contradictorio. Sin querer justificar el terror estalinista, cuando se ha intentado realizar el proyecto marxiano se ha llegado a resultados imprevistos y no deseados respecto a la tabla de finalidades contenidas en el propio modelo.

Algunos resultados negativos dependen ciertamente del modelo. Fijémonos en el pleno empleo. Se trata, evidentemente, de un bien. Pero la escasa disciplina de trabajo, de la que tanto se habla en la Unión Soviética, ¿no es acaso una de sus consecuencias? ¿Es preferible entonces el paro en aras de una mayor disciplina? A nadie le gusta el desempleo, que por otra parte es también un despilfarro. Pero cuando hay pleno empleo, y en consecuencia una cierta tendencia a que los clien-

tes hagan cola, nadie se ocupa mucho de los deseos y las demandas de los clientes. Son ejemplos simples, pero se podría buscar otros.

—*Desde el punto de vista teórico, ¿está o no basado en los instrumentos de análisis de Marx el sistema de planificación de los países socialistas?*

—Lo está y no lo está. Se utilizan las categorías de la economía política de Marx. Pero ésta está contenida esencialmente en *El Capital*. De ahí, por ejemplo, la dificultad de adecuar la teoría del valor de Marx a los problemas de la fijación de precios en el socialismo. Según Marx, el sistema de precios estaba destinado a desaparecer en el socialismo tras una etapa de transición. Ahora bien, la teoría del valor, que se adapta a una economía de mercado, es en el fondo una teoría del equilibrio. En el modelo capitalista, ya sea analizado por la escuela de Chicago o por Marx, si se produce un desequilibrio se corrige por medio de los precios. Precios y beneficios, por decirlo así, tienden a restablecer un equilibrio que, en realidad, nunca llega a restablecerse. Pero este mecanismo, que Marx conocía, no existe en el socialismo soviético, dado que los precios son fijados oficialmente y no varían según la oferta y la demanda. Una variación según este último criterio sólo puede ser realizada con pleno conocimiento por los órganos de planificación. Pero en tal caso los precios no expresan, por sí mismos, el valor de uso. Se da pues una contradicción inesperada entre el valor de uso, o la valoración de los productos por parte del usuario, y el precio fijado oficialmente. En este punto la teoría de Marx no sirve de la menor ayuda, y se hace necesario buscar algo distinto.

A menudo, la crítica contra el sistema social soviético, formuladas por quienes comparten una orientación marxista, intentan señalar una clase dominante. La clase dominante, en el capitalismo o en el feudalismo, la constituyen los grandes propietarios. En la URSS no hay nada de eso. El Politburó no es un consorcio de grandes propietarios. Una vez más nos encontramos en este caso ante un fenómeno nuevo para el que no valen las viejas categorías de interpretación.

—*Dentro de los países socialistas se da un máximo de mercado en Hungría y un mínimo en la URSS. ¿Qué papel positivo puede adjudicarse al mercado en las economías socialistas?*

—Operar sin el mercado supone crear una burocracia hipertrofiada que después resulta difícil reducir. Hay, sin embargo, algunos sectores económicos en los que la producción está muy diversificada, en los que se da un gran abanico de posibles modelos —ya se trate de calzados o de herramientas—, en los que existen millares de posibles variantes que se adaptan a las necesidades. Sin un mercado, tal adaptación resulta bastante dificultosa.

—*En pocas palabras, ¿qué entiende usted por mercado?*

—El hecho de que la producción y la distribución se hagan por contrato, ya sea directamente entre el proveedor, el productor y el consumidor, ya sea a través del intermediario del comercio. Superponer una planificación desde arriba a este tipo de mercado que acabamos de describir comporta pérdidas económicas y consecuencias sociales que, en mi opinión, no son enteramente deseables.

—*En la economía planificada sin mercado todos los trabajadores, según Seluckii, son a un tiempo productores y consumidores. Como productores responden a los objetivos de la planificación, como consumidores piensan en satisfacer sus necesidades materiales a través de la demanda efectiva. ¿Cómo se resuelve esta contradicción?*

—El consumidor es productor, y viceversa. Pero ello sólo es cierto en el vértice, por decirlo así, de una imaginaria pirámide gigantesca que lo engloba todo. En la concepción marxista, consumidor y productor entran en estrecha colaboración y se intercambian todos los bienes necesarios. Pero sabemos que las cosas no son tan sencillas, que existe la división del trabajo y de las responsabilidades dentro de esa pirámide. Un productor de camisas y un enseñante que consuma las camisas producidas por el primero forman parte de la misma sociedad, tanto más si el hijo del productor de camisas asiste a la escuela, pero en definitiva son figuras tan separadas como en cualquier otra parte.

Hay sectores en los que esta disgregación simple del mercado no es aplicable. Sectores en los que se realizan enormes economías de escala, como el eléctrico, el petrolífero, etc. y en los que en todas partes, tanto en Italia como en Estados Unidos, predominan gigantescas unidades de producción, a veces multinacionales. Y no está mal que así sea, pues se trata de sectores que lo requieren así. Cuando hablamos de mercado e imaginamos pequeñas unidades productivas autónomas no podemos aplicar la misma imagen a una central eléctrica, por más que la electricidad haya de ser provista según las necesidades.

—*¿Quiere decir que ante ciertas economías de escala e inversiones de enorme cuantía el mercado no es suficiente?*

—Por lo que respecta a estos últimos sectores debe mantenerse una planificación central. No sólo planificación, pero si se deja sólo el mercado se puede llegar —también en Occidente— a resultados negativos. Hay sectores macroeconómicos en los que se asiste a peligrosas fluctuaciones, a eventuales crisis, a tendencias inflacionistas. Por otra parte hay también sectores que no deberían quedar enteramente sometidos al mercado, como la sanidad o la conservación de los bienes ambientales. Por último, siempre se piensa en la producción, pero no podemos olvidar la calidad de vida. Y muy a menudo beneficio y calidad de vida no están, como es notorio, necesariamente de acuerdo uno con otra.

—*En suma, ¿el mercado es válido sólo allí donde se da el máximo de diversificación productiva?*

—Digamos que en esos sectores presenta el máximo de ventajas. Pienso, como ya dije, en el sector del calzado, de las máquinas-herramientas, de los restaurantes, de los servicios de todo tipo, de la agricultura, donde la tierra puede emplearse para producir una infinidad de cosas. En suma, donde se da el máximo de diferenciación entre producción y consumo. En esos sectores se producen grandes inconvenientes sin la libertad de mercado. Tomemos el caso de Hungría. Ya sé que no todo está allí en la mejor situación, pero la agricultura funciona bien, debido sobre todo a que no hay consignas obligatorias ni una planificación de la producción vinculante. En Hungría, aunque se trate de cooperativas, las explotaciones agrícolas pueden por una parte adaptarse a los intereses y los deseos de sus miembros —cosa que teóricamente es posible también en la URSS pero que de hecho no sucede— y por otra son libres de elegir la producción que más les conviene.

—*Se ha mostrado usted crítico ante el modelo de autogestión yugoslavo. ¿Comparte la opinión de Sweezy de que hay demasiada libertad de mercado en Yugoslavia?*

—En Yugoslavia no hay planificación, como ha señalado también Sweezy. Aunque no siempre esté de acuerdo con él, en este punto tiene razón. Sin planifi-

cación el mercado queda sin regulación, con todos los riesgos del *laissez faire*. No comparto la fe en el automatismo benéfico del mercado, en sus versiones modernas de la Escuela de Chicago o de Friedman. No comparto esa opinión respecto al mundo occidental y por las mismas razones no tengo confianza en un *laissez faire* autogestionario o de otro tipo. Hay un economista húngaro, Tibor Liska, que se ha convertido en el Friedman de los países de la Europa del Este. Liska no quiere restaurar el capitalismo, pero piensa que las empresas estatales pueden funcionar según un modelo ideal de *laissez faire*. Si se acepta ese modelo pueden surgir desequilibrios, como de hecho ha sucedido en Yugoslavia.

—*¿Pero no cree que existen también particularidades históricas de Yugoslavia mezcladas con los problemas económicos?*

—Por supuesto, hay que distinguir siempre entre las debilidades del modelo autogestionario en general y la realidad de Yugoslavia, un país compuesto por seis repúblicas, con sus nacionalismos. Esta situación produce deformaciones que nada tienen que ver con la economía ni con la autogestión. A eso hay que sumar la política del gobierno. En algún momento las tasas de interés han sido la mitad que las tasas de inflación. Ahora bien, las inversiones que se producen en el mercado, con una tasa de interés negativa, tienen efectos distorsionantes, y ciertamente no se puede afirmar que esas tasas de interés distorsionantes sean conformes al principio de la autogestión.

—*¿Cree, en suma, que la autogestión es un modelo aceptable, practicable, o no?*

—La autogestión es una idea muy seria, aunque siempre se corren dos peligros: el primero, que los obreros no participen en la gestión de las explotaciones, aún teniendo derecho a ello.

—*¿No existe también el riesgo de que los obreros se opongan al progreso técnico?*

—No lo creo, pues justamente la autogestión les garantiza que no perderán el puesto de trabajo, ya que las decisiones dependen de sí mismos y no de los capitalistas. El otro problema de la autogestión radica en las diferencias de rédito. Si los réditos dependen del buen funcionamiento de la unidad autogestionada, se entra en contradicción con el principio de a trabajo igual salario igual.

—*¿Puede poner algún ejemplo?*

—Yo puedo conducir un camión de Belgrado a Zagreb con cinco toneladas de mercancía, y un colega mío, que trabaja en otra empresa y hace la misma labor, puede ganar un 50 % más que yo por razones que no tienen nada que ver con mi trabajo. ¿Es justo ésto? También es cierto que eso sucede en las economías de mercado, como en la autogestionaria yugoslava, no ya a causa del obrero, sino por cualquier razón imputable a la dirección de la empresa. Es un problema que se plantea en cualquier sistema de autogestión y en cualquier sistema de mercado. Ello no significa que la autogestión sea mala. Muy al contrario: participación significa también manifestación de libertad en el trabajo y responsabilidad, aunque este último aspecto no se tenga muy en cuenta.

—*En los sistemas socialistas vemos un abanico de situaciones intermedias entre dos polos opuestos: autogestión y planificación central. En Alemania oriental el modelo de planificación soviético funciona mejor que en otras partes. ¿Cómo*

explica esa superioridad de un modelo copiado de la Unión Soviética, donde funciona mucho peor?

—Está copiado sólo en teoría. En realidad, los alemanes orientales lo han adaptado, y los soviéticos no pueden hacer otro tanto, porque hay una diferencia de fondo entre ambos sistemas de gestión de la economía. La economía germano oriental está centralizada, sí, pero en base a *cartels* de productos. Me explico: los responsables de los *Kombinat* de un determinado sector productivo deben responder de la casi totalidad de la producción de bienes que están bajo su control. Ciertamente eso no supone aún una economía de mercado, pero se dan responsabilidades muy claras. En la URSS el modelo germano oriental no es aplicable, pues la producción está dividida, de forma muy compleja, entre casi todos los ministerios. Tomemos por ejemplo los frigoríficos. En Alemania oriental hay un *cartel* que se ocupa de la producción de todos los frigoríficos, en tanto que en la URSS las competencias sobre este sector se reparten entre una docena de ministerios que controlan empresas que producen multitud de cosas, incluyendo frigoríficos.

—¿Esa es toda la diferencia?

—Hay una más, pero no querría caer en el etnocentrismo. Los rusos saben muy bien que los alemanes tienen una mayor capacidad organizativa. Cuando pregunté a representantes polacos por qué el modelo germano oriental era mejor que el suyo, me respondieron: «No es eso, es que nadie ha inventado todavía nada para hacer que los alemanes se olviden de trabajar». Tales consideraciones valen no sólo para Alemania oriental, sino también para Estonia o Letonia. Allí la agricultura, por ejemplo, funciona mejor que en otros lugares, y ciertamente no porque la tierra sea más fértil. Se trata de pequeñas repúblicas bálticas que tienen una tradición de trabajo asiduo y metódico que no tiene parangón en otros lugares. Un colega mío de Glasgow, por ejemplo, ha escrito un artículo muy serio sobre la actitud tradicional hacia el trabajo de los luteranos. Por otra parte, basta observar el paisaje agrícola de Estonia, ordenado y floreciente, para notar el contraste que se da con el de Rusia, muchos menos próspero, apenas se cruza la frontera de esa pequeña república báltica. La URSS no es ya la Rusia zarista, pero las tradiciones siguen haciendo pesar sus efectos económicos. Esto, por otra parte, es válido igualmente para Japón. Los japoneses tienen una actitud hacia el trabajo completamente distinta de la nuestra. Son variables que es muy difícil encerrar en modelos matemáticos y económicos, pero que no dejan de tener su peso.

—El modelo de socialismo posible que usted perfila se parece mucho a un modelo real, el húngaro. Sólo falta la democracia política...

—No sólo falta la democracia política, sino también la autogestión, salvo en el sector cooperativo. La economía húngara, por otra parte, no atraviesa un momento fácil actualmente. Hay muchas tensiones que se refuerzan, por así decirlo, recíprocamente. No se sigue verdaderamente la lógica del mercado. Kornai, como otros economistas húngaros, hace notar que no existen quiebras. Cualquier director de empresa sabe que en el fondo, en caso de desastre financiero, el Estado acudirá en su socorro. Falta pues la lógica de la competencia y existen muchas unidades productivas casi monopolistas.

Hungría es un país pequeño que depende en gran medida del comercio exterior y que tiene muchos problemas con los cambios internacionales: los precios, tras la subida del petróleo, han jugado en contra de las exportaciones húngaras. El mercado occidental se ha hecho muy difícil. Y también les resulta difícil la ob-

tención de muchos productos, ya se trate de petróleo o de bienes de consumo de buena calidad. No sólo es difícil el socialismo en un solo país, como se decía en época de Trotski, también lo son las reformas en un solo país, pequeño por añadidura, como Hungría. Se puede buscar un paralelo con la Francia de Mitterrand, que ha intentado llevar a cabo una política contra el paro, pero que después ha tenido que reducir sus entusiasmos reformadores.

Si todos los países de Europa occidental hubiesen seguido su misma política quizá hubiesen obtenido mejores resultados. Lo mismo puede decirse respecto al conjunto del Este y a Hungría.

—*¿Cómo se puede conciliar la democracia política, o un sistema pluralista, con la planificación centralizada?*

—En un artículo que escribí hace tiempo consideraba que la planificación centralizada presenta algunos aspectos contrarios a la idea misma de un sistema multipartidista. Hoy he cambiado en parte de opinión. No creo que se pueda establecer un determinismo económico: planificación centralizada-dictadura-partido único. Y viceversa. La dictadura puede convivir, como de hecho sucede en muchos países, con un sistema de mercado. Basta recordar América Latina, Turquía, etc. Esto vale también para los países socialistas. Se puede tolerar el libre cambio y encarcelar disidentes...

Pero creo que si se adopta un sistema planificado se tienen ventajas para que la economía no se desorganice cada vez que se celebran elecciones. Si se hacen planes quinquenales hasta fin de siglo, es necesaria una continuidad. En el mundo capitalista dicha continuidad está asegurada en gran medida por las grandes empresas privadas. Aún cuando a veces lo hacen mal, como ha señalado Leontief, con las incertidumbres que se viven, las tasas de intereses fluctuantes, etc., los ejecutivos típicos occidentales se preocupan sobre todo de lo que puede ocurrir en los próximos cuatro años. Tienen pues un horizonte limitado.

Si se considera además que un ejecutivo americano cambia de empresa cada cinco años por término medio —al contrario que un directivo japonés de Mitsubishi, por ejemplo, que permanece toda la vida—, la inestabilidad es bastante considerable.

—*¿Y qué sucede en Rusia?*

—Se da un notable contraste entre la larga vista del centro y la miopía de los ejecutores. Es interesante, por ejemplo, lo que ha sucedido con el petróleo. *Pravda* denunció las catastróficas consecuencias derivadas de una neta disminución de la producción de petróleo, debida al hecho de que las empresas que ejecutaban las directrices de la planificación lo hacían sin tomar las precauciones necesarias para los objetivos del aprovechamiento energético. Tenemos por un lado inversiones de largo aliento, con la mirada puesta en el futuro, por parte de los organismos de planificación central, que se estrellan contra la miopía de los ejecutores.

—*¿Pero si se introducen elementos de mercado en la sociedad socialista, no se corre el riesgo —como temen marxistas como Sweezy— de que el mercado tienda después a superar el socialismo, con su lenta acción corrosiva en la historia?*

—No cabe duda. Siempre existen peligros. Si alguien ejerce un poder, puede abusar de él. Poder y abuso marchan juntos. He leído en *Pravda*, que en una re-

pública soviética han sido condenados por corrupción una sesentena de profesores. Peligros existen siempre.

—*¿Y no existe un riesgo de competencia entre el sector privado y el sector público regulado por la planificación central?*

—Yo no pienso en un modelo en que el mercado funcione sólo en el sector privado y la planificación sólo en el público. Habla usted de competencia entre ambos sectores, pero ésta puede producirse muy bien dentro del mercado. Por ejemplo, en el húngaro: hay taxis municipales (sector público) y hay taxis privados; ambos se hacen la competencia. Basta ir a Budapest para verlo. A menos que se crea que todo lo privado es más eficiente, en cuyo caso más vale olvidarse del socialismo.

Ciertamente, la existencia de una competencia real o potencial es de gran importancia, ya provenga de otras unidades estatales o del sector cooperativo o privado. Digo potencial porque toda la mejor literatura occidental subraya su importancia. También los monopolios en Occidente están siempre bajo la amenaza de la competencia. Un economista húngaro me inquirió: «¿Por qué ponéis límites al sector privado en vuestro modelo? ¿Quizá porque pensáis que sin dichos límites prevalecería?». Y yo contesté: «No, apruebo esos límites por definición». Siempre hay ciertas potencialidades. Una de ellas, que en ciertos sectores una unidad productiva privada tenga un enorme éxito. Cito siempre el ejemplo de Apple respecto a las computadoras. Puede darse un parecido fulgurante desarrollo de una empresa en el sector de mercado de una economía socialista. Pues bien, no se trata de cortar su desarrollo. Simplemente, dicha empresa cambiará de categoría. Los propietarios se convertirán en gestores, directores. Ojalá que de una cooperativa o una empresa autogestionada, si se hace aún más grande.

—*Pero hay un doble peligro en ese modelo socialista. Uno, la tendencia del sector privado a expandirse irresistiblemente. Otro, que al fijar límites a la expansión, si ésta se mantiene, pueden surgir tentaciones represivas. Y eso puede poner en peligro la democracia política.*

—No, porque en mi modelo cualesquiera que sean los límites se imponen de manera democrática. Evidentemente, el hecho de que algo sea impuesto por votación no significa que contente a todos; cuando se vota un aumento de impuestos, quienes han de pagar más no se muestran alegres. Así, hasta leyes o reglamentos relativos a planificación regional pueden impedir a algunos hacer fortuna. Pero si se hace por la vía democrática, los límites así impuestos pueden ser cambiados. Como explico en mi libro, si se da un riesgo de desempleo, los límites no han de referirse necesariamente al número de personas que trabajan, sino que podrán referirse al valor del capital. Depende de las situaciones.

—*¿Su modelo de socialismo posible es una crítica a los límites y las insuficiencias del modelo socialdemócrata? Hay que considerar, sin embargo, que dentro del modelo socialdemócrata existen muchas vertientes. Por ejemplo, tenemos en un polo a Austria, con dos tercios de la economía bajo control público, y en el otro a Suecia, donde el sector público apenas alcanza el 5 %.*

—Los socialdemócratas gobiernan desde hace tiempo en Suecia. Tienen un buen modelo, contra el que nada tengo que oponer. El modelo que usted llama sueco o austríaco es el único modelo occidental cuasi socialista aceptable por una base electoral mayoritaria. Un electorado que no desea en absoluto dar unos pasos más hacia un socialismo integral. Acepto pues de buen grado el modelo so-

cialdemócrata. Mantiene su validez a pesar de sus eventuales dificultades. Es una opción posible. Simplemente, no considero que Suecia sea una república socialista, y no sólo porque tenga un rey. Como tampoco considero a Austria un país socialista, si bien no es ésta un razón para criticar a ambos países. Preferiría de hecho vivir en ellos que no, pongamos, en Rumanía. No se trata pues de formular una alternativa a las insuficiencias del proyecto socialdemócrata. En mi libro he tratado simplemente de perfilar un modelo socialista en sentido estricto, sin erigirlo a través de una crítica de las experiencias socialdemócratas. Puede preferirse un modelo socialdemócrata e incluso un modelo liberal, capitalista. Si se han elegido democráticamente no hay en verdad motivo para criticarlos.

—*¿Cuál puede ser el motor de la transición del socialismo «real» al socialismo?*

—La revolución política puede afectar a la economía, y viceversa, pero no existe un determinismo rígido. Quien desea una democratización de estos países, es partidario de una reforma económica, pues, aunque no exista un nexo directo entre ambas, la última facilita las cosas. Y eso introduce transformaciones moleculares que pueden facilitar el paso a la democracia política. He dicho que «pueden», pues no ocurre necesariamente así, dado que a veces los dirigentes temen que su poder se vea amenazado.

—*¿Pero qué empuja hacia tal reforma?*

—A mi juicio, ya no la opinión pública, que no comprende bien estos problemas, sino sólo el mal funcionamiento del sistema. Si el sistema respondiese a las órdenes y los deseos de los dirigentes no habría motivos para modificarlo. Pero no es así. Por ejemplo, se desea un progreso técnico acelerado y, por el contrario, se tiene un crecimiento ralentizado. Gorbachov dice que es necesario actuar, reformar. Cuando Gorbachov dice que «la suerte del socialismo en el mundo y el futuro de nuestro país dependen en buena parte de nuestra capacidad de hacer funcionar bien la economía», se ve claramente que no se trata de presiones desde abajo, sino todo lo contrario.

Al igual que en China, por otra parte. Después de todo, las reformas chinas de Deng no han sido pedidas por la opinión pública, sino que vienen de arriba. También la reforma húngara ha sido impuesta —y la población quizá la ha aceptado— con decisiones tomadas desde arriba. Así pues, desde arriba tiende a verse mejor hasta qué punto lo que sucede no está conforme no ya con un abstracto principio de ciencia económica, sino incluso con los propios deseos de los dirigentes, que se ven deformados por el sistema. Cuando no es posible obtener zapatos de una determinada calidad y forma, como sucede en algunas ciudades, no se debe a un deseo de los dirigentes. Estos, en realidad, desearían lo contrario, pero no son capaces de garantizarlo.

En mi opinión es la lógica misma del sistema la que exige que cambie. El hecho de que el sistema se desarrolle crea nuevos problemas. El sistema estalinista tuvo antaño una cierta lógica interna; hoy día está superada. Y la idea de tal contradicción no es totalmente antimarxista.

Mario Baccianini

© Mondoperaio.

Traducción: José M.ª Moreno.



CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS

Arbor

Las páginas de ARBOR están abiertas para tender un puente entre "las dos culturas", para propiciar la comunicación entre las ciencias y las

humanidades, y en especial para promover el estudio, la reflexión, el debate y la crítica en torno a la ciencia y la técnica, a sus dimensiones sociales, culturales, educativas, políticas, históricas y filosóficas.

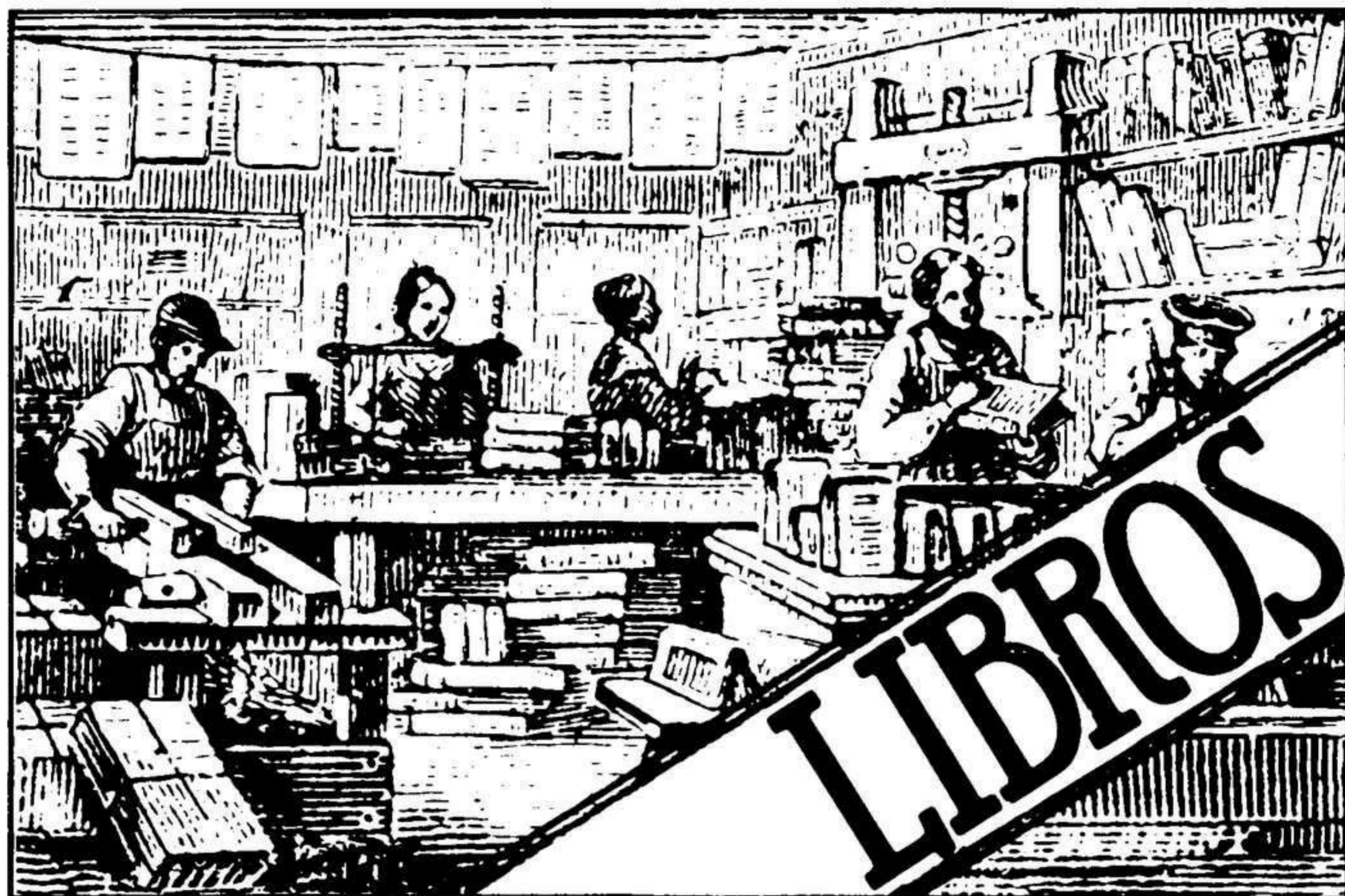
Director:
Miguel Angel Quintanilla
Comité de Redacción:
José Manuel Orza
Luis Alberto de Cuenca
Carlos Solís
Rafael Pardo
Eduardo Rodríguez
Farré

Redacción:
Serrano, 127 - 28006 Madrid
Telf. (91) 261 66 51
Suscripciones:
Servicio de Publicaciones
del CSIC.
Vitruvio, 8 - 28006 Madrid
Telf. (91) 261 28 33

Arbor

ciencia

pensamiento y cultura



UNA GENERACION PERDIDA

Manuel Ortuño Martínez

Enrique Múgica,
Itinerario hacia la libertad.
Plaza & Janés.
Barcelona, 1986.

Recuerdo que hace muchos años, finales de los cuarenta, llevados por las atinadas reflexiones de Laín Entralgo, nos enzarzamos en una discusión algo pedante y marcada con ribetes idealistas en torno al concepto de generación en Ortega y la interpretación de los períodos históricos, utilizando el molde bastante rígi-

do de las pautas generacionales. Al cabo de los años, olvidada la discusión, queda el uso de algunas palabras con cierto regusto, y es cierto que esta degeneración parece que no acaba de perder su atractivo, quizá también cierto embrujo.

Es el embrujo histórico-generacional que brota y anega las páginas del libro de memorias que acaba de publicar Enrique Múgica. Su lectura me ha llenado de zozobra e inquietud porque el itinerario de Múgica es, para muchos de nosotros, convocados y reunidos en torno al hecho histórico del 56, nuestro propio, personal y doloroso itinerario hacia la libertad.

Inquietante Múgica, recia y compleja personalidad, hecha a golpes de dolor y sacrificios desde una edad muy temprana, cuya vida, al leerla, se nos antoja algo tan propio, o por lo menos, de resonancia inte-

rior tan personal, que produce involuntario escalofrío. Que tenga yo cinco años más que él me permite ir repasando sus peripecias personales con una óptica a la vez de persona mayor y de contemporáneo total, porque, curiosos caminos de cada uno, desde 1954 Múgica y yo hemos coincidido, sabiéndolo o no, en muy diversas circunstancias y ocasiones.

Una generación no se define por la edad, sino fundamental y decisivamente por la explosión de un hecho histórico capaz de convocar y reunir a gentes que proceden de horizontes distintos, con edades diferentes, perspectivas, formación y vocaciones disímiles. El hecho decisivo que nos transformó y definió fue la revuelta estudiantil del 56. Algo se ha escrito, aunque no lo suficiente y falta muchísimo por decir y contar, sobre los antecedentes, génesis y consecuencias de los sucesos de aquellos

años, que representaron un corte temporal significativo en el desarrollo del franquismo. Pues bien, para el análisis del 56 importa tener en cuenta algunas circunstancias y condicionantes: el ambiente en el que se desenvuelven sus protagonistas; los centros de enseñanza y la formación adquirida; los locales y lugares de recreo o distracción que se pudieron frecuentar; la geografía, el marco geográfico y los itinerarios personales recorridos; las lecturas y el horizonte cultural inmediato; los contactos interpersonales y, en todo caso, la edad.

Leyendo esta obra, con el recuerdo de las viejas y bizantinas discusiones y la obligada incursión hacia mis propias vivencias, no he podido dejar de pensar en esa fuerza poderosísima de la mente, que consciente o inconscientemente selecciona, matiza, olvida, pasa a segundo plano o elimina de cuajo todo lo que duele y repugna, y por otra parte favorece y sublima el lado positivo de las cosas que uno interpreta como valiosas en la imagen que se tiene de sí mismo.

Coincidió con Múgica en la Universidad de Madrid en 1954 cuando, estudiantes ambos, él en Derecho y yo en Ciencias Políticas, vivimos, ingenuos y desafortunados, los acontecimientos estudiantiles en un ambiente incomprensible y desolador. Recuerda Múgica la creación de los «Encuentros entre la poesía y la Universidad», y nos recuerda a Ferrán y a mí en aquella época, pero no cita en cambio el antecedente del Aula de Cultura que yo promoví y cuya realización encargué a Jaime Ferrán, inspirador igualmente de los «Encuentros», recién desembarcado de Barcelona para hacerse cargo del

Departamento de Actividades Culturales del SEU, que se desgajó entonces del Departamento de Intercambios Culturales del que yo era responsable. No fue en 1954 sino algo antes, a comienzos de 1953, Múgica aún no había llegado a Madrid, cuando se produjeron los acontecimientos y estallaron las primeras crisis graves en el seno del SEU. Tamames los debe recordar muy bien porque juntos participamos en aquellas aventuras. Fueron años blancos, desconcertantes, irreales y absurdos, vividos en medio de una cámara de aire que nos aislaba, ahogándonos en la mediocridad.

A partir de 1954, quienes vivíamos en la Universidad o en torno a ella iniciamos un proceso de radicalización acelerada que Múgica describe con penetrante agudeza, pero sin descender a excesivos detalles. Tengo especialmente viva la imagen de aquel muchacho delgadísimo, sobrio y muy serio, lleno de sombras y claroscuros, con el que conviví en los patios y pasillos de Carabanchel hasta el día que lo encerraron en celda de castigo, inmediatamente antes de su salida de la cárcel. Se había quedado solo, por la salida previa de quienes fueron encarcelados con él, y los nuevos grupos de «estudiantes» que seguíamos llegando lo dejamos un poco aislado, mientras organizábamos la «Universidad en la cárcel». En su obra es reiterativa la evocación de Ridruejo, que se resistía, una y otra vez, a aceptar la militancia política de quien, ya en Carabanchel, todos los demás observábamos con asombro no exento de envidia como militante comunista.

Siete años después, ya en el Penal de Burgos, Múgica resolvió su crisis de identidad e

inició un camino definitivo que lo llevaría al partido socialista. Fueron años y experiencias que vivimos desde posiciones distintas todos los miembros de aquella generación. Por mi parte, llegado a México en 1961, tras unos años de exilio interior en Barcelona, me incorporé muy pronto al PSOE y a la UGT, participé desde fuera en las huelgas del 62 y promoví, con un grupo de compañeros jóvenes, un intento de ruptura en la Agrupación de México, frente a las vacas sagradas de los herederos de Prieto. Fracasamos, de cara a la elección de delegados y en la redacción de ponencias para el Congreso de 1964, y no fue posible hacer valer nuestras tesis: el grupo de jóvenes militantes, apoyados en los socialistas asturianos, pretendíamos llevar a Toulouse la decisión de que el partido y sus órganos de dirección se trasladaran al interior. Fuimos derrotados por Salazar y Salcedo, a quienes Múgica conoció después y de cuyas mañas y artes recuerda alguna que otra anécdota. Para Múgica el momento clave, que incide en el desarrollo del partido, está en el Congreso de 1970, cuando por fin se logra no que el partido vaya al interior pero sí que el interior tuviera una representación importante, aceptada con reticencias por Llopis y sus secuaces, en los congresos de Toulouse.

Un tema recurrente, que me gustaría delimitar y explicar, es el de la «memoria histórica». Tiene razón Múgica al insistir, y lo hace a lo largo de todo el libro, en la importancia que todos los militantes y en todas las épocas hemos asignado a este valor referencial. A pesar de todo, a pesar de la propia historia, tan densa, feroz y a veces brutal de nuestras organizaciones, hay

unos valores, se mantienen unas virtudes, se reverencian ciertos principios y se encarnan varias actitudes que tienen como eje y pilar la «memoria histórica». De acuerdo, pero con una inquietante posdata. A partir de la democratización y tras el inicio de la vida política normalizada, el arribo en masa de nuevos afiliados, la apertura del partido a la sociedad y el compromiso histórico, parecen haber empañado y quizá se esté produciendo un proceso irreversible de pérdida de esa memoria. Lo apunto, como punta observable de una inquietante preocupación.

El itinerario hacia la libertad se ensancha, multiplica y fructifica a partir de 1971, tras el Congreso de UGT y en el encuentro con las juventudes socialistas de Andalucía, ese núcleo nuevo y renovador que conmocionó a los viejos luchadores del País Vasco y Asturias. Múgica dibuja un esquema simplificador y metódico, que podemos aceptar, aún a sabiendas de su facilidad explicativa: la renovación del socialismo español sería la obra del pragmatismo vasco (y astur) en conjunción con el radicalismo andaluz, a la que asiste, entre asombrado e incrédulo, el individualismo madrileño.

Es una obra de fácil lectura, admirable por lo que dice aunque también sea interesante darse cuenta de lo que calla, olvida o resume, que también es mucho. En definitiva, una muestra ejemplar y paradigmática de la aventura individual de esa que, a veces con excesiva retórica, se ha dado en llamar la generación perdida. ¿Hasta qué punto lo es ese grupo de hombres, de edades distintas y procedencias diferentes, que se encontraron en 1956 en el medio de una circunstancia histórica funda-

mental? Actores, unos en líneas de protagonismo y responsabilidad, espectadores otros, más o menos indiferentes a cuanto ocurre alrededor, hemos vuelto a encontrarnos en las páginas de este libro, que narra una historia apasionante.

EL PORVENIR DE LA DEMOCRACIA

Miguel Porta

Norberto Bobbio y otros,
Crisis de la democracia.
Ariel.
Barcelona, 1985.

Norberto Bobbio —pensador tan sobradamente conocido que no necesita presentación alguna— nos ofrece en sus últimos trabajos unas ricas e interesantes reflexiones sobre lo que él denomina «crisis de la democracia». A reseñar y comentar estas reflexiones de Bobbio —que en Italia dieron lugar a un importante debate— vamos a dedicar las líneas que siguen.

Ya en 1976, en *¿Qué socialismo?* (edición castellana de Plaza & Janés, 1977), Bobbio nos advertía de las contradicciones o paradojas en las que incurre el régimen democrático: el contraste entre democracia, considerada como el régimen adecuado para las pequeñas comunidades, y las grandes organizaciones; el contraste entre la eficacia del control democrático y el aumento desproporcionado,

precisamente como consecuencia del desarrollo democrático, del aparato burocrático del Estado; el contraste entre la incompetencia del ciudadano situado frente a problemas cada vez más complejos y la exigencia de soluciones técnicas accesibles sólo a los especialistas; y, finalmente, el contraste entre el presupuesto ético de la democracia, la autonomía del individuo, y la sociedad de masas, caracterizada por el individuo heterodirigido. Pero ahora, en sus recientes trabajos, Bobbio no trata sólo de las contradicciones de la democracia, sino de algo más grave: de los «efectos perversos» generados por la democracia. ¿Cuáles son estos efectos perversos que hacen que la democracia haya entrado en crisis? Fundamentalmente tres son los síntomas que nos permiten hablar —que permiten hablar de Bobbio— de la crisis de la democracia: la ingobernabilidad, la privatización de lo público y el creciente poder invisible.

La democracia se ha vuelto ingobernable, argumenta Bobbio, como consecuencia de la desproporción existente entre las crecientes demandas de la sociedad civil y la falta de capacidad y de recursos que muestra el sistema democrático para responder a las mismas. Y esta falta de adecuación entre demandas sociales y respuesta del Estado —falta de adecuación que no expresa más que la crisis del *Welfare State* o Estado asistencial— es grave porque pone en entredicho al sistema democrático que se caracteriza precisamente por el ser el que mejor (o si se prefiere, menos mal) satisface las necesidades de la sociedad civil. Señalar, de paso, que Bobbio define los conceptos de régimen autoritario y socialdemocrático según sea el modo de en-

frentarse al problema de la ingobernabilidad de la democracia; el régimen autoritario sería aquel que «resuelve el problema no aumentando la capacidad del Estado para proveer a las crecientes expectativas, sino comprimiendo la capacidad de los ciudadanos y de los grupos para proponer nuevas demandas mediante la supresión de todas aquellas instituciones, desde el sufragio universal a las libertades de publicación o asociación, que caracterizan la ciudadanía activa»; el régimen social-democrático, en cambio, sería el que «intenta resolver el problema de las crecientes expectativas no bloqueando las demandas sino aceptando el desafío planteado por el desarrollo de la democracia a través de la cada vez más eficiente organización del estado llamado social o de servicios».

Si el primer síntoma que permite hablar de la crisis de la democracia —la ingobernabilidad— marca la incapacidad del sistema para atender las demandas de los ciudadanos, el segundo síntoma —la privatización de lo público— implica el descalabro de dos de las ideas básicas de la democracia: la del Estado como síntesis por encima de las partes, y la del contrato social. Y ello es así porque las grandes organizaciones (partidos, patronal, sindicatos, ejército, etcétera) actúan como entes casi soberanos que se reparten (esto es, privatizan) esferas de poder según propios e intrasferibles intereses. El tercer síntoma de la crisis es el creciente poder invisible, consecuencia de la inexistencia (o de la atrofia) de los mecanismos destinados a controlar, a hacer visible las acciones de quienes detentan poder; acciones que, afirma Bobbio, no resistirían en la mayoría de

los casos la prueba de la publicidad y la transparencia.

A estos tres síntomas de la crisis de la democracia detallados por Bobbio en el volumen *Crisis de la democracia* hay que sumar otros que el pensador italiano saca a colación en el artículo *Le promesse non mantenute della democrazia* (*Mondoperaio*, núm. 5, 1984) y en el libro *El futuro de la democracia*. Estos síntomas a añadir a los primeros son: el predominio de la representación de los intereses sobre la representación política (surgimiento de un neocorporativismo en el que el que gobierna ya no representa los intereses de quienes le han elegido, sino que tan sólo media entre los intereses opuestos de los diversos grupos); la incumplida derrota del poder oligárquico (subsistencia de élites de poder); la no presencia de la democracia en todos los espacios en los que se ejerce el poder (fábrica, ejército, etc.), y el fracaso del componente pedagógico de la democracia (que no ha desarrollado el aprendizaje de ciudadanía y la participación en los asuntos colectivos, sino que más bien está generando un creciente desinterés por la cosa pública).

Bobbio utiliza una analogía que sirve a la perfección para dar cuenta de la crisis de la democracia: de igual manera que se habla del «socialismo real» en oposición al «socialismo ideal», existe también una «democracia real» opuesta a la «democracia ideal». En efecto, para nuestro autor las promesas no cumplidas de la democracia han venido a instalarnos en una «democracia real» bien distinta de aquella que los clásicos y los sueños de la izquierda nos prometían. Sin embargo, Bobbio llega a la conclusión de que mu-

chas de esas promesas no se han cumplido porque o bien se trata de meras ilusiones, o porque la historia ha ido en otra dirección haciendo buena la expresión hegeliana de que la historia «es un inmenso matadero». En cualquier caso, y pese a todo, hay que defender la democracia, aunque sea la «democracia mínima» que Bobbio define como el «conjunto de reglas de procedimiento (las llamadas reglas del juego) que permiten tomar decisiones selectivas a través de un debate libre y el cálculo de la mayoría». Definición formalista, evidentemente, pero que, como el propio autor afirmaba en entrevista concedida a *L'Espresso*, tiene la virtud de ser el único criterio válido y claro para establecer, sin ilusiones y sin mitos, qué es verdaderamente una democracia. En otros términos, vale más una democracia mínima y real en mano que cien democracias ideales volando (agudamente el profesor italiano nos advierte de los peligros que conlleva la práctica de cierta izquierda que, en su «lucha» por suprimir los defectos de la democracia, termina eliminando los defectos y también la propia democracia). Sólo a partir de esta democracia mínima, y sin incurrir en la habitual práctica de soñar despierto, se podrá ir enriqueciendo la propia democracia con contenidos políticos y económicos (mayor tolerancia y pluralismo, reversibilidad de las decisiones, mejor y más equitativa distribución de la riqueza, reducción de los niveles de desigualdad, etc.).

El futuro de la democracia está, para nuestro autor, en la preservación de la democracia mínima, pero este mínimo democrático necesita, para consolidarse y desarrollarse, una serie de requisitos como el

mantenimiento del Estado del Bienestar (la justicia distributiva), el protagonismo del compromiso político a todos los niveles (un «neocontratualismo» o «nueva alianza» que abarque desde la formación de mayorías hasta los programas de gobierno), la crítica pública y la desocultación, el control del Estado por parte de los ciudadanos, la limitación de los poderes estatales y, en fin, la tolerancia como principio rector que permita la convivencia pacífica de los intereses e ideologías.

La reflexión de Bobbio tiene la indudable virtud de ser un auténtico estado de la cuestión por lo que hace a la situación de crisis que actualmente atraviesa la democracia. Ahora bien, si es cierto que pocas objeciones pueden hacerse al desilusionador diagnóstico de Bobbio, no es menos cierto que sus propuestas contienen alguna que otra contradicción difícil de superar. Así, ¿cómo mantener el Estado del Bienestar si precisamente la ingobernabilidad tiene su fundamento y origen en la crisis y agotamiento del mencionado Estado? ¿Es posible reconstruir hoy —paro, inflación, déficit público, etcétera— el Estado del Bienestar? ¿Cómo reconstruir dicho Estado —que ataca los intereses de la derecha y de los neoliberales— respetando el principio del compromiso a todos los niveles propugnado por Bobbio? ¿Cómo evitar que el compromiso o «nueva alianza» no acabe transformando la práctica política en inoperante al otorgar, *de facto*, derecho de veto a las minorías? ¿No se corre, con el compromiso, el riesgo de paralizar, al más puro estilo italiano, la acción de gobierno? ¿Qué tipo de híbridas mayorías y programas pueden lle-

gar a surgir de tal política de compromiso? ¿Cómo controlar el Estado si todavía subsisten élites de poder? ¿Cómo superar el formalismo que implica la definición de la democracia que nos propone Bobbio? En cualquier caso, y a pesar de las objeciones, mucho nos tememos que, sueños y veleidades izquierdistas aparte, no exista hoy otro camino para salvar la democracia distinto al que nos propone este hombre que pertenece, como él mismo dice, a una «generación que perdió las grandes esperanzas hace más de treinta años». Y como afirma el propio Bobbio, más vale una mala democracia que una buena dictadura.

EL MARXISMO FUNCIONALISTA

Miguel Porta Perales

Gerald A. Cohen,
La teoría de la historia de Karl Marx. Una defensa.
Editorial Pablo Iglesias-Siglo XXI.
Madrid, 1986.

La llamada crisis del marxismo supuso, entre otras cosas, la quiebra teórica y bibliográfica de lo que se convino en denominar marxismo francés. Louis Althusser, Etienne Balibar, Pierre Macherey, Alain Badiou, Jacques Rancière, Roger Establet y un considerable número de apreciables y elegantes escritores franceses abandonaron,

en mayor o menor medida, su «práctica teórica». Y todo hacía suponer que Marx y el marxismo quedaban huérfanos de teóricos e intérpretes, porque ¿cómo podía confiarse en un marxismo tan sospechosamente historicista como el italiano? ¿Cómo fiarse de un marxismo tan poco refinado, teóricamente hablando, como el anglosajón o el norteeuropeo? Por no hablar ya de los otros marxismos (español, latinoamericano, soviético, etcétera) que, o bien no existían —con la excepción del poco conocido marxismo húngaro—, o bien eran lo más parecido a un fósil.

Sin embargo, la «crisis» del marxismo y la consiguiente quiebra del marxismo francés permitió la aparición (o, mejor dicho, el conocimiento y/o reconocimiento) de un conjunto de «nuevos» autores que estaban realizando unos muy interesantes trabajos. Perry Anderson, Göran Therborn, James O'Connor, Erik Olin Wright, John Roemer, Geoff Hodgson, Gerald Cohen, Agnes Heller, etc., son algunos de estos autores. *La teoría de la historia de Karl Marx* (premio Isaac Deutscher Memorial en 1979), de Gerald A. Cohen (militante del PC británico y profesor de Filosofía del University College de Londres), es un buen ejemplo de este «nuevo» marxismo del que acabamos de hablar.

Al referirse al libro de Cohen hay que empezar constataando un par de características: su monumentalidad y su ambición. Monumentalidad porque Cohen analiza e interpreta, a lo largo de un libro ciertamente extenso, uno de los puntos esenciales del pensamiento marxista: la teoría de la historia; y ambición porque el británico pretende de-

mostrar que la explicación funcional es el mecanismo intelectual e hipótesis explicativa que utiliza Marx en sus investigaciones. Añadamos que el trabajo de Cohen es a la vez innovador («el propósito —dice Cohen— es construir una teoría de la historia sostenible que esté en general de acuerdo con lo que Marx dijo sobre el tema») y tradicional («porque lo que yo defiendo —prosigue el británico— es un materialismo histórico anticuado, una concepción tradicional en la que la historia es, fundamentalmente, el desarrollo de la capacidad productiva del hombre, y en la que las formas de sociedad crecen o decrecen en la medida en que permiten o impiden ese desarrollo»). Adentrémonos ya en lo más sustancial del libro de Cohen. Y que el aparente teoricismo del británico no nos impida ver la vertiente «práctica» de su trabajo.

A partir del análisis del *Prólogo* de 1859, Gerald Cohen llega a la conclusión (después de una «obvia lectura» del mencionado escrito) de que la estructura económica (o «base real», por utilizar la terminología de Marx) no está constituida por las fuerzas productivas y las relaciones de producción (como habitualmente se sostiene), sino que sólo las relaciones de producción son las que entran en la constitución de la estructura económica. Cohen continúa su análisis y afirma que la distinción entre fuerzas productivas y relaciones de producción es expresión de la distinción, «profundamente arraigada en Marx», entre rasgos materiales y rasgos sociales de la sociedad. En efecto, para el británico Marx se habría esforzado en distinguir entre el contenido y la forma de una sociedad. Según esto, las personas y las fuerzas pro-

ductivas constituyen el «contenido material» de una sociedad, contenido al que las relaciones de producción dotan de una determinada «forma social» (así, ejemplifica Cohen, un negro se convierte en esclavo o una máquina en parte del capital constante en virtud de unas determinadas relaciones sociales de producción).

Ahora bien la distinción entre fuerzas productivas y relaciones de producción no excluye que, como dijera Marx, las relaciones de producción se «correspondan» con las fuerzas productivas. ¿Cuál es el significado del tan controvertido término «corresponder»? Cohen se muestra partidario de lo que él denomina una «interpretación tecnológica del materialismo histórico», según la cual las fuerzas productivas disfrutan de una «primacía explicativa» sobre las relaciones de producción. La «primacía explicativa» significa que «la naturaleza de un conjunto de relaciones de producción se explica por el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que abarca dicho conjunto». Cohen precisa la estructura de este vínculo explicativo *funcional* (del tipo «la función de x es hacer H ») diciendo que «las relaciones de producción son de un tipo R en un momento m porque las relaciones de tipo R son adecuadas al uso y desarrollo de las fuerzas productivas en el momento m , dado el nivel de desarrollo de estas últimas en m ».

A nadie que lea detenidamente el razonamiento de Cohen se le escapará que la explicación funcional y la distinción entre contenido material y forma social tienen, como el propio autor reconoce, un gran «valor revolucionario». ¿Por qué? Sencillamente,

porque sirven para respaldar la crítica revolucionaria del capitalismo. En efecto, la revolución llegará cuando la forma social sea «removida» a causa del desarrollo material propiciado por el contenido material o fuerzas productivas. Es más, Cohen define la revolución socialista como «la conquista de la forma por la materia». En resumen, la teoría de la historia de Marx, según Cohen, afirma que la historia es el desarrollo de la capacidad productiva del hombre y que las formas de sociedad surgen y desaparecen en la medida en que permiten o promueven, o impiden y obstaculizan, su desarrollo. La conclusión práctica de esta elaboración teórica es obvia: cuando las fuerzas productivas alcancen un nivel de desarrollo incompatible con las relaciones de producción capitalistas, éstas estallarán para dar lugar a las nuevas relaciones de producción socialistas, únicas que podrán albergar en su seno el nivel de desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas. Como se ve, estamos frente a una interpretación ciertamente «clásica» del asunto.

Señalemos que el núcleo del razonamiento de Cohen (la primacía de las fuerzas productivas en la explicación del curso histórico) se ve convenientemente arropado por una serie de consideraciones sobre el papel de las superestructuras (que en la más pura ortodoxia «consolidan las estructuras económicas» y son «creadas» por la base), sobre la especificidad del proletariado (el proletario además de vender su fuerza de trabajo también puede ser propietario de medios de producción, aunque no pueda usarlos), sobre la naturaleza de las clases sociales (Cohen reivindica la tradicional interpretación es-

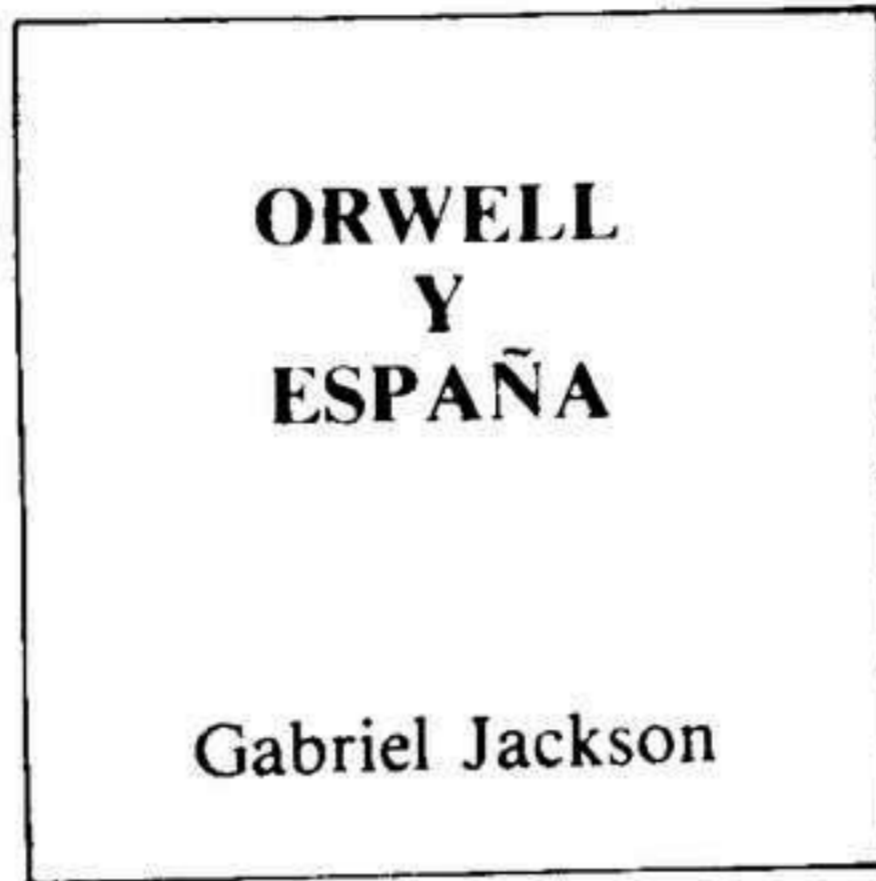
estructural según la cual la pertenencia a una clase lo es en virtud de la «posición objetiva en la red de relaciones de propiedad»), sobre el fetichismo de la mercancía, sobre la diferencia entre estructura económica (conjunto de relaciones o entramado de poder en el que se da la producción) y modo de producción (que sólo es la forma o manera de producir), etc.

El trabajo de Cohen es ciertamente polémico. Quien quiera profundizar en la problemática cuestión de si la explicación funcional es o no propia del marxismo tiene a su alcance (en el número 33 de la revista *Zona Abierta*) los artículos que sobre el tema se cruzaron Jon Elster, Philippe van Parijs y el propio Cohen. En cualquier caso, habría que empezar advirtiendo que si bien el funcionalismo sociológico (Parsons y demás) goza de mala salud y de peor fama, ello no es razón suficiente para que absurdamente nos privemos de las posibilidades de la explicación funcional. Cohen, a fin de cuentas, no es Parsons.

Lo que nadie puede negar es que *La teoría de la historia de Karl Marx* es un libro excelentemente bien documentado y razonado que tiene la virtud de demostrar que el marxismo no es únicamente una fría teoría abstracta para el cultivo y solaz de los profesionales del ramo, sino que, ante todo, el marxismo es una teoría crítica orientada hacia la práctica transformadora y/o emancipadora de la sociedad.

Ciertamente, el trabajo de Cohen puede ser tachado de economicista y de materialista vulgar. Pero, sin lugar a dudas, ésta es una interpretación preferible a aquella otra tan sofisticada y literaria que en

su día alumbraron algunos marxistas parisinos. El libro de Cohen, en definitiva, es vivo y polémico. Que cunda el ejemplo.



Andrés López Accotto,
Orwell y España.
Akal.
Madrid, 1985.

Este breve trabajo, modelo de profundidad y concisión, que apareció un año después de los numerosos encuentros y conmemoraciones celebradas en 1984, contiene las reflexiones de un abogado argentino, exiliado, relativas a la totalidad del corpus literario de Orwell y a las muchas biografías de las que ha sido objeto.

El autor desarrolla la tesis, atrevida en apariencia, según la cual puede establecerse una comparación nada menos que entre Alonso Quijano (Don Quijote), por un lado, y Eric Blair (verdadero nombre de Orwell) por el otro. El desconocido hidalgo cuyas ansias de vivir por un ideal le condujeron a su transformación en Don Quijote, preparado en cualquier momento para arriesgar su vida por la justicia y la libertad, y muerto finalmente en cama como Alonso Quijano, y el Eric

Blair ex policía y jornalero ocasional que se jugó la vida en España por la libertad, por la fraternidad y por lo que él consideraba como los principios del socialismo, y que murió a la edad de 46 años de tuberculosis, en cama, no sin antes haber agravado su propia enfermedad al privarse, durante la segunda guerra mundial, en Inglaterra, de la comida y el descanso necesarios para su salud.

Pero profundicemos algo más en su hidalguía: ¿En qué se diferencia Eric Blair de aquellos otros hijos de empleados del Estado británico, hidalgos menores del imperio?

En su identificación con el pueblo indio sometido, que él manifestó con la disciplina de un colegial; con el proletariado industrial y, en general, con todos los marginados de la sociedad europea durante la terrible depresión de los años treinta.

¿En qué se diferenció de la mayoría de aquellos otros, también hidalgos, los cuarenta mil voluntarios extranjeros que arriesgaron sus vidas en defensa de la República española durante la guerra civil?

Nada menos que en lo que supuso el caso extremo de su negativa a sacrificar la verdad a la conveniencia. Muchos comunistas de grandes ideales y otros camaradas sabían perfectamente bien en 1937 que el POUM no era una conspiración franquista-trostkista pagada por Berlín, y muchos tuvieron sus dudas acerca de la verdad de las declaraciones y confesiones hechas en los juicios de Moscú y sobre las descripciones aparecidas en *El Viejo Bolchevique*, consideradas como pertenecientes a saboteadores y espías pagados por Hitler.

Pero, en nombre del antifascismo y de la necesidad de unidad en la lucha contra Hitler, considerado como el peor de los demonios, ellos creyeron necesario no sólo silenciar sus propias dudas sino condenar a cualquiera que, al igual que Orwell, insistiera en reconocer la naturaleza dictatorial del gobierno soviético.

Al enseñar historia de la Europa contemporánea, suelo explicar a mis alumnos cómo el gobierno soviético, durante la segunda guerra mundial, había calificado a los veteranos de la brigada «Abraham Lincoln» de precoces antifascistas, antes de que el ataque japonés a Pearl Harbour en diciembre de 1941 llevara a la Unión Soviética a entrar en la guerra. De la misma forma, en su análisis sobre *Homenaje a Cataluña*, el autor, al referirse a George Orwell, lo llama precoz antiestalinista; un hombre de la izquierda que ha denunciado los crímenes de Stalin veinte años antes del discurso de Krushchov en 1956 a favor de la desestalinización.

En este concluyente párrafo López Accotto enfatiza la importancia de la experiencia española de Orwell en apoyo a su creencia en la dignidad fundamental del hombre y, como consecuencia, a la constancia de su fe en el socialismo. Sin embargo, esto no fue siempre así. Los análisis de sus novelas posteriores, *Rebelión en la granja* y *1984*, revelan también las implicaciones pesimistas de estas amargas fábulas. Para este punto me remito a uno de los últimos artículos publicados por el novelista Manuel Scorza, muerto trágicamente en el accidente del 27 de noviembre de 1983, que clamó por las vidas de tantos intelectuales de América Latina. En su ensayo

titulado «¿Tiene razón Orwell?» (*El País*, 22 de diciembre de 1983), observó que Orwell parecía creer que cualquier revolución acabaría en el totalitarismo: «...1984 es un libro fatalista. Y el fatalismo es una característica del reaccionarismo, consciente o inconscientemente».

Las palabras de Scorza también me recordaron que en uno de sus ensayos de inicios de los cuarenta, Orwell dice que la llegada de cuarenta mil extranjeros para pelear por la República española no evidenciaba la solidaridad internacional de la clase trabajadora sino que la abrumadora mayoría de los trabajadores de Europa y América no hicieron nada en defensa de sus hermanos de clase españoles.

Pero la contradicción entre la necesidad de la lucha, expresada manifiestamente en Orwell, y sus fábulas pesimistas, es más aparente que real. El socialismo de Orwell no fue un sistema de ideas económicas ni una copia de otros sistemas. Fue una creencia moral; simpatía por los explotados y enemigos de la injusticia unida a una visión de la verdad, fraternidad e igualdad humanas que halló encarnada en el comportamiento de los trabajadores y militantes de Barcelona en 1937.

Sin embargo, la República, y con ella el brote truncado de socialismo, quedaron destruidos. Cuando escribió sus dos novelas satíricas y comentó acerca de la política de los años cuarenta que no había esperanza en ninguna parte de una sociedad que el «hidalgo» Orwell pudiera llamar socialista —no en Inglaterra o en Europa occidental, seguramente tampoco en los Estados Unidos o en los dominios bri-

tánicos, y ciertamente menos en Rusia o en la Europa del Este— recordaba con amargura la falta de solidaridad real en España y su decepción se expresó por medio de las advertencias aparentemente fatalistas de sus novelas antiutopías, pronosticando un oscuro futuro para el Este y el Oeste.

La mayoría de los ensayos que he leído en el curso de las conmemoraciones de 1984 se felicitan del progreso humano basándose en el hecho de que la vida en el mundo desarrollado no es tan mala como Orwell predecía que sería. Prueba de ello es que no vivimos bajo la dominación del «Gran Hermano», como ocurre en 1984. Pero la gran virtud del estudio de López Accotto es alumbrar la importancia del idealismo de Orwell. La analogía que le asemeja a Don Quijote parece exagerada, pero sólo porque algunas personas de hoy en día viven con un símbolo de Orwell de compromiso moral completo.

Lo que ha ocurrido en el mundo desde 1945 no ha sido la llegada de «Oceanía», pero sí ha habido un descenso y una mejora de los rasgos más duros del capitalismo. Es evidente que el capitalismo ha admitido mucho más de las demandas históricas del siglo XIX de lo que lo han hecho las democracias del Este. Sin embargo, el avance no ha traído la igualdad ni la fraternidad. La prosperidad del capitalismo temprano descansa en la explotación del Tercer Mundo, y esa prosperidad colapsaría mañana si la economía occidental no albergara fantásticos y suicidas preparativos de guerra.

La ira de Orwell contra la explotación, el racismo, la insolidaridad, el rechazo a la

verdad, la vergonzosa manipulación del lenguaje y el rebajamiento de los ideales, es aplicable tanto al mundo presente como al tiempo en el que él escribió.

No como predicciones literales, sino como advertencias, son importantes sus novelas anti-utopías. E importante es, sin duda, el espíritu de López Accotto, basado no es un pasajero escepticismo de moda sino en la simpatía por el extraordinario idealismo y nobleza de su tema de investigación.

LA OTRA VIDA DE UNA TRANSICION

Francisco J. Satué

Félix Grande,
Elogio de la libertad.
Espasa-Calpe.
Madrid, 1984.

Félix Grande.
La vida breve.
Godoy.
Murcia, 1985.

Sufrimos una cultura de clasificaciones y etiquetas, esto es ya sabido. Cuando se habla de una época, se suele recurrir, con el pretexto célebre de la empalagosa y exteriormente «deformación profesional», a hemerotecas, informes sociológicos, tratados históricos, bibliotecas científicas, o archivos religiosos. Pocas veces la atención se brinda

al desafío que enuncia por sí misma la literatura, y menos aún al de la poesía, que en la jerarquía de los lenguajes, y acaso en la de los géneros, ocupa el peldaño más elevado, el que podríamos denominar y caracterizar como inalcanzable. A pesar de ello, es al aceptar ese reto de las visiones distantes de lo documental, cuando asimilamos la profunda verdad cotidiana de los hombres, en oposición a las versiones generales, las conclusiones intelectuales herméticas, frías, objetivas, o las sentencias asépticas sobre un tiempo que —nos cuesta entenderlo— es pasado, entendiendo el pasado por una noción muy pobre, que designa una simple colección de datos. Es entonces, arriesgándonos, cuando alcanzamos un espacio verdadero en lugar de afrontar una fachada estadística elemental.

Ocurre cuando nos asomamos a las impresiones íntimas, volanderas o densas de los viajeros, los cronistas y los testigos que, procedentes de Francia, Gran Bretaña o Alemania, pasan por España durante el siglo XIX. Vuelve a suceder en la primera mitad de nuestro siglo, al zambullirnos en las impresiones de hombres y mujeres que cruzan por nuestro país con el triste motivo de una guerra civil. Desde Céline, que concebía el universo de un modo distinto a un territorio cerrado o vigilado —contra las conclusiones de sus experiencias—, la noción de «viaje» acusa un cambio sustancial.

Viajar, manteniendo el planteamiento de Céline, sigue siendo útil. Una forma de entrega de la pasión a lo vertiginoso y desconocido. En particular cuando, como en la literatura, el viaje nos permite entender lo que sucede *al otro*

lado de la vida. Esta es quizá, como viaje, la mejor forma de revelar la entraña del trabajo literario que Félix Grande realiza cultivando múltiples colaboraciones periodísticas, reuniéndolas y dándoles forma libresca. El libro es el último proceso de un viaje de la sensibilidad que para él continúa abierto, a la manera de un interrogante radical. Así es como dos volúmenes se suman a dos precedentes en la ya amplia producción poética y narrativa de Félix Grande. Curioseando en *Occidente, ficciones, yo*, y en *Mi música es para esta gente*, títulos que marcan la «otra vida» de lo que Grande expresa mediante los poemas, los conflictos corrientes y cotidianos, literarios o extraliterarios, familiares o extraños para el poeta, puede comprenderse que la asunción de ese desafío al que aludíamos con anterioridad —enfrentarnos al tiempo fuera de criterios historiográficos o documentales, entender nuestra época mediante razones y reivindicaciones de lo humano— haya cristalizado en *La vida breve* y *Elogio de la libertad*. En contra de lo que pudiera parecer, los uno e impulsa un empeño único.

No nos encontramos ante libros enclaustrados por el tiempo en el que han surgido —con una periodicidad regular, dada la naturaleza de los medios donde aparecieron los escritos de Félix Grande; «los papeles», según la jerga literaria— los textos que los conforman. Son libros, sin embargo, marcados y definidos por un período tan concreto como la transición española, período que señala un salto, la búsqueda de la «otra vida» de Rimbaud y, más cerca de nosotros, la reflejada por Kundera en sus novelas y ensayos. Ese salto refleja la tentativa de la democracia en Es-

paña, que Félix Grande asume con humildad y sin ignorar en ningún pasaje la dimensión colectiva del fenómeno.

Ello, por otro lado, está muy lejos de situar al poeta que escribe sobre la realidad, en el ámbito donde el comentario se metamorfosea en barricada o proclama representativa de la sociedad. Por el contrario, reafirma su individualidad solidaria en cada una de las breves piezas que van configurando el amplio mosaico reflexivo, crítico y pasional del que hablan sus libros, en la difícil empresa de dar un sentido singular a su testimonio.

Son estos impulsos los que dotan de vida y unidad los trabajos aparecidos en *El Socialista*, *Diario 16*, *Lui*, *El País*, *Asturias Semanal*, *Últimas noticias* y multitud de publicaciones, con la firma de Félix Grande. Aquí radica el largo y detallado relato de una vivencia que el escritor describe, del brazo de Antonio Machado y de tantos de sus maestros amigos, con una minuciosidad artesanal.

Porque en realidad nos encontramos ante un relato: «El libro que yo quería escribir» —ha dicho Félix Grande al referirse a *Elogio de la libertad* y *La vida breve*— «respondiendo a la creencia de que mi capacidad de ritmo literario se había paralizado durante los últimos años». Las páginas de *urgencia* destinadas a revistas mensuales, semanarios o a la breve consunción que caracteriza las colaboraciones en los diarios nacionales o extranjeros, se han convertido así en algo más que títulos que dan aire narrativo a una simple recopilación de textos. Página a página, línea a línea, Félix Grande desmiente esta sospecha a través de una insistencia

estremecedora en los matices del hecho de escribir, y de la ceremonia de vivir sintiendo los acontecimientos a los que se asiste.

En ningún instante se dedica Félix Grande a tomar en consideración algo ajeno a sí y a su mundo íntimo. Y es esto lo que determina, junto a las reuniones de artículos de Antonio Gala, las páginas interrogativas en una filosofía vital que propone Javier Sádaba al estudiar lo cotidiano, las prolíficas y a veces repetidas observaciones de Fernando Savater, los austeros juicios de Caro Baroja, las acerradas impresiones de Juan Cueto, o los voluptuosos sarcasmos de Fernando Poblet, que la obra reunida en *Elogio de la libertad* y *La vida breve* resulte imprescindible para conocer y profundizar en los hechos mínimos, trascendentales por su propia condición sencilla, interioridades de la realidad, que se producen en la transición española del régimen autoritario franquista a un sistema de libertades democráticas. Llegados a este punto, no importa que parezca que Félix Grande, al igual que algunos de los autores mencionados y otros por citar, actúe poco menos que como espía, en una esfera que bien podríamos calificar como *marginal*. Félix Grande no es considerado un comentarista profesional.

Actúa también elaborando recursos propios. Por regla general, Félix Grande funde los sucesos, triviales o no, de su vida particular o íntima —en el más honesto sentido del término—, a los acontecimientos que ocupan los centros de atención de los medios de comunicación de masas.

Es así como pasamos ante una galería de personajes, en

especial en *Elogio de la libertad*, que se retratan por sus actos públicos —algunas veces discutibles o claramente inciviles— y que Grande recoge al hilo de sus meditaciones, preguntas y críticas.

Un culto desbordado por el lenguaje presta corporeidad a este proceder. Y de este modo es como, resuelto y discreto, captamos, como en un desfile de modas y modelos, a los financieros y los menesterosos, a los poetas, los ministros, los solitarios, los hambrientos, los andaluces y los vascos, entre alusiones y un ejercicio permanente y asistemático de la evocación. Este acento personal, por el que Grande rinde homenaje a su familia, a «su gente», o plantea feroces y burlescas incitaciones a la duda, al respecto de los argumentos heterodoxos, al diálogo, a la búsqueda de la sensatez cuando la revolución de lo humano la pierde, se mantiene como una plataforma que señala la cadencia, la estructura y la expresividad de esos libros que se deslizan ante la lectura como relatos.

Las pretensiones de Félix Grande no son políticas, sino humanas. Y se expresa mediante la recuperación de su propia escritura entre 1980 y 1985. En ocasiones, el orden de los artículos y ensayos reunidos en *Elogio de la libertad* y *La vida breve* contraría a las claras el imperio de la cronología. Pero Grande no tiene escrúpulo en denunciarlo, como si no le afectase descubrir *trucos* literarios. Importa que esos textos que ofrecen un retrato del poeta como de la realidad estimada y vivida por él, respeten el sentido de «época» que les dio origen —la *transición* entre el franquismo y la democracia como tentativa de todos y cada uno de los ciudadanos españoles—

sin que importe la obediencia al tiempo. La pasión de Grande por Cortázar y Onetti podría explicar esta conducta que ampara una rebeldía que no ha sido discriminada en este díptico.

Son numerosas las insurgencias del poeta. Contra los gobiernos, las dictaduras, las censuras y autocensuras supuestamente artísticas e intelectuales, las discusiones estériles, las costumbres hispánicas de la intolerancia, la humillación, la xenofobia, el racismo, el hambre... Félix Grande reseña principios humanos en sus protestas morales, lo que le conduce a un terreno de «significación» personal, y por tanto de compromiso, en lugar de empujarle a una zona donde sólo se perciben las fórmulas de lenguaje clásicas en nuestra época, las etiquetas clasificatorias o las definiciones. Su relato, que guarda mucho y muy intenso de su memoria privada, se sugiere por ello en ocasiones como una crónica de motivos que sustentan actitudes éticas. Y ya en este ámbito, podemos comprender que la ética no constituye un ejercicio, sino una apuesta rotunda, con voz propia.

Quizá por este sentido de la conducta de la escritura que se orienta hacia el público, a través de canales muy concretos y temporales, el valor del díptico. En *Elogio de la libertad*, Félix Grande aporta sus razones en una labor de respuesta inmediata ante los acontecimientos que sintetiza su pensamiento respecto a la realidad. El escritor se expresa desde la realidad interior, defendiendo su memoria y su vida, *contra* los sucesos que «llenan» primeras páginas de periódicos con grandes titulares y series interminables de artículos especializados. En

La vida breve, Félix Grande comunica sus razones en relación estrecha con las fuentes de sus creencias. Esas fuentes son poéticas y literarias.

Por esto no se aprecia divergencia en el modo de manifestarse de Grande al contrastar los dos libros. Pero tampoco se advierte homogeneidad ni uniformidad al recrear las raíces de obras que han alcanzado su verdadero carácter sobre la marcha, mientras estaban siendo escritas. Por *La vida breve* nos introducimos en las obsesiones literarias intransferibles de Félix Grande, los tonos profundos —alegres y apesadumbrados— de su pasión por Cervantes, Rilke, Kafka, Sábato, Henry Miller, Rosales y Onetti. Por *Elogio de la libertad* asimilamos la proyección de lo que no puede considerarse mero conocimiento literario, sino experiencia entrañable, fraternidad en el esfuerzo por compartir lo vivido desde el pesar o el entusiasmo, e invitación.

Invitación al desafío que servía de punto de partida a esta nota. Invitación para aprehender las razones —tan brutales en ocasiones— de lo cotidiano, a las que se oponen las razones humildes de lo sentido y asimilado con la literatura. Ello no nos da idea de una «vida literaria», sino de ese viaje, metafórico y real, como probaron Céline y cualquiera de los autores exaltados por Grande, quien con voluntad o sin quererlo, se ha integrado con ellos. A su altura.

La importancia de *Elogio de la libertad* y de *La vida breve* lo demuestra. Pero demuestra también la inexistencia de los géneros, la búsqueda del poema en un trabajo de prosista, el valor febril del

lenguaje en esa tarea irrenunciable sobre el valor inmediato de una obra que brota al amparo de un propósito testimonial.

Todo ello contribuyendo a un planteamiento moral que Grande no quiere separar de su trabajo lírico. El planteamiento es la libertad como forma única y difícil de vivir, conforme a la condición humana de cada individuo. Mencionando a Malraux, Grande se pregunta si la vida tiene sentido, llegando a la conclusión de que el significado de la existencia puede prescindir de referencias traducibles a la razón. Recordando con honradez a Antonio Machado, defendiendo por la democracia un modo de ser en el que España recobre sus propios rasgos, queda esclarecido el valor indiscutible de la libertad, ese proyecto cotidiano que sólo merece elogio.

EL VIGOR PROFETICO DE HELDER CAMARA

Santiago S. Torrado

Helder Camara,
Cristianismo, socialismo, capitalismo.

Ediciones Sígueme.
Salamanca, 1985.

Feliciano Blázquez.
Ideario de Helder Camara.
Ediciones Sígueme.
Salamanca, 1985.

La figura menuda y grandiosa de este obispo brasileño universal, prototipo de un posconcilio debatido y vigen-

te, es suficientemente conocida. Aún está reciente su gira por España, indicadora de su condición de viajero de la paz —candidato al Nobel repetidas veces— que lleva consigo mensajes muy explícitos de justicia social.

Helder Camara es un profeta de nuestros días. Un índice de su universalismo es la mera enumeración de los sitios donde ha pronunciado las conferencias o discursos que recoge el primero de los libros reseñados: Munich, Münster, Liverpool, Londres, Florencia, Turín, Milán... A todos ellos alcanza su denuncia neta y penetrante, como un revulsivo que dignifica la tarea profética —tan menoscabada— de la Iglesia. Su palabra es un estímulo para sanear la convivencia internacional, su lenguaje está lleno de referencias muy concretas, tanto de carácter socio-económico como de profunda raigambre evangélica, de naturaleza moral. Helder Camara entiende básicamente la misión de la Iglesia como un servicio que consiste —entre otras cosas— en prestar su voz a los que no la tienen.

El eje de su denuncia estriba en procurar que el hombre sea cada vez más hombre. Por ello condena y fustiga toda deshumanización en su doble vertiente: la de sus autores y la de sus víctimas. Denuncia, asimismo, las paradojas y contrastes de nuestro mundo, la violencia institucionalizada

que conduce a la miseria de millones de hombres.

Impresiona su lenguaje claro, exento de toda sutileza o ambigüedad, su defensa crítica pero cálida de la revolución cubana, su defensa igualmente de una religión comprometida con la liberación del hombre (ya que religión y alienación no están necesariamente conectadas), su afirmación de que la relación entre el socialismo y el materialismo dialéctico no es imprescindible e invariable, la luminosa alternativa que plantea entre desarrollo o liberación... Helder Camara muestra un gran respeto por el socialismo y hace un acabado retrato del cristianismo liberador (página 70). Algunas de las sugerencias concretas que hace a la Iglesia pecan de cierta ingenuidad.

El segundo de los libros que comento es un ideario muy completo de su pensamiento, de su magisterio itinerante, disperso en diversas intervenciones, sugerente, enriquecedor. Lleva clavado en el alma —y lo transmite— ese «fértil lecho de miseria» que es su nordeste brasileño. Predica con entereza el amor a la verdad y al prójimo. Propicia la concienciación, la educación de base y la necesidad imprescindible de las reformas sociales. Se le ha llamado «demagogo», «traidor», «comunista» y «subversivo». Ha leído a Marx, se considera amigo y continuador del malogrado

Martin Luther King, admira a Gandhi, está empapado del pensamiento de Mounier, Teilhard, Garaudy, Lebret... Hay una fecha clave en su vida: el Concilio Vaticano II. Desde entonces su obstinación profética se hace más rigurosa y sistemática, más clara e incisiva: los análisis son cada vez más serios, las denuncias más graves. Sin abandonar un lenguaje rico, de cierta creatividad literaria, el hombre sigue en el centro de todo ello. «El día en que tengamos el valor, la confianza de ser nosotros mismos; el día en que creamos en la fuerza de las ideas y en la justicia; el día en que nos decidamos a exigir pacíficamente el cambio de las estructuras socio-económicas y político-culturales que son la desgracia de nuestro país y de nuestro continente, ese día no estaremos al comienzo del final sino al final del comienzo» (págs. 22-23). Le preocupan la salud, la educación, la justicia... La dignidad humana consiste para él en un proceso de socialización progresiva que conduzca a la humanización de todos. Aboga por una revolución cultural —«un movimiento de presión moral liberadora»—, estructural, política, con participación del pueblo.

En fin: todo un obispo, todo un profeta. Sus repeticiones son saludables para penetrar en la piel de nuestro conformismo.



PRECIO DE ESTE EJEMPLAR: 700 PTAS.